ÍÑIGO DE BARRÓN ARNICHES

EL HUNDIMIENTO DE LA BANCA

Crónica de cómo gestores, supervisores y políticos provocaron la mayor crisis en la historia del sistema financiero español

CATARATA

ÍÑIGO DE BARRÓN ARNICHES

EL HUNDIMIENTO DE LA BANCA

Crónica de cómo gestores, supervisores y políticos provocaron la mayor crisis en la historia del sistema financiero español

CATARATA

Íñigo de Barrón Arniches

El hundimiento de la banca

Crónica de cómo gestores, supervisores y políticos provocaron la mayor crisis en la historia del sistema financiero español

CATARATA

Créditos

Íñigo de Barrón Arniches

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y especialista en información financiera, ha desempeñado su carrera profesional en diferentes medios como Deia, Europa Press, Actualidad Económica y Expansión. Desde el año 2001 trabaja en El País como periodista especializado en el sistema financiero. Ha sido testigo de grandes acontecimientos, como “el caso Banesto”, y es autor de numerosas exclusivas, como la fusión entre el BBV y Argentaria. En el año 2003 recibió el I Premio ING Periodismo Financiero a la mejor trayectoria profesional y, en 2009, el Premio Schroders al mejor artículo económico sobre la crisis financiera. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), defiende que saber de economía hace más libres a los ciudadanos y así reza en su cuenta de twitter @idebarron.

Primera edición: noviembre 2012

Segunda edición: enero 2013

Diseño de cubierta: estudio pérez-enciso

© Íñigo de Barrón ARNICHES, 2012

© Los libros de la Catarata, 2012

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 05 04

Fax. 91 532 43 34

www.catarata.org

El hundimiento de la banca.

Crónica de cómo gestores, supervisores y políticos

provocaron la mayor crisis en la historia del sistema financiero español

ISBN digital: 978-84-8319-877-3

ISBN libro en papel: 978-84-8319-769-1

IBIC: kcx/kcy/jpz

Este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

A mi padre, por enseñarme el camino.

A mi madre y a mi familia, en el sentido más extenso, que es mucho.

Y, sobre todo, a Íñigo, Carlos, Guillermo y, cómo no, a Ángeles por estar siempre ahí, a pesar de los pesares.

Prólogo

En los últimos cuatro años me ha tocado narrar la destrucción y desaparición de gran parte del tradicional y consolidado sistema de cajas de ahorros, con una trayectoria de 150 años de vida media —la entidad más antigua, Caja Madrid, se fundó en 1702, hace 310 años—. Sólidos edificios de piedra han caído como castillos de naipes. Para muchas personas la decepción ha sido enorme, porque las cajas despertaban una simpatía y fidelidad entre sus clientes (buena parte de ellos lo eran desde la infancia) que iba mucho más allá de la relación financiera. Sin llegar a los amores que se tienen por un equipo de fútbol, existía una fuerte identificación con ellas por ser las entidades que siempre habían estado cerca de la familia y del pueblo.

La esencia del periodismo —mi profesión— es describir lo que sucede y explicarlo al público de manera sencilla. ¿Parece fácil? No lo es. Si lo que sucede es extraordinario y tiene, además, dimensiones colosales, implicaciones planetarias y consecuencias imprevisibles… asistir y cubrir esa realidad se transforma en un reto maravilloso, aún más ambicioso y atractivo.

Han sido años de ritmo trepidante. Sin apenas tiempo de analizar una quiebra era aprobada una nueva legislación, se hacían más exámenes al sistema financiero y otra entidad entraba en problemas. Un ciclo infernal: reflotamiento de la caja caída con capital público, escándalo ante los sueldos de sus directivos y los errores de gestión, ocultación de los créditos dudosos… Esta espiral de deterioro ha crecido hasta ahogar a la mitad del sistema financiero español. La consiguiente paralización del crédito ha hecho que la economía española entrara en su segunda recesión consecutiva, algo que no ocurría desde los años de la guerra civil.

No más de media docena de cajas, convertidas en bancos, han sobrevivido al tsunami inmobiliario. Apenas un selecto grupo —La Caixa, Kutxabank, Unicaja y quizá Ibercaja y Liberbank— será dueño de su destino. Estas entidades representan hoy, después del proceso de fusiones, a 19 de las antiguas cajas. El resto, hasta 45, fueron nacionalizadas, están intervenidas o serán subastadas. Nunca

antes hubo una destrucción de valor semejante en tan poco tiempo en el mundo financiero español. También han caído el Banco Pastor y el Banco Guipuzcoano, comprados por competidores. El Banco Popular, que era el más rentable, lucha por sobrevivir con una ampliación de capital de 2.500 millones de euros, el 60 por ciento de su valor bursátil, un hito de la reconversión financiera en España.

Sobreviven al terremoto, qué cosas, las dos cajas más pequeñas del sistema, Ontinyent y Pollença, que, siempre fieles a sus comarcas, rehusaron expandirse y mantienen su filosofía original intacta. Antes ignoradas, son hoy quizá la envidia de muchos "cajeros" arruinados.

El sector estima que, al final de los procesos abiertos, desaparecerán 60.000 empleos con el cierre de unas 20.000 sucursales, casi el 50 por ciento de las que había. Por volumen de activos, las cifras son de comparación imposible con las crisis bancarias de los setenta, ochenta y noventa, como el caso Banesto, que se han quedado muy pequeñas.

La sociedad pagará muy caro el funeral de las cajas. Su desplome dejará un gran agujero: en los últimos seis años estas entidades invirtieron más de 10.000 millones en asistencia social y sanitaria, cultura, educación e investigación, rehabilitación y conservación del patrimonio histórico artístico. Empleaban a 3.000 personas directamente y a 30.000 indirectamente. No desaparecerá toda la obra social, pero se verá seriamente mermada, en más del 50 por ciento. Esta actividad social llegaba donde no lo hacía el Estado. Ahora el dinero público ni está ni se le espera, por lo que se agudizará la sensación de abandono en los colectivos y regiones más desfavorecidas.

Las cajas sobrevivieron a conflictos bélicos de todo tipo, incluso a la devastadora guerra civil, pero ha sido más dañina la abundancia que la pobreza. Gran parte del sector desfiguró su modelo, perdió el arraigo social y territorial para entrar en una alocada expansión que terminó en un callejón sin salida.

El viejo sistema de montes de piedad no ha soportado la codicia —o algo peor— de unos ejecutivos ineptos, inexpertos y temerarios, que

son los grandes culpables de esta crisis, a los que el Banco de España dejó manos libres para endeudarse sin límite e invertir casi todos sus recursos en el activo más tóxico que existe, el ladrillo. Buena parte de las cajas, creadas hace siglos por órdenes religiosas para combatir la usura y ayudar a los más desfavorecidos, perdieron el norte y vendieron su alma al dinero fácil. En lugar de los pobres, prefirieron la compañía de los nuevos ricos del ladrillo y perdieron sus señas de origen.

Estos ejecutivos actuaron en connivencia con buena parte de las tasadoras inmobiliarias para "hinchar el perro" y elevar el precio de las viviendas sin descanso. Pero alguien tenía que construir las viviendas y ahí llegaron los promotores que no admitieron el final del ciclo. En 2006 y 2007, los bancos más importantes se desprendieron de sus inmobiliarias para vendérselas a los profesionales del sector, que, por lo que se ha demostrado, conocían peor su negocio que los banqueros. La jugada fue estratégica, pero los banqueros cometieron un error fatal: prestaron el dinero a los promotores para que les compraran las inmobiliarias. Tras la crisis, la banca ha vuelto a ser propietaria de lo que había vendido, al convertir aquellos préstamos no devueltos en capital.

Entre la lista de asistentes a la fiesta figuran también los grandes inversores extranjeros, que prestaron miles y miles de millones que engrasaron los engranajes del festival. El lugar más destacado lo ocupan los banqueros alemanes, con 150.000 millones de riesgo español, seguidos de los franceses, con 120.000 millones. Nadie les obligó a entrar en este mercado. Solo su afán por ganar algo más que prestando a Telefónica o a Bayer les llevó a entrar en el ladrillo español. Los ayuntamientos fueron otro de los jugadores de esta partida. Su única fuente sólida de ingresos procedía de fiscalizar la propiedad inmobiliaria a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el ICIO. En los años ochenta descubrieron que la propiedad inmobiliaria era un bien que podían hacer crecer a base de recalificar terreno. En los noventa lo hicieron discrecionalmente y sin freno. Se convirtieron en adictos al IBI —cuyo mecanismo indujo numerosos casos de corrupción— para financiar los crecientes presupuestos que pagaban las mejoras de sus localidades y les aseguraban así la reelección. Por último, no hay que olvidar a

las familias que se endeudaron por encima de sus posibilidades, admitiendo préstamos contra el cien por cien de la tasación de la vivienda o por importes cercanos al 50 por ciento de sus ingresos.

Para que todo esto ocurriera fue necesario que la sociedad aceptara con permisividad prácticas que antes se rechazaban, como el enriquecimiento rápido basado en transacciones inmobiliarias, la búsqueda del lujo y la apariencia de riqueza. Se habían perdido criterios éticos muy arraigados, como la prudencia en las inversiones, la cultura del ahorro, etc. En este ambiente moral, una serie de responsables financieros acabaron colocando su enriquecimiento y su poder por delante de las propias cajas de ahorros y bancos que gestionaban.

Nadie puso coto al festival por el temor de frenar el crecimiento económico. España tomó la delantera a naciones tradicionalmente más ricas y se puso en el grupo de cabeza de las grandes economías mundiales para regocijo de los políticos y de una parte de la sociedad, la que también se enriqueció. Cuando llegó la crisis no se atajó el problema, en la creencia de que sería breve y la recuperación europea arreglaría por sí misma los agujeros originados en las entidades financieras. Que inventen ellos. El problema es que el supervisor no contaba con un plan B por si esa recuperación no llegaba. Carecía de un sistema de reestructuración que identificara con rapidez a las entidades débiles y vendiera sus activos o las fusionara con otras que pudieran asumir la carga.

Todos los países avanzados socorrieron a la banca con ayudas públicas a partir de 2008. Solo en la Unión Europea se gastaron 1,5 billones en 2009. En España, la clase política (PP y PSOE) rehusó tomar esas decisiones y admitir la crisis ante la sociedad. Hasta que no hubo más remedio. El Gobierno y el supervisor siempre fueron por detrás. Cuando se lanzaba un decreto para reforzar el capital, los inversores ya demandaban provisiones contra el ladrillo. Le sucedió a Zapatero y luego a Rajoy, que acumula tres reformas en nueve meses para enderezar el sistema financiero. El PP negó que fuera a crear el banco malo y ya está cerrando sus últimos flecos.

No hay economía que funcione si no lo hace la banca y el sistema de pagos. Ahora es fácil decirlo, pero todos los estudios concluyen que se debería haber inyectado dinero público —ninguna crisis

bancaria internacional se ha resuelto de otro modo— en grandes cantidades cuanto antes, sanear el sistema, castigar a los culpables y tratar de recuperar las inversiones. Adelantarse a las caídas es la fórmula más barata. Pero esa es una labor desagradable. Hay que acusar a los de tu propio partido, a los barones regionales, enfrentarse con gestores más o menos poderosos y entidades con arraigo local… Ni los Gobiernos ni el supervisor estaban por la tarea.

Este libro es una mirada cenital, que eleva el foco muy por encima del día a día para explicar, a través de un relato continuado, las causas que provocaron los graves hechos que hemos vivido. Con rigor y datos contrastados, intento demostrar que los Gobiernos del PP y del PSOE —sobre todo sus ministros de Economía, Rodrigo Rato y Pedro Solbes— y los dos últimos gobernadores del Banco de España, Jaime Caruana y Miguel Fernández Ordóñez, mantuvieron el discurso oficial de que el sistema financiero estaba sano y era solvente a sabiendas de sus severas deficiencias estructurales, debidas a su arriesgada exposición al sector inmobiliario. Intentaron sostener el espejismo de que España estaba a salvo de la crisis tras el escudo de una robusta banca aunque los inspectores del Banco de España ya habían detectado con claridad graves problemas en entidades de riesgo sistémico, como Caja Madrid, entre otras.

Es difícil asegurar que la inspección detectara todas las deficiencias (parece que fueron poco precisos en los problemas valencianos), pero constan por escrito advertencias de los funcionarios del Banco de España sobre los agujeros que aparecían en las cajas. En 2003 ya hay aldabonazos. Y el Servicio de Estudios del Banco de España señaló que la vivienda estaba sobrevalorada en un 20 por ciento, que es una manera suave de advertir que se estaba formando una burbuja, y se mató al mensajero. Pero, sobre todo, en 2006 figuran actas de la Inspección que denuncian malas prácticas en algunas cajas por exceso de negocio inmobiliario y por ocultamiento de préstamos a promotores que no figuraban en los balances como tales. Sus avisos cayeron en saco roto por los intereses políticos y económicos. Los gobernantes preferían no molestar a los poderosos barones regionales, los encargados de cuidar los graneros de votos. El Banco de España colaboró con su silencio. Aguantando una olla a presión.

Para 2006 y 2007, un buen número de cajas tenía ya enormes problemas estructurales por una concentración suicida del negocio en el ladrillo, el monocultivo que las mató, y el sector debía más de 591.736 millones de euros a los mercados internacionales. Esa cifra equivale a un 60 por ciento de la riqueza de España. Ladrillo y deuda fueron las dos grandes debilidades con que las cajas llegaron al final de un largo ciclo de crecimiento.

Al otro lado del mostrador, España duplicó su deuda privada entre 2001 y 2008. Pasó del cien por cien al 200 por ciento del PIB. Hoy, en plena crisis, las familias españolas deben 870.000 millones de euros y las empresas no financieras otros 1,3 billones. La deuda del Estado no es la peor parte: son unos 780.000 millones. En total, la factura suma 2,95 billones, tres veces el PIB. España es uno de los tres países más endeudados del mundo. Es lo que ocurre cuando se invierte y se gasta más de lo ahorrado.

Pero hay algo peor: nuestra deuda no deja de aumentar. En 2011 la Administración ingresó 380.000 millones y gastó 470.000 millones, es decir, arrojó un déficit de 90.000 millones. Estos 90.000 millones engordarán los 780.000 millones antes citados del Estado hasta 870.000 millones.

Esta fortuna es lo que debemos a terceros, que dudan de que se lo vayamos a devolver porque ven cómo se hunde la economía española. Hablando en plata: si los españoles no pagamos nuestras deudas a los bancos, estos no podrán pagar sus deudas en el exterior. A menos que los bancos se declaren insolventes, los Estados tienden a hacerse cargo de las deudas de las entidades con problemas, con lo que el endeudamiento privado financiado corre el riesgo de socializarse, es decir, de convertirse en deuda pública. Bankia es un buen ejemplo de ello.

¿Era muy difícil haber previsto desde el inicio de la década que estábamos en un peligroso tobogán sin control? Visto en retrospectiva —y admitiendo el error imperdonable de los medios por su silencio—, no parece tan complicado como un jeroglífico egipcio. Los precios de la vivienda aumentaron, en términos reales, más de un cien por cien entre 1999 y 2007. Mientras, los salarios lo hicieron en un 30 por ciento aproximadamente. Los pisos se podían pagar, con apuros, solo porque los tipos de interés bajaron, pero a

costa de endeudarse cada día más. España vivió uno de los mayores auges inmobiliarios del mundo: en 2006 inició la construcción de 860.000 viviendas. Dos tercios de las casas construidas en Europa entre 1999 y 2007 se localizaban en España. Dicho de otra forma, en España se construían más casas que en Alemania, Francia e Italia juntas. Al final de la expansión del sector de la construcción, en 2008, el volumen de crédito concedido a constructores y promotores inmobiliarios ascendía a 470.000 millones de euros, una suma equivalente al 50 por ciento del PIB español. Ahora, unos 100.000 millones de esos préstamos están declarados morosos, aunque los "potencialmente problemáticos", según la terminología acuñada por el Banco de España, son el doble, unos 200.000 millones. Este es el volumen de la locura y el tamaño del agujero: el 20 por ciento del PIB. España no puede taponar esta herida y ha pedido ayuda a Bruselas.

Un tópico arraigado es que nadie avisó de la que venía. No es cierto: lo hicieron los economistas Nouriel Roubini, Raghuram Rajan y Robert Shiller entre 2005 y 2006, aunque sin calibrar la virulencia de la crisis. Algunos de ellos lo dijeron ante el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido entonces por Rodrigo Rato. Nadie les hizo caso. Y la revista The Economist editó un número el 18 de junio de 2004 dedicado a la burbuja creada en varios países, entre los que destacaba España.

Los guardianes de la economía y del sistema financiero español debían saber que la mitad del sector tenía los pies de barro y que, si se cerraba la financiación mayorista —empezó a hacerlo en 2007 y se secó en 2008—, se pincharía la burbuja del ladrillo tras una década de subidas ininterrumpidas de precios. Y no hay pinchazo de un globo que no sea violento. Pero tanto Caruana como Ordóñez apostaron por el "aterrizaje suave". Era lo más cómodo; que todo se arreglara solo. Era difícil, sin embargo, que llegara a España una versión blanda de una crisis que en Alemania, Francia, Holanda y el Reino Unido y, por supuesto, en Estados Unidos, se estaba llevando por delante a los bancos más grandes por la vía de las subprime y por el colapso de los mercados. Pero Solbes, Zapatero y Ordóñez dijeron en Nueva York y en más plazas, en septiembre de 2008, que la banca española estaba en la champions league y que aguantaría porque tenía provisiones anticíclicas. Una defensa de juguete para

la que se venía encima.

Es imposible completar la explicación de cómo hemos llegado hasta aquí sin analizar con detenimiento el caso Bankia, el Lehman Brothers español. Durante los últimos seis años, Caja Madrid-Bancaja, y luego Bankia, han sido el ejemplo más colosal de injerencia y lucha de poder político —allí han intervenido todas las facciones del PP—, mezclado con una gestión deficiente. Un cóctel terrible. El hundimiento del grupo y su posterior nacionalización vinieron marcados por la fusión Caja Madrid-Bancaja, en junio de 2010. La operación, impulsada irresponsablemente por el Banco de España, supuso sumar dos gigantescas entidades débiles para crear una de dimensiones colosales, el 30 por ciento del PIB. Este grave error estratégico, la incapacidad de Rodrigo Rato para enderezar la situación y las duras exigencias de capital planteadas por Luis de Guindos provocaron el hundimiento de la entidad. Todo ello aderezado con una estrecha colaboración entre Rato y Ordóñez y una controvertida relación personal entre el ministro y Rato. Este pidió árnica al presidente del Gobierno. Solicitó 7.000 millones y más tiempo. Rajoy no le apoyó. Rato dimitió. Apareció José Ignacio Goirigolzarri, que valoró las necesidades de capital de Bankia en 23.400 millones. Fue una bomba que supuso la segunda mayor intervención en la Unión Europea tras la del banco alemán West LB. Las proporciones de este reflotamiento son tan colosales que el Gobierno español, incapaz de financiarlo, ha tenido que pedir ayuda financiera a Bruselas.

Y la crisis financiera lo contaminó todo. España entró en la tormenta de los mercados con una prima de riesgo disparada y la amenaza de ser bono basura. Eso supone que las empresas españolas pagan casi el doble que las alemanas por el mismo crédito. Así es imposible competir. Y, si no se corrige esta situación, será fácil que los ricos del norte acaben comprando las empresas del sur. Alguien se beneficia de la austeridad.

La banca española está casi expulsada de los mercados y sobrevive gracias a la manguera —o bazooka— del Banco Central Europeo, que ya ha prestado unos 370.000 millones de euros. Ni con esa fortuna han abierto el grifo del crédito. Esta situación de bloqueo económico aboca a España al rescate, que incorporará duras

condiciones macroeconómicas impuestas por Bruselas.

Todo esto se traduce en recortes para el ciudadano, que teme que el objetivo oculto sea perder para siempre parte de los logros sociales conseguidos en décadas de lucha. El crecimiento económico no se atisba y así es difícil pagar las deudas. Ahorrar se parece demasiado a ahogar, dijo alguien, y es lo que piensa mucha gente de a pie. Los Gobiernos son elegidos por los ciudadanos, pero responden ante los mercados. Parece que ahora su obsesión es que sus decisiones solo sean bien acogidas por los inversores y las agencias de rating, que son en el fondo los que les evalúan. Con el rescate ha llegado la pérdida de soberanía, pues el que paga, manda. Y el que paga (Bruselas-Alemania) aprieta la soga con vigor: exige drásticas reducciones de gastos para alcanzar un ambicioso objetivo de déficit para 2013. Es difícil pensar que con esta estrategia vayan a lograr que los españoles sean más europeístas.

Hasta el FMI ha pedido que se afloje el nudo a España porque la economía se estrangulará si los acreedores exigen la devolución del dinero en tan poco tiempo. El premio Nobel Joseph E. Stiglitz coincide: “Ninguna economía grande —y Europa lo es— ha conseguido salir de una crisis al tiempo que imponía austeridad. La austeridad, de forma inevitable y predecible, siempre empeora las cosas. Y le afectará a España porque sus socios están en recesión, y el país no tiene poder de decisión sobre su tipo de cambio”, dice en el prólogo a la edición española de El precio de la desigualdad. El 1 por ciento de la población tiene lo que el 99 por ciento necesita (Taurus).

Los ciudadanos ven cómo el Estado recorta en sanidad, educación y otras prestaciones públicas mientras socorre a los bancos. Eso provoca una indignación difícil de contener. En los Presupuestos generales de 2012, el Estado admite un déficit de 16.660 millones por las facturas pagadas a la banca, aunque el Gobierno ha dicho que ese dinero “se va a devolver”. Muy pocos le creen.

Los cálculos más extendidos coinciden en que esta crisis financiera puede costar a los ciudadanos unos 20.000 millones. Ese es el dinero que probablemente se perderá en el salvamento de entidades nacionalizadas. Dos ejemplos: Novagalicia y CatalunyaCaixa, que se crearon por imposición de sus presidentes autonómicos, es decir,

Alberto Núñez Feijoo y José Montilla, respectivamente. Ni el supervisor ni el Gobierno central les impidieron hacer "su" banco regional, pese a que todos los informes anticipaban en 2010 la inviabilidad del proyecto. El resultado es que necesitan 17.000 millones de capital entre ambas, según los exámenes de Oliver Wyman. Este es resultado de tener políticos sin criterios y gobernadores obedientes. Otro ejemplo: tres entidades de las más socorridas por el Estado han estado presididas por dos exvicepresidentes de Gobierno (Narcís Serra, del PSOE, en Catalunya Caixa; Rodrigo Rato, del PP, en Bankia) y por un presidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, en Bancaja. Qué casualidad.

La banca ha sufrido un fuerte desprestigio social y una pérdida de confianza. La percepción de los ciudadanos es que se trata de un sector poco controlado por los poderes públicos, donde se permiten generosas remuneraciones y privilegios, a la vez que el Estado está obligado a socorrerla con el dinero de los contribuyentes para evitar el caos en el sistema de pagos. De hecho, desde el inicio de la crisis se han destinado 150.000 millones a dar liquidez, avales y ayudas directas en capital para el conjunto del sector, sobre todo cajas de ahorros. Todo esto viene además regado con los escándalos de la venta de deuda subordinada y participaciones preferentes, un producto legal pero comercializado en ocasiones de manera inmoral. Esa injusta dicotomía —descontrol con los salarios de las elites y auxilio seguro del dinero de todos si llegan los problemas— ha creado una enorme desafección social hacia el sector.

En paralelo a estas ayudas y recortes, no ha habido ni un caso de un directivo de una entidad financiera que haya sido juzgado, pese a que la primera quiebra ocurrió en marzo de 2009. Apuntaba Joaquín Estefanía en el artículo "¿Quién asumirá la catástrofe?" (El País, 24 de septiembre de 2012): "Las elites económicas permanecen en silencio escogiendo quién les representa mejor mientras las elites políticas son juzgadas por la opinión pública y los movimientos sociales tratan de manifestarse frente al Congreso". Esta crisis está llegando al corazón del sistema: los ciudadanos piden cambios en las organizaciones internas de los partidos (listas abiertas) para liberarse del control de las estructuras que no favorecen la meritocracia. Los contribuyentes han percibido el daño

que pueden provocar políticos torpes y reclaman instituciones judiciales, organismos de supervisión y arbitraje más independientes.

La lentitud desesperante de la justicia no ha evitado la apertura de algunas causas contra los ejecutivos de la CAM, Novagalicia, Banco de Valencia, Caixa Penedès y de Bankia. Hasta ahora solo han trascendido sus declaraciones argumentando que fue una concatenación de circunstancias imprevistas lo que llevó a la quiebra de la entidad pese a cumplir todos los requisitos legales de la auditoría —otro sector cuyo prestigio ha quedado severamente afectado— y del supervisor. No será fácil olvidar la cínica intervención de Julio Fernández Gayoso, expresidente de Novagalicia, el 26 de julio de 2012 en el Congreso cuando dijo no haber cobrado "ni un euro" por su jubilación, pese a percibir una retribución vitalicia de 689.000 euros anuales.

Nadie es culpable de nada. La ciudadanía, sin embargo, lo tiene muy claro. En octubre de 2012, Demoscopia preguntó el grado de acuerdo de los encuestados con esta frase: "En España, la crisis la están pagando todos menos los bancos y los más ricos". El 91 por ciento dijo estar a favor, incluyendo los votantes del PP y los del PSOE. Este es un sentimiento transversal en la sociedad.

¿Cuáles son las consecuencias de desmantelar el sistema financiero y de la resaca de la burbuja? Según el FMI, en 2013, España será el segundo país donde la economía marche peor entre los 105 Estados que analiza. Solo el PIB de Grecia crecerá menos. Es un triste consuelo. España tiene al 52 por ciento de sus jóvenes en paro y un desempleo general que supera el 25 por ciento. La salida de población se está acelerando. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de enero a septiembre de 2012 han abandonado el país 54.912 personas de nacionalidad española, un 21 por ciento más que un año antes. Desde 2011 son más de 117.000 los españoles que han emigrado. Otra vez a Alemania, Pepe…

Esta situación frustrante para la juventud es una amenaza directa a la sostenibilidad del Estado del bienestar. La falta de ingresos ocasionada por la reducción de la población activa y la necesidad de mayores gastos por parte del Estado para pagar el desempleo, las pensiones… pueden dañar seriamente la estructura social que

España estableció con la llegada de la democracia. La factura más cruda de la crisis la pagan los más de 1,7 millones de hogares españoles que, según la última Encuesta de Población Activa, tienen a todos sus miembros en paro. Y solo el 67 por ciento de los registrados en las oficinas de empleo reciben alguna ayuda o prestación del Estado. Como resultado, España es el país de la Eurozona donde es más acusada la distancia entre las rentas altas y las bajas.

A corto plazo, una mayor parte de la sociedad reclamará ayudas sociales, al tiempo que el Estado se verá presionado a recortarlas ante la falta de recursos. Esto ya ocurre y puede agudizarse. Por primera vez en la historia, los servicios sociales atienden a más de ocho millones de personas en España. Piden ayuda para pagar alimentos, luz, agua… Son datos del Ministerio de Sanidad. La borrachera de dinero fácil ha dejado una resaca muy amarga.

No hemos llegado aquí por una maldición bíblica, sino por un conjunto de errores que ha permitido que la crisis financiera norteamericana y la de deuda europea nos golpee más a nosotros que al resto de países de la Eurozona. Es cierto que esta crisis ha sido la más virulenta de los últimos setenta años y, sobre todo, ha mutado sus formas a lo largo de los cinco que ya dura. Sin embargo, es falso lo que dicen los ejecutivos de las entidades quebradas: que las causas son “la crisis impredecible” y “los caprichosos cambios legislativos”. No es así. La prueba es que no todas las entidades están en igual situación pese a sufrir iguales condiciones generales. La clave, como no podía ser de otra manera, está en las decisiones tomadas por esos ejecutivos, en su inexperiencia o incompetencia en la contención del riesgo, en evitar el crecimiento alocado. En resumen, en la prudencia.

Los dos grandes bancos, Santander y BBVA, junto con otras antiguas cajas, La Caixa, Kutxabank y Unicaja, así como Banco Sabadell y Bankinter, han demostrado capacidad de gestión al acabar esta carrera de obstáculos en una posición más o menos desahogada. Si se examinan sus balances, se verá que las mejores entidades tenían un 15 por ciento de préstamos al sector inmobiliario sobre el total de la cartera de créditos en el cénit de la expansión del ladrillo (2006), mientras que otras, que ya no existen o están

nacionalizadas, superaban el 50 por ciento. Por eso había entidades que empezaron la crisis con un 1 por ciento de morosidad y otras lo hacían con el 6 por ciento.

“Nuestro crecimiento durante los últimos años tiene como origen el incremento de la población activa como porcentaje de la población total. La burbuja inmobiliaria enmascaró durante mucho tiempo las deficiencias estructurales de nuestra economía; su ruptura ha destruido un porcentaje insólito de la riqueza de las familias, fuertemente apalancadas, y esta destrucción de riqueza va a continuar: hay 1,5 millones de casas sin vender y su valor debe caer aún mucho y con ello el de las garantías de los préstamos bancarios. Y lo que parecían unas finanzas públicas sólidas no eran sino el espejismo de unas recaudaciones insostenibles causadas por el boom inmobiliario.” Este es el certero análisis de Luis Garicano, Jesús Fernández-Villaverde y Tano Santos, profesores internacionales de Economía en diferentes universidades e investigadores de FEDEA.

No me gustaría terminar sin un rayo de esperanza. Hace pocas semanas se ha editado el nuevo libro de Robert J. Shiller, famoso economista que predijo la burbuja. Las finanzas en una sociedad justa. Dejemos de condenar el sistema financiero y, por el bien común, recuperémoslo (Deusto), así se titula su nueva y provocadora obra. El profesor del MIT de Boston sostiene: “La crisis no se debió simplemente a la avaricia o la falta de honestidad de algunos actores en el mundo de las finanzas, sino que, al final, fue por defectos estructurales fundamentales de nuestras instituciones financieras. Estas deficiencias, como la incapacidad de gestionar los riesgos del sistema inmobiliario o la incapacidad de regular la deuda, no se han corregido”. Por eso sostiene que “lo que necesitamos para reducir la probabilidad de crisis financieras en el futuro no es reducir la actividad financiera, sino mejorar los instrumentos financieros”. Shiller cree que la indignación actual y el clima político “podría acabar asfixiando la innovación e impidiendo que el capitalismo financiero progrese hacia lo que podría ser beneficioso para todos los ciudadanos”. Apuesta con rotundidad por la innovación “para restringir la creciente plaga de desigualdad económica que amenaza con crear graves problemas en nuestra sociedad”.

Antes de terminar, una pregunta incómoda: ¿dónde estaba la prensa? Sin duda, no percibió que el ciclo era finito y que las entidades se endeudaban con enorme rapidez en el exterior. Pese a la existencia del euro, esta situación manifestaba debilidad ante posibles problemas de liquidez y debía haber sido denunciada. Es cierto que algunas cajas presentaban cuentas ridículas, sin apenas desgloses y, por lo que se ha visto ahora, con los créditos mal clasificados para disimularlos.

Pero se debería haber hecho más. Martin Wolf, uno de los principales editorialistas del Financial Times e influyente columnista, admitía culpas recientemente: "No vi lo que sucedía con la microeconomía. Es el principal error que he cometido en mi carrera. Mi otro error fue no haberme percatado de cuán débiles e inadecuados eran los controles y regulaciones a los bancos. Los periodistas cometimos muchos errores de omisión. Debimos haber sido mucho más agresivos y rigurosos en el escrutinio de los bancos y de los reguladores". Exacto. Ese fue nuestro pecado: excesiva confianza en el rigor de organismos que no funcionaron.

Para un periodista como yo, esta crisis ha supuesto un máster de primerísimo nivel sobre el sistema financiero, la globalización y la gestión empresarial. En este libro, he querido compartir los conocimientos y experiencias que me ha dejado esta crisis y que ha situado la información financiera en la primera página de la actualidad. No hubiera podido hacerlo sin la ayuda de mis fuentes, entre las que se encuentran numerosos economistas, ejecutivos bancarios, analistas, políticos, compañeros de profesión y, sobre todo, sin la colaboración de mis colegas de El País, una redacción que atesora grandes profesionales con los que ahora vivo momentos tan duros. A todos ellos quiero agradecerles sus explicaciones, sus informaciones, su paciencia, su sabiduría, que han sido clave para reflejar la actualidad cada día. Solo confío en que pronto pueda empezar a escribir la historia de la reconstrucción de nuestro sistema financiero apoyado en otras normas y en mejores instituciones. Seguro que esto ayudará a acercar el final de esta larga y dura crisis económica, que amenaza con llevarse todo por delante, incluso el periodismo de calidad.

Madrid, 18 de octubre de 2012

Capítulo 1

La borrachera inmobiliaria

En el Banco de España "había una especie de euforia que llevaba a no ver, o no querer ver, los riesgos que se estaban acumulando".

Luis Linde, gobernador del Banco de España. 17 de julio de 2012, Congreso de los Diputados

Aquel día hizo calor. El gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, y el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, visitaban Valencia, el epicentro del que sería el mayor terremoto inmobiliario de la historia de España. El terreno que pisaba Ordóñez ya se estaba resquebrajando, pero él no quiso verlo o no deseaba traer nubarrones a la economía española, que era la envidia de Europa. Tampoco lo hizo Trichet, jefe de una de las instituciones con mayor capacidad de análisis del mundo gracias a sus cientos de economistas en nómina. Ambos asistían al Foro de Bancos Centrales de la Cuenca Mediterránea. Era el 28 de marzo de 2007.

Ante la llegada de noticias preocupantes del otro lado del Atlántico, el gobernador del Banco de España afirmaba: "Es totalmente infundado comparar y hacer paralelismos de la evolución del mercado inmobiliario entre Estados Unidos y Europa. Más aún extraer alguna conclusión relativa al futuro del mercado inmobiliario español", remató. Miguel Fernández Ordóñez recordó que la baja morosidad y la "sobrecobertura" de las entidades financieras en España hacían que la situación aquí no fuera comparable con la del sector en Estados Unidos.

Por si quedaba alguna duda, el todopoderoso BCE corroboró lo

dicho por Ordóñez. “La economía de Estados Unidos tiene influencia mundial”, sentenció Trichet, “pero lo que pueda suceder al otro lado del Atlántico no tiene un correlato directo en Europa”. Trichet explicó que la zona económica mediterránea estaba creciendo de forma notable en los últimos dos años y vaticinó “buenas perspectivas” para 2007. Los países asistentes al foro cifraron en un 4,8 por ciento el crecimiento medio de la cuenca mediterránea para aquel año.

España, sin embargo, estaba ya muy lejos de ese mundo feliz. El PIB aumentó ese año un 3 por ciento. Sería el último. En años sucesivos no dejó de bajar hasta la doble recesión que se vive ahora. Pero en marzo de 2007 el panorama parecía tan soleado como aquel día primaveral en Valencia. De hecho, la primera bomba de la crisis financiera mundial no estalló hasta agosto de 2007, cuando los fondos norteamericanos del banco Bear Stearns, fundado en 1923, no pudieron devolver las inversiones a sus clientes. El incendio parecía lejano y con nulas posibilidades de propagarse a través del océano.

En ese momento, sin embargo, existían algunos conatos de fuego amenazantes y había señales de que la economía española caminaba hacia el precipicio. Se habían publicado ya serias advertencias sobre los efectos del desmedido crecimiento inmobiliario. Así que algunas entidades decidieron pasar a la acción y desprenderse de sus filiales inmobiliarias ante el temor a las consecuencias de una caída del mercado. Fueron menos que las que se quedaron instaladas en la autocomplacencia y se pusieron de perfil en un momento en el que la prevención hubiera evitado males terribles.

En el Banco de España “había una especie de euforia que llevaba a no ver, o no querer ver, los riesgos que se estaban acumulando”. Así de explícitas son, a toro pasado, las palabras de Luis Linde, nombrado gobernador del Banco de España en junio de 2012. En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, poco después de jurar su cargo, fue meridianamente claro al denunciar los problemas que tenía el sector bajo su supervisión: “Las dificultades que atraviesa ahora nuestro sistema financiero hay que buscarlas en el largo periodo de expansión iniciado a mediados de los noventa y prolongado hasta inicios de 2008. Fue un periodo en

el que la inversión crediticia del sector privado residente aumentó a una media anual del 15 por ciento, ritmo que se aceleró en la parte final de este periodo, llegando a cifras medias del 23 por ciento entre 2004 y 2007".

Dijo más: "Se actuó con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado", y admitió errores en la crisis cometidos bajo el mandato de sus antecesores en el cargo, Jaime Caruana (2000-2006) y Miguel Fernández Ordóñez (2006-2012). Nunca en la historia del banco central se había entonado un mea culpa con tanta claridad.

No es fácil explicar por qué los máximos responsables del supervisor financiero no explicaron ni, lo que es más importante, actuaron con mayor contundencia para reducir los impactos que iba a producir la evidente explosión de una década de locura en el sector inmobiliario y financiero.

Algunos expertos consideran que el inicio del declive inmobiliario en España comenzó en septiembre de 2006, un trimestre después de la llegada de Ordóñez al Banco de España. Ese trimestre, el incremento del crédito hipotecario tocó techo con una tasa del 25,7 por ciento. Desde ahí empezó a bajar en picado.

No solo era motivo de alarma el disparatado ritmo de incremento de los créditos, sino que lo hicieran concentrados en el ladrillo. Una peligrosa similitud con los Estados Unidos. Linde lo describió con exactitud en su comparecencia en el Congreso, lanzando otro ataque más contra sus antecesores. "El crecimiento de la inversión crediticia de la banca no fue equilibrado, sino que se concentró en el sector inmobiliario, de manera que el riesgo relacionado con la adquisición, promoción y construcción inmobiliarias llegó a alcanzar en 2007 el 62 por ciento de la financiación al sector privado residente."

Es decir, cuando Ordóñez dijo aquellas palabras en Valencia sabía que tenía dos problemas que se funden en uno solo: créditos bancarios demasiado concentrados en el ladrillo y activos inmobiliarios recalentados con precios artificiales. El gobernador lo sabía porque las estadísticas públicas eran inequívocas (y porque él mismo lo había advertido en dos artículos publicados en El País en

2003). El precio medio del metro cuadrado construido se había triplicado entre 1996 y 2007, según los datos oficiales del Ministerio de Fomento. Pocos activos (legales) en todo el mundo pueden batir este récord.

Pero Ordóñez no quería salirse de la guía política. El entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, que en la oposición había sido extremadamente crítico con la burbuja inmobiliaria que creó el Partido Popular (PP), no vio ningún riesgo cuando se hizo cargo de la cartera con el Gobierno del Partido Socialista (PSOE). Así lo sentenció: "Yo no veo afectado para nada el sector de la construcción, solo una ligera desaceleración que permite ajustarse a una realidad que, lógicamente, exigirá una demanda inferior a la actual". Era mayo de 2007, solo dos meses después de las declaraciones de Ordóñez en Valencia.

Un año antes, el ministro Solbes ya había sido seriamente advertido en privado por el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, sobre los riesgos que asumía el sector financiero. Solbes nunca dio crédito a estos avisos. El entonces gobernador se inhibió de tomar medida alguna. Esto provocó una alarmante carta de los inspectores del Banco de España al ministro Solbes en mayo de 2006 pidiendo acción. "No compartimos la complaciente actitud del gobernador ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional desde 2000", apuntaban. Es justo decir que en la carta ni siquiera los inspectores anticipaban la debacle: "La gran mayoría de las entidades españolas están bien capitalizadas y su solvencia no es previsible que se vea comprometida aun en los escenarios más desfavorables". Sin embargo, alertaban sobre "el desmedido crecimiento del crédito bancario, que es una de las causas principales de la extraordinaria subida del precio de los inmuebles" y le reprochaban a Caruana "falta de determinación" para exigir "rigor" a las entidades financieras "en la asunción de riesgos".

Entre los banqueros, a Caruana se le considera un buen técnico que, pese a conocer la situación y hacer diagnósticos adecuados, "no pasó a la acción. No obligó a cortar el endeudamiento exterior, no forzó a las cajas a que frenaran su apetito por el ladrillo como

monocultivo, no evitó que las tasadoras suministraran munición para la bomba inmobiliaria… Decía cuáles eran los riesgos, pero no obraba en consecuencia. Siempre se puso de perfil. No quería líos". José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, comenta: "El gobernador no es un analista de mercado. Si avisa de un problema de endeudamiento excesivo de empresas y familias y no se soluciona, tiene que actuar en consecuencia". No obstante, añade: "Ninguno de nosotros predijo la magnitud de esta crisis, que ha tenido un efecto mucho mayor del que cualquiera pudiera imaginar".

Algo parecido le ocurrió a Ordóñez. En los citados dos artículos de 2003 en el diario El País hizo un duro diagnóstico de la situación cuando aún estaba lejos de la Plaza de Cibeles, sede del banco central español. Ordóñez criticaba con dureza la gestión de Rodrigo Rato como vicepresidente económico en el Gobierno del PP. En su opinión, el ministro negaba la burbuja "por el miedo con que cualquier responsable de Economía ve acercarse el final de un modelo de crecimiento basado en el boom inmobiliario y en la explosión del endeudamiento de las familias". Este comentario también encajaría como anillo al dedo para definir la actitud de Solbes.

En ambos artículos auguró que la caída de los precios de la vivienda propulsaría el paro y deprimiría el consumo. "Por eso el ministro niega la evidencia. Porque estuvo en su mano diseñar una política fiscal coherente con la política monetaria" para que la vivienda se revalorizara sin pausa. "El legado de Rato es buenos resultados a corto y problemas a medio plazo", concluía. Ordóñez se refería a la Ley del Suelo de 1998, aprobada por el PP, que fue leña de la buena para encender un fuego que tomaría dimensiones pavorosas. Lo que nunca podía esperar Ordóñez cuando escribió esos artículos es que tres años más tarde, cuando la burbuja inmobiliaria alcanzó sus máximas dimensiones, él asumiría la dirección del Banco de España.

Poco después de la publicación de estos artículos, en septiembre de 2003, con el PP en el poder, el Boletín Económico del Banco de España denunciaba que "la magnitud de la sobrevaloración [de la vivienda] podría llegar al 20 por ciento" y que "entre 1997 y 2002, el precio medio de las viviendas tasadas en España creció un 78 por

ciento". La tajante afirmación causó sorpresa e indignación al propio ministro de Economía, Rodrigo Rato, que luego presidiría Bankia, de la que cayó precisamente por las erróneas inversiones en el ladrillo. Uno de los autores de ese informe publicado en el Boletín Económico fue Fernando Restoy, entonces un peso pesado del Servicio de Estudios, luego vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, desde junio de 2012, subgobernador del Banco de España a las órdenes de Luis Linde. Sin duda, Restoy no podrá decir que no conocía este problema de primera mano.

Tras una fuerte polémica en los medios por el contundente informe del banco emisor, Rato zanjó la discusión: "No creo que estemos ante una situación de burbuja. Los propios datos del Banco de España fijan un exceso de precios de la vivienda, pero que no se pueden entender como una burbuja como la que vivimos con los valores tecnológicos en 2000". Días después, Emilio Botín, presidente del Banco Santander, reafirmó al ministro: "No hay burbuja, y en este sentido el informe del Banco de España, que yo he leído a fondo, no ha sido bien interpretado".

Fin de la discusión. ¿Volvió alguien más desde el Banco de España a denunciar la bomba de relojería? Por supuesto que no. Ante todo, buena relación con el poder político. Lo mejor, mirar para otro lado. La euforia era generosa con todos: políticos, banqueros, supervisores, empresarios, promotores y parte de la ciudadanía. Hasta que llegó el momento de pasar factura.

Los políticos españoles y los gobernadores del Banco de España no fueron los únicos que se despistaron con la evolución del ciclo inmobiliario. En octubre de 2007, Paul Krugman publicó "Facing up to bad loan" en The International Herald Tribune. El Nobel de Economía apuntaba que Alan Greespan, el presidente de la Reserva Federal, el banco central de los Estados Unidos, se había equivocado en tres ocasiones en cuanto a la valoración del mercado de la vivienda: en 2004, cuando elogió las ventajas de los créditos a interés variable frente a los de interés fijo; en 2005, cuando rechazó la idea de que había una burbuja inmobiliaria, y en 2007, cuando sugirió que lo peor de la caída del mercado de la vivienda ya había pasado.

La perspicacia de La Caixa, Banesto y Banco Sabadell

El Banco de España y el Ministerio de Economía no advirtieron en 2006 de los riesgos a las entidades bancarias para hacerlas cambiar de rumbo. Sin embargo, algunos banqueros, patrones veteranos que habían vivido la crisis de 1992, e incluso la de los ochenta, no se fiaron de las llamadas a la calma y desconfiaron de las plácidas palabras de Ordóñez y de Trichet. Se pusieron a hacer caja. Leyeron las estadísticas a disposición de todo el mundo y sintieron el vértigo y el calor abrasador del recalentamiento. Así que decidieron vender los holdings inmobiliarios con los que habían ganado enormes sumas de dinero durante casi diez años. ¿Quién podía ser el comprador? Puede parecer una contradicción, pero fueron precisamente los propios expertos en el sector del ladrillo, esos que se dejaron llevar por la euforia y creyeron que el ciclo no tendría fin, que habíamos alcanzado el colmo del virtuosismo económico, que todas las fuerzas se reequilibran automáticamente evitando los desajustes.

La entidad financiera más madrugadora en soltar ladrillo fue La Caixa, presidida por Isidro Fainé. El 25 de mayo de 2006 anunció que vendía el 39,4 por ciento que aún controlaba de su filial inmobiliaria, Colonial, a 63 euros por título. La compró Inmocaral, de Luis del Portillo. Colonial se valoró en 3.760 millones, por lo que a la entidad catalana le correspondieron 1.504 millones, con unas plusvalías de 680 millones. La suma del valor en bolsa de ambas empresas creó un gigante del ladrillo con un valor de 4.800 millones. Había nacido la segunda inmobiliaria del continente. El líder del sector también era español, por supuesto: Metrovacesa, que valía entonces más de 7.600 millones en bolsa.

A finales de julio de 2012, las acciones de Colonial estaban por debajo del euro. Habían perdido casi todo su valor. El fracaso de Inmocaral es un perfecto ejemplo de crecimiento desmedido al calor de la burbuja, la ambición sin control y los créditos baratos.

Portillo es hijo de un jefe de cuadrilla de albañiles de Sevilla que, a

la sombra del poder socialista andaluz, se convirtió en uno de los grandes del sector inmobiliario, aunque con la misma solidez que la de un globo aerostático. Salió de Andalucía con una empresa que tenía fondos propios de 125 millones y terminó en una empresa en la que invirtieron Alicia Koplowitz y el fundador y presidente de honor de Ferrovial, Rafael del Pino, entre otros ricos empresarios. Cuando Inmocaral pinchó, Portillo regresó a su Andalucía, donde ha invertido en negocios agroalimentarios.

Colonial no es una historia de éxito completo para La Caixa. La caja financió parte de la operación y, como Inmocaral no pudo devolver el préstamo, cedió las acciones a cambio. La Caixa vuelve ahora a ser accionista de la inmobiliaria. La deuda ha pasado de más de 9.000 millones a 3.300 millones, pero esta reducción se ha basado, precisamente, en la capitalización del préstamo. La Caixa ha "recuperado" así más del 12 por ciento del capital de Colonial. Con el resto de bancos acreedores —Royal Bank of Scotland (RBS), Eurohypo y Calyon— suman el 50 por ciento del accionariado. El Banco Popular, Bankia, Caixanova, Banco Pastor, Caja Duero, el BBVA y Nova Galicia también figuran en el capital de Colonial por el mismo motivo.

A La Caixa le siguió Ana Patricia Botín, entonces presidenta de Banesto, que en julio de 2006 logró unas plusvalías de 1.200 millones de euros con la venta de la filial inmobiliaria Urbis a Construcciones Reyal. La nueva compañía, presidida por Rafael Santamaría, se consolidaba así como la segunda inmobiliaria de la bolsa española tras desembolsar 3.317 millones por crecer. La inmobiliaria se apalancó con un enorme endeudamiento, financiado en parte por el grupo Santander, para reunir un tesoro de 8,6 millones de metros calificados para construir. Esa superficie ha perdido hoy alrededor del 80 por ciento de su valor y Reyal Urbis ha presentado concurso de acreedores con una deuda de 3.654 millones. El Santander es el principal prestamista con 450 millones.

Por último llegó el Banco Sabadell. El 26 de octubre de 2006, la entidad presidida por Josep Oliu anunció la venta de su filial inmobiliaria Landscape a Astroc por 990 millones. La operación generó al banco unas plusvalías de 623 millones. Y eso no fue lo mejor. La inmobiliaria valenciana de Enrique Bañuelos llegó a la

compra con un financiador: el RBS, que presidió el crédito sindicado. La unión de ambas compañías creó un grupo inmobiliario con un volumen de negocio cercano a los 500 millones y unos activos de 2.500 millones de euros. Por increíble que pueda parecer ahora, Astroc no fue la única interesada en comprar Landscape: el promotor familiar catalán Espais, el grupo Lar y la empresa catalana Metrópolis también lo intentaron, lo cual mejoró la oferta del Sabadell. El banco triplicó el valor de Landscape desde su estreno en mayo hasta su venta en octubre. Es uno de los mejores ejemplos de la locura que se vivía entonces y supone un éxito sin precedentes de lo que en bolsa se conoce como "dar un pase a una filial".

Pocos días después, Astroc compró el 60 por ciento de la inmobiliaria del grupo Rayet por 450 millones. Pero la valenciana había mordido una pieza demasiado grande y se hundió. Tras el empacho de Astroc, en una actuación sin precedentes, cuando los antiguos propietarios de Rayet vieron que la fusión iba al desastre, recompraron a su antiguo comprador. Aún luchan por mantenerse a flote. Bautizaron la empresa como Afirma, primero, y Quabit, después. Meses más tarde, un grupo de accionistas de Astroc demandó a su expresidente Enrique Bañuelos.

No se puede cerrar el capítulo de las perversas relaciones entre bancos y ladrillo sin citar uno de los episodios más esperpénticos de la historia del sistema financiero español: el intento de asalto de Sacyr-Vallehermoso al BBVA entre noviembre de 2004 y el 16 de febrero de 2005. Esta constructora de obra pública creció con la adquisición de la inmobiliaria Vallehermoso. Los delirios de grandeza llevaron a Luis del Rivero, presidente de la inmobiliaria, a tratar de arrebatar la presidencia del BBVA a Francisco González con una pequeña compra de acciones y con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, y la instigación de Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica del presidente. El propio ministro de Economía de entonces, Pedro Solbes, apoyó la operación, lo que demuestra los efectos de la borrachera inmobiliaria por la que pasaba el país.

La actuación del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, y del subgobernador, Gonzalo Gil, frenaron este asalto, pese a que

tenía un enorme apoyo político. El supervisor tiene la potestad de realizar una valoración de cualquiera que pretenda ser accionista de referencia de una entidad financiera y mucho más si aspira a presidirla. Es decir, debe contar con algo parecido a un visto bueno del gobernador. Caruana, en abierto enfrentamiento con Sebastián (que había sido despedido del BBVA por Francisco González), zanjó el asalto diciéndole que si Luis del Rivero no se retiraba y vendía las acciones de la entidad, el Banco de España emitiría su carta valorando negativamente la llegada de la constructora. Este paso hubiera desenmascarado, aún más, la burda maniobra (o venganza) que ponía en riesgo a la segunda entidad financiera española al quedar en manos de una compañía necesitada de liquidez y préstamos. Sacyr reculó tras obtener unas plusvalías de 150 millones con la venta de las acciones. La intentona le costó el puesto de consejero del Santander a Juan Abelló, vicepresidente de la constructora, que se vio obligado a dimitir para demostrar que el banco de Emilio Botín no estaba involucrado en la operación.

En 2011, Rivero hizo otra operación similar, esta vez contra Repsol y su presidente Antonio Brufau, aprovechando que era accionista de la compañía. El objetivo era elevar el dividendo para tener más liquidez en Sacyr. Otro intento con fines cortoplacistas.

Ventas, fiascos y tribunales

El sector inmobiliario también registró destacadas operaciones que solo se explican por la falta de análisis serio con el que vivía la economía. Una de las mayores transacciones del sector, que reúne todo tipo de récords, es la protagonizada por el gallego Manuel Jové, que vendió Fadesa a Fernando Martín, dueño de Martinsa, por 4.045 millones de euros. Era marzo de 2007. La operación dio lugar a la primera empresa de promoción residencial de Europa.

Algunos creen que fue visión de futuro de Jové. Otros apuestan a que el cabeza de familia decidió hacer caja porque ninguno de sus hijos quería continuar el negocio. Las plusvalías obtenidas ascendieron a 2.200 millones. Buena parte de esa fortuna acabó en

acciones del BBVA, del que ha llegado a tener más del 5 por ciento del capital. El mal comportamiento bursátil del banco le ha hecho perder una buena parte de la fortuna que invirtió.

Fernando Martín, expresidente del Real Madrid, es un empresario hecho a sí mismo. Exdiputado de la Unión de Centro Democrático (UCD), demostró con esta operación tener una nula capacidad de previsión. La foto de los dos directivos (Jové y Martín) dándose la mano y sonriendo ocupó las portadas de los periódicos nacionales. Quince meses después del acuerdo, en julio de 2008, Martinsa-Fadesa presentó el mayor concurso de acreedores de la historia de España con una deuda aproximada de 7.000 millones de euros. Entonces la foto más conocida fue la de un Fernando Martín solo y cabizbajo, en el madrileño barrio de Azca, deambulando bajo los soportales de hormigón.

Meses después de la compra, en octubre de 2007, el precio medio del metro cuadrado subía un 5,3 por ciento, la mitad que el año anterior. Fernando Martín confirmó que su empresa iba derecha al precipicio: “El precio de los pisos volverá a subir de forma vertiginosa en el plazo de dos años”. Creía que era un problema político y normativo pero, en realidad, estaba ante el mayor cambio de ciclo económico de la historia reciente de la economía española.

Y la inmobiliaria llegó al precipicio. Martinsa Fadesa cerró 2011 con una pérdida neta de 496 millones, un 30 por ciento menos que los “números rojos” de 705 millones contabilizados en 2010. El grupo inmobiliario redujo un 60,2 por ciento sus ingresos, hasta 180,20 millones.

Entretanto, las relaciones entre Martinsa y Fadesa acabaron en los tribunales, en un juicio que consiguió el récord de ser la mayor acción social de responsabilidad presentada nunca en España. Martinsa-Fadesa reclamó a Manuel Jové el pago de 1.576 millones de euros por entender que en la venta se falsearon los datos de activos traspasados. Martín perdió el juicio. Fernando Martín ha sido propietario de 30,5 millones de metros cuadrados potencialmente edificables, de los que 12 millones (un 40 por ciento del total) están ubicados en el extranjero.

Pero no todo fueron noticias tristes. Martín, presidente y primer

accionista, se autoadjudicó un sueldo de 2,658 millones en 2011 como ejecutivo de la inmobiliaria, un 23,3 por ciento más que el año anterior, y cobró, además, 378.000 euros en concepto de dietas. La retribución al consejo de administración, donde se sienta su hijo Fernando, creció un 38 por ciento. Las penas con pan siempre son menos.

Otro ejemplo que refleja con precisión cómo se comportó este sector, ávido de dinero y poder a corto plazo, es Metrovacesa, la primera inmobiliaria española. También es un caso de mala gestión, ya que los continuos errores de sus directivos propiciaron que acabara en manos de sus prestamistas, los bancos.

Históricamente, Metrovacesa había sido la inmobiliaria del Banco de Vizcaya. Cuando esta entidad se fusionó con el Bilbao y formó el BBVA, en 2002, se la vendió a Joaquín Rivero para financiar su expansión por América Latina. El BBVA obtuvo una plusvalía de 369 millones. En 2005, Metrovacesa pidió un crédito a las entidades españolas de 3.200 millones para financiar la adquisición de la francesa Gecina. Ese mismo año, se convirtió en el escenario de una pugna para hacerse con el control efectivo de la inmobiliaria entre la familia Sanahuja, por un lado, y Joaquín Rivero (presidente de la compañía) y Bautista Soler, por otro, con un cruce de opas incluido.

Mientras volaban los cuchillos entre accionistas, Metrovacesa continuaba su crecimiento desaforado. En abril de 2007, cuatro meses antes de que reventara oficialmente la burbuja, en una muestra de miopía sin precedentes, anunció la compra de la sede del Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) en Londres por 1.600 millones. Al final de tanta locura, la deuda se había disparado y las garantías habían perdido su valor. El resultado es que el 95,6 por ciento de las acciones son ahora del Santander, Banesto, BBVA, BFA-Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular, los bancos que le dejaron el dinero a Rivero para construir castillos en el aire. Metrovacesa perdió 145 millones en 2011. La junta de accionistas de ese año acordó estudiar la presentación de demandas judiciales contra el expresidente Joaquín Rivero y contra Román Sanahuja. Para añadir más problemas, en octubre de 2012, las sociedades de inversión del expresidente Joaquín Rivero y su socio Bautista Soler, con las que controlaban el 30 por ciento de la

inmobiliaria Gecina, suspendieron pagos al no lograr refinanciar su deuda. La aventura francesa de Rivero acabó en un concurso de acreedores de 1.627 millones.

Así se podría continuar con los avatares de Testa, filial de patrimonio de Sacyr, Vallehermoso, Realia, Afirma, Renta Corporación y Nozar, de la familia Nozaleda. Tienen en común haberse endeudado en el momento equivocado, aunque también financiaron parte de sus compras con el circulante de las sociedades adquiridas, de las que también utilizaban sus activos como garantía crediticia.

Pero no solo los bancos unieron su destino al negocio inmobiliario. Las enormes rentabilidades que proporcionaba provocaron que compañías como Ferrovial, dedicada a la construcción, concesiones y servicios, se dedicaran a comprar suelo y ladrillos. Ferrovial, sin embargo, también vio venir al lobo. El grupo presidido por Rafael del Pino decidió el 28 de diciembre de 2006 desprenderse de su división inmobiliaria por 2.200 millones de euros, que pagó Habitat. El acuerdo incluía una deuda de 600 millones. Ferrovial logró una plusvalía neta de 770 millones.

Para facilitar la operación, Ferrovial se comprometió a recomprar un 20 por ciento de Habitat. Poco tiempo después de la operación se pinchó la burbuja y Habitat necesitó un acuerdo urgente con los bancos acreedores para esquivar la suspensión de pagos. No lo logró y entró en concurso, situación en la que ha estado hasta abril de 2012. Por si este desastre no fuera suficiente, el presidente de Habitat, Bruno Figueras, anunció su dimisión en noviembre de 2011, tras dictarse una sentencia que le condenaba a un año de prisión e inhabilitación temporal por la muerte en 2006 de cinco operarios cuando trabajaban en una obra de su empresa en Barcelona.

También lo hicieron las empresas energéticas, como Iberdrola, que creó su división inmobiliaria. Empezó ofreciendo beneficios rápidos, pero, a finales de 2011, la eléctrica tuvo que inyectar 400 millones de euros en su filial inmobiliaria para reforzar el balance de la sociedad y dotarla de la fortaleza suficiente para afrontar los proyectos de los próximos años.

Los movimientos y compraventas descritos se realizaron entre 2006

y 2007, poco antes de que se girara la curva de las estadísticas y los precios se derrumbaran. Por eso, buena parte de estas inmobiliarias ya entraron en barrena en 2008, cuando se cortó el crédito y la valoración de los activos cayó en picado. Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Irea, desveló en 2008 una de las razones de la debilidad financiera del sector: "El verdadero cáncer no es tanto la caída de la demanda de vivienda como la mala estructura de la deuda de las inmobiliarias". En su opinión, entre el 40 y el 60 por ciento del endeudamiento de las promotoras tiene un vencimiento a corto plazo, a menos de dos años, porque "la banca ha ofrecido con poco rigor créditos que deberían financiar el circulante de las empresas, es decir, el pago del IVA o de las nóminas", pero en realidad su destino fue soportar "los costes de la compra de suelo con desarrollo a largo plazo".

¿Dónde empezó entonces el declive en España? Según diferentes informes, si la atención se centra en la caída de los créditos hipotecarios, la fecha sería septiembre de 2006. Esta situación se tradujo en precios un año después, al final de 2007. En la costa mediterránea se registraron caídas del 30 y el 40 por ciento en los precios de las viviendas, sobre todo en Castellón o Marbella. La vivienda vacacional de playa fue la primera en darse de bruces contra el parón inmobiliario. Los expertos locales comentaron que la situación escandalosa llegó en agosto de 2007, "pero el declive empezó hace tres años", señalaba Carlos Smerdou, consejero delegado de Foro Consultores.

Pese a que había promotores con las luces de alarma encendidas, la inercia de tantos años provocó que muchos expertos se negaran a ver la realidad. En diciembre de 2007, Xabier Barrondo, consejero delegado de General Electric Real Estate Iberia, achacaba el frenazo a que "se ha creado un clima de incertidumbre, que es lo peor que le puede pasar a la economía" y pronosticó que la situación quedaría resuelta la próxima primavera [de 2008], una vez que los bancos presentaran sus cuentas de resultados y se viera su grado de afectación por las subprime. "Ahí empezarán a prestar dinero otra vez sin grandes obstáculos, aunque con mayor cautela", afirmó.

No fue así. Nunca llegó el aterrizaje suave del que tanto se habló en los mejores bancos e instituciones españoles. La debacle de

promotores, constructores e inmobiliarios fue radical, a un ritmo marcado por el cierre drástico del crédito por parte de las entidades. Las operaciones descritas demuestran que muchos bancos ya sospechaban que el mercado estaba en su final. Por eso vendieron sus posiciones, pero, con la lógica del control del riesgo, también dieron orden en paralelo de que se cerrara la financiación al sector. Empezaron los grandes, con el Santander-Banesto, La Caixa y el Sabadell a la cabeza. Como es habitual, buena parte del resto de entidades les siguieron. Otras, como la Caja Castilla La Mancha (CCM), o algunas cajas que luego formarían Bankia quisieron aprovechar el hueco que dejaban sus competidores y continuaron echando leña al fuego en el que ardieron años más tarde.

Tres meses antes de que se iniciara el declive del crédito hipotecario, en marzo de 2006, Roberto López Abad, director general de la CAM, la cuarta caja más grande de España, declaró que veían "un horizonte positivo en el mercado inmobiliario. Es el momento de hacer apuestas para crecer". En noviembre de 2008, López hacía pública otra vez su equivocada estrategia: "España ha generado en diez años más empleo que Francia y Alemania juntas gracias a la construcción y promoción inmobiliaria. La bestial reducción de la inversión en vivienda se dará la vuelta en año y medio; entonces habrá más demanda que oferta porque harán falta viviendas y subirán los precios". En poco más de año y medio lo que ocurrió es que su caja, la CAM, había quebrado y hubo que reflotarla con el dinero de los ciudadanos.

La banca ha sido cómplice primero y víctima después de los excesos inmobiliarios. Las entidades financieras no tuvieron más remedio que incorporar a su balance una gran cantidad de inmuebles, procedentes tanto de particulares como de compañías promotoras. Buena parte de ellos acabarán ahora en el "banco malo" creado con dinero de Europa como fin de ciclo. Desde la burbuja hasta la escombrera. La financiación del "banco malo" tendrá un alto coste para los ciudadanos, ya que ha sido la antesala del rescate de España y de la imposición de duros recortes sociales y subidas de impuestos.

Un paseo por la localidad castellana de Seseña es el mejor ejemplo

del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias. Allí, un pequeño empresario, Francisco Hernando, conocido como Paco "El Pocero", intentó construir la urbanización más grande de España, con 13.508 viviendas, en un secarral de Toledo. El proyecto suponía multiplicar por seis la población del municipio. Hoy el paisaje es desolador y muestra con crudeza que lo que empieza sin sentido acaba en tragedia económica.

Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada, explica que esta fiebre loca por comprar terrenos ha llevado a vender las fábricas agroalimentarias que rodeaban a los pueblos, dedicadas al envasado de frutas y verduras, para construir viviendas. "Ahora, muchas promociones se han quedado malvendidas, pero las fábricas han desaparecido y con ellas la riqueza que generaban en el campo. Era un absurdo pensar que los pueblos podían crecer hasta el infinito. Muchos han quedado como poblaciones fantasmas y eso no genera prosperidad."

Rodríguez cuenta la anécdota que describe perfectamente el absurdo viaje de ida y vuelta de esta crisis, la de un labrador que, después de trabajar en la construcción y quedarse en paro, se acercó al dueño de un gran solar que rodeaba su pequeña población. Estaba previsto levantar una urbanización, pero el promotor no encontró financiación y el terreno se moría del asco lleno de yerbajos. El agricultor le propuso que le dejara labrar el suelo a cambio de una pequeña renta. "Yo vuelvo a lo que siempre me he dedicado y usted gana algo. Es bueno para los dos."

Capítulo 2

Un supervisor incapaz de corregir el rumbo

La relación de culpables de cualquier crisis financiera generalmente es una larga lista (entidades, Gobiernos, reguladores, etc.) con mérito desigual, pero entre ellos, y ocupando casi siempre un puesto de honor, encontramos al mal gobierno de los supervisores.

Juan Ramón Quintás, expresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) hasta 2010

Los gestores, sobre todo algunos directivos de bancos, fueron por delante de las autoridades supervisoras. Sin que el Banco de España hiciera rotundas advertencias de lo que al sector se le venía encima, se apresuraron a deshacerse de las propiedades inmobiliarias en 2006, tras obtenerenormes beneficios, como se ha visto en el capítulo anterior. Pero el problema era que casi todas las grandes entidades habían prestado dinero a los que les habían comprado los imperios del ladrillo. Quizá pensaron que los precios ya habían tocado techo, pero creyeron que el sector inmobiliario todavía era un negocio rentable, después de tantos años de amasar fortunas con él. Un error fatal que todavía están pagando, porque los bancos siguen ligados a la suerte del suelo y de las promociones.

Algunas entidades bancarias han visto cómo los préstamos al ladrillo las han llevado a un callejón sin salida tras las pruebas realizadas en septiembre de 2012 por la consultora norteamericana Oliver Wyman, por mandato de Bruselas, para determinar el importe del rescate bancario. El objetivo de estas pruebas era comprobar si los bancos tenían suficiente capital para resistir un hipotético escenario catastrofista, que incluía una caída del PIB del

6,5 por ciento entre 2012 y 2014. El 40 por ciento del sector financiero sucumbió, como veremos más adelante. También ha habido otra señal de esta equivocación estratégica: la tasa de morosidad, que hoy ya ha superado a la de la crisis de 1994. En algunas grandes instituciones, como el Santander, ha rebasado las cotas que la propia entidad se había marcado como límite aceptable. La crisis superó las previsiones del banquero más experto de España, Alfredo Sáenz, vicepresidente del Santander, curtido en muchas crisis. Otra muestra del error de cálculo son las gigantescas provisiones que las entidades se han visto obligadas a realizar, bien es verdad que muchas de ellas por cambios inesperados y discutibles de la legislación.

Los bancos y las cajas entraron en la crisis con un relevo de gobernador del Banco de España,en julio de 2006. Mal comienzo. “En tiempo de tribulación no se debe hacer mudanza”, decía san Ignacio. Desde comienzos de 2006, el equipo saliente contaba los días para abandonar la institución, consciente de la que se venía encima. Al recién incorporado Miguel Fernández Ordóñez le costó aterrizar más de lo razonable, sobre todo porque no procedía del mundo financiero. La burbuja se había calentado en España entre 1996 y 2000 y entre 2002 y 2006. En medio de estos periodos se produjo la crisis argentina y el pinchazo de la efervescencia de las puntocom, que tantos disgustos provocó en Estados Unidos. En términos políticos puede decirse que la exuberancia irracional creció durante las dos legislaturas de José María Aznar y su ministro de Economía, Rodrigo Rato, así como en la primera de José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro de Economía, Pedro Solbes.

Uno de los máximos exponentes del empuje político a la crisis fue la Ley del Suelo (que quitó cortapisas a la construcción) promovida en 1998 por Rodrigo Rato, quien propulsó el crecimiento del sector inmobiliario porque era la manera más fácil de que aumentara el PIB; paradójicamente, Rato caerá víctima del estallido de la burbuja cuando más tarde, en 2012, pilote Bankia. Tampoco hay que dejar de lado a los gestores de las entidades, los principales causantes del desastre, como no puede ser de otra manera. Algunos directivos no dudaron en aceptar ayudas públicas y colocarse sueldos elevadísimos para, al final, cosechar un fracaso inédito en España

que ha arruinado a la mayoría de las cajas de ahorros y parte de los bancos. Pero el supervisor bancario es, como decía Juan Ramón Quintás, expresidente de las cajas, una pieza básica en la lista de responsables. Por eso es fundamental conocer las claves con las que trabajaron y los graves errores que cometieron desde la supervisión financiera. No hay que olvidar que el Banco de España, además del cometido de vigilar la estabilidad financiera supervisando/ garantizando la solvencia de las entidades, tiene también una función reguladora.

Quizá para algunos la crítica pierda valor por realizarse años después de los hechos, cuando se conoce el final de la película. Sin embargo, considero que las conclusiones y los errores que se demuestran en este libro son útiles para evitar que, en el futuro, se caiga en los mismos agujeros.

Caruana, advertencias en privado

El 13 de julio de 2006, en un acto institucional frío, como corresponde a los oropeles del cargo, Jaime Caruana (Valencia, 1952), gobernador del Banco de España, y Gonzalo Gil (Santander, 1944), subgobernador, pasaron el testigo a sus sucesores, Miguel Fernández Ordóñez (Madrid, 1945) y José Viñals (Madrid, 1954). Zapatero y Solbes habían convivido con Caruana, nombrado por el PP, no sin algunas tensiones; la más importante por el intento de asalto de Sacyr al BBVA, como ya hemos contado.

Pero la bonanza del ciclo económico pulió aristas, a lo que ayudó todavía más el silencio público de los supervisores. El Ejecutivo socialista agradeció que ni Caruana ni Gil hubieran alertado pública e inequívocamente del peligroso rumbo de la economía durante todo 2005 y 2006, años en los que el crédito pasó de crecer el 15 por ciento de media a crecer el 20 por ciento (el periodo de mayor incremento de la burbuja); y, por supuesto, que no hubieran tomado ninguna medida regulatoria incómoda. La caldera iba a estallar con un desorbitado incremento de los activos, pero si alguien la enfriaba, el PIB también caería… Y no hay que olvidar

que España era la envidia de Europa, con un crecimiento medio del 3,5 por ciento en aquellos años.

¿Advirtieron Caruana y Gil al Gobierno de la gravedad de la situación? Según sus colaboradores de entonces, lo hicieron en privado. Y en dos ocasiones. Se reunieron con Pedro Solbes para reclamar medidas económicas que redujeran el incremento de los créditos bancarios, sobre todo al sector inmobiliario. La mayor preocupación de estos directivos era la fuerte concentración en el ladrillo y la excesiva apelación al ahorro exterior por parte de las entidades. Si las citas existieron o no será un futuro tema de debate y polémica, pues no constan documentos escritos sobre ellas. Según estas fuentes, el ministro no hizo caso de las advertencias. Se trataba de un momento político feliz en el que el jefe de Gobierno repetía continuamente que en España "todo va bien". Con esta premisa, el responsable económico no quería aguar la fiesta a Zapatero con malos augurios que, si se hubieran puesto en práctica, hubieran hecho que la economía descendiera significativamente. Si Solbes hubiese quitado las bonificaciones fiscales a la compra de vivienda o endurecido las provisiones bancarias, el efecto se hubiera reflejado en un frenazo de la construcción —y una disminución de la creación de puestos de trabajo— y toda la economía se hubiera ralentizado.

Aun cuando se hubieran producido esas advertencias, nadaexime de culpa a los mandatarios del Banco de España por la omisión de denuncias públicas sobre la necesidad de reconducir un sector financiero que caminaba por una senda peligrosa. Caruana podía haber hecho más por desinflar un globo que no podía aguantar más presión. Mucho más. No hay que olvidar que este gobernador fue, además, entre 2003 y 2006, presidente del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, una tribuna privilegiada para conocer la situación mundial del sector. Incluso, si el poder político se negaba a mover pieza, deberían haber advertido a la opinión pública de los riesgos que se estaban asumiendo, sobre todo en las cajas de ahorros, y haber regulado mediante circulares de obligado cumplimiento.

Pero no fue así. Quizá lo que movió a Caruana fue el temor a convertirse en un cargo incómodo para el Gobierno socialista. No

hay que olvidar que este economista valenciano saltó del caserón de Cibeles al Fondo Monetario Internacional (FMI), un paso trascendental que necesitaba todo el apoyo gubernamental de Zapatero. ¿Era Caruana un hombre del PP o, mejor dicho, de Rato, que fue quien le nombró en su día gobernador del Banco de España? En los ambientes financieros está comúnmente admitida la cercanía entre el exgobernador y el exvicepresidente de Aznar, aunque hay fuentes del Banco de España que aseguran que entre ellos no hubo trato personal alguno hasta su nombramiento como director general del Tesoro en 1996. El hecho de que Rato le reclamara diez años después, en 2006, para el FMI como consejero y director del área de Mercados Financieros demuestra una clara sintonía entre ambos. En cualquier caso, cabe recordar que, durante su mandato, Caruana evitó siempre las polémicas políticas y, de hecho, los partidos apenas realizaron críticas en público sobre una cercanía con el PP; como tampoco mantuvo enfrentamientos con el Gobierno socialista.

Hay quien considera que la mejor muestra de la cercanía de Caruana con Rato es el comportamiento que aquel mantuvo en la crisis del BBVA. En marzo de 2002 se descubrieron unas cuentas secretas que el BBV tenía en Jersey (un paraíso fiscal perteneciente al Reino Unido). Una parte de este dinero fue traído a España para engordar los fondos de pensiones de los consejeros del BBV. El hecho se supo por una denuncia anónima que llegó al Banco de España. El escándalo supuso la salida de Emilio Ybarra, copresidente del BBVA, y de todos los consejeros del antiguo BBV, lo que hizo sospechar a muchos del origen de la denuncia. Francisco González, procedente de Argentaria, se quedaría con todo el poder en el banco y acabaría con lo que había representado Neguri, las familias de la aristocracia vasca que fundaron la entidad.

González llegó al BBVA tras ser colocado por el PP en el banco público Argentaria. Por eso se dedujo que Caruana buscó una solución a esta crisis quitándose de en medio a Ybarra, un banquero más profesional y menos político, en un acto “en favor” del Gobierno del PP. No obstante, en conversaciones privadas, tanto Caruana como Gil han sostenido que ellos no solo no alentaron la marcha de Ybarra, sino que trataron de impedirla, y argumentan que consideraban que el banco estaría más seguro en manos del

banquero vasco. En el mercado financiero siempre se ha comentado que Francisco González sabía de la existencia de los fondos de pensiones en Jersey antes de la fusión, aunque este extremo no se haya podido demostrar. El incidente de Jersey le costó el puesto a Mariano Herrera, entonces jefe del grupo de inspectores que se ocupaba del BBVA y un profesional de una larga y reconocida carrera en el Banco de España. Herrera quiso dejar por escrito en su informe este caso antes de que se hiciera público todo el escándalo, pero se opuso, alegando discreción, el director general de Supervisión de entonces, Pedro Pablo Villasante, hoy secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB). Al final, Herrera fue destituido.

Al margen de este grave asunto, Caruana había tenido al principio encontronazos con las cajas, que calificaron de "excesivamente duro" el primer discurso en su sede en 2001. Motivos tenían: Caruana les advirtió de los riesgos de invertir en empresas; limitó la emisión de acciones preferentes para financiar su expansión fuera de sus provincias de origen; les pidió que se alejaran lo máximo posible del poder político si querían tener una gestión eficiente y les instó a recortar drásticamente los costes. De hecho, durante los primeros años la relación entre Caruana y Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación de Cajas (CECA), fue tensa. Ahora bien, las firmes exigencias iniciales se fueron ablandando poco a poco; y la mejor prueba es que, como se ha visto ahora, las cajas no cumplieron ese "catecismo" del gobernador, cavando con ello su fosa.

Un colchón inútil

Durante el mandato de Caruana, entre 2000 y 2006, se pusieron en marcha las provisiones anticíclicas, que son un colchón de reservas que se acumula en los buenos tiempos para hacer frente a las tormentas financieras. Este instrumento se había gestado años antes, cuando Raimundo Poveda, director general de Regulación Financiera, las diseñó tras la crisis de Banesto. El gobernador era

entonces Ángel Rojo, que no fue partidario de implantarlas. Sin embargo, años después, con la llegada del euro (y de la burbuja), el crédito no dejó de elevarse. Rodrigo Rato, ministro de Economía en aquellos años, instó al supervisor a que hiciera lo necesario para frenar los préstamos de forma urgente. Como el Banco de España ya no tenía capacidad de influencia en la política monetaria, las provisiones anticíclicas se mostraban como su única arma.

Pero la medida contó con la fuerte oposición del sector. Los banqueros españoles, sobre todo los del Santander y el BBVA, reclamaron la reducción de las provisiones porque, decían, les limitaba "injustamente" los beneficios frente a los competidores internacionales, además de castigar su cotización bursátil. Sin embargo, y esto es lo más curioso, Caruana rebajaría estas provisiones al final de su mandato: tras la constante presión de los grandes bancos, las provisiones anticíclicas llegaron a sumar unos 35.000 millones de euros, menos del 2 por ciento del crédito total. Aceptó dar un frenazo a "las provisiones españolas" (como se conocieron en Europa), algo que Ordóñez se encargaría de recordar en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en julio de 2012 para repartir culpas.

La crisis ha puesto de manifiesto que las provisiones solo sirvieron para retrasar unos dieciocho meses el efecto de la debacle financiera. Es decir, compraron tiempo, pero como ningún gobernador actuó con presteza, al final no produjeron ningún efecto beneficioso. Es más, hay analistas que consideran que el efecto fue pernicioso: "Proyectaron la falsa imagen de que el sector estaba a resguardo de problemas, lo que facilitó que se consintieran mayores anomalías en las cajas. En el fondo, las anticíclicas fueron procíclicas, empujaron la burbuja".

Entre altos responsables del Banco de España se comenta la inutilidad de estos colchones: "Si quieres preparar a las entidades para una crisis, debes obligarlas a provisionar tanto que hundes su cuenta de resultados. Si se les exige poca dotación, cuando se hunda el ciclo económico no les servirá para nada […]", admiten con resignación. Incluso internamente se han realizado estudios muy detallados que demuestran esta teoría. Al inicio de la crisis internacional, antes de conocerse la hecatombe del sistema

financiero español, los bancos centrales de las principales economías aseguraron que tomarían como referencia las provisiones anticíclicas como escudo anticrisis.

El asunto en el que Caruana y Gil, su número dos, se mantuvieron siempre firmes fue en la prohibición de realizar créditos subprime, los famosos productos tóxicos con los que empezó la crisis en Estados Unidos en el verano de 2007. La estrategia consistía en crear productos financieros que agrupaban préstamos (sobre todo de baja calidad), que luego eran vendidos a terceros clientes sin que la entidad fuera responsable directa de lo que ocurriera con ellos. Estos créditos quedaban, en teoría, fuera del balance de la banca, por lo que, aparentemente, si llegaban a convertirse en basura (es decir, si no se pagaban), no se reclamaba responsabilidad a la entidad financiera. Gonzalo Gil nunca vio la conveniencia ni la ortodoxia de estos productos creados por los ingenieros financieros de Wall Street. Alguno de los grandes bancos y de las grandes cajas insistieron al supervisor en que eran productos comúnmente aceptados en los más importantes mercados internacionales; pero no lograron doblegar al Banco de España. Su respuesta siempre fue la misma: “Los créditos no saldrán de vuestro balance y seréis responsables de la morosidad que generen”. Con estas condiciones, el juego no servía, pensaron los banqueros españoles, que veían con envidia todo el dinero que ganaban los británicos, norteamericanos, alemanes, suizos…

Quizá porque no había estos productos tóxicos en las tripas de la banca, el jefe máximo de la supervisión,Pedro Pablo Villasante Atienza, pudo presentar una visión optimista y complaciente del sector en febrero de 2006, pocos meses antes de concluir su mandato. En el Encuentro Financiero Foro de la Nueva Economía afirmó: “Nuestro sistema bancario sigue mostrando unas cifras de solvencia agregada holgadas, a pesar del incremento de riesgos asociado a la expansión del negocio, una rentabilidad que acepta con éxito su comparación en el plano internacional y un nivel de eficiencia que refleja el esfuerzo, sostenido en el tiempo, de contención de gastos y racionalización de los sistemas”.

Villasante solo alertó de dos cuestiones: las hipotecas a plazos muy largos (se habían llegado a conceder a cincuenta años) y que era un

error diferir el pago de intereses, por lo que pidió que “los consejos de administración consideren ratios más exigentes en los riesgos garantizados”. De las larguísimas hipotecas simplemente dijo que eran “motivo de atención para los supervisores”, pero no se prohibieron.

Hubo una tercera advertencia, que tocó en uno de los más graves desajustes del sistema financiero: “La necesidad de financiar las altas tasas de crecimiento del crédito hipotecario —dijo— está obligando a una cada vez mayor apelación en los mercados de deuda e interbancarios, lo que puede llegar a alterar las condiciones del equilibrio financiero estructural de las entidades. Por ello, es preciso que se gestionen adecuadamente los riesgos generados por esta situación” con “políticas que fijen límites operativos al endeudamiento en mercados mayoristas y la diversificación de las fuentes de financiación y de los plazos de vencimiento”. Era este un aviso clave que constituye una de las causas por las que se han intervenido cajas: no han podido atender los enormes vencimientos de deuda que mantenían con inversores institucionales. Una deuda, por cierto, que utilizaron para financiar la burbuja.

Así las cosas, la cuestión es: ¿debe el director general de Supervisión del Banco de España limitarse a pedir que “se gestionen adecuadamente estos riesgos” o tenía que haber hecho mucho más hasta impedir que se llegara tan lejos? Hay que admitir que resulta fácil formular la crítica a posteriori; pero estamos, no cabe duda, ante uno de los mayores gérmenes de la muerte de las cajas de ahorros: su excesiva apelación al dinero exterior (que los bancos alemanes prestaron con gran alegría, por cierto, y sin que nadie les obligara a ello), que el supervisor consentía.

Solo dos meses después de estas palabras llegaba el discurso de despedida de Caruana. Lo pronunció el 18 de abril de 2006 (aunque no se marcharía hasta junio) en el Foro Cinco Días. Se tituló “La situación económica en 2005 y el inicio de 2006”. No hubo ni duras advertencias ni avisos de que la máquina económica estaba a punto de estallar. En un lenguaje farragoso y técnico, dejó frases como esta: “El precio de la vivienda está en un proceso de reabsorción paulatina y ordenada entre la brecha de su nivel actual y el equilibrio a largo plazo”. Es decir, tranquilidad. Caruana achacaba

el enorme crecimiento económico a las mejores condiciones monetarias de la Unión Europea y al incremento de la población activa (se habían creado 600.000 puestos de trabajo en 2005) por la influencia de los más de tres millones de inmigrantes registrados. “El crédito hipotecario se ha situado en el 105 por ciento de la renta disponible en 2005, claramente por encima de la media de la Unión Europea, aunque lejos de las cotas que todavía alcanza en los Estados Unidos.” La economía norteamericana como consuelo…

“Desde mediados de 2004 —continuó diciendo— la inversión productiva ha mejorado sensiblemente, de forma que en 2005 la inversión en bienes de equipo ha subido en un 9,5 por ciento.” Es decir, crecimiento sano. No hay problemas. “El mayor crecimiento del gasto ha venido acompañado de incremento del crédito a las actividades productivas.” Tampoco había nubarrones a la vista. Es cierto que Caruana glosó las pérdidas acumuladas de competitividad frente a los socios comunitarios, el verdadero cáncer de la economía española; y también es cierto que advirtió de los desequilibrios por el alto endeudamiento familiar. Admitió “alzas de precios significativos” en actividades relacionadas con la construcción, pero matizó cualquier posible problema porque era un “sector protegido de la demanda externa”. Destacó la “desaceleración del precio de la vivienda” y “la moderación en el gasto de los hogares”, describiendo así un ambiente más propio de una economía de aterrizaje suave que de una al borde del desplome.

Caruana: buena sintonía con la Moncloa

Caruana guardó lo mejor para el final: las alabanzas a La Moncloa. “Sobre las políticas de oferta —dijo— las acciones emprendidas por el Gobierno son adecuadas, porque parten de un diagnóstico acertado de las deficiencias estructurales que llevan a un bajo crecimiento de la productividad.” Es decir, apoyo sin fisuras. Zapatero debía estar contento. Pero no terminó sin añadir un asunto pendiente, el favorito de Ordóñez: “La ausencia de medidas en el ámbito del mercado de trabajo y la negociación colectiva es una

laguna importante que sería preciso cubrir".

No es de extrañar que los inspectores del Banco de España, tras oír esta loa al Gobierno y a la situación económica, reaccionaran escribiendo a Solbes para advertirle de que se encontraba sentado sobre una bomba inmobiliaria. Como se explica más adelante, la misiva está fechada el 26 de mayo de 2006, un mes después del discurso de Caruana. Era una advertencia importante, tal vez la mayor que se conoce por escrito. Pero la bomba ya estaba cebada. Solo faltaba aguardar su explosión.

Tras el discurso, el 13 de julio de 2006 llegó el cambio de timonel en el Banco de España. Lo que se pasó de manos aquel caluroso día de verano en Madrid era un explosivo con muy poca mecha. Fue en los salones nobles del caserón de la madrileña plaza de Cibeles, ante los más altos representantes políticos y financieros del país. La proximidad al estallido del artefacto, con ser algo gravísimo, no fue lo peor. El mayor error de los recién llegados fue no ser conscientes de que necesitaban con urgencia la habilidad de los mejores artificieros para evitar que estallara la crisis del crédito excesivo y la sobrevaloración de activos. Miguel Fernández Ordóñez (que desde que tomó las riendas de la institución se quitó el segundo nombre, Ángel, con el que completaba el famoso acrónimo de Mafo) y José Viñals, subgobernador, llegaron al cargo más preocupados por el enorme lío político que se había organizado con su nombramiento que por la que se les venía encima, la mayor crisis económica y financiera desde los años treinta.

Hoy se puede decir que, en 2006, el Gobierno socialista cometió el error de nombrar a un militante socialista y ex alto cargo del Ejecutivo. Ordóñez dejó la Secretaría de Estado de Hacienda, en marzo de 2006, para entrar en la Comisión Ejecutiva del Banco de España, y tres meses después asumía el puesto de gobernador. Anteriormente había sido secretario de Estado de Economía con Felipe González, presidente del Tribunal de la Competencia y de la Comisión del Sistema Eléctrico. También había trabajado para el FMI como director de Operaciones, fue columnista en El País y director de un programa económico de la Cadena SER. El mayor problema que tenía Ordóñez es que no conocía el sector financiero, razón por la que muchos de sus discursos se dedicaban a la política

macroeconómica y a los problemas del mercado laboral. Tampoco sabía cuáles eran los recovecos, muchos, de la compleja institución, el Banco de España, que tenía a su mando. Esto retrasó su capacidad para tomar el control. Pero había además un problema añadido: llegaba con ideas nuevas, dispuesto a implantarlas en poco tiempo, lo que provocó el rechazo de parte de la plantilla, acostumbrada a un funcionamiento muy tradicional.

Además de colocar a una persona con perfil político y en absoluto conocedor del mundo financiero, el Gobierno socialista no pactó con el PP el nombre del subgobernador, como reclamó este partido. Miguel Arias Cañete, portavoz de Economía del PP, aseguró: "La llegada de Ordóñez supone que se están rompiendo dos principios que hasta ahora siempre se habían respetado: elegir un gobernador por consenso entre los dos grandes partidos y que no tenga perfil político". Cristóbal Montoro, también del equipo económico del PP, inició una durísima campaña de desprestigio contra el gobernador en el Congreso. Montoro ha sido ahora el que ha nombrado a Elvira Rodríguez, exministra y diputada del PP, como presidenta de la CNMV. Situaciones distintas, principios diferentes.

El último en coger el testigo para atacar a Ordóñez fue el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, que se equivocó al no distinguir entre su enemistad personal con Ordóñez y la institución a la que representaba.

El enfrentamiento político ha sido otro factor que ha dificultado la labor del supervisor en mitad de una crisis durísima y que ha ido cambiando de forma a medida que pasaban los años. El Banco de España era la sala de máquinas desde la que se debía intentar actuar para minimizar los efectos del hundimiento económico en el sistema financiero, pero esta labor exigía apoyo político, no confrontación partidista. Para añadir dificultades, hay que recordar que Ordóñez mantuvo enfrentamientos con ministros y destacados miembros del PSOE, lo que trajo más tensión a la institución.

El mandato de este gobernador es un buen ejemplo de lo equivocado que resulta colocar en este puesto a alguien sin un mínimo consenso entre los dos grandes partidos y que llega directamente del Gobierno. El nombramiento en junio de 2012 de su sucesor, Luis Linde, con el apoyo inicial de todos los partidos,

hace presagiar un mandato menos convulso. Nadie duda de que hay sintonía entre Linde y Guindos (y también con Montoro) y es una persona que procede de la institución. Sería recomendable evitar la tutela política (y mucho más la injerencia) para permitir un funcionamiento más profesional, aunque eso en España parece una quimera. Se le atribuye al exgobernador Luis Ángel Rojo aquella frase de que "esperar que la clase política mire por el bien común es utópico". Ahora estamos pagando estos enfrentamientos y la falta de miras políticas.

Como no podía ser de otra forma, las primeras palabras que pronunció Ordóñez en su discurso de investidura se refirieron al vidrioso asunto de la injerencia política que flotaba en el ambiente. "Nada es más necesario, más inexcusable que la independencia para el Banco de España si quiere cumplir sus fines", dijo. Tocó uno de los aspectos clave de su mandato: la independencia política, que no supo ejercer al mantener un silencio cómplice —sobre todo en 2008 — cuando los líderes del Gobierno socialista negaron la crisis en público pese a que en el Banco de España ya se estaba trabajando para solucionar las primeras quiebras de las cajas. Esta combinación de errores (politización y falta de experiencia profesional en la cúpula del Banco de España) fue fatal: aceleró la caída del sector, arrastró a la economía y golpeó más a la sociedad. Es cierto que en el discurso de Ordóñez hubo señales de alerta, pero no fueron más allá de avisos sobre el exceso de endeudamiento de las familias. Lo dijo en un tono que parecía no querer molestar a un poder pletórico por dirigir una economía que podía "superar a Francia, tras haber rebasado a Italia" gracias a su crecimiento imparable, según dijo entonces el presidente Zapatero.

La independencia parcial de Ordóñez

Ordóñez buscó su vitola de independiente a través de enfrentamientos con el Gobierno sobre la reforma laboral, los problemas de competitividad y el endeudamiento de la economía. No impuso su criterio sobre la situación del sistema financiero, que

era su principal cometido. Y eso pese a que demostró ser consciente del recalentón económico que había por el exceso de crédito. Esto fue lo primero que denunció: “El Banco de España contempla en actitud de alerta el ritmo al que en los últimos años han crecido las deudas de las empresas y, en especial, de los hogares, particularmente en la medida en la que estas se han contraído mayoritariamente a tipos de interés variable. Esto incrementa la exposición de las familias a potenciales cambios desfavorables”; lo dijo en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2006, y en seis discursos más.

¿Cuál creía que iba a ser la consecuencia del elevado endeudamiento en el sistema financiero? El gobernador apuntaba a uno de los problemas básicos, pero no tomó medidas para paliar las consecuencias que este asunto provocaría muy poco después en cajas y bancos.

El tema que más enemistad le causó con el PSOE y con el Gobierno socialista fue la reforma del mercado de trabajo. En ocasiones dedicó la mayor parte de sus discursos a este asunto: “Es necesario seguir profundizando en este tema”, advirtió ya en 2006 al Ejecutivo. El liberal Ordóñez estaba realmente convencido —y así ha quedado claro en todas las conversaciones privadas mantenidas — que si en la mejor parte del ciclo económico España solo pudo reducir el paro al 8 por ciento, que es la peor tasa de desempleo que han tenido los países escandinavos, “es porque algo estructural no funciona en el mercado de trabajo. Si esto no se cambia, España no recuperará la competitividad y no bajará el paro”. Lanzó sus dardos contra el sistema de negociación colectiva, la necesidad de desvincular los salarios de convenios sectoriales y adaptar los sueldos a los beneficios empresariales. Para los sindicatos, Ordóñez fue su bestia negra: consideraron que buscaba su desaparición y la desprotección de los trabajadores. Un dato significativo es que, mientras que en más de veintiún discursos oficiales reclamaba la “urgente reforma del mercado laboral”, solo hay trece referencias a la necesidad de reformar las cajas de ahorros; elocuente si se tiene en cuenta que Ordóñez era el supervisor financiero de unas cajas con deficiencias muy relevantes.

La necesidad de alargar la edad de jubilación y la lucha contra el

déficit público fueron los otros dos caballos de batalla del exgobernador dentro de las reformas estructurales. “Gran parte del déficit generado en estos años tiene un componente estructural importante y que, por tanto, no se corregirá con la recuperación económica”, advirtió en el Senado el 23 de noviembre de 2009. “Hay que hacer un esfuerzo excepcional para volver a tener unas cuentas públicas saneadas”, reclamó el 26 de enero de 2010. Con este resumen, es lógico que se piense que Ordóñez era un supervisor “que tenía un ministro de Economía en su cabeza”.

Sin embargo, en algunos momentos clave, cuando el Gobierno alabó la salud del sistema financiero, no le enmendó, aun cuando sabía que estaba exagerando, un detalle que a buen seguro agradecieron Zapatero y Solbes. En vísperas de las elecciones de marzo de 2008, el 21 de febrero, el popular Eduardo Zaplana aseguró: “Hay entidades financieras españolas con dificultades y falta de liquidez. El Gobierno está haciendo un esfuerzo por vender una realidad económica distinta a la que nos acompaña y un mundo que no existe”. Zaplana decía la verdad, pero, rápidamente, Solbes aseguró que estas declaraciones eran “mentiras”. Calificó al PP de “irresponsable” por decir que el Banco de España estaba ocultando información por razones electorales.

Una vez que el Partido Socialista revalidó su victoria en las urnas, tocaba la tarea de alejar el fantasma de la crisis. El 10 de julio de 2008 Pedro Solbes subrayó que ninguna entidad española estaba en riesgo, y que no creía que pudieran llegar a verse en una situación parecida a la vivida por otras extranjeras (en referencia a la que existía en Estados Unidos, Reino Unido o Alemania), aunque recordó que las españolas no eran inmunes ni a la crisis ni a las dificultades financieras. Para entonces, Ordóñez —y toda la supervisión— ya sabía de los problemas de la CCM y de otras entidades enladrilladas, como la CAM, Bancaja, Caixa Galicia o Caixa Cataluña. Y no dijo nada.

Pero el ministro aún fue más lejos a medida que se acercaba el cataclismo. El 30 de septiembre de 2008, durante la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, Solbes insistió en la solvencia de los bancos y cajas españoles, y recordó que el país disponía de un importante mecanismo para la

protección de los ahorros. Cuando le preguntaron si el Ejecutivo se planteaba “rescatar” alguna entidad, afirmó que “todas las partes implicadas” siguen de forma “discreta” la evolución del sistema financiero desde el verano de 2007. “Estamos convencidos de que el sistema español no tiene ningún peligro”, aseveró. Ordóñez calló, otra vez, aunque solo faltaban seis meses para que quebrara CCM.

Esas “partes implicadas” a las que hacía referencia el ministro era el Banco de España, obviamente. Nadie duda de la gran formación de Ordóñez, pero enfocada a temas macroeconómicos, algo que marcó su mandato. “Ordóñez es un ministro de Economía disfrazado de gobernador del Banco de España”, afirmó José María Martínez, secretario general de Comisiones Obreras de Banca, en una acertada definición.

Ordóñez comentó con sus colaboradores cercanos que, en un principio, buscó un subgobernador especialista en la supervisión. Sin embargo, no encontró al candidato ideal, por lo que nombró a Viñals con la idea de que se dedicara a los temas monetarios y del euro, para lo que este sí contaba con experiencia. El problema de este reparto de tareas es que la supervisión debía recaer en Ordóñez. Pero a él no le atraía supervisar, ni sabía cómo hacerlo. Javier Aríztegui fue nombrado director general de Supervisión en julio de 2006, aunque procedía del Servicio de Estudios. Como nota curiosa, cabe recordar que Aríztegui había suspendido las oposiciones al Cuerpo de Inspectores y después aprobó las del Servicio de Estudios.

Sin especialistas en la inspección

Aríztegui tampoco era un especialista: estuvo tres años al frente del departamento sin apenas atajar los problemas, el tiempo en el que se empezaron a pudrir los balances bancarios. Siguió con esta actitud cuando asumió el cargo de subgobernador, en marzo de 2009. No tenía la experiencia adecuada para el momento tan tremendamente difícil que le tocó.

Aunque al final de su mandato Ordóñez lo negara, este economista liberal había dedicado a la tarea reformista y laboral casi más esfuerzos que a vigilar y comprender de cerca la situación y los problemas del sistema financiero. No vio el comienzo de las grietas porque no estaba atento a los bancos y cajas. De hecho, era notable la imprecisión con la que se refería a estas entidades en las ruedas de prensa. Denotaba un conocimiento superficial cuando se trataba de los bancos o cajas no muy relevantes.

A finales de 2006, algunos miembros de la sección de Economía de El País mantuvimos una reunión con Ordóñez. Habían transcurrido cuatro meses desde que aceptó el cargo. Una de sus quejas fue que el sector financiero español no estaba en la primera línea internacional porque no tenía banca de inversión, que era, dijo, el negocio que proporciona relevancia en el tablero mundial. Habló con cierto menosprecio de la banca comercial, de ese negocio hecho céntimo a céntimo y a base de trabajar con millones de pequeños clientes. "El Santander y el BBVA —dijo— son grandes en América Latina y tienen algunas posiciones europeas, pero los jugadores relevantes son JPMorgan, Merrill Lynch, UBS, Bank of America, Royal Bank of Scotland, HSBC, Deutsche Bank, Goldman Sachs […]", y así siguió enumerando más entidades globales. Ordóñez, quizá por su paso por el FMI, tenía claro que los supervisores más influyentes del mundo eran los anglosajones, el alemán y alguno más. "Su" Banco de España no estaba en la lista de los que tenían más peso, algo que lamentó entonces. Sin embargo, cuando estalló Lehman Brothers y se hundió la banca de inversión, en la primera etapa de la crisis, esta situación le proporcionó tiempo para prepararse ante la que se venía encima. Pero no lo aprovechó...

En aquella cita Ordóñez no destacó la fortaleza española que suponía el negocio bancario comercial de pequeños clientes, que después sí sacaría a relucir. Otra obsesión que mencionó entonces fue la obsolescencia del modelo de las cajas de ahorro, de las que criticó su mal gobierno corporativo por la injerencia política. Cualquiera que hubiera conocido a Ordóñez antes de ser gobernador sabía el mal concepto que tenía de ellas. Nunca lo ocultó y eso significó un enfrentamiento desde el principio con Juan Ramón Quintás. Sin embargo, a finales de 2006, en aquella reunión, el gobernador parecía soportar con resignación la anómala situación

de las cajas, que representaban el 50 por ciento del sistema financiero. Aunque caducas, no parecían entonces un problema para el jefe de la supervisión. Sin embargo, cuando percibió que la crisis financiera llegaba a España, debería haber actuado con extrema rapidez, porque era consciente de las deficiencias estructurales de estas entidades. Pero no lo hizo.

Dos años después de este encuentro privado, Ordóñez concedió a El País la única entrevista de su mandato y una de las pocas a las que se ha sometido un gobernador del Banco de España sin cuestionario previo ni límite en los temas tratados. Su visión había cambiado. Era diciembre de 2008, y ya se había vivido en el verano de 2007 el hundimiento de Bear Stearns, de los fondos de inversión de BNP Paribas y Lehman Brothers.

Ordóñez admitió en la entrevista: “La mayoría suponía que la crisis financiera iba a aparecer en los mercados de cambio y en los hedge fund; y empezó por un sitio que nadie esperaba: las hipotecas basura. Esta es la crisis financiera más importante desde la gran depresión”. Y detalló el tamaño del problema: “Lo que estamos viviendo es de dimensiones históricas, con características globales, porque nadie se ha librado de la crisis. Tiene una intensidad enorme, es el colapso de todos los mercados. El interbancario no funciona y se generan círculos viciosos: los consumidores no consumen, los empresarios no contratan, los inversores no invierten y los bancos no prestan”. Fue un correcto diagnóstico del hundimiento económico que se avecinaba. Pero la pregunta entonces es, otra vez, ¿por qué no actuó con rapidez si anticipaba que todo iba a caer como un castillo de naipes? Si se cerraban los mercados, Ordóñez sabía que las cajas no podrían atender los vencimientos de su enorme deuda con los inversores internacionales. Esta situación cortaría el crédito y subiría el paro y, por lo tanto, la morosidad. ¿Qué hizo para evitar un golpe directo al sistema financiero más vulnerable y a toda la economía?

En la misma entrevista situó el final de la crisis “a finales de 2009 o principios de 2010. Pero se puede alargar por la falta de confianza”. Faltaban solo tres meses (¡solo tres meses!) para el fatídico estallido de la crisis en España con la quiebra de la CCM, podrida de créditos inmobiliarios incobrables, amén de otros pecados.

¿Qué opinaba el gobernador, en diciembre de 2008, de los problemas que podía causar la enorme bolsa de créditos a los promotores que tenían las entidades y que posteriormente ha arruinado al sector? Esto es lo que respondió a esa pregunta: “Sin duda va a afectar a la cuenta de resultados. El sistema financiero español ha aguantado estos 18 meses de crisis mientras se han rescatado muchos bancos europeos. Aquí tenemos 150 bancos, casi 50 cajas de ahorros y 85 cooperativas de crédito y no ha habido ningún problema. ¿Significa que el sistema financiero español lo tiene fácil para el futuro? No, los próximos ejercicios serán difíciles por varias razones: la morosidad, que esperemos que se gestione bien; la financiación, que va a ser más cara, y que el negocio va a ser menor”.

Con esta afirmación, nadie puede negar que Ordóñez era consciente de los problemas. Pero como el Banco de España es supervisor y regulador, a su gobernador se le exige más que un acertado diagnóstico: que aplique soluciones a lo que se puede venir encima. En aquel momento eso pasaba por las fusiones de las entidades más débiles con las más fuertes, y no de las que son de la misma región, pues así solo se acumulan promotores morosos y se crean débiles entidades sistémicas. Por eso, otra de las preguntas de la entrevista fue si la institución iba a alentar las bodas entre entidades de la misma región. La respuesta del gobernador fue clara: “El Banco de España no va a recomendar, ni a dirigir, ni a alimentar, ni a aconsejar fusiones. No debemos hacerlo, salvo que haya una entidad en dificultades”.

La fórmula que no dio resultado

Estas frases definen su criterio y su mayor pecado. El siempre liberal Ordóñez vio cómo la CCM quebraba en marzo de 2009, tras un alarmante Consejo de Ministros celebrado en domingo, y no fue capaz de encontrar un novio para la entidad presidida por el socialista Juan Pedro Hernández Moltó. La CCM casi vació el patrimonio del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas, un

dinero que se había reunido costosamente durante treinta años. Su caída ha comprometido (aunque no gastado del todo, por ahora) 4.170 millones de euros procedentes de las cajas. El supervisor intentó fusionarla con Ibercaja, Cajastur y Unicaja, pero no puso toda la carne en el asador. No accedió a garantizar la morosidad futura que pidieron estas cajas a cambio de asumir ese muerto, pese a que eran cantidades cercanas a los 2.000 millones de euros.

Esta actitud cicatera, basada en la teórica bondad del principio de "utilizar los menores recursos posibles del contribuyente", ha sido una ruina a largo plazo para el contribuyente y ha provocado que los ciudadanos hayan tenido que aportar 150.000 millones entre avales, créditos y capital para reflotar las entidades. El colofón de esta estrategia ha sido que España se ha visto forzada a pedir un rescate bancario de 100.000 millones a la Comisión Europea; se ha perdido la soberanía, al tiempo que se le ha exigido al Gobierno tomar las medidas sociales más duras que se han conocido en democracia contra los ciudadanos más débiles. Todo esto ha puesto en juego la paz social y el Estado de bienestar.

Para algunos expertos, detrás de esta actitud de minimizar los costes públicos de la que alardeaba Ordóñez (y el Gobierno socialista) se esconde una inacción, una falta de iniciativa para resolver los problemas de entidades poco solventes que ha enquistado la situación de las cajas más débiles. El supervisor ha esperado hasta el último minuto para intervenir, cuando cualquier solución ya resulta muy cara. Otros creen que siempre buscó protegerse contra demandas y querellas. Sencillamente eso.

A Ordóñez se le complicó la situación en marzo de 2009, cuando Viñals abandonó el puesto de subgobernador para marcharse al FMI. Algunos financieros han criticado a Viñals por irse cuatro días antes de la quiebra de la CCM. Evidentemente, meses antes del anuncio de su marcha, su cabeza estaba más cerca de Washington que de Toledo, la sede de CCM. Otros expertos creen que donde realmente encajaba Viñals era en el nuevo cargo en el FMI, "mucho más que como subgobernador, y menos en plena crisis financiera". El economista Samuel Bentolilla lo defendía así: "José Viñals ha servido con gran distinción durante muchos años en el Banco de España, en coyunturas buenas, regulares y malas. Cuando se

marchó al FMI, España ya llevaba en crisis una buena temporada. Además, como consejero financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios y Financieros del FMI puede, especialmente en una coyuntura como la actual, hacer un gran servicio a todo el sistema financiero mundial, incluido el español".

Ante este contratiempo, Ordóñez cumplió con la tradición. Aríztegui, que era director general de Supervisión, fue aupado a subgobernador en marzo de 2009. Lo sustituyó un clásico de la casa, Jerónimo Martínez Tello, un profesional de reconocida obediencia a los cargos superiores que supervisaba las cajas de ahorros desde junio de 2008. En esa fecha se jubiló Julián Atienza, familiar del que había sido director general de Supervisión, Pedro Pablo Villasante. Tras la creación del fondo de rescate, el FROB, Atienza fue nombrado director general del organismo. El ascenso de Jerónimo Martínez, conocido como "Jero" en el banco, causó malestar en algunos inspectores. "Si controlaba a las cajas, ¿alguna responsabilidad tendría sobre cómo estaba el sector y cómo llegó hasta la crisis, no?", preguntaban algunos. El caso es que "Jero" pasó a controlar todo el sistema financiero, con un resultado más que cuestionable.

El paso de la supervisión al puente de mando, como hizo Aríztegui, también lo habían seguido otros antes. El exgobernador, Jaime Caruana, había sido responsable de la supervisión durante un año, entre 1999 y 2000, antes de llegar a gobernador. Previamente había sido director general del Tesoro con Rato. Miguel Martín, actual presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) y subgobernador hasta el año 2000, también fue antes director general de Supervisión. Gonzalo Gil, subgobernador del Banco de España entre 2000 y 2006, había sido antes director general de Operaciones; en 2008 fichó como consejero por el Banco Pastor. Años antes, en 2000, también había dado este salto José Pérez, que pasó de responsable de la Inspección a director general de Auditoría del BBVA.

Viñals, Caruana y Rodrigo Rato (ex director gerente del FMI) tienen en común su paso por el FMI en altos cargos, pero también han sido protagonistas de la crisis financiera española. Los dos primeros, por su labor en puestos clave en el Banco de España, y Rato, como

ministro de Economía durante la creación de la burbuja, responsable del FMI en los años previos a la crisis internacional (2004-2007) y, por último, como presidente de Bankia hasta su nacionalización. Por eso, el 27 de junio de 2012 fueron los objetivos de un atípico y duro artículo en The New York Times que cuestionaba la capacidad de Caruana y Viñals para pilotar la reforma financiera internacional, ya que nunca alertaron sobre la verdadera situación de la banca española, sino que se habían limitado a defender su solvencia. Los autores del artículo se preguntaban por qué habían gestionado mal la burbuja inmobiliaria y su estallido: "Mientras España se acercaba a la crisis inmobiliaria y bancaria que ha provocado el rescate a los bancos, los líderes financieros en puestos influyentes mayoritariamente restaron importancia a las preocupaciones acerca de que algo marchaba terriblemente mal".

Para el influyente periódico norteamericano, la razón del silencio de los tres gestores son sus fuertes relaciones políticas: "Su optimismo pone de manifiesto las complicaciones que pueden surgir cuando funcionarios del Gobierno asumen roles de vigilancia en agencias internacionales que evalúan las políticas de las que ellos fueron responsables".

El rotativo destacaba en su artículo que, "desde sus posiciones privilegiadas", Viñals, consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados Financieros del FMI, y Caruana, consejero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo, deberían haber sido los primeros en lanzar mensajes de alarma sobre las arenas movedizas en las que los bancos estaban cimentando sus balances.

En cambio, insistieron en alabar las excelencias del "sólido" sistema financiero español y la capacidad de solventar por sí solo las pequeñas necesidades de capital que se planteaban. The New York Times disparó con bala cuando recordó que el equipo dirigido por Viñals había publicado un informe en abril de 2010 en el que aseguraba que el sistema financiero español superaría con éxito el contexto económico adverso: "Ahora que la quiebra de Bankia ha forzado el rescate europeo de hasta 100.000 millones de euros, está claro que las previsiones del señor Viñals eran demasiado

confiadas".

Y prosigue en su crítica. Caruana, explicaba, no fue "más clarividente" y Rato, al frente del FMI entre 2004 y 2007, tampoco desempeñó bien su papel. "Ciertamente, los funcionarios españoles fueron lentos a la hora de darse cuenta de la profundidad del problema", apunta el diario.

Sobre Rato decía que ahora es "conocido por su desastrosa gestión en los dos años que ha estado al frente de Bankia" y recuerda que se consideraba a sí mismo como el artífice del "milagro" que llevó a la economía española a vivir años de bonanza alimentados fundamentalmente por el boom de la construcción. El Times consideró que su vasto conocimiento del sistema financiero debería haber servido para prever "la debacle que se avecinaba", un tirón de orejas que comparten algunos analistas y del que la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, que controla la labor de la institución, se hizo eco en febrero de 2011. En su informe aseguró que en los años en los que Rato estuvo al frente de este organismo no avisó de la crisis "con suficiente antelación" ni de manera efectiva y clara.

Por si el juicio del prestigioso rotativo no fuera suficiente, Luis Linde, actual gobernador del Banco de España, en su primera comparecencia en el Congreso el 17 de julio de 2012, hizo un balance más que severo de la actuación de Caruana y Ordóñez: "Con la fácil lucidez que da mirar al pasado desde el presente, y sin querer dar ninguna lección a nadie, podemos concluir que se actuó con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado".

Todas estas cuestiones nos llevan al tema del siguiente capítulo, que aborda los problemas que provocó la estrecha relación política entre los responsables de la supervisión y el Gobierno. El asunto es de máxima importancia, porque sin una supervisión eficiente no puede haber un sistema financiero de calidad y la economía no se puede desarrollar con vigor.

Capítulo 3

Los inspectores del banco de España avisaron de los peligros

Tuvimos la mejor supervisión para un sistema sano y la peor para un sistema enfermo.

Algunos resignados inspectores del Banco de España

Hay pocas cosas tan decepcionantes para alguien que ha escrito sobre el sector financiero durante más de una década como hablar con inspectores del Banco de España. Escuchándolos, la imagen de la institución queda en una posición más que dudosa. Han pasado de ser un cuerpo de elite, prestigioso y respetado nacional e internacionalmente, a tener que defender su profesionalidad y su actuación porque esta se ha cuestionado en multitud de foros. Los inspectores han perdido el patrimonio que tenían: estaban entre los más valorados en el mundo financiero internacional y gozaban de prestigio tanto en el mercado español como en la prensa, en línea con el que tenía el Banco de España.

Pero todo ha cambiado en apenas cuatro años. En el capítulo anterior expuse los errores que han cometido los que dirigieron esta institución con 156 años de historia, las claves de la actuación de Jaime Caruana entre 2000-2006 y de Miguel Fernández Ordóñez de 2006 a 2012. Pero no se podría comprender cómo se ha deteriorado tanto el que fuera uno de los mejores cuerpos de inspección —que fue la base para que España tuviera un sistema financiero ejemplar, según dijo el G-20 en septiembre de 2008— sin conocer su visión: la de los que están en la sala de máquinas, y cómo recibieron las órdenes de sus superiores en los años clave de la crisis.

Según algunos de los inspectores consultados, las principales

intromisiones que han tenido en su labor se deben a varios motivos: los intereses particulares de los gobernadores y de los altos ejecutivos (que en algunos casos han saltado en estos años de la institución a puestos de relevancia en la banca privada) y el escaso interés por enfrentarse al PP y al PSOE, así como a los barones autonómicos que controlaban las cajas de ahorros. Los inspectores coinciden en que ha habido una autocensura en sus propios informes, después de percibir que, como afirman estas fuentes, la jefatura no quiere, en muchas ocasiones, "tener conflictos con las entidades. Parece que valoran más los informes positivos que los negativos". El resultado es que los inspectores van acomodándose a la entidad que vigilan y termina existiendo, en algunos casos, una simbiosis muy alta por la que se baja la guardia.

Otra de las quejas de la inspección ha sido que, para atender a los cuatro test de solvencia a los que se ha sometido al sector entre 2010 y 2012, buena parte de la plantilla se tuvo que dedicar a estas pruebas y no a vigilar entidades. Resulta paradójico que cuando el sector está más débil se retiren inspectores, pero lo cierto es que las pruebas de la Autoridad Bancaria Europea han exigido mucho trabajo para la inspección, por lo que no ha podido estar en los bancos realizando su labor.

Por último, no hay que despreciar tampoco la presión de los grandes banqueros para proteger sus propios intereses. Estas circunstancias son las que han llevado a los máximos responsables a actuar con "poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado", como afirmó el actual gobernador, Luis Linde, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados en julio de 2012. Linde hizo la crítica más dura que se conoce hasta ahora, sobre todo porque ha venido de "dentro de la casa y de arriba", como recuerdan algunos.

Los errores en el funcionamiento del Banco de España son hoy ya de dominio público internacional. La prueba son las afirmaciones que aparecen en el informe del FMI de mayo de 2012 y en el Memorándum de Entendimiento de la Comisión Europea (julio de 2012), el documento que refleja las condiciones que España debe aceptar para recibir 100.000 millones para el rescate de la banca. En estos documentos se destaca, por un lado, la calidad de la

inspección, pero, por otro, se mencionan los problemas internos de funcionamiento. En el informe de mayo de 2012 el FMI afirma: “El proceso central de supervisión en el Banco de España es fuerte y está apoyado por un cuadro experimentado de inspectores”; pero añade que la intromisión del poder del Ministerio de Economía (es decir, de la política) había provocado que el supervisor aplicara “un enfoque lento en la adopción de medidas correctoras, lo que ha permitido que los bancos débiles sigan funcionando”. Tras examinar la actividad de la inspección y sus informes, el FMI afirma: “Revelan la minuciosidad del proceso y la identificación de los riesgos fundamentales”, así como su comunicación a la dirección del Banco de España.

En la misma línea, pero yendo mucho más lejos, el Memorándum de Bruselas asume lo dicho por el FMI e impone condiciones a España para que enderece la situación: “El Banco de España llevará a cabo una revisión interna de sus procedimientos de supervisión y decisión antes de finales de octubre de 2012, a fin de detectar deficiencias e introducir las mejoras precisas. En este proceso de revisión, el Banco de España verificará las recientes mejoras introducidas en los procedimientos de supervisión a fin de cerciorarse de que las conclusiones de las inspecciones realizadas in situ se traduzcan, rápida y eficazmente, en medidas correctivas. En concreto, las autoridades españolas analizarán la necesidad de realizar nuevas mejoras en la comunicación a los órganos decisores de las vulnerabilidades y riesgos del sistema bancario, a fin de garantizar que se introducen las correcciones pertinentes”. Este texto constituye un disparo en la línea de flotación al sistema actual de trabajo y un respaldo claro a las reivindicaciones de los inspectores, que reclaman una mayor autonomía en su trabajo.

Este espaldarazo internacional a la Inspección llega poco después de que el Gobierno de Rajoy decidiera, en junio de 2012, que fuera una empresa privada externa, la consultora norteamericana Oliver Wyman, la encargada de realizar una valoración individualizada de los balances de los 14 grupos bancarios más relevantes para saber si necesitarían capital en un hipotético escenario económico de catástrofe. La decisión del Ejecutivo ha supuesto otro golpe más para los inspectores y la institución, y llega después de una campaña de acoso contra el banco. Primero, y sobre todo, por los

continuos ataques al gobernador por parte del ministro de Economía, Luis de Guindos, que acabó con el buen nombre del Banco de España. Después, los informes de la Inspección perdieron su prestigio internacional tras caerse la mitad del sistema financiero ante la pasividad de la institución. Esta ha sido la excusa del Gobierno para acudir a Oliver Wyman: "Es necesaria una firma de prestigio internacional que certifique cuál es la verdadera situación del sector", dijeron en el Ministerio de Economía. El resultado de la valoración hecha por esta consultora es que siete entidades precisan 53.745 millones, lo que abre de nuevo el melón de las fusiones y nacionalizaciones.

La Asociación de Inspectores del Banco de España representa al 90 por ciento de los inspectores en activo, lo que le permite erigirse en su portavoz. Este cuerpo reclama desde 2003 que sus informes lleguen hasta la cúpula del banco sin modificaciones relevantes para que los máximos responsables puedan conocer la información de primera mano. Los inspectores consultados opinan que el hecho de que los informes iniciales sean resumidos antes de someterlos a la alta dirección permite que los mandos intermedios alteren su contenido. Las inspecciones se realizan en grupo. Al concluirlas, el responsable elabora un informe, que eleva a su superior. Este redacta un resumen que se entrega en la Dirección General de Supervisión. Si esta lo considera adecuado, traslada el resumen a la Comisión Ejecutiva. Los miembros de la comisión solo ven el informe resumido; aunque podrían ver toda la documentación, normalmente no lo hacen. Por eso creen que el responsable que redacta el resumen puede ofrecer una versión diferente de la que escribieron los funcionarios que realizaron la inspección. No es que los inspectores pretendan que su opinión prevalezca sobre cualquiera, sino que lo que quieren es que se asegure que la información más relevante llegue sin cambios hasta las más altas instancias.

Según los inspectores, un cambio legal de 2003 se tradujo en que los jefes de grupo y la Dirección General de Supervisión adquirieran potestad para realizar "resúmenes y adaptaciones" para enviar a la Comisión Ejecutiva. La razón oficial esgrimida para esta modificación fue que las conclusiones de un inspector debían ser contrastadas y matizadas por sus superiores. "La opinión de un

inspector no puede ser suficiente para determinar que se intervenga una entidad", justificaban algunos superiores en aquel momento.

La Asociación de Inspectores del Banco de España consideró que este cambio permitía la "arbitrariedad y discrecionalidad" de la alta dirección a la hora de decidir las actuaciones sobre las entidades, según denunciaron en un escrito a raíz de la reforma de 2003. En él, los inspectores afirmaban querer buscar garantías de "seguridad e independencia" en sus funciones, conscientes de que los jueces podrían llamarlos a declarar en caso de que alguna entidad quebrara, como ha ocurrido en el caso de la Caja del Mediterráneo y de CCM.

Según fuentes del Banco de España consultadas, la injerencia en las decisiones de este cuerpo comenzó en 2003, bajo el mandato de Jaime Caruana, cuando se modificó por ley el régimen del personal del banco al introducir el artículo 6 bis de la Ley de Autonomía del Banco de España. La adenda dice: "El personal del Banco de España está vinculado al mismo por una relación de Derecho laboral". Sobre los efectos de esta modificación hay opiniones diversas: para algunos inspectores, este cambio fue algo parecido a una degradación de su condición, y entienden que perdieron la fuerza que tenían por su condición de autoridad pública; otros, sin embargo, minimizan este asunto y recuerdan que los inspectores siempre han tenido una relación laboral sujeta a convenio, pero con características especiales, semejantes a las del resto de funcionarios. Entre estas características especiales está la de que no pueden ser despedidos, salvo por las causas comunes de la Administración.

Problemas crónicos en la inspección

No obstante, la inspección del Banco de España tiene problemas crónicos en su propia estructura organizativa, según afirman expertos con un profundo conocimiento del sector financiero. En su opinión, el sistema de inspección actual sigue los parámetros del que organizó Aristóbulo de Juan, director general del Banco de España hasta 1986. Este esquema, que incluía la inspección in situ

de las entidades, ha sido la base del éxito de la supervisión, el que le ha granjeado prestigio internacional. Sin embargo, algunos expertos creen que los fortísimos cambios que ha vivido el sector bancario en las últimas tres décadas aconsejan modificaciones.

Entre los cambios necesarios citan que los inspectores roten de entidades cada cierto tiempo. De esta forma, se evitaría el "síndrome de Estocolmo" con el banco, es decir, que no haya un exceso tal de identificación del inspector con la entidad inspeccionada que le haga perder la objetividad y la constante búsqueda de situaciones anómalas. "Lo peor que puede decir un inspector es: en mi banco no hay problemas", apunta un alto cargo. "Cuando ya lo considera como suyo, es que necesita un cambio", concluye. Otra novedad que se reclama es la especialización de los inspectores por temas. Por ejemplo, que algunos de los expertos en tesorería sean los que comprueben las carteras de todos los bancos y no la de uno solo; y así con todas las áreas de relevancia. Este sistema tiene la ventaja de abordar mejor la sofisticación financiera con la que trabajan los bancos. "Si se ha hecho necesario que los ejecutivos de las entidades estén muy preparados en algunas materias específicas, los inspectores también deben especializarse. De lo contrario, no habrá calidad en el control", apuntan estas fuentes.

En cualquier caso, y al margen de las reformas pendientes, la pregunta clave para juzgar el papel de la inspección es la siguiente: ¿denunciaron los inspectores el deterioro financiero de las cajas antes de que estas quebraran? Es difícil responder con precisión, porque los informes son secretos y no se dan a conocer (esta es, por cierto, otra de las formas de autoprotegerse que tiene la institución). Los inspectores afirman que en sus informes hablaron de los problemas de la CCM, de la CAM, de Caja Madrid y de Bancaja, entre otras; y además, dicen, con toda crudeza. ¿Fue realmente así? La querella contra los gestores de Bankia y la apertura de un sumario han permitido conocer parte de la actuación de la inspección. En algunos casos, se actuó con diligencia sobre Caja Madrid, advirtiendo las primeras dificultades en 2003, luego en 2006 y más adelante en 2009.

Sin embargo, llegada la proximidad a la salida a bolsa de Bankia,

los informes levantaron el pie del acelerador. Así, por ejemplo, en el informe del 23 de febrero de 2011 los inspectores consideraron que los deterioros de los activos crediticios e inmobiliarios de Bankia estaban "bien cubiertos los dos próximos años" gracias a los fuertes saneamientos realizados en ejercicios anteriores, especialmente en 2010. En los informes del 2 de agosto y del 2 de septiembre se señala que las desviaciones sobre los planes objetivos "no son recurrentes y supondrán una menor presión sobre las cuentas de resultados futuras, que se verán aliviadas por el esfuerzo inicial de saneamientos de 2010". Curiosamente, tras el estreno bursátil, en diciembre de 2011, llegó otro informe que cuestionaba la viabilidad de la entidad, como trataré en un capítulo posterior.

La cuestión es: ¿puede haberse dado el caso de que los inspectores estuvieran presionados para no truncar la salida a bolsa de Bankia, una operación que parecía como un proyecto de vida o muerte para España? Algunos expertos creen que sí, pero entienden el proceso de la siguiente manera: fueron los propios inspectores los que poco a poco fueron suavizando sus informes al ver que sus superiores rechazaban las actas con calificaciones duras contra las entidades. Los inspectores llegaron a desarrollar, por decirlo así, una autocensura, para acabar escribiendo lo que sus jefes querían leer. Y lo que querían leer es que no había problemas en las entidades; o que, si los había, eran problemas superables con el tiempo, por lo que más valía no aplicar medicinas muy severas que colapsaran al banco o a la caja en cuestión. "No tienen capacidad para hacer más provisiones, así que dejar de encontrarles más problemas", dicen algunos que reclamaban sus superiores.

¿Qué explica que hubiera esa resistencia por parte del Banco de España a intervenir una entidad? La teoría, desarrollada por diferentes economistas internacionales, habla de "secuestro del supervisor". Es decir, el controlador de los bancos es tan consciente de los enormes problemas que puede causar la caída de una entidad, que acaba poniendo el mismo interés que los propios gestores bancarios en que eso no suceda. El controlador es "secuestrado" hasta el punto de que acaba colaborando para que no se produzca la quiebra. Pero puede llegar a ayudar "demasiado", es decir, a ocultar los problemas para evitar el pánico bancario y la retirada de depósitos que se producirían si las dificultades fueran

públicas. Bajo este sacrosanto principio, nunca explícitamente establecido, Ordóñez y Aríztegui cometieron pecados de omisión tan importantes que están detrás de la prolongación de la crisis.

Al margen de las teorías aportadas por los analistas, existen documentos que prueban que los inspectores vieron venir una grave crisis al mismo tiempo que el Gobierno la negaba. Es lo que se pone de manifiesto al ordenar cronológicamente algunos documentos, como los siguientes.

La primera propuesta de gran calado de los inspectores la realizaron mediante carta dirigida a Caruana fechada el 18 de abril de 2005, es decir, un año antes de que este finalizara su mandato. En ella denunciaban aspectos clave que hoy explican cómo se ha llegado a la situación actual. Es posible que la Asociación de Inspectores enviara esta carta confiando en que con la llegada de Zapatero y Solbes, Caruana, que había experimentado la cerrazón del Gobierno del PP, se viera forzado a mover ficha y a admitir alguna de sus peticiones. Pero no fue así. Caruana ignoró la misiva.

“La eficacia de la supervisión bancaria”, decían los inspectores en esta carta, “se está mermando por la falta de medios apropiados para el desarrollo de nuestra tarea. Medios tanto de naturaleza legislativa, como humanos y materiales”. Lo que dibujaban era un Palacio de Cibeles poco funcional y lejos de ser un centro de trabajo moderno, dotado con las necesarias instalaciones. Especificaban, por ejemplo, la falta de despachos individuales, necesarios para tratar con confidencialidad temas tan delicados cuando les visitan los banqueros.

Aviso de la tragedia

Leído hoy, este aviso de los inspectores resulta más que premonitorio de la tragedia que pronto vendría. Prueba de lo importante que era esta reclamación es que, en la primera reunión mantenida por el actual gobernador, Luis Linde, en julio de 2012, este prometió más medios para la supervisión. Han tenido que pasar

ocho años para reconocer esta carencia. Siempre cabrá la pregunta de si de haber dotado antes a la inspección de los medios necesarios se hubiera podido mitigar el impacto de la crisis. No es un problema de plantilla, ya que el número de entidades se ha reducido a la sexta parte con las fusiones. En el momento de cerrar este libro, Linde todavía no se ha pronunciado sobre posibles cambios en los modos de trabajo, una cuestión de fondo y de enorme trascendencia para los inspectores. Su única decisión ha sido la de encargar a Ángel Luis López Roa, miembro de la Comisión Ejecutiva a propuesta del PP, un informe sobre los métodos y fallos de la supervisión. Es decir, hasta el momento, se ha limitado a pedir opiniones a los más veteranos sobre cómo mejorar la supervisión.

Los inspectores también advirtieron en la carta de abril de 2005 de que la regulación no era la apropiada, pues no había "garantía para los supervisados que asegure la eficacia e independencia de los inspectores, dotando a su actuación de la objetividad y la transparencia" que esta labor requiere. "Ante la falta de sensibilidad de la Alta Administración del Banco de España", avisaban en la carta de una posible convocatoria de huelga, la primera en más de siglo y medio de vida de la institución. La huelga se produjo un mes después, en mayo de 2005. La respuesta no oficial del banco fue desdeñar las reivindicaciones de los inspectores, alegando que solo buscaban privilegios como cuerpo de la Administración y una mayor remuneración salarial; algo que, por cierto, no figuraba en la lista de peticiones ante la huelga.

La Asociación de Inspectores también reclamó en la carta de 2005 una mejor reglamentación. "Hay que evitar que la situación vaya degenerando, hasta el punto de que los máximos responsables del banco podrían optar por una actuación mucho más arbitraria." Es inquietante conocer esta advertencia hoy, cuando ejecutivos del mercado afirman que en 2010 y 2011 se paralizaron inspecciones para evitar que se descubrieran los enormes problemas que atravesaban algunas entidades. Ordóñez ha negado en sus comparecencias públicas en el Congreso, en respuesta a los diputados, que hubiera retirado los inspectores de algún banco. Sin embargo, algunos ejecutivos de grandes entidades han comentado, por ejemplo, que entre marzo y abril de 2011 se "congeló" apresuradamente el informe continuado de inspección del Banco de

Valencia, cuando todavía era filial de Bankia, para evitar que afloraran los graves problemas que tenía, pues se hubiera frustrado la salida a bolsa de su matriz. Si la inspección anticipaba lo que después se descubrió, que el banco valenciano tenía activos dañados por miles de millones, Bankia, presidida por Rodrigo Rato, no hubiera encontrado compradores para sus acciones cuando salió a cotizar en julio de 2011.

No hay que olvidar que en mitad de la crisis de la deuda pública española, en 2011, al final del mandato socialista, la salida a bolsa de Bankia era el objetivo de todas las instituciones, incluso del propio Gobierno. Se suponía que iba a ser la solución para la crisis financiera. Con presiones, poco confesables, por parte del Gobierno y del Banco de España, Bankia logró vender sus acciones entre clientes, empleados, empresas y bancos, excepto el BBVA, que se negó porque no confiaba en la solidez del proyecto. Más tarde, todos estos inversores verían cómo se esfumaba su inversión, cuando se dio a conocer el verdadero estado del balance de Bankia, más negro de lo confesado, y tras dos cambios legales del ministro Guindos.

Para tener todos los datos en este análisis hay que decir que, en 2005, cuando llegó la carta de los funcionarios de la supervisión, el Banco de España no estaba preocupado por la inspección, sino por la implantación de las normas de capital de Basilea II, que iban a dar un amplio margen de discrecionalidad a las entidades para que cada una comunicara cuál era su verdadero riesgo. Hoy, después de conocer todas las tropelías cometidas por los directivos de las entidades, puede parecer impensable que en aquel momento Basilea II pudiera apoyar que se dejara en manos de un banco la calificación de su propio riesgo. Sin embargo, así fue: quizá narcotizadas por los años de bonanza económica y por la influencia de los lobbys financieros, las autoridades supervisoras de todo el mundo consideraban que esa era la mejor forma de abordar la supervisión. También porque se había dogmatizado la creencia en la autorregulación de los mercados, que premian justamente al bueno y castigan al mal gestor. Otros preferían hablar del fin de las reglas en el mercado, un principio capitalista que ha volado por los aires con esta crisis, tras conocer los intereses, en ocasiones turbios, que mueven a los pocos actores que (de verdad) los dirigen: los grandes

fondos y los hedge funds internacionales. Estas posiciones explican por qué se ha llegado a esta crisis financiera, que estalló en el verano de 2007, solo dos años después de que se produjeran aquellas peticiones de los inspectores en abril de 2005.

La carta de abril de 2005 también denunciaba deficiencias legales: "La ausencia de reglamentación jurídica adecuada es total, lo que hace peligrar el pleno sometimiento al principio de legalidad de la actuación supervisora". En el texto tomaban como referencia unas palabras del entonces recién nombrado vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, pronunciadas en Madrid en septiembre de 2004: "Somos conscientes de la enorme importancia de un sistema bancario sólido; a fin de cuentas, nuestra última gran crisis bancaria, de efectos devastadores, se produjo hace menos de 25 años. Y, en el marco actual de bonanza económica, no nos olvidamos de que parte de ella se debe al eficaz sistema de supervisión bancaria de que disponemos, aunque este no aparezca en los cuadros macroeconómicos". Sin embargo, este guiño de complicidad de Solbes a los inspectores no significó que fuera a ponerse de su lado. Como en los tiempos de Rato, el ministro prefirió que la inspección fuera un poder más o menos controlado, para evitar disgustos con la Banca.

Riesgo acumulado en el sistema financiero

La reivindicación de abril de 2005 por parte de los inspectores se puede resumir así: denunciaron que no se podía garantizar la eficacia y la independencia, ni la objetividad y la transparencia en su labor, que es lo más grave de lo que se puede acusar a un supervisor.

Un año después, el 26 de mayo de 2006, los inspectores fueron todavía más lejos. Tras lo que consideraron unas infructuosas negociaciones con la cúpula supervisora, y poco antes de la llegada de Ordóñez, decidieron acudir directamente al Gobierno. En una carta de cuatro folios dirigida a Solbes, describían los errores de la cúpula del Banco de España. Esta misiva suponía una enmienda a la

totalidad al director general de Supervisión, Pedro Pablo Villasante (actual número dos de la Asociación Española de Banca, AEB), así como al subgobernador Gonzalo Gil y, sobre todo, al gobernador Jaime Caruana.

Esta carta se producía un año antes de que el volumen de crédito hipotecario dejara de crecer y dos ejercicios antes de que la construcción declinara con fuerza, como espoleta de la crisis en España. La misiva, dura, advertía a Solbes que no se creyera "la complaciente lectura de la situación económica que hace en sus últimas intervenciones el actual gobernador". Los inspectores se manifestaban preocupados porque no se habían querido "adoptar las medidas necesarias para hacer posible la reconducción de la delicada situación actual hasta hacerla más sostenible y segura". Curiosamente, estas advertencias coincidían en buena parte con las que supuestamente habían transmitido en privado los propios Caruana y Gil a Solbes. Quizá por ello, el ministro Solbes creyó que los inspectores insistían, de forma coordinada, en el pesimista mensaje de los máximos responsables del Banco de España para lograr así convencer al Gobierno (no hay que olvidar que Caruana estaba colocado por el PP, lo que podía provocar en el vicepresidente algún rechazo hacia sus teorías).

Pero la interpretación que Solbes hizo de esta carta fue errónea. El hecho cierto es que, después de la premonitoria misiva, no varió ni un ápice su política, sino que mantuvo el rumbo de la economía española hacia la exuberancia de la burbuja. En la carta de 2006, la asociación destacaba en el primer párrafo "la importancia del riesgo latente en el sistema financiero" y que el gobernador "ignora las previsibles consecuencias que, para una parte del sistema económico y para un número considerable de familias, podría tener una posible evolución adversa del entorno macroeconómico". Los inspectores consideraban su opinión "cualificada porque no somos recién llegados a esta compleja labor técnica", por lo que anunciaron a Solbes que los riesgos no estaban controlados y que las consecuencias serían ilimitadas.

El objetivo del mensaje era, según dijeron, hacer constar "que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero por la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis

años es muy superior al que se desprende de la lectura de los recientes discursos del gobernador. Creemos que su análisis sobre las circunstancias que han propiciado la delicada situación actual es, cuando menos, parcial, ya que obvia una de sus causas más evidentes: la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España —con su gobernador a la cabeza— ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años del mandato del señor Caruana. En nuestra opinión, detrás del crecimiento desordenado del crédito —especialmente, en la parte dedicada a la financiación de la actividad inmobiliaria— se encuentra la falta de determinación demostrada por el gobernador para exigir a las entidades el rigor en la asunción de riesgos exigible a gestores de recursos ajenos".

Los inspectores explicaban que la competencia de las pequeñas entidades (en referencia a las cajas) por el crecimiento del crédito llevó a las más grandes "a entrar en esta carrera por la captación de negocio y han tenido que conceder operaciones cuya rentabilidad esperada no justificaba el riesgo asumido". En esta dinámica de excesos y errores, la asociación argumentaba que era ahí donde los supervisores tenían un verdadero papel, "pues pueden llevar a cabo evaluaciones de los riesgos […] de forma que se consiga evitar, en lo posible, que las consecuencias de los fallos de las entidades al conceder operaciones acaben siendo transferidas a la sociedad en su conjunto". "La única institución con autoridad normativa y capacidad técnica para exigir a todas las entidades una evaluación del riesgo coherente con los principios de rentabilidad esperada era, y es, el Banco de España", continuaban.

"Desafortunadamente, en nuestra opinión, esta institución durante el mandato del señor Caruana ha optado por mantener una actitud de pasiva complacencia que está en el origen de los desequilibrios que hoy denuncia el gobernador en sus discursos", concluía uno de los párrafos.

Pero la disección de la realidad, que parece escrita hoy y no hace más de seis años, continuaba apuntando a la siguiente bomba de relojería: la excesiva financiación en los mercados exteriores, que ha causado los problemas de los vencimientos de deuda. "Los riesgos de tipo de interés o de liquidez se han visto incrementados

de forma muy acusada por la necesidad de las entidades de acudir al ahorro exterior" para financiar la burbuja inmobiliaria, ya que los depósitos no han sido suficientes. "Las entidades —continuaba diciendo la carta— han acudido a tres vías de financiación: participaciones preferentes, deuda subordinada, etc., así como a la titulización de activos y, por último, captando liquidez con un endeudamiento a corto plazo en los mercados interbancarios de la zona euro. Esto no es negativo en sí mismo —juzgaban los inspectores—, pero tiene implicaciones para la rentabilidad futura de las entidades."

Este párrafo muestra que a la supervisión ya entonces ni siquiera le era ajeno el problemón de las participaciones preferentes, que tiene atrapados unos 600.000 clientes en España. Y, como si frotaran una bola de cristal, dijeron: "Las favorables condiciones de financiación que hoy ofrecen los mercados interbancarios de la zona del euro pueden volverse menos favorables en un futuro próximo si las tendencias de subidas de los tipos de interés se acentúan, haciendo que el recurso a esta fuente de financiación acabe siendo sustancialmente más cara que en la actualidad". "El origen de todo el desmedido crecimiento del crédito, con destino al sector inmobiliario, es la complaciente actitud del gobernador", insistieron, "que ha incrementado la exposición de las entidades a los riesgos mencionados".

Los inspectores precisaron que, si bien no consideraban un error que la banca acudiera a estas fuentes de financiación, pues era "un riesgo, algo inherente a la actividad bancaria", entendían que el supervisor tiene la misión de garantizar "que no haya terceros afectados". En su opinión, algunas entidades con deficientes sistemas de control del riesgo habían entrado en la loca carrera por el crecimiento "en un proceso de deriva en la gestión de las entidades que ha dado lugar a una relajación generalizada de los criterios de concesión de crédito". La consecuencia, afirmaban, era que aunque los beneficios fueran muy altos, no se habían realizado las provisiones adecuadas. Por eso, "es previsible suponer que el nivel de solvencia de estas entidades acabe viéndose afectado una vez cambie la coyuntura y se manifieste el riesgo latente en sus carteras. El supervisor público podría —y debería— actuar para reconducir la situación".

Inversiones sin control de riesgos

Lo que estaban diciendo los inspectores era que las entidades (en la carta no se mencionan los peligros específicos que podían tener las cajas) habían asumido posiciones muy peligrosas sin tener sistemas de medición de riesgos; también, que habían colocado preferentes por todos los sitios y que estaban publicando beneficios que no se correspondían con la realidad contable.

La carta era, efectivamente, premonitoria. Exactamente tres años después explotaba la CCM, y con todos los problemas en ella anticipados. Hay que decir que esto otorga respaldo moral a los inspectores y demuestra el grado de conocimiento técnico que poseían de la situación real, no de la publicada.

Ante la excusa que suele esgrimir el Banco de España de que no puede actuar para corregir las estrategias de gestión de las entidades y que solo puede hacerlo cuando tienen graves problemas, los inspectores recordaron: “La legislación sí reconoce medios normativos suficientes para actuar si sus órganos rectores lo consideran pertinente”. Dijeron que la Comisión Ejecutiva del Banco de España tiene asignada la tarea de “formular a las entidades las recomendaciones y requerimientos precisos”. “El supervisor puede poner freno a los crecimientos del crédito que considere inadecuados […] no hay carencias que expliquen la pasividad del Banco de España en los últimos seis años en la prevención de la creciente exposición de las entidades a los riesgos inmobiliarios, sino por la voluntad de su máximo responsable, el gobernador.”

En otras palabras, lo que la Asociación de Inspectores denunciaba era no solo que el señor Caruana hubiera permitido que se creara una burbuja, sino que además la había transmitido a su sucesor sin evitarlo ni explicarlo a la opinión pública. Los inspectores, quizá imbuidos por ese secretismo que rodea a la institución, ocultaron la carta a la opinión pública. De haberse conocido a través de los medios de comunicación, la presión sobre Ordóñez para que

aclarara la situación real de los balances bancarios hubiera sido mayor y, quizá, hubiera evitado que se acumularan miles de millones en activos inmobiliarios dañados en algunas cajas. Estos conglomerados de ladrillo son los que han terminado nacionalizados, alargando así la agonía del sistema financiero y contaminándola a todas las entidades.

En las conclusiones, los inspectores apuntaban en 2006: "Conocemos de primera mano la situación del sistema financiero español y del mercado inmobiliario —información que hemos comunicado puntual y lealmente a los órganos rectores del Banco de España a través de nuestros informes de inspección— por lo que siendo conscientes como nadie de los riesgos a los que nos enfrentamos, no podemos ser tan optimistas como el gobernador". A renglón seguido matizaban el desastre, al afirmar que la mayoría de las entidades españolas "están bien capitalizadas, por lo que no es previsible que su solvencia se vea comprometida aun en los escenarios más desfavorables, pero no es menos cierto que en esos escenarios el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros crecerá de manera alarmante". Era esta toda una señal de alarma sobre la morosidad, que llegaría a cotas muy elevadas: en agosto de 2012 alcanzaba el récord de los últimos cincuenta años.

La carta concluía de forma contundente: "Sin alarmismos injustificados, sí hay motivos suficientes para la preocupación por el legado de Caruana".

Mientras que esto era lo que decían los inspectores, el gobernador Caruana, como si de realidades paralelas se tratara, escribía en el informe anual del Banco de España de junio de 2006: "En 2005 los resultados de las entidades, primera línea de defensa ante la eventual concreción de dificultades, han demostrado importantes tasas de crecimiento, que confirman la buena situación que ya se venía mostrando años anteriores". Es verdad que admitía "sobrevaloración en activos de la vivienda", pero anticipaba que serían "reabsorbidos de manera progresiva". Tras advertir de los riesgos de que el mercado viviera una "corrección desordenada" de los precios inmobiliarios, dijo: "Considero preciso aclarar que la probabilidad de este escenario sigue siendo, en mi opinión, baja. La

absorción gradual de desequilibrios es perfectamente posible". (Resulta paradójico recordar que, un año después de escribir estas frases, quebraba el británico Northen Rock, con colas de clientes para sacar sus depósitos, así como el banco de inversión norteamericano Bear Stearns.)

Caruana concluía en el informe de 2006: "La posición de las instituciones financieras españolas parece lo suficientemente sólida como para afrontar una corrección de los desequilibrios globales, incluso si se deterioraran las condiciones financieras y aumentara la volatilidad". Es decir, el texto que el gobernador del Banco de España firma en junio de 2006 no recoge ninguno de los puntos débiles descritos nítidamente por los inspectores en las cartas que le habían dirigido en abril de 2005, como tampoco las previsiones que estos habían expuesto al vicepresidente Solbes en mayo de 2006.

Algo similar se puede decir respecto de las previsiones económicas de Caruana sobre España. "A corto plazo, las previsiones indican la continuidad de la expansión". Admitía que las entidades habían acudido a buscar financiación adicional a los mercados exteriores, pero descartaba peligros: "La incorporación de España a una zona de estabilidad, como la del euro, ha facilitado el acceso de nuestras entidades a estos eficientes mercados de capitales". Quizá, consciente de los problemas planteados por los inspectores, y para acallar críticas, añadió que en 2005 el FMI, bajo el mandato de Rodrigo Rato, había sometido al Banco de España a un ejercicio de valoración y adecuación de las prácticas supervisoras. El FMI, decía Caruana, había confirmado "los altos estándares de nuestro modelo junto con la solidez de nuestros bancos. El Fondo ha dicho que el sector financiero es dinámico, altamente competitivo y bien supervisado y regulado". Todo perfecto, con autocomplacencia entre Rato y Caruana.

¿Cuándo se conocieron estas cartas escritas por los inspectores y qué se supo de ellas? El escrito de mayo de 2006 no se conoció hasta finales de 2011, pero es de suponer que Solbes le pasó la carta a Ordóñez. Era una hoja de ruta muy precisa: burbuja de crédito en el sector, excesiva petición de dinero a los mercados mayoristas extranjeros, venta de preferentes a la clientela (un escándalo en el que la CNMV tendrá mucho que decir en el futuro) y entidades

repletas de ladrillo que no saben gestionar. Solo faltaban los nombres, pero esos estaban escritos en los informes de inspección. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, compuesta por el gobernador, el subgobernador, dos consejeros y los directores generales que tienen voz pero no voto, al finalizar el mandato de Caruana e iniciarse el de Ordóñez, no debió de preguntar por lo que la carta reflejaba; o tal vez no se preocupó, pues la carta era, ciertamente, como para salir corriendo si de verdad se le hacía caso.

No se puede obviar aquí que también le quedaba a la Comisión Ejecutiva la posibilidad de obrar en consecuencia y tomar cartas en el asunto (que es lo que la sociedad cree que es la función de estos ejecutivos), pero nunca para quedarse viendo los toros desde la barrera, como parece que hicieron Ordóñez, Javier Aríztegui, Jerónimo Martínez Tello, director general de supervisión, y la alta dirección. Vieron cómo empezaron a explotar bombas subprime en Estados Unidos y el Reino Unido, y repitieron que España estaba a salvo. Mientras, se cerraban los mercados y empezaba la cuenta atrás para el final de las cajas hiperendeudadas. Pero, oficialmente, no pasaba nada. Sin embargo, el sistema financiero español también estaba lleno de ladrillos tóxicos, que se recalentaban lentamente hasta su explosión.

La sociedad está justificada para pedir cuentas con más severidad que nunca a los culpables directos, que son los gestores de las entidades quebradas, pero también a los responsables, que debían velar por el bien común: los dos supervisores —así como la propia inspección en el plano que le corresponda—. Y por un doble motivo: por un lado, su mala gestión ha evaporado el prestigio del Banco de España y la confianza que despertaba. Por otro, las consecuencias de esos errores de vigilancia sobre el sistema financiero (así como otros factores internacionales ajenos a esta causa, cuyo origen está en la deficiente configuración de la zona euro) han provocado dos recesiones económicas consecutivas en España y un empobrecimiento ciudadano como nunca se había visto antes. Sin un supervisor prestigiado, las entidades no acceden al crédito internacional porque se duda de su salud, y sin financiación no hay inversión y, por lo tanto, no llega el crecimiento económico ni desciende el paro.

El hundimiento de buena parte del sistema financiero (todas las entidades afectadas han sido cajas, excepto el Banco Guipuzcoano y el Banco Pastor) ha causado el rescate bancario de España, con una pérdida de soberanía nacional inimaginable hace unos meses, y ha golpeado a la sociedad por dos lados. En primer lugar, el Estado ha tenido que utilizar 150.000 millones de recursos públicos (entre avales, compra de activos, préstamos y capital) que se podían haber destinado a otros capítulos como la sanidad o la educación. La decisión de recortar en estas dos materias tendrá consecuencias todavía no calculadas, que podrían poner en riesgo la paz social y que afectarán a generaciones posteriores. Para evitar el colapso total del sistema de pagos y el pánico bancario, el Gobierno anterior y el actual no han escatimado recursos para reflotar las cajas, dejando de lado otras necesidades ciudadanas.

El segundo factor de perjuicio social ha sido la falta de crédito indiscriminado, ya que no solo se ha excluido al sector constructor y al promotor, sino a todo tipo de actividades productivas, incluso las exportadoras. La consecuencia ha sido el cierre masivo de empresas como nunca antes se había visto en España.

En definitiva, las ineficiencias del supervisor y de los gestores del sistema financiero han hecho que la banca deje de estar al servicio de la economía real y, por lo tanto, que no aporte a la sociedad mejoras básicas que eleven la calidad de vida. Lo cierto es que la banca suscita ahora más rechazo social que nunca. Según la encuesta de Metroscopia presentada en julio de 2012, el 88 por ciento de los ciudadanos rechaza el comportamiento de la banca durante la crisis, y esta aparece como el cuarto problema para la sociedad. Inaudito.

Capítulo 4

La falsa solidez del sistema financiero

España tiene el sistema financiero más sólido del mundo.

José Luis Rodríguez Zapatero. Declaraciones en la Cámara de Comercio española en Nueva York, septiembre de 2008

Lo peor que puede ocurrirle a un país que está pasándolo muy mal es creerse que está en el paraíso. Esto es lo que le sucedió a España (sobre todo a sus dirigentes y supervisores) en el inicio de la crisis internacional. En el verano de 2007 España parecía un país feliz, borracho de dinero y orgulloso de sus logros económicos. Por supuesto, los políticos aún exageraron más esa sensación social para obtener réditos electorales. Lo cierto es que la crisis ya estaba entonces mostrando sus primeros síntomas en España, en el ecuador de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, a finales de 2006, cuando los créditos hipotecarios dejaron de crecer y el precio de las viviendas comenzó su descenso tras diez años de calentón.

Como expuse en el capítulo anterior, Solbes conocía fehacientemente los problemas larvados de las entidades financieras desde mayo de 2006. Esto, unido a la caída del mercado hipotecario español y a los problemas en los mercados financieros europeos y de Estados Unidos, eran síntomas que apuntaban el inicio de un descenso acelerado de un ciclo económico anormalmente prolongado.

Había dos factores de riesgo que el propio PSOE denunció antes de llegar al Gobierno en el año 2004: primero, el alto endeudamiento de entidades y familias y, segundo, unos activos inmobiliarios que se habían revalorizado cuatro veces más que los salarios, lo que

hacía presagiar una caída del precio de la vivienda a medio plazo.

En 2008 España entró en la crisis con el déficit y la deuda pública con ratios que se pueden considerar aceptables en relación al PIB. Sin embargo, la banca española había pedido un volumen de crédito a través de los mercados mayoristas internacionales (la mayor parte de bancos alemanes, por cierto, que ganaron mucho dinero con las operaciones), lo que la convertía en uno de los tres sistemas más entrampados del mundo. Y esto se conocía en todos los foros económicos relevantes desde que Rato era ministro y, por supuesto, desde 2004.

Precisamente fue en junio de 2004 cuando el prestigioso semanario británico The Economist publicó que España, además del Reino Unido, Estados Unidos y otros países, sufría una sobrevaloración del 30 por ciento en el precio de la vivienda. Zapatero llevaba solo tres meses en el Gobierno. El artículo tuvo una gran resonancia en España, donde la prensa se hizo eco, así como en los mercados internacionales. Quedaba claro que había pruebas de que la economía caminaba por una senda peligrosa: en España el crecimiento del empleo ya estaba focalizado en la construcción, de la que dependía una parte cada vez mayor del PIB.

Además del semanario británico, importantes economistas exponían en aquella época teorías que indicaban que el motor del largo ciclo expansivo se había basado en una política de consumo sin freno, apoyado en un endeudamiento salvaje y en la subida del precio de los activos inmobiliarios y de las acciones. Para que este círculo vicioso funcionara (que, básicamente, consiste en que crece más el valor de los activos y, por tanto, me puedo endeudar más) se necesitaba un factor de carácter psicológico: crear la sensación (ficticia) de mayor riqueza en los hogares por la subida del precio de los pisos. Las enormes bolsas de liquidez de los grandes inversores mundiales, el afán por buscar una alta rentabilidad en una época de bajos tipos de interés y la libertad absoluta de movimientos de capitales en un mundo globalizado fueron los complementos perfectos para construir la burbuja inmobiliaria. El mundo desarrollado vivió una época, que puede situarse entre 1998 y 2006, en la que la riqueza no era fruto de la inversión productiva, que crecía poco, sino de las finanzas especulativas apoyadas en la

banca de inversión, un sector ávido de dinero rápido y fácil.

Uno de los primeros en denunciar el rumbo equivocado de la economía mundial, pero sobre todo de la norteamericana, fue Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York. El 6 de septiembre de 2006 (un año antes del inicio de la crisis) anticipó que la economía se encaminaba a una catástrofe. Lo hizo durante un seminario celebrado en Washington con motivo de la Asamblea Anual del FMI. Allí acabó con la teoría del "aterrizaje suave" de la economía (que se había vendido también en España desde los servicios de estudios de los bancos) y se mostró convencido de la fatal unión entre el riesgo inmobiliario y el bancario. Roubini denunció que la colocación de millones de productos financieros basados en activos inmobiliarios afectaría a la actividad económica una vez que se desplomara el mercado de la vivienda, tras años de subidas injustificadas. La respuesta de los bienpensantes oficiales, el grupo de intelectuales internacionales más relevante, fue apodarlo "Doctor Catástrofe", para así arrinconarlo y ocultar sus críticas.

Roubini no fue el único ni el primero. Un año antes, y tal y como destacó el tan premiado documental Inside Job, Raghuram Rajan, economista jefe del FMI, participó en agosto de 2005, invitado por la Reserva Federal de Estados Unidos, en una conferencia que homenajeaba al presidente saliente, Alan Greespan. Rajan alertó de que, a través de la titulización, se habían diseñado millones de productos financieros respaldados por los ingresos procedentes de otros activos, como las hipotecas basura o los créditos de tarjetas, que a su vez se colocaban en los mercados financieros. Apuntó directamente a la codicia de los ejecutivos como motor de este problema, ya que contaban con un perverso sistema de bonus que premiaba los mayores volúmenes de negocio sin que importara si las operaciones eran rentables o un completo fracaso. Se había perdido la búsqueda del riesgo crediticio adecuado, que es el corazón del negocio bancario; la solidez del sistema había saltado por los aires, aunque nadie lo denunciara. Rajan pidió entonces una mejor supervisión y normas más eficaces para controlar al sector financiero. Todo esto lo planteó en una reunión convocada para debatir si Greespan era el mejor banquero de la Fed o solo uno de los mejores. En aquel ambiente, el discurso de Rajan cayó como una bomba y, como habían hecho con Roubini, los responsables de las

finanzas mundiales le ningunearon para que no cundiera el pánico y la fiesta pudiese continuar.

El tercero en discordia fue el economista y profesor de Yale, Robert Shiller, uno de los pocos expertos que consiguió identificar dos de las grandes burbujas de los últimos tiempos: la tecnológica y la inmobiliaria. En 2005 publicó el libro titulado Cómo sacar provecho del boom inmobiliario, en el que señalaba que los aumentos de precios de la vivienda no pueden superar a la inflación a largo plazo. Sin embargo, lo que todavía le hizo ser considerado más gurú aún fue que en septiembre de 2007, casi un año exactamente antes del colapso del Lehman Brothers, escribiera un artículo en el que predecía un colapso inminente en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y el pánico financiero posterior. En 2008 publicó el libro El estallido de la burbuja. Cómo se llegó a la crisis y cómo salir de ella. Shiller consideraba imprescindible rescatar a las entidades enfermas, reestructurar el sistema financiero y crear una nueva y simplificada regulación que buscara limitar los riesgos aumentando la información disponible, con más políticas de control y protección para el ciudadano ante los efectos inflacionarios.

Advertencias que nadie quiso escuchar

Este prestigioso economista recuerda en este libro, escrito con llamativa sencillez, que “un rescate financiero resulta injusto para las personas y entidades responsables que no se metieron en problemas y, por tanto, no han requerido ninguna medida drástica”. Comenta que las soluciones a largo plazo “requieren la democratización del sistema financiero, es decir, que las instituciones financieras funcionen mejor para todos, no solo para unos cuantos privilegiados. Los mercados nos han fallado”. Y dispara a las razones de la burbuja: “El origen del problema fue una epidemia de irracional entusiasmo público hacia las inversiones inmobiliarias. Las explicaciones de la crisis suelen culpar a la creciente deshonestidad en los agentes hipotecarios; la codicia de las entidades avaladoras; las agencias de calificación o los errores

del expresidente de la Reserva Federal, Alan Greespan".

Por aquel entonces, cuando todas las premoniciones sonaban en algunos foros, Rodrigo Rato ya estaba al frente del FMI (fue director gerente entre junio de 2004 y junio de 2007). Escuchó a Roubini, a Rajan y a otros más, como al economista canadiense Bill White, que trabajaba en el Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS) y que también alertó de lo que podía pasar con el estallido de la burbuja.

Pero Rato, que ganaba unos 400.000 dólares anuales más una pensión vitalicia de 80.000 dólares, no emitió señales de alarma después de escuchar a estos expertos, cuyas teorías se apoyaban en datos. No quiso enfriar la economía mundial, que, aparentemente, iba viento en popa. Esta actitud de dirigir el FMI sin romper huevos, mirando al tendido, le pasó una factura amarga. En enero de 2011, cuando ya llevaba un año en Bankia, el FMI hizo un informe demoledor sobre su gestión. Con Dominique Strauss-Khan al frente, le acusaba de no haber previsto la crisis, ni el momento en que podía estallar ni su magnitud. Es difícil encontrar una nota tan contundente del propio organismo. El escrito del FMI apuntaba que Rato había contado con informes de economistas críticos dentro del FMI, como Rajan, pero que, en un alarde de indiferencia, los había dejado en la página web del Fondo.

Es cierto que muchos académicos prestaron su nombre para realizar informes en los que negaban cualquier atisbo de crisis. Pero ahí están los economistas citados, de prestigio mundial, que sacaron a la luz los desajustes existentes ante el público más influyente del mundo. Aquellos en los que la sociedad había depositado su confianza para que fueran los guardianes de la ortodoxia normativa y controlaran los sistemas financieros no cumplieron su labor.

En línea con Roubini y Rajan, los economistas norteamericanos Fred Magdoff y Sweezcy explicaron en su libro La gran crisis financiera. Causas y consecuencias, editado por Fondo de Cultura Económica, las teorías del afamado economista Hyman P. Minsky: la especulación financiera ha sido el motor del último auge económico ante la caída de la inversión productiva. El sector productivo no ha encontrado salidas rentables por el estancamiento de las oportunidades de negocio, mientras que, en apariencia, la inversión financiera disparaba artificialmente el precio de los activos,

convirtiéndose en una actividad de máxima rentabilidad. El mejor ejemplo de esto son los bancos de inversión, que en los años de la burbuja ganaron toneladas de dinero con la compra venta de empresas y las salidas a bolsa. Ahora vuelven a hacerse ricos, porque son los que valoran y reordenan las entidades quebradas, así que siguen ganando. Haga sol o llueva, este sector mantiene unos enormes ingresos. Así, el sistema financiero mundial se ha ido haciendo más dependiente de las burbujas financieras, que son generadas y aprovechadas por la banca de inversión, un sector que cada vez es mayor.

En octubre de 2012, un panel de expertos encabezado por el gobernador del Banco de Finlandia y excomisario europeo, Erkki Liikanen, que da nombre a este grupo de trabajo, recomendó a la Comisión Europea que obligara a los bancos europeos a separar las actividades de inversión arriesgadas de la banca comercial. Es este el principio para desactivar la bomba sobre la que se asienta el sistema.

Liikanen, que contó con apoyo del comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, afirmó que el origen de los males está en la derogación definitiva de la Ley Glass-Steagall el 12 de noviembre de 1999 por parte del presidente Bill Clinton. “Se permitió unir a la banca de inversión con la banca comercial, que se había mantenido separada desde la crisis de 1930.” La banca comercial se fue así alejando del modelo tradicional de prestar y mantener una relación duradera con el cliente, para pasar al modelo de empaquetar los créditos y venderlos a terceros, sacando el riesgo del balance e iniciando una bola de activos que van pasando de mano en mano. Es lo que se denominó la “banca en la sombra”, un nombre que refleja bien aquello de lo que estamos hablando (hay realmente mucha oscuridad en este modo de generar riqueza), donde nacieron las famosas hipotecas subprime.

Liikanen, grupo poco sospechoso de pertenecer a organizaciones izquierdistas (y del que forma parte José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía con Zapatero entre 2009 y 2011), explicó en su informe que, en los años que precedieron a la crisis financiera mundial de 2007, las instituciones financieras globales se habían hecho cada vez más grandes y complejas organizativamente. Se

interconectaron a través de largas cadenas de productos con alta exposición al riesgo, gracias al crédito y a la liquidez, que parecía ilimitada, procedentes de los países emergentes. Con bajos tipos de interés y economías que crecían poco, todos los implicados buscaban rentabilidad para los fondos de inversión en la ingeniería financiera. La globalización y la libertad de movimiento de capitales engrasaron la máquina. Los avances en la tecnología de la información, así como en las teorías de la inversión, provocaron que los bancos comerciales entraran en este negocio "donde el enfoque son los beneficios a corto plazo". Alemania es uno de los mejores ejemplos del cazador cazado. Liikanen constató que parte de la banca europea (a la española se le prohibió) había copiado estos modelos bancarios norteamericanos.

Este prestigioso grupo, formado por clientes de servicios financieros, exbanqueros, reguladores y economistas, concluía en el informe "que es necesario exigir la separación jurídica de ciertas actividades financieras particularmente arriesgadas de los bancos que tienen depósitos de clientes".

Pues bien, han pasado cinco años de crisis y el lobby de la banca de inversión ha frenado todos los ímpetus reformistas del G-7, del G-20 y del FMI. En el último libro de George Soros, La tormenta financiera. Por qué los mercados solo pueden sobrevivir con reglas (Ediciones Destino), el multimillonario inversor ataca las teorías liberales. Afirma que es falso que los mercados se autorregulen sin la intervención del Estado y sostiene que es la supresión de normas y de los sistemas de control sobre los mercados lo que ha provocado "el descontrol y el fraude" actual. En la misma línea, Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, sostiene que entre 1945 y finales de los años setenta apenas hubo situaciones de crisis financieras. "Sin embargo, desde los años ochenta hasta ahora, el mundo ha vivido 130 episodios de crisis. La falta de control es lo que origina el descontrol y las burbujas", concluye.

Los desperdicios de la burbuja

Existen teorías económicas que sostienen que las burbujas son positivas porque, cuando se pinchan, la economía está en un nivel más alto que al principio de la etapa de crecimiento. “Es mejor recoger los desperdicios de la burbuja cuando estalla que pincharla cuando crece”, afirma Daniel Gros, miembro del think tank de economistas de Bruselas, Centre for European Policy Studies (CEPS). En una entrevista que realicé en marzo de 2011 al actual ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostró contrario a este pensamiento: “Si se hubiera pinchado la burbuja no se hubiera crecido al 3,5 por ciento, pero sí al 2,5 por ciento y ahora la destrucción de empleo sería menor y el sistema financiero estaría más sano”. Viendo la devastación que ha provocado el ladrillo, creo que son más los que apoyarán las palabras de Guindos. La sociedad debe buscar modelos económicamente más estables.

La conclusión del economista Minsky fue severa con el sistema: “El capitalismo es un sistema defectuoso cuyo desarrollo, si no se limita, llevará a profundas depresiones periódicas y a la perpetuación de la pobreza”. Por eso algunos lo tachan de socialista…

Mientras los analistas y responsables de las finanzas internacionales seguían debatiendo sobre si se había acabado o no el ciclo alcista, la realidad se impuso con brusquedad. La crisis de Bear Stearns en Estados Unidos y la quiebra de Northern Rock en el Reino Unido, ambas en verano de 2007 (justo cuando Rato dejaba la dirección del FMI, tras desoír las advertencias de sus colaboradores sobre la tormenta que se acercaba), provocaron un escalofrío en muchos ejecutivos bancarios. Fueron los primeros avisos de la debacle. A la pareja maldita de “crédito bancario y ladrillo” se unió el nuevo problema de la falta de liquidez, formando un triángulo con terribles consecuencias para los sistemas bancarios y las sociedades, entre ellas la española.

El Gobierno de Zapatero —al igual que el de los principales países avanzados— miró para otro lado. Sin embargo, las quiebras de Bear Stearns y Northern Rock eran el ejemplo perfecto de que el motor de la locomotora estaba reventando.

Bear Stearns fue un banco de inversión de Nueva York que siguió los consejos de Lewis Ranieri, "el padre de los activos con hipotecas", e invirtió la mayor parte de su balance en estos productos. En 2006 y 2007, a medida que las pérdidas de los inversores comenzaron a crecer, la entidad aumentó su exposición a estos productos, convencida, como siempre ocurre en estos casos, de que el mercado se daría la vuelta. Al poco tiempo, tras perder todas sus inversiones, se quedó sin dinero para devolverlo a sus clientes. Fue la típica huida hacia adelante.

En marzo de 2008, la Reserva Federal de Nueva York tuvo que facilitar un préstamo de emergencia para intentar evitar el colapso súbito de este banco. Pese a todo, la compañía no pudo salvarse y fue vendida a JPMorgan Chase por 10 dólares por acción (unos meses antes cotizaba a 133,20 dólares la acción). El colapso de esta entidad fue el preludio de lo que iba a vivir la banca de inversión en septiembre de 2008 y de la subsiguiente crisis financiera global.

El caso de Northern Rock proporcionaba más pistas sobre lo que podría sucederle a España, porque se trataba de una entidad volcada en las viviendas. El 13 de septiembre de 2007 se formaron colas de clientes a las puertas de este banco, el primer hipotecario del Reino Unido, para reclamar sus depósitos. La entidad había estado mucho tiempo tomando el dinero a un año de plazo y lo prestaba a veinte o treinta años a los compradores de viviendas. Asumía un riesgo enorme por la diferencia de plazo entre lo que tomaba prestado y lo que prestaba, pero no parecía preocuparle, quizá porque todo había ido bien en el pasado.

En 2007, fecha en que llegaron los temores por las caídas de los precios inmobiliarios y las dificultades de financiación en los mercados (las mismas que mataron a Bear Stearns), los expertos miraron a Northern Rock con recelo, conscientes de su endeble estructura, y le cortaron toda la financiación. Se corrió la voz de sus problemas y los clientes acudieron en masa a por su dinero. Segunda quiebra. Era septiembre de 2007. La consecuencia fue que se cerraron los mercados para todas las entidades. Como sucede con el mar antes de un tsunami, los mercados se secaron y después llegó la terrible ola que lo barrió todo. El Banco Central Europeo (BCE) —que había sido advertido de estos problemas— se vio obligado a

inyectar 95.000 millones de euros para evitar el colapso y los impagos entre entidades, en una acción coordinada con la Reserva Federal y el Banco de Japón.

¿Qué pasaba en España durante estas turbulencias? A los pocos días de la crisis británica, todavía en septiembre de 2007, el Servicio de Estudios del BBVA y el Banco de España salieron a escena con informes que destacaban que la banca española estaba a salvo de sufrir situaciones similares. Sin embargo, como expuse en el primer capítulo, en 2007 ya había grandes entidades financieras que habían vendido sus participaciones inmobiliarias porque creían que el mercado se iba a desinflar. Es decir, estaban anticipando futuros problemas que el supervisor del mercado y el Gobierno no querían reconocer ni prever, aunque los conocían. David Taguas, asesor económico de Zapatero, mantenía reuniones regulares con expertos, entre los que estaban algunos del BBVA. Las que celebró en septiembre de 2007 tuvieron unas conclusiones preocupantes: dibujaban una ligazón clara entre la caída del sector inmobiliario y los futuros problemas en la banca española, sobre todo en las cajas. Y así sucedió, porque nadie movió un dedo para evitarlo.

En esas citas privadas, donde se decía la cruda verdad, sin edulcorarla para la opinión pública, ya se advirtió a La Moncloa de que las provisiones anticíclicas creadas por el Banco de España no serían un parapeto suficiente para el golpe que la crisis iba a dar al sector. En el momento más álgido no superaron los 40.000 millones de colchón, alrededor del 2,5 por ciento del crédito total. Con estos antecedentes, la subida de la morosidad en las entidades financieras era tan lógica como segura. Solo sería cuestión de tiempo. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Alan Greespan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dejaba de poner paños calientes y daba la voz de alarma en septiembre, al advertir de que el desplome del mercado de la vivienda en ese país tendría consecuencias.

‘La crisis es externa’

Llegó noviembre de 2007 con malas noticias de Estados Unidos, pero el supervisor español aseguró que la banca soportaría "con firmeza las turbulencias" de los mercados, tal y como figura en el Informe de Estabilidad Financiera de la fecha citada. Los resultados de las entidades parecían darle la razón: hasta septiembre, los bancos españoles habían ganado 14.141 millones, un 20 por ciento más. Son las grandes ventajas de la burbuja, que el efecto se retrasa, pero cuando llega es tajante. La patronal bancaria dijo una frase que quedará para la historia: "La crisis subprime es externa y extraña a los bancos españoles".

Es cierto que aquellos productos subprime no habían sido permitidos en España (pese a que lo intentaron, pero se toparon con la oposición del Banco de España); ahora bien, esta circunstancia no situaba al sistema financiero español en el paraíso, como hicieron creer bancos y autoridades a la sociedad a través de los medios de comunicación. En España había muchos productos tóxicos que no quisieron ver ni los ejecutivos de las entidades, ni la patronal bancaria, ni el supervisor, ni el Ministerio de Economía. Nadie estropeó la fiesta en 2007, un año en el que bancos y cajas abrieron una media de cinco oficinas al día.

Llegó 2008, un año que fue como una lluvia constante de malas noticias que pusieron cada vez más nerviosos a los mercados, que vivían los primeros hundimientos bursátiles. El 16 de febrero, el Gobierno británico nacionalizó Northern Rock. Fin de la fiesta hipotecaria en el Reino Unido, uno de los tres países, junto con España y Estados Unidos, en los que The Economist había anticipado en 2004 que estallaría la crisis del ladrillo.

Para Estados Unidos, 2008 fue peor. Supuso abrir la puerta de su infierno particular. Todas las malas noticias contenidas u ocultas salieron a la luz como un torrente. Circularon informes que decían que los derivados basados en créditos al consumo e hipotecas de baja calidad estaban sobrevalorados. Estos productos se habían vendido por billones de dólares, tras sacarlos de los balances de las entidades, y se distribuyeron a través de todo tipo de agentes financieros. La clave estaba en saber qué entidad tenía la mayor cantidad de activos tóxicos, pero no era fácil seguirles la pista. Llegó la desconfianza y, con ella, las tensiones de liquidez, que

pronto se centraron en Lehman Brothers. ¿Era el único contaminado? No, pero le fue imposible hacer frente a los rumores, las noticias de prensa y televisión y, en consecuencia, a su rápida depreciación en bolsa.

En aquel momento Luis de Guindos estaba al frente de la entidad neoyorquina en España y tuvo que reorganizar su desguace (edificios, material de oficina, plantilla, etc.) en una experiencia traumática que nunca olvidará. El banco japonés Nomura se quedó con las oficinas que Lehman tenía en la plaza de la Lealtad de Madrid. La plantilla, unas pocas decenas de personas, se fueron colocando sin demasiados problemas. La responsabilidad de Guindos en la caída de Lehman es nula, pero quizá haya que decir que no es recomendable para político alguno estar relacionado con la entidad que ha protagonizado la mayor debacle financiera de la historia.

Guindos aprendió de la experiencia. Su siguiente ocupación fue la de ser responsable de la unidad de consultoría financiera de la firma PwC. Sin embargo, en 2010 ya vio los problemas que estaban a punto de llegar a las cajas de ahorros en los que podía estar más o menos relacionada PwC por sus continuos trabajos con las entidades. Guindos decidió poner tierra de por medio para que su carrera política no se viera perjudicada. Los rumores le colocaban desde principios de 2011 al frente del Ministerio de Economía. Así, en febrero de 2010 fue nombrado director de la Escuela Financiera PwC-IE, creada expresamente para él y que se dedicaba a presentar estudios sobre el sector. No obstante, Guindos aceptó ser consejero y miembro de la comisión de Auditoría de BMN, el banco fruto de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y la balear Sa Nostra, hasta el día anterior a su nombramiento como ministro. Este cargo ha sido criticado porque BMN es una entidad con problemas, que está tutelada por el Ministerio de Economía. Antonio Carrascosa, su principal colaborador en la escuela, fue nombrado director general de Política Económica cuando Guindos llegó al Ministerio y, posteriormente, primer ejecutivo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Tampoco se puede decir que para los máximos responsables de Lehman su hundimiento fuera una sorpresa inesperada. Richard

Fauld, en una entrevista con El País el 19 de noviembre de 2006, tuvo unas declaraciones premonitorias: “Hay algo raro en el ambiente. No sé lo que es, pero hay algo extraño en la economía aunque seguirá creciendo a corto plazo”. A Fauld le gustaba venir a Madrid y mantener contactos con los presidentes de las entidades con las que trabajaba Lehman o pretendía cerrar acuerdos. En esta faceta, las relaciones de Guindos con el poder empresarial eran clave para abrir puertas. Pese a todo, Lehman no llegó a ser uno de los bancos de inversión que más contratos conseguía en Madrid.

En 2008 el periodo preelectoral en el que entró España lo marcó todo. El 21 de febrero tuvo lugar el conocido debate entre los candidatos a ministros de Economía, Pedro Solbes por el PSOE y Manuel Pizarro por el PP. El primero se empleó en negar la crisis; el segundo, noqueado por los datos de la supuesta bonanza económica, no logró desenmascarar la verdadera situación económica. Resultado: el discurso oficial del Gobierno socialista quedaba reforzado, acercaba así a Zapatero a La Moncloa. El mismo día del debate televisado, el Banco de España salía en defensa de la solidez del sistema bancario. Otra ayudita más.

Curiosamente, Bush también echó una mano a Zapatero y también descartando la recesión en Estados Unidos. Pese a los buenos augurios, el 16 de marzo de 2008 JPMorgan compró Bear Stearns por 236 millones dólares. Ya solo quedaban seis meses para la traca inicial de la fiesta: la quiebra de Lehman Brothers. Los grandes responsables internacionales estaban aparentemente tranquilos, porque no creían que hubiera señales de alarma.

Unos días más tarde, el 30 de marzo, el PSOE ganaba las elecciones. Como un césar después de una gran campaña, Zapatero anunció el 19 de abril de 2008 que devolvería 400 euros en el IRPF a los asalariados, pensionistas y autónomos. ¿Sobraba el dinero? Según el Gobierno, sí. La justificación del dirigente fue que era la mejor manera de “estimular el consumo, aprovechando el superávit del Estado”. Pero fue un disparo fallido. ¿Quién pudiera recuperar parte de aquel dinero malgastado?, se preguntará ahora Rajoy, que ha tenido que subir el IVA y el IRPF, en contra de sus promesas electorales, para recaudar más y atajar la subida del déficit público. Todo parece poco cuando lo que está en juego es que España no sea

definitivamente expulsada de los mercados, a los que debe 800.000 millones.

Trescientos mil millones en ladrillos

Un mes después, en abril, se conocía una cifra maldita que nunca desde entonces abandonará el foro público: las promotoras debían 300.000 millones a la Banca. Este, ni más ni menos, era el tamaño de la bomba subprime española. Como una bola de nieve, la cifra no paraba de crecer. Llegó entonces la discusión técnica sobre qué parte del crédito estaba sano y cuál era basura, otra cortina de humo para evitar entrar en el problema de fondo, aquel que, como analicé en el capítulo anterior, había sido denunciado en mayo de 2006 por los inspectores del Banco de España. A medida que avanzaba la crisis, se aceleró el trasvase de lo bueno a lo malo, arrollando cada vez más a las cajas de ahorros. El Banco de España sabía con exactitud la situación de cada entidad, pero siempre transmitió el mensaje de que era una crisis que afectaba "a una pequeña parte del sistema, una porción controlable del sector", hasta que la epidemia se extendió y puso bajo sospecha a toda la Banca.

También en abril de 2008 el paro subió al 9,6 por ciento y la previsión de crecimiento bajó 8 décimas. En mayo llegaron cifras oficiales de Bruselas que indicaban que la construcción española sufría el mayor bajón de la Unión Europea, con el 11 por ciento en su actividad. No obstante, el 1 de junio, Solbes insistía en que España no estaba en crisis y que confiaba en lograr un pequeño superávit.

En junio se abre la veda del juego irracional de palabras, en el que Zapatero tacha de "absurdo" el debate entre crisis y desaceleración, aunque la banca empezaba ya a enfriar su euforia tras reconocer que la morosidad superaba el 1 por ciento.

En junio de 2008, tras conocerse que el paro estaba en el 10, el Gobierno se agarra al bajón de la actividad internacional para

presentar un plan contra el frenazo económico. Curiosamente, aunque España no estaba oficialmente en crisis (un término que, por cómo iba el discurso público, se había convertido en ambiguo y de difícil determinación), ya era el país europeo con la mayor tasa de paro. Quizá por eso, el 1 de julio, Solbes se atrevió a insinuar tímidamente que quizá podría estar llegando la crisis, y dio el dato de un crecimiento del PIB cercano al 1 por ciento. A partir de esta fecha se abre la espita de las malas noticias que no han dejado de golpear durante los últimos cinco años.

El inicio de la definitiva cuesta abajo de la economía española podría fijarse el 6 de julio de 2008, cuando el grupo de analistas de referencia hizo público el vaticinio de un grave deterioro de la situación. A los dos días, finalmente el presidente del Gobierno reconocía que había crisis económica: “En esta crisis, como ustedes quieren que diga, hay gente que no va a pasar ninguna dificultad”, dijo Zapatero en un entrevista en Antena 3, en alusión a algunos dirigentes del PP. En Estados Unidos, los fuegos artificiales estaban en pleno apogeo: Washington admitió que estudiaba el rescate de las dos entidades hipotecarias más grandes del país, Feddie Mac y Fannie Mae, con millones de clientes, ante la caída en picado del valor de sus activos. El castillo de naipes se empezaba a derrumbar, pese a todos los apaños dirigidos desde los poderos públicos.

Se puede decir que España entra definitivamente en el escenario del desastre el 14 de julio de 2008, cuando Martinsa, la gran inmobiliaria, solicita concurso de acreedores, arrastrando así a los mejores bancos españoles. Muchos de ellos habían vendido sus participaciones inmobiliarias, pero habían prestado el dinero para la operación, por lo que estaban enganchados a la bola de plomo que se hundía a toda velocidad.

Se inició entonces un verano en el que las malas noticias se sucedieron a un ritmo vertiginoso. Tras Martinsa, Solbes dice que es “la crisis más compleja vivida nunca”. La bolsa, como siempre, anticipa el futuro: para el 9 de agosto la banca ya tenía pérdidas acumuladas del 25 por ciento. Y eso que España no tenía subprime… Está claro que algún inversor debió de pensar que había algo igualmente turbio. La morosidad continuaba su escalada imparable y los bancos redujeron beneficios por primera vez desde

2002. Se encendió otra señal de alarma cuando las promotoras tuvieron que admitir pérdidas de 3.000 millones en los seis primeros meses de 2008. El torpedo de la crisis había hecho blanco en su primer objetivo.

Aun así, el 11 de septiembre, en la antesala del desastre Lehman, Solbes mantuvo su posición: "Yo todavía no hablo de recesión". Algunos Gobiernos autónomos, que empezaban a ver las orejas al lobo, fomentan las fusiones de cajas de ahorros, sobre todo las de su comunidad. Los presidentes de las cajas empezaron a mantener los primeros contactos y en el sector comenzaron a circular las listas de las entidades "condenadas por el ladrillo".

¿Qué hicieron los poderes públicos, el Gobierno, las comunidades autónomas y el Banco de España para minimizar daños? No optaron por aislarlas. Al contrario, todos negaron la realidad y empezaron a buscarles novios para hacer entidades grandes, intentando que el tamaño por sí mismo solucionara la putrefacción de las cajas. Prefirieron creer que la fortaleza del euro —a modo de cordón sanitario— iba a impedir que la hecatombe saltara el charco con toda la fuerza. El supervisor no quiso ver —quizá porque no tuvo expertos en mercados financieros— que había un cordón umbilical que unía a España con Estados Unidos: la financiación de las cajas (y del Estado) era en gran parte extranjera, estadounidense, británica y alemana. Como un reguero de pólvora, la explosión de Wall Street y el corte de los mercados tenían que llegar a Madrid. Y así fue.

Precisamente fue al otro lado del Atlántico donde Zapatero quiso alardear de país y de sistema financiero. Tampoco escuchó a los que decían que existía un cable que unía a la banca con el sector inmobiliario y anticipaban la explosión de una bomba. Desde las filas socialistas se forzó todo lo posible para que las luces rojas se ocultaran a la opinión pública; había que alejar cualquier síntoma de tormenta. Incluso los ejecutivos de bancos y cajas admiten ahora, en privado, que sus responsables de comunicación les preparaban una batería de sinónimos en aquella época para no mencionar la palabra "crisis" en la presentación de resultados ni en las respuestas a las preguntas de los periodistas. Era un tabú. Los dirigentes creyeron que si no se mencionaba la palabra maldita, la economía

no se deterioraría, porque no se desmoralizarían los ciudadanos y mantendrían su nivel de consumo. Es decir, como quien se pone un chubasquero cuando va a llegar la inundación del siglo…

La estrategia del avestruz

Zapatero será recordado por su afán de negar la crisis durante algunos meses clave para la economía, y por obligar a todo el Ejecutivo a que hiciera lo mismo. Desde dentro y fuera del Gobierno siempre se ha destacado el papel que tuvo Miguel Sebastián Gascón, el que, como ya mencioné, fue asesor económico en el Palacio de La Moncloa. Profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, y con formación en Estados Unidos, Sebastián había pasado por el Ministerio de Economía, a las órdenes del socialista Carlos Solchaga, y luego por el Banco de España, en 1990, en el Servicio de Estudios, donde vivió las devaluaciones de la peseta. En 1995 fichó por Intermoney, compañía financiera en la que también trabajó el que fue secretario de Estado de Economía, David Vegara, para saltar al Servicio de Estudios del BBV. Luego, tras la fusión de este con Argentaria y la llegada de Francisco González a la presidencia, escribió informes críticos con la gestión del entonces vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. La tensión subió y el banco prescindió de él, convencido de que estaba con las nuevas tesis socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando en 2004 este llegó al poder, no le nombró ministro, pero le situó en una posición privilegiada, como su asesor y consejero económico, director de lo que entonces era la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. En 2006 lo dejó para ser candidato a la alcaldía de Madrid, pero no consiguió más que la mitad de los votos que obtuvo su rival, Alberto Ruiz Gallardón. Tras esta bofetada, Zapatero le nombró ministro de Industria, cargo que ocupó desde 2008 hasta diciembre de 2011.

En septiembre de 2012, en su última aparición en el programa Salvados, de La Sexta, Sebastián abordó el papel que había desempeñado con relación a la burbuja. Admitió una pequeña parte

de la culpa, con frases como: “¿Quién se atreve a quitar la música en medio de la fiesta? Porque pinchar una burbuja es eso”. Los banqueros recuerdan el papel de Sebastián, con sus “recomendaciones” de obligado cumplimiento para que no se hablara de “crisis” ni de “burbuja”, como he comentado anteriormente. Ante la presión del periodista que le entrevistaba, el exministro disparó sin piedad en televisión contra una excompañera del Ejecutivo: “Me mordía los labios cuando una ministra de mi Gobierno rechazaba la burbuja inmobiliaria”, en referencia a María Antonia Trujillo, responsable de Vivienda.

Pero cuando llegó la pregunta más comprometida, sobre los consejos que le dio a Zapatero para que dijera aquello de “la Banca española es la más sólida de toda la comunidad internacional”, Miguel Sebastián se defendió: “No podíamos pinchar la burbuja. Zapatero dijo eso porque el Banco de España le comentó que todo iba bien… y además estaba fuera de España y tenía que hablar bien de los bancos españoles en el extranjero, si no…”. Y volvió a golpear a Miguel Fernández Ordóñez: “Casi estaba prohibido hablar de burbuja. En los informes del Banco de España no salía”, añadió.

Pero Sebastián se olvidó de admitir en televisión que él mismo había hablado de la burbuja con empresarios y economistas en 2003. En aquellas charlas auguró grandes problemas al futuro Gobierno —todos entendían que sería del PP— para organizar el estruendo que formaría la caída de la burbuja. Sin embargo, cuando le tocó a él gestionar el problema (entre otros) no lo atajó. En la entrevista de Salvados admitió: “Teníamos que haber hecho algo más”. Por ejemplo, mencionó, quitar la deducción por la compra de vivienda, “pero no lo hicimos porque habría sido incumplir una promesa electoral”. Y terminó con un broche de oro, a efectos de este análisis, cuando afirmó que no pudo hacer nada contra la presión de las entidades financieras, que querían mantener la economía recalentada, porque, aseguró, “José Blanco, entonces ministro de Fomento, me dijo que la paciencia con los bancos debe ser infinita”. Una frase que define al personaje.

El 14 de septiembre de 2008, por muchos paños calientes que intentaron poner los políticos, la situación internacional se deterioró y estalló Lehman Brothers. Los nubarrones de la tormenta

americana ensombrecieron Europa. Los dirigentes de Alemania, Holanda, el Reino Unido y Francia tuvieron negros presagios sobre el futuro de sus bancos, porque estaban contaminados en mayor o menor medida por los activos tóxicos subprime que habían inundado el mercado norteamericano, uno de los factores desencadenantes de la crisis financiera mundial.

Alemania, Holanda y Reino Unido reaccionaron rápido e inyectaron miles de millones en el capital de los bancos más importantes con dos objetivos: garantizar los depósitos de los ahorradores y los vencimientos pendientes con los inversores internacionales. Berlín, por ejemplo, destinó más de 400.000 millones a reflotar bancos quebrados, pero lo hizo sin pedir ayudas a nadie, lo que le ha permitido al país eludir un rescate. Algo muy diferente de lo que le pasa a España, que ha necesitado de Europa para recapitalizar sus bancos por un máximo de hasta 100.000 millones y han llegado las duras condiciones de Bruselas que deben cumplir los bancos y la sociedad española, porque suponen recortes de gastos en educación, sanidad, etc.

Diez días después del cataclismo financiero de Lehman, con Wall Street todavía paralizado por las consecuencias del huracán, apareció Zapatero en Nueva York. El 24 de septiembre de 2008, el expresidente participó en un acto organizado por la Cámara de Comercio española en la ciudad de los rascacielos. Ante directivos de multinacionales y bancos de inversión americanos, el entonces presidente del Gobierno aseguró que España recuperaría “pronto” la senda de su crecimiento potencial, gracias, entre otros factores, a unas cuentas públicas saneadas y a que “quizá cuenta con el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”. “Tenemos un sector inmobiliario fuerte que ha sufrido un frenazo y, sin embargo, no tenemos hipotecas subprime”, añadió. Lamentablemente, demasiados alardes.

Zapatero vinculaba la solvencia del sector financiero a que España cuenta con un sistema de supervisión de calidad, “con una exigencia superior a la de cualquier otro banco central”. Estaba claro que no se creía los problemas que los inspectores habían dibujado dos años antes. Tampoco demostró dar crédito a las advertencias que Jaime Caruana y Gonzalo Gil, gobernador y subgobernador,

respectivamente, le habían transmitido en privado a Solbes. Y también dio la espalda a las advertencias internacionales que estaban llegando. Zapatero concluyó: “Todo empezó a torcerse con las hipotecas subprime; desde la crisis financiera todas las economías avanzadas pasan por serias dificultades. Nosotros hemos resistido mejor que la zona euro”.

En esa famosa intervención de septiembre de 2008, con las cenizas de Lehman todavía humeantes, se mostró convencido de que la economía recuperaría pronto el potencial de crecimiento, que lo situó en torno al 3 por ciento. En honor a la verdad hay que admitir que, pese a su optimismo, Zapatero reconoció los dos “problemas” del modelo español: “Los excesos del sector inmobiliario y el elevado déficit exterior”. Es decir, sabía que el enfermo, la economía española, tenía cáncer; y también debería haber deducido que el entorno internacional no le iba a facilitar medicinas, sino todo lo contrario.

Pero ocultó los problemas y continuó su discurso por el mundo de Disneylandia. El presidente del Gobierno recordó que España había crecido una media del 3,7 por ciento en los últimos catorce años, hasta convertirse en la octava potencia económica del mundo por volumen de PIB, con una renta per cápita anual de 35.000 dólares. “Hemos superado la media europea y a Italia, cosa que deprime mucho al primer ministro Silvio Berlusconi; pero nuestro objetivo es superar a Francia en tres o cuatro años, y esto no lo quiere ni oír nuestro amigo Nicolas Sarkozy”, bromeó Rodríguez Zapatero. El vídeo se ha convertido en uno de los más vistos en YouTube, porque hoy, desde el fondo del agujero, parece imposible que alguien dijera eso hace tan poco tiempo.

No es de extrañar que lo dijera, porque un año antes de su visita a Nueva York, en septiembre de 2007, cuando habían comenzado los primeros problemas financieros en aquel país, el hoy expresidente del Gobierno dijo en El País: “No hay ninguna repercusión directa de la crisis de Estados Unidos en el mercado inmobiliario español”. Un año después, casi no se había movido en su posición.

Hoy suena a humor negro o a palabras pronunciadas en otro siglo. Pero fue hace solo cuatro años. Desde entonces, la economía española ha vivido la peor época desde la guerra civil con dos

recesiones consecutivas.

Y Zapatero aún llegó a un clímax mayor en noviembre de 2008, dos meses después de las declaraciones en la Cámara de Comercio de Nueva York. En una reunión del G-20, a la que por primera vez fue invitado un presidente español, recibió todo tipo de halagos por la calidad de su banca y las provisiones anticíclicas, un colchón contra las crisis que, como expliqué en el capítulo 2, había diseñado el Banco de España en el año 2000 y que se ha demostrado insuficiente para esta enorme depresión. El líder británico, el socialdemócrata Gordon Brown, alabó en público las políticas económicas de Zapatero y puso como ejemplo al sistema español de provisiones para las reformas financieras internacionales.

El negacionismo de Solbes

Pero todo lo que dijo Zapatero se apoyaba en declaraciones anteriores de su vicepresidente económico. Solbes tuvo que dar cobertura a las posiciones de optimismo casi infantil de Zapatero, por lo que mantuvo un particular debate negacionista de la crisis muchos años atrás. La primera confrontación la tuvo con el FMI, que fue el primero en advertir correcciones bruscas en la economía española. Este encontronazo se remonta al 4 de octubre de 2004, a los pocos meses de recibir la cartera de Economía de manos de Rodrigo Rato. Solbes rechazó la advertencia del FMI, ya entonces dirigido por Rato, que alertaba sobre una posible “corrección brusca” de los precios inmobiliarios en España.

Hay que admitir que la situación fue kafkiana y un perfecto botón de muestra de cómo actuaron los políticos ante la crisis. El origen del enfado de Solbes arranca en septiembre de 2003, un año antes, cuando el Banco de España dijo que “la magnitud de la sobrevaloración” del mercado inmobiliario “podría llegar al 20 por ciento” en un artículo del Boletín del Banco de España firmado, entre otros, por Fernando Restoy, hoy subgobernador del Banco de España. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, pidió explicaciones a su gobernador, Jaime Caruana. A los pocos días, Rato desautorizó

el informe del Banco de España y negó la burbuja, como también hizo Emilio Botín. Desde las filas socialistas, en la oposición, se criticó que el Gobierno tapara este problema y se denunció la existencia de la burbuja.

Así, en octubre de 2004, los papeles parecieron cambiar: mientras que Rato, fuera del Ejecutivo, confirmaba el calentamiento de precios, los socialistas, en el Gobierno, lo negaban. Está claro que el mismo problema se puede ver de manera muy diferente cuando cambian la posición y los intereses del que lo juzga. “Yo no comparto el análisis del FMI” sobre la vivienda, dijo Solbes, y consideró que ese análisis estaba “basado en circunstancias ya pasadas”, según declaró a los medios en los pasillos del Congreso. Añadió que la subida de los tipos de interés solo afectaría al mercado inmobiliario si fuera “alta”, algo que no veía probable. “La burbuja inmobiliaria ha empezado a corregirse y veo hoy menos riesgos que hace unos meses”, declaró, coincidiendo así con Joaquín Almunia, entonces comisario europeo de Asuntos Económicos, que señaló algo similar. Pese a la advertencia sobre los precios, cabe recordar que el análisis del FMI de Rato concluía: “El sistema bancario español está en condiciones de absorber las pérdidas asociadas con los shocks [por la caída de precios] de referencia sin malestar sistémico”. Menos mal… El informe del FMI fue la confirmación de los temores que, en privado, tenían Jaime Caruana y Gonzalo Gil. Por eso realizaron una de sus visitas a Solbes en fechas cercanas a este documento del Fondo Monetario.

Tres años después, en 2007, Solbes volvió a negar el asunto. “¿Puede ser el problema de la vivienda un tema de importancia significativa? Yo hoy tengo ciertas dudas. Ya hay un comportamiento más moderado en el precio y en el número de viviendas construidas”, afirmó en una rueda de prensa el 25 de mayo de 2007.

El vicepresidente no fue el único negacionista. Alfredo Sáenz, vicepresidente del Santander, le había dicho algo parecido a Solbes un mes antes, el 28 de abril de 2007: “No hay síntomas de pinchazo de la burbuja porque la morosidad en España está bien. Se ha dado mucha relevancia al crecimiento de la impuntualidad en los pagos, y esto ha provocado que en el sector se genere el temor al

crecimiento de la morosidad".

Poco más tarde, el 24 de octubre de 2007, para reforzar la tesis dominante, Carme Chacón, entonces ministra de Vivienda, tranquilizó a todo el mercado con la rotundidad que le caracteriza en una entrevista en El País: "Nuestro sector inmobiliario es de los mejores del mundo. Vivimos un aterrizaje o ajuste suave". Chacón sacó a pasear el elixir con el que fuimos abducidos los periodistas y analistas durante años: "aterrizaje o ajuste suave". Y recuerdo que se nos ofrecían muchas razones para sostener que en España se construyeran más viviendas que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos: la llegada de inmigrantes, los divorcios, el asentamiento de los jubilados del norte de Europa, la subida del nivel de vida y la consiguiente compra de la segunda residencia… Motivos todos ellos que se esfumaron como el humo en cuanto los americanos hablaron de burbuja. A Chacón solo le faltó decir aquello de que "dentro del euro no puede haber crisis", que fue otra de las líneas imbatibles de algunos economistas de cabecera de los Gobiernos que acallaban todo el debate.

Sin embargo, Solbes empezó a percibir que la realidad, terca, no le daba la razón, ni a él ni a Chacón ni a Sáenz. El 3 de agosto de 2008 admitió que había problemas. "Siempre he pensado que era una burbuja, pero si queríamos pasar de 800.000 viviendas iniciadas al año a una velocidad de crucero de 400.000 o 450.000 casas por año, es evidente que tenía que producirse una caída significativa. Lo que pensábamos es que sería más suave", declaró en una entrevista en El País.

Pero cuando llegó octubre de 2008, un mes después de que Zapatero alardeara de fortaleza financiera y económica en Nueva York, Solbes regresó al discurso anticrisis. El vicepresidente insistió el 12 de octubre en Washington en que los bancos y cajas españoles son "solventes" y en que "no tienen necesidad de recapitalización". La posición del Gobierno se basó en la presunción de que las entidades españolas fueron mucho más estrictas que las estadounidenses al evaluar la capacidad de pago de los clientes que se hipotecaron. Demasiado suponer.

El Gobierno, dijo Solbes, prestará dinero a los bancos, porque no hay mercados de crédito, pero "lo devolverán con intereses y gastos

de gestión", aseguró. Y recalcó: "No entraremos en el capital de las entidades, como han hecho otros países".

Ese mismo mes, octubre de 2008, el Ejecutivo socialista sufrió un primer gran jarro de agua fría. Con Rato ya en España buscando trabajo en la banca de inversión, el FMI redactó el Informe de Perspectivas Económicas Mundiales. En él afirmaba que la economía española, que no había vivido una recesión desde 1993, afrontaría en 2009 una contracción del 0,2 por ciento. El dato chocó de pleno con la previsión oficial del Gobierno, que contemplaba un crecimiento del PIB del 1 por ciento.

Con esta posición, el FMI, gobernado por Dominique Strauss-Khan, estaba dando un viraje brusco sobre sus posiciones anteriores. En junio de 2008, cuando aún no había estallado con intensidad la crisis financiera internacional, había dicho que la riqueza española registraría en el próximo ejercicio un aumento del 1,2 por ciento. Al final, el PIB de 2008 fue del 1,2 por ciento y el de 2009 fue de un 3,6 por ciento negativo. Estas cifras fueron muy inferiores al 3,7 por ciento de crecimiento de la economía española en el año 2007 y al 3,9 de 2006. El FMI acertó al citar al sector inmobiliario español como uno de los principales factores de la recesión, al igual que en Irlanda y Reino Unido, donde también había sido motor de la economía.

Alemania rescata sin ayudas

El último trimestre de 2008 estuvo lleno de decisiones de los grandes Gobiernos de Europa sobre sus bancos más débiles. Alemania, por ejemplo, rescató al Hyporeal Estate y al Commerbank, y robusteció las cajas de ahorros de los Länder que acumulaban muchos productos basura en los bancos mayoristas que poseen. Nunca se ha sabido con precisión la dimensión del agujero alemán, pero tuvieron que crear un fondo de casi 400.000 millones. Eso sí, sin pedir ayuda (es decir, rescate), a nadie. Por eso ahora Angela Merkel no admite que el BCE, que será el supervisor de todos los bancos de la zona euro, pueda inspeccionar sus cajas.

Quiere quitar de los ojos de los europeos todos los trapos sucios que guardan, que son elevadísimos. Suerte que, en su caso, la solidez de sus cuentas puede cubrir las vergüenzas bancarias. Con este velo, además, evita el contagio del riesgo bancario y el riesgo soberano. En Alemania se ha contado que solo la caja del Land de Baviera provocaría el sonrojo de Merkel, pero eso no lo veremos.

Francia y Bélgica hicieron lo mismo con Dexia, que volvió a pasar apuros en 2011, mientras que Londres sacó toda su artillería financiera (y la de su banco central) para nacionalizar a casi todo el sector: Royal Bank of Scotland (el antiguo socio de Botín y antaño ejemplo de banca moderna), Lloyd's y Halifax y Bank of Scotland (HBOS). Solo se salvaron Barclays (gracias a una inyección de capital de un fondo árabe) y HSBC, el gran buque insignia británico hongkonés. Pero ambos pasaron apuros un tiempo después. Barclays destituyó en 2012 al presidente y al consejero delegado, el súper agresivo Bob Diamond, por manipular el Libor y el Euribor, lo que obligó a la entidad a dar un giro estratégico de 180 grados. Mientras, el gigante HSBC se vio envuelto en un escándalo de lavado de dinero negro en varios países, México el más importante, por lo que tuvo que pagar una multa millonaria. Holanda también tuvo que mover ficha al final de 2008, al fusionar Fortis con ABN-Amro, además de inyectar 8.000 millones en el gigante ING. Al final, y en su conjunto, la cifra de lo que tuvo que meter Europa para reflotar al sistema financiero alcanza los 1,5 billones de euros.

España vivía absurdamente ajena a todo esto. El Banco de España, la patronal bancaria AEB y la de las cajas de ahorros CECA seguían aparentemente narcotizadas con el perfume de las provisiones anticíclicas, como una suerte de escudo "anti todo tipo de males", a la vez que predicaban el "aterrizaje suave" de la economía. "No hay que pinchar la burbuja, sino desinflarla poco a poco", decían en el Banco de España. La literatura económica muestra muy pocos ejemplos de países que hayan sido capaces de desinflar burbujas "poco a poco", sobre todo en un mercado global tan interrelacionado, en el que multitud de factores externos pueden ser motivo de desequilibrios. Además se confiaba en que el euro fuera el gran cinturón de seguridad si venían curvas peligrosas para sus entidades. Nadie —tampoco los medios de comunicación— parecía echar cuentas sobre el pequeño detalle de que España, entre la

deuda privada y la pública, debía más del 300 por ciento del PIB a los inversores y los mercados; inversores que, por cierto, ya habían entrado en pánico, y mercados que ya se habían cerrado.

En ese último trimestre de 2008 solo hubo una decisión política, pero fue de un coste enorme. Es la del llamado Plan E, al que me he referido en el capítulo 3. El 27 de noviembre de 2008 el Gobierno de Zapatero anunció que destinaría 8.000 millones para la inversión pública local y así crear 200.000 empleos. Los puestos de trabajo no llegaron, pero el déficit sí, que se disparó. España perdió toda su credibilidad internacional porque entró en recesión con más deudas que cuando estaba en auge y los prestamistas empezaron a dudar de que pudiera devolver lo que le habían dejado. España se colocó en el carril de los países malditos, de los posibles morosos. Esta sería la semilla de la crisis de deuda soberana que se uniría, a partir de 2010, a la bancaria y cuya unión provocaría la segunda recesión en 2011. Por eso la decisión del 27 de noviembre de 2008 fue un error fatal que costaría muchos años corregir y, según algunas fuentes, el germen de la crisis de Gobierno que llegó en abril de 2009.

El Gobierno socialista siempre ha justificado sus errores en la falta de previsión internacional. “Ninguna institución, ni el FMI, ni la Comisión Europea, ni el BCE, previeron un escenario macroeconómico de recesión tan prolongado como el que hemos vivido, ni de pérdida de confianza del euro como la iniciada a partir de agosto de 2012”, afirmó Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, secretaria de Economía del PSOE, en El País el 21 de agosto de 2012. Es cierto que la profundidad y la duración del hundimiento económico no las esperaba nadie (o casi nadie), pero también es verdad que hubo avisos, como los aquí citados. Uno de los primeros, el de septiembre de 2003, con el PP en el poder, cuando el supervisor dijo (casi porque se le escapó) aquello de que “la magnitud de la sobrevaloración [inmobiliaria] podría llegar al 20 por ciento”. Pero también The Economist en 2004 advirtió de la burbuja. Como, por supuesto, ya en esa época los balances confidenciales de las entidades financieras reflejaban una concentración formidable en activos inmobiliarios. Todo esto se plasmó en la carta de los inspectores del Banco de España en 2006 y, de colofón, en el informe anual de 2008 del FMI. Esto sin entrar en las conclusiones de los economistas de cabecera con los que

consultaba David Taguas en 2007, en las que se apuntó la llegada de la recesión.

Si se hubieran tomado medidas entonces, la capacidad de reacción hubiera sido mayor. Esa es la enorme responsabilidad de los políticos (el Gobierno del PP y los del PSOE) con la sociedad, donde los más desfavorecidos están viendo cómo los nuevos poderes supranacionales merman el Estado del bienestar, que tanto ha costado conseguir, con unas normas que no emanan de los Parlamentos en los que se creía que estaba depositada la soberanía nacional. Los responsables políticos e institucionales, como los gobernadores del Banco de España, Jaime Caruana y Miguel Fernández Ordóñez, no se pusieron a trabajar siguiendo los indicios de la crisis; no contaron nunca con un plan B por si el "aterrizaje no era suave", como habían prometido. Jugaron solo a la carta de que la recuperación económica enderezaría todos los problemas y negaron la realidad por cálculos políticos, por su beneficio a corto plazo en lugar de por el bien de la sociedad. En el caso de los gobernadores, por las expectativas de su carrera profesional futura o por no morder la mano que les daba de comer, como si estuvieran al servicio del poder político y no del bien social.

Tras un agitadísimo cierre de 2008 en la escena internacional, 2009 se inició en España con el estallido de la primera bomba financiera, la quiebra de la CCM en el mes de marzo, seguida de la gran crisis de Gobierno de Zapatero, en abril. El de 2009 era un año clave para tomar posiciones defensivas, pero se perdió por divergencias internas en el Ejecutivo, el traspaso de poderes en el ministerio de Economía, de Solbes a Elena Salgado, y el relevo en el Banco de España, de Viñals a Aríztegui. Un cambio de timón en plena tormenta; y, mientras tanto, el barco se acercaba más al acantilado. Además, ninguno de los dos, ni el que se marchó ni el que llegó, eran expertos en controlar crisis bancarias. Dicho de otro modo, no eran los adecuados para apagar incendios de esta magnitud. Más bien, podían esperar a que lloviera y así se apagara el fuego. Pero no llovió, sino que se levantó viento y el incendio arrasó con todo, con buena parte del sector y con el palacio del Banco de España. ¿Cómo verá ahora Solbes todo esto desde el consejo de administración de la eléctrica italiana Enel (que compró Endesa bajo su mandato), y desde el consejo de Barclays? Sin duda, con la

tranquilidad que proporciona un sillón confortable.

Capítulo 5

Caja Castilla La Mancha: la primera bomba financiera

La única forma de entender lo que ha ocurrido con las cajas de ahorros es que la supervisión del Banco de España haya sido más benévola con ellas que con los bancos. Si no, es inexplicable.

Un alto ejecutivo bancario

La caída de la Caja Castilla La Mancha (CCM), intervenida el 29 de marzo de 2009, fue la mecha que prendió la crisis financiera, un incendio que todavía no se ha apagado. También demostró los errores de gestión interna del Banco de España y, además, enseñó los puntos débiles del sector, las heridas que desangrarían a las demás entidades. Nadie quiso ver las señales. La única reacción de las autoridades, las supervisoras y las políticas, fue echar arena para tapar el problema. ¡Que no cunda el pánico!, decían. ¡Hay que evitar la retirada masiva de depósitos! ¡Que no se pierda la confianza en el sistema! Y la alarma no cundió. De puertas afuera, nadie en el Banco de España se alarmó. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero en restar importancia a la quiebra de la entidad presidida por el exdiputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó: "Solo supone el 0,8 por ciento de los activos del sistema financiero", afirmó. Menos mal... El "sistema financiero", sin embargo, ya era un queso gruyere. Los siguientes agujeros fueron imposibles de camuflar.

La intervención de la CCM no solo paralizó la región de Castilla-La Mancha, sino que contaminó a todas las cajas y al resto de bancos, incluidos los dos más grandes, el Santander y el BBVA, que entraron

en el radar de los inversores como sospechosos de sufrir la maligna gripe española del ladrillo. Por supuesto también afectó al país, ya que calentó la prima de riesgo hasta los 115 puntos. Ahora esa cifra parece una broma, pero era el mayor diferencial desde 1997 y no volvió a esos niveles hasta el rescate de Grecia, en mayo de 2010.

La CCM era la duodécima caja de España, con 19.000 millones en activos, la mayoría de ellos de cartón piedra. Veleidades faraónicas como el aeropuerto de Ciudad Real —convertido ahora en plató de películas porque nadie lo utiliza— o un proyecto de parque temático sobre El Quijote, un Las Vegas manchego o, mejor, un Eurovegas castizo. Cuando la caja se derrumbó no quedó casi nada. Los responsables de la entidad siguieron el manual del perfecto financiero suicida: comprar ingentes cantidades de dinero para adquirir ladrillo y suelo donde planificar proyectos de dudosa rentabilidad.

La explosión de la CCM acabó con la virginidad de la banca y demostró que también en España había productos subprime. Eran distintos a los de Estados Unidos. Aquí se llamaban “créditos a promotores”. En total, sumaban más de 300.000 millones. Algunos allegados a Rodrigo Rato, que en aquel momento no era presidente de Caja Madrid, cuentan que, al día siguiente de la caída de la CCM, dijo con toda claridad: “Hoy empieza la crisis financiera en España. Aquí está. Y ha venido para quedarse”. Tres años y medio después, continúa la debacle financiera que ha dejado sin crédito a la economía y ha destruido entidades y puestos de trabajo a un ritmo como nunca antes se había visto en España.

Con la quiebra de Banesto, en diciembre de 1993, los máximos responsables de la supervisión del Banco de España se juraron que no volverían a vivir una crisis bancaria tan relevante. Diseñaron, pues, un sistema de provisiones anticíclicas, fomentaron la limpieza de bancos débiles e inculcaron a los directivos la importancia de la buena gestión del riesgo. Las entidades de ahorro parecían protegidas por sus vínculos con el poder político. “Una comunidad autónoma no puede quebrar, ¿no? Pues tampoco su caja de ahorros”, recuerda un inspector que se planteaban sus colegas a principios de 2000. Este supuesto manto protector de las cajas se convirtió en el plomo que las llevó a la tumba.

La CCM estaba entre ese grupo de entidades cuya tutela por parte de la comunidad autónoma era muy estrecha. Ildefonso Ortega, el primer ejecutivo de la entidad, fue colocado por el PP antes de la llegada de Hernández Moltó. Su gestión fue kamikaze, según los informes del Banco de España. La Inspección descubrió "graves errores, carencias y falta de control" y culpó a su presidente de extralimitarse ("aunque no tenía funciones ejecutivas, en la práctica presidía la Comisión Ejecutiva, el Comité de Dirección y realizaba funciones de gestión de forma directa"). Asimismo, "la estructura organizativa no contaba con líneas de responsabilidad clara y definida" y la Comisión de Inversiones "no veló por el cumplimiento de los objetivos de su reglamento, no realizaba contraste con estrategia alguna, no tenía en cuenta la capacidad financiera de la caja y no informaba al consejo de administración".

El resultado de este descontrol fue terrible. El 80 por ciento de los créditos superiores a 16 millones de euros estaban concedidos al sector inmobiliario, por ejemplo. Una locura. Muchos préstamos se asignaron a nombres repetidos: Domingo Díaz de Mera, los hermanos Antonio e Ignacio Barco, Méndez Pozo… a los que se atribuyó un riesgo superior a los 400 millones. Además de la participación en el aeropuerto de Ciudad Real, donde la caja asumió un riesgo excesivo de 336 millones, o en el complejo turístico "El Reino de Don Quijote", donde ese grupo pretendía hacer un parque temático alrededor del hidalgo manchego. La CCM efectuó grandes inversiones en la arruinada Metrovacesa y su filial francesa Gecina, en las que fue consejero Ignacio López del Hierro, marido de la actual presidenta de la comunidad y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. López también fue consejero de la Corporación CCM. Entre los tristes hitos de esa gestión está el dato de que los créditos dudosos a filiales superaran sus recursos propios por 417 millones pese a que estaban destinados a proyectos especulativos en terrenos no urbanizables —puro secarral— con riesgo de 146 millones...

Todo eso acabó en marzo de 2009. Fue un mes especialmente tenso para la supervisión. La única manera de explicar el descontrol que rodeó a la intervención de la CCM es conocer el caos organizativo que vivían en aquellas fechas tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía. El miércoles 25 de marzo de 2009, José

María Viñals, subgobernador y uno de los hombres históricos de la entidad, anunció por sorpresa que dejaba su cargo para ocupar el puesto de consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados de Capitales del FMI. Sucedía así a Jaime Caruana, gobernador del Banco hasta 2006. Caruana, por su parte, se marchó al FMI hasta abril de 2009. En esa fecha pasó a ocuparse de la dirección general del Banco de Pagos Internacionales. Una recompensa quizá excesiva para alguien que dejó unas cajas hasta arriba de ladrillo, pagado con crédito internacional, en una economía recalentada.

Cuatro días después del anuncio de abandono de Viñals, el domingo 29 de marzo, el Consejo de Ministros tuvo que reunirse en domingo, algo inaudito en la historia de la reciente democracia española. Tenía que aprobar la intervención de la CCM. Eso es lo que se llama salir en el último minuto.

Pedro Solbes, ministro de Economía, llevó al Consejo la decisión de destituir al consejo de administración de la CCM y nombrar ejecutivos provisionales. La medida cayó como una bomba en la sociedad española, que percibió que la crisis subía de nivel, pero no comprendió por qué era necesaria una reunión del Gobierno para desalojar a los malos gestores de una caja. Este Consejo, además, separó más a Zapatero de Ordóñez y abrió un camino de desafección que no dejó de crecer hasta el final de la legislatura.

El inicio del terremoto y el abandono de Solbes

El sábado siguiente, 4 de abril, se publicó en diferentes medios que Elena Salgado sustituiría a Solbes en la primera crisis de Gobierno de la segunda legislatura de Zapatero. Otro cargo clave que se marchó cuando el edificio se tambaleaba. El ministro de Economía le dejó una herencia envenenada a su sucesora. El sistema financiero estaba enfermo, mucho más de lo que nunca habían admitido en público Solbes o Zapatero. Entretanto, el Banco de España seguía sin saber quiénes serían el subgobernador o el director general de supervisión, puestos clave en la institución. En

diez días —los diez días en que España empezó su carrera hacia el abismo financiero— abandonaron el subgobernador del Banco de España y el ministro de Economía. Todo un récord institucional. Era el peor de los mundos para frenar un derrumbe incontrolado de entidades financieras.

Lo primero que hizo Salgado fue acelerar la puesta en marcha de los instrumentos para afrontar el terremoto. En junio de 2009 creó el FROB, la UVI que hospitalizaría a las entidades moribundas. Es decir, España ni siquiera contaba con una unidad de primeros auxilios para el sector financiero. De ahí la necesidad del dominical y estrambótico Consejo de Ministros dedicado a la CCM. La mayoría de los grandes países europeos ya habían creado su fondo de rescate en 2008. Un retraso que España pagaría caro.

La crisis de la CCM no fue una explosión inesperada. La entidad vivió una larga agonía en la que le visitaron hasta tres posibles compradores: Unicaja, Caja de Asturias e Ibercaja. ¿Con quién podía negociar su salvamento la CCM si el subgobernador y el ministro de Economía estaban pensando más en su salida que en la solución a ese problema inmediato? Ordóñez nunca llevó estos temas de primera mano y Javier Aríztegui, entonces director general de Supervisión que después relevó a Viñals como subgobernador, tampoco quiso entrar a un toro tan complicado. En marzo de 2009 se reprodujo el problema de Banesto, pero dieciséis años después. Este caos organizativo lo ha descrito el propio presidente no ejecutivo de la CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, entre sus amigos. Él negoció con el supervisor, sin fortuna, cómo cerrar un acuerdo de venta de la caja para evitar su hundimiento.

Aquellos días de marzo también José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, mantuvo tensas conversaciones con el gobernador para que aceptara la oferta que la malagueña Unicaja hizo por la CCM. Ordóñez buscaba garantías legales que le protegieran ante cualquier conflicto futuro. Braulio Medel, presidente de Unicaja, pedía ayudas por algo más de 2.000 millones. El gobernador se las negó alegando una de sus máximas en la crisis: había que evitar el uso de dinero del contribuyente. No lo empleó, pero no por eso hizo un buen negocio. La quiebra necesitó al principio 3.775 millones entre capital y garantías ante

futuros morosos. Ese fue el dinero que se concedió a Cajastur, la entidad compradora. Fue peor el remedio que la enfermedad. Por eso, Juan Ramón Quintás, acérrimo enemigo del gobernador —sentimiento correspondido por este—, afirmó: "Todo lo que se pague por CCM que supere la cantidad que pidió Unicaja es una pérdida innecesaria. Se podía haber ahorrado mucho dinero". Financieramente, el negocio de la quiebra de la CCM salió muy mal: se comió el 75 por ciento del patrimonio acumulado durante décadas por todas las cajas en el Fondo de Garantía de Depósitos.

Altos cargos de la Administración, buenos conocedores del Banco de España y del gobernador, explican que con la CCM se perdió una oportunidad histórica para reorientar la crisis. En su opinión, si el supervisor hubiera actuado con gran dureza, como procede en estos casos, las resistencias que plantearon otras cajas más adelante habrían desaparecido. El camino era vender los activos de la caja a otros competidores y aparcar a todas las organizaciones presentes en el consejo de administración (ayuntamientos, comunidades autónomas, asociaciones, etc.) en una fundación sin mando sobre la entidad. La CCM era la ocasión perfecta para transmitir que el que la hace, la paga. Que si existiera un problema de solvencia, el Banco de España entraría con la caballería, sin contemplaciones, porque las repercusiones económicas y financieras que estaban en juego eran muy relevantes, como luego se comprobó. El Banco de España debía haber destituido inmediatamente a directivos y consejeros, ponerlos a disposición de la justicia e imponerles las correspondientes sanciones. Pero no fue así.

La mejor prueba de que la operativa de Ordóñez no infundía demasiado respeto fue la siguiente crisis. La eclesiástica Cajasur mantuvo un pulso de casi un año con el Banco de España, al rechazar todas las salidas pactadas que le ofreció. Al final optó por un suicidio financiero al exigir la intervención. Algunos exejecutivos del Banco de España recuerdan otros tiempos, en los que el prestigio y el peso específico del gobernador terminaba con las crisis bancarias en poco tiempo. También influye el hecho de que la legislación autonómica y la europea hayan quitado capacidad de maniobra al supervisor.

Pero en lugar de mano dura, lo que exhibió fue el legalismo blando

del Banco de España, quizá porque era la primera caja y porque estaba bajo el control del PSOE. Tras esta floja reacción, los directivos de las demás cajas con exceso de ladrillo se sintieron fuertes y agarrados a sus sillas, sobre todo si estaban arropados por la comunidad autónoma como escudo frente a Ordóñez. Esa es la raíz de los famosos Sistemas de Protección de Activos (SIP), que embalsaron los problemas y han ayudado a que la crisis cumpla casi cuatro años ya.

La caída de la CCM fue especialmente llamativa por la personalidad de su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó. En 1994, cuando el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, compareció ante la comisión de investigación parlamentaria por su implicación en el caso Ibercorp, Moltó era el portavoz socialista. Cuando llegó su turno arrinconó a Rubio: "¡Míreme a la cara, señor Rubio!, ¡de frente!, ¿me recuerda, verdad? ¿Usted es consciente de las consecuencias que está generando en la sociedad española su proceder, su pasividad, su falta de respuesta?", le espetó con crudeza mientras recordaba que dos años antes el Grupo Socialista había defendido la honestidad de Rubio para seguir como gobernador. Este levantó la vista y le dirigió una cansada mirada.

El diputado Moltó y su verbo fácil y afilado se convirtieron entonces en inquisidores de Rubio. Cinco años después llegó a la presidencia de la CCM. Pasó allí diez años, el periodo completo de la burbuja. Habría que preguntarse si Moltó "fue consciente de las consecuencias que generó en la sociedad su proceder", tanto en la economía como en los más de mil trabajadores del grupo que han perdido su trabajo. Tras ser derribado por el Banco de España, acabó en la Audiencia Nacional como imputado por presunta estafa, administración desleal y falsedad en su gestión en CCM por una denuncia del PP, que todavía no está resuelta. En esa causa también está imputado el ex director general de la entidad manchega, Ildefonso Ortega.

Tras la caída de la CCM, llegó la explicación pública. El 2 de abril de 2009 acudió Miguel Fernández Ordóñez al Congreso de los Diputados. Sin quererlo, puso de manifiesto todos los males del funcionamiento interno del Banco de España al intentar justificar su actuación con la CCM. Explicó que el final de esta había empezado

en octubre de 2008, al mismo tiempo que Zapatero y Solbes decían en Nueva York y en Washington que el sistema financiero español era “sólido y robusto”. ¿No estaban al tanto de la gravedad de la crisis de la CCM y otras entidades financieras? Para los inspectores no era difícil conocer la lista de las “cajas enladrilladas”: Caixa Galicia, CatalunyaCaixa, la CAM, Caja Madrid, Bancaja…

Aquellos días de octubre de 2008, comentó el gobernador, los inspectores del Banco de España enviaron “oficialmente” a los responsables de la CCM una misiva en la que se les encomendaba la búsqueda de una entidad interesada en fusionarse con ellos. Las conclusiones de la inspección, realizada en la primera mitad de 2008, pusieron de relieve la necesidad de que la entidad debía encontrar un socio que asegurase su viabilidad futura.

Antes, en julio de 2008 se exigió a la entidad un informe sobre sus planes de negocio futuros y una valoración estratégica de su situación. A la inspección le preocuparon dos aspectos: la política de expansión crediticia y la gestión de riesgos.

Año 2003: se encienden las primeras alarmas

Ordóñez aún ofreció más datos. La CCM flirteaba con la muerte desde 2003, según el gobernador. El Banco de España, entonces bajo el mando de Jaime Caruana y Gonzalo Gil, recomendó a la CCM, “y también a otras entidades”, que reflexionaran sobre la financiación a los promotores “por el elevado riesgo que comportaba”. Casualidad o no, en julio de 2003 quebró Eurobank del Mediterráneo, un pequeño banco catalán que vivía de pagar extratipos en los depósitos ante los ojos de todo el mundo hasta el día antes de su intervención.

La preocupación por la salud de la CCM, continuó el supervisor, aconsejó colocar a la entidad bajo un “seguimiento continuado”. La inspección hizo una vigilancia constante de la evolución de riesgos, solvencia, rentabilidad y liquidez, ya que la CCM era especialmente “vulnerable” ante una negativa evolución del ciclo económico y, en

especial, del mercado inmobiliario.

Sin duda era “vulnerable”. El resultado de ese control exhaustivo fue un fracaso. La CCM se intervino para evitar una “convulsión” en el mercado, porque la entidad corría el riesgo de provocar una crisis en el mercado de bonos al no poder cumplir con los vencimientos pendientes, declaró Ordóñez en su comparecencia de abril de 2009. Además, también sufría una constante retirada de depósitos que podía provocar un “colapso en la liquidez del sistema”.

Una caja que quiebra por falta de solvencia después de cinco años de seguimiento continuado del Banco de España demuestra la poca eficacia y la escasa influencia de la supervisión sobre el equipo directivo de esa entidad que camina hacia el precipicio. Las “otras entidades” a las que el Banco de España advirtió de sus errores serían seguramente las mismas que después fueron intervenidas con el dinero de los contribuyentes. De las palabras de Ordóñez cabe deducir que Caruana tuvo su propia lista negra de cajas con bomba y que se marchó sin desactivarlas. Ordóñez, que tomó posesión en julio de 2006, heredó esa lista y fue incapaz de corregir su fatal rumbo.

En el Banco de España aseguran que la lista estaba más o menos cerrada desde el principio de la crisis. La mejor prueba de que lo tenían claro, dicen, es el primer test de resistencia europeo realizado en julio de 2010. Lo suspendieron estas entidades: Caja Duero-Caja España, Banca Cívica, Unnim, Cajasur y CatalunyaCaixa. Todas han muerto o están en proceso de venta. Una segunda lista de cajas con problemas comprendía a las entidades con menos del 6,5 por ciento de capital de máxima calidad en el escenario económico adverso de las pruebas. Estas “deberían ser recapitalizadas”, pues “son entidades vulnerables y descapitalizadas, expuestas al desplome inmobiliario”, apuntó Luis Garicano, profesor de Economía en la London School of Economics. En esa segunda lista figuraban Caja Madrid-Bancaja (la futura Bankia), el Banco Pastor, la sevillana Cajasol, la aragonesa Caja 3, el Banco Guipuzcoano y Caixa Pollença. De estas últimas, todas están compradas o tienen graves problemas, excepto Caixa Pollença. Entre las entidades que suspendían por presentar pérdidas estaba también Novagalicia. Si se hubieran atajado los problemas de estas

doce cajas y bancos, quizá otras que hoy están en dificultades se hubieran salvado, como Banco Mare Nostrum, la asturiana Liberbank o Ibercaja.

La inacción del Banco de España fue una actitud gravísima. Puso en entredicho toda la labor de supervisión desde 2000 hasta 2009. ¿Quién es el responsable de esta falta de diligencia? Por escala, la respuesta es sencilla: los dos ministros de Economía de ese periodo (Rodrigo Rato y Pedro Solbes), los dos gobernadores (Jaime Caruana y Miguel Fernández Ordóñez) y, en segundo plano, los subgobernadores (Gonzalo Gil, José María Viñals y Javier Aríztegui), así como Pedro Pablo Villasante y Jerónimo Martínez Tello, directores generales de supervisión.

Es difícil de creer que el Banco de España tuviera las manos atadas por el poder de los ejecutivos de la CCM. Sin embargo —siempre según el relato de Ordóñez— los gestores de esa entidad pasaron cinco años incrementando "inversiones en actividades promotoras de elevado riesgo" pese a las advertencias del supervisor, cuya fama de estricto parece, cuando menos, injustificada.

Cabe pensar que los responsables prefirieron utilizar la vía blanda de "las recomendaciones", evitando atajar con firmeza las decisiones suicidas de los directivos. Los que conocen de cerca a Ordóñez cuentan que antes de cada decisión consultaba con el Servicio Jurídico para que ninguna actuación fuera objeto de demandas posteriores. Este temor, y su afán por esquivar la confrontación con el partido que gobernaba en la caja (el PSOE) y con la comunidad autónoma de turno (Castilla-La Mancha), que tutelaba la entidad, pudo motivar su inacción, aunque sea una mala excusa.

Sin duda el gobernador se evitó disgustos y sinsabores, incluso quizá alguna demanda judicial, por el caso CCM, pero endosó a los ciudadanos el coste de la resurrección de la entidad. El agujero en el capital de la caja presidida por Hernández Moltó fue de 1.300 millones, a cargo del FGD de las cajas. Esta cantidad se devolvió en septiembre de 2010, una vez que la CCM pasó a manos de su comprador, Cajastur. Además, se colocaron 2.475 millones de euros en garantías en la CCM por la posible morosidad que pudiera aparecer en el futuro, cantidad que sigue en poder de su dueño.

Pese a que el gobernador del Banco de España tenía que conocer estas cifras aproximadas del rescate, que suman 3.775 millones de euros, optó por la mentira piadosa en su comparecencia en el Congreso. Siguió el patrón habitual y señaló que, aunque todavía no se conocían los detalles de la intervención, la operación de CCM "podría tener coste cero" para los ciudadanos "porque la entidad es solvente y tiene un patrimonio neto positivo, es decir, que vale más de lo que debe". Obviamente no fue así. La CCM vació el FGD de las cajas, que acabó subsumido en el FROB, controlado por el Estado.

La versión de Juan Pedro Hernández Moltó sobre la situación de la caja y su final difiere de la del gobernador. Destaca que "un año antes de caer, vivimos una campaña de agresión política por parte del PP que se tradujo en una retirada de fondos de unos 5.000 millones. Fue insostenible. El partido de María Dolores de Cospedal hizo de CCM un arma política para derribar a la Junta de Castilla-La Mancha. No hay que olvidar que la causa última de nuestra muerte fue la falta de liquidez", recuerda. Es cierto que la falta de liquidez fue mortal para la entidad, por lo que el Banco de España tuvo que poner a su disposición 9.000 millones de euros para atender las grandes retiradas de dinero que vivía la caja a diario.

Moltó hace autocrítica y reconoce errores de gestión, pero también recurre al socorrido "me gustaría hablar con los que ahora afirman que sabían lo que iba a pasar…". El expresidente admite que la entidad pedía fuertes cantidades de dinero a los mercados mayoristas internacionales, factor que debilitó a la caja. "Aproximadamente un tercio de la cartera crediticia se nutría de fondos de fuera, pero nadie nos alertó de que estuviéramos asumiendo un riesgo excesivo. Estábamos en la media del sector aproximadamente", asegura.

Otro de los grandes pecados de la CCM fue su concentración en el riesgo inmobiliario en Levante. El expresidente, que pide que se le juzgue con los parámetros en los que vivía España en 2008 y 2009, afirma que su expansión en la costa mediterránea "suponía seguir el desarrollo natural de nuestro negocio". Y añade una frase muy relevante: "La caja estaba en la lógica del sistema". Una afirmación fundamental para entender por qué las cajas de ahorros casi desaparecerán del sector financiero con esta crisis. Apostaron a una

sola carta: que no hubiera una crisis inmobiliaria. Cuando llegó, la supervivencia se había hecho muy difícil.

La razón por la que la CCM escogió Levante es clara: “Los promotores clientes de la caja construían allí. Se fueron en masa a la costa. Además, según la normativa, invertir en actividades inmobiliarias era más prudente porque si no vendías las casas, como la garantía del crédito eran viviendas, las provisiones que se te exigían eran menores”. Esta afirmación es clave para comprender por qué hubo tanta concentración en el ladrillo. Las propias normas financieras eran procíclicas, benignas con esta actividad. Partían del principio de que como la vivienda era una garantía real de crédito con gran valor intrínseco, pues los pisos no bajarían de precio, las provisiones para hacer frente a la posible futura morosidad eran bajas. Si prestaban 100 solo tenían que guardar 5. Si dejaban dinero a una empresa, como la incertidumbre sobre la recuperación del dinero era mayor, tenían que dotar con 15. Por eso era menos rentable, y más complicado, prestar al sector industrial que a promotoras o constructoras.

La máquina de hacer dinero

Desde 1998, poco a poco, las cajas fueron abandonando los sectores productivos. Algunas nunca llegaron a entrar. Se convirtieron en entidades de monocultivo; conocían el mundo del ladrillo por las dos caras: la del promotor y la del pequeño cliente. Ganaban comisiones con los préstamos hipotecarios y márgenes con el crédito constructor. Parecía un mundo feliz, una máquina de hacer dinero, porque el precio de los activos no dejaba de crecer cada año. Los directivos de las cajas ganaban mucho y los políticos que las tutelaban les pedían que lo invirtieran en grandes proyectos para la región.

Así llegó la CCM al aeropuerto de Ciudad Real y al proyecto lúdico urbanístico “El Reino de Don Quijote”. Moltó admite el “empujón” del Gobierno regional socialista y el de los alcaldes de las dos localidades afectadas por los proyectos, ambos del PP. Sobre el

aeropuerto, en el que invirtieron 350 millones, sostiene que contó con multitud de informes de consultoras, cámaras de comercio y colegios de economistas que avalaban su futuro. “Si se hizo un ramal del AVE para llegar hasta allí es porque todas las Administraciones estaban de acuerdo. El mayor problema fue que los permisos administrativos retrasaron tres años su puesta en marcha y solo estuvo listo cuando la economía ya había caído”, admite. Otros expertos creen que esta quiebra tiene un componente añadido de corrupción política, aunque hasta el momento no haya pruebas judiciales que lo demuestren.

¿Fueron advertidas de que caminaban hacia su tumba? El expresidente y exdiputado socialista no recuerda, como dijo Miguel Fernández Ordóñez, “apercibimientos del Banco de España en 2007 o 2008”. Como los informes de inspección y las actas del supervisor no se hacen públicos nunca, ni siquiera tras el paso de un tiempo prudencial, será difícil comprobar quién tiene razón.

Moltó recuerda también que desde septiembre de 2008 se iniciaron negociaciones con Ibercaja para una fusión. Los altos cargos del Banco de España estuvieron informados de cada paso. “Pero apareció un informe de Price, donde trabajaba el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, que aseguraba que el agujero era de 3.000 millones. Se acabó la operación. Nadie movió un dedo para evitarlo.” Lo cierto es que la estimación no estaba muy desencaminada por lo que se vio después.

Al margen de las diferentes versiones, el caso de la CCM fue muy llamativo. La entidad estaba en todas las listas de cajas con problemas. “Era como no ver un elefante en un garaje. CCM llevaba muchos meses mal y lo sabía mucha gente en el Banco de España. La decisión de no permitir su fusión era una condena a muerte inmediata”, cuenta un inspector. La CCM se fue al hoyo mostrando todos los males que después han aquejado a las cajas hundidas: un anticuado e ineficaz sistema de control del riesgo; exceso de inversión en el sector inmobiliario; una rápida expansión fuera de su región de origen, con destino principal en Levante, y una excesiva financiación en los mercados mayoristas internacionales.

En lo único que se salva la CCM y mejora a las demás quiebras es que no hubo indemnizaciones millonarias. Nadie se llevó millones

después de arruinar la entidad, como ocurrió en Bankia, Novagalicia o CatalunyaCaixa. Además los sueldos eran razonables: Juan Pedro Hernández Moltó, presidente no ejecutivo, cobraba 150.000 euros. Fue multado con 155.000 euros e inhabilitado por el Banco de España. Para Ildefonso Ortega, director general, la multa fue de 150.000 euros y perdió el derecho a pensión por jubilación. En ambos casos, Anticorrupción dijo que no había habido enriquecimiento personal.

Para hacerse una idea de lo mal que estaba la entidad basta mirar las cuentas de 2011. La morosidad era del 26,38 por ciento. En 2011 el crédito cayó un 6,3 por ciento y los depósitos bajaron un 12,51 por ciento. En su balance tenía suelo por valor de 1.680 millones, una cifra muy elevada.

Al final de su mandato, Ordóñez justificó en el Congreso de los Diputados su actuación tardía en la crisis de las cajas porque carecía de herramientas legales para actuar contra las comunidades autónomas. Es cierto que los Gobiernos regionales son corresponsables de la crisis de las cajas porque las tutelaban, pero eso no anula el papel que podía haber tenido el supervisor.

Como explica José Carlos Díez, “que se sepa, los problemas de solvencia de las entidades financieras son potestad del supervisor, como indica la legislación, que además también es regulador. El Banco de España podía haber ido más lejos con la ley en la mano”. Incluso se puede añadir que en las más de veinte veces que Ordóñez acudió al Congreso a lo largo de su mandato, pudo decir alto y claro: “Señores diputados, no tengo legislación adecuada para atajar crisis en las cajas de ahorros. Si ustedes no me la facilitan, no podré intervenirlas cuando sea necesario”. Pero nunca lo dijo. Al menos en público. Eso invalida sus excusas finales.

Capítulo 6

Los problemas de las cajas se agudizan por unas fusiones equivocadas

Pese a las advertencias sobre los problemas estructurales, nada se empezó a hacer hasta que el sistema de cajas se deterioró en su práctica totalidad.

Jaime Terceiro, junio de 2012

¿Qué tienen en común Bancaja, CCM, Caja Duero y Caja España? Son protagonistas de las mayores quiebras o rescates de esta crisis financiera. Pero hay algo más: de las 45 cajas que existían en 2009, estas cuatro entidades estaban en el grupo de las que más políticos en activo tenían en sus asambleas generales y, a la vez, las que contaban con más miembros de dichas asambleas elegidos por organismos políticos (diputaciones, ayuntamientos o comunidades autónomas). ¿Casualidad? No.

Esta conclusión se extrae de un minucioso trabajo de Vicente Cuñat y Luis Garicano, ambos de la London School of Economics, en el que analizan las consecuencias de la injerencia política en la gestión de las cajas, así como la cualificación profesional de los presidentes en relación con los préstamos al sector inmobiliario y la morosidad.

El informe de estos prestigiosos economistas, titulado "¿Concedieron las Cajas buenas créditos malos?", analiza cifras del sector en 2007 y 2009. Algunas conclusiones son tumbativas: "la ausencia de formación de posgrado, así como de experiencia bancaria, en la persona que ocupa el puesto más importante de la caja lastra la toma de decisiones de la entidad y, por tanto, está ligada a unos peores resultados". Ambos autores sostienen que la baja cualificación profesional ha sido un factor que ha pesado más

que la politización de las entidades. Y ponen como ejemplo a la Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) y al resto de cajas vascas: “La BBK ocupa el primer puesto en porcentaje de políticos en la asamblea y, sin embargo, es la última en créditos al sector inmobiliario”. El caso de Kutxabank, el nombre de las tres cajas vascas ya fusionadas, no es generalizable, porque en las últimas décadas ha tenido ejecutivos de experiencia y gran peso en el sector (José Ignacio Berroeta, Xabier Irala y ahora Mario Fernández), que han trabajado manteniendo una cierta distancia del PNV, partido que ha dominado esas entidades. De no haber sido así, podrían haber sufrido problemas similares a otras, pues no tienen un sistema legal que proteja a los ejecutivos.

El estudio añade aspectos muy interesantes para explicar la situación actual de las cajas. “Solo un tercio de los últimos 45 presidentes de cajas poseen algún tipo de educación de posgrado, ya sea en forma de estudios en el extranjero, máster o doctorado. Por otra parte, la mitad de los presidentes de las cajas cuentan con experiencia bancaria previa”.

Los cálculos detallados del informe les permiten afirmar que las cajas dirigidas por presidentes con estudios de posgrado mantenían menos créditos al sector inmobiliario y más préstamos a particulares que el resto del sector. “Como consecuencia, las primeras tenían una tasa de morosidad más reducida y habían sufrido menores rebajas de calificación crediticia que las que contaban con dirigentes sin estudios de posgrado.”

Por otro lado, las entidades dirigidas por ejecutivos que habían pasado por la banca presentaron una tasa de morosidad inferior en casi dos puntos de media. Si todo el sector hubiera cumplido con el patrón de la experiencia de sus dirigentes, las cajas se hubieran ahorrado 16.000 millones de mora en 2009, dicen los economistas citados. Por lo tanto, hubieran obtenido más beneficios y podrían haber dotado muchos más millones a la obra social.

“Dirigir una entidad bancaria es una difícil tarea que exige capacitación. Es poco probable que personas sin contacto previo con la economía o las finanzas, ya sea durante sus estudios o en sus anteriores carreras profesionales, puedan comprender, entre otros, aspectos como la política de créditos, la dotación de provisiones y la

diversificación del riesgo", concluyen Cuñat y Garicano.

Estas afirmaciones son de sentido común. En España, sin embargo, solo en los últimos años —gracias a las reformas legales iniciadas a mediados de la década pasada— se han endurecido las condiciones que permiten profesionalizar los puestos de responsabilidad de las cajas. ¿Es casualidad que La Caixa, BBK y Unicaja, dirigidas por financieros cualificados, sean ahora entidades que lideren la reestructuración? Es obvio que no.

Cataluña, Euskadi y Andalucía son las regiones donde están implantadas estas tres entidades. Son comunidades autónomas que han tenido una evolución económica dispar, con diferentes tasas de paro y una influencia desigual del boom inmobiliario. Sin duda, la profesionalidad y la capacidad para enfrentarse al poder político de turno están detrás de sus resultados. Ibercaja también podría estar en este grupo de entidades bien gestionadas, si bien su escaso tamaño —siempre ha evitado la fusión con otra de tamaño relevante— le impedirá liderar las fusiones.

En muchas ocasiones, la politización ha llegado a las cajas por los consejos de administración, donde los partidos colocan a su gente, procedente de ayuntamientos, comunidades, sindicatos… Pocos entre ellos cuentan con estudios superiores. Alguno llegaba después a la presidencia de la entidad. Era un conflicto típico con el Banco de España, que a veces cedía y otras no.

Para evitar las generalizaciones, conviene traer a cuento casos reales que ahora estremecen, viendo las gravísimas consecuencias que tendrá la desaparición de las cajas. Uno de los más llamativos ejemplos del despropósito es Modesto Crespo, expresidente de la CAM. Su actividad profesional era vender coches Ford en dos concesionarios que gestiona en Alicante y Elche. Además de eso, el factor más relevante para explicar cómo accedió a la cima de la CAM es que era del PP y amigo del presidente Francisco Camps. Ambos se sentaban en el "Misterio de Elche", institución que presidía Crespo. Bajo su presidencia, una profesora de ballet, que admitió no entender "nada de un balance", se sentó en la supuesta comisión de control. Es más que dudoso que pudiera controlar algo, pero tampoco había sido elegida para eso. Esto no pareció importar ni a la consejería de Economía de la Generalitat, que tutelaba la

CAM, ni al Banco de España.

Revisando entidades arruinadas, llegamos al caso de Santiago Gómez, sacerdote y licenciado en Teología. Fue el gestor que quebró Cajasur y que ha costado a los contribuyentes 400 millones. Esta entidad se hizo famosa cuando se descubrió que, en 2001, el entonces presidente de la caja cordobesa, el sacerdote Miguel Castillejo, se autoconcedió una pensión vitalicia de 210.000 euros, para asombro y escándalo de la opinión pública. La entidad abonó una póliza de 2,9 millones de euros. Cajasur pagará este dinero a Castillejo incluso después de su muerte, ya que sus cuatro hermanas seguirán cobrándola hasta que la última de ellas abandone definitivamente este mundo.

Constructores que prefieren cajas

Más casos. Santos Llamas, presidente de Caja España, era un constructor que debió de pensar que la mejor ocupación para un profesional del ladrillo era dirigir una caja. Casualmente, eligió una que estaba hasta arriba de créditos a promotores y que, tras quebrar, ha quedado en manos de Unicaja. Su compañera de andanzas ruinosas en la región ha sido Caja Duero, presidida por Julio Fermoso, doctor y catedrático en Medicina e investigador… en diferentes campos de la salud. La desaparición de Caja España y de Caja Duero traerá pobreza a Castilla y León, que verá cómo se pierden los servicios centrales de León y Salamanca, con la consiguiente destrucción de empleo y de empresas en la región. Y, por supuesto, menos futuro para los jóvenes.

Juan Manuel Suárez del Toro, presidente de Caja Canarias, es otro caso curioso. Es ingeniero industrial y fue director durante unos años de una compañía de transporte público. Se dedicó la mayor parte de su vida al voluntariado en la Cruz Roja, donde ingresó con 18 años, hasta ascender a presidente del organismo en 1994. José Ignacio Mijangos, presidente de Caja del Círculo Católico de Burgos y actualmente de Caja 3, ya absorbida por Ibercaja, es óptico y audioprotesista. Buena experiencia, pues llegó a ocupar la

presidencia nacional de este último gremio.

Entre los abogados destaca el caso de Miguel Blesa, que alcanzó la presidencia de Caja Madrid sin ninguna experiencia profesional financiera. Su mérito era la amistad de José María Aznar. Antonio Jara, presidente de Caja Granada, también es doctor en Derecho. Fue durante treinta años profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada. Por último, los políticos de carrera: Juan Pedro Hernández Moltó pasó de diputado del PSOE a presidente de la CCM; también fue secretario general del partido en Castilla-La Mancha, consejero de Transportes y de Economía y Hacienda. Por estos méritos llegó a la caja.

No menos significativo es el caso del economista Narcís Serra, también del PSC-PSOE, presidente de Caixa Catalunya durante el suicidio de la entidad, que ya ha sido rescatada. En su currículum figura que fue consejero de la Generalitat provisional, diputado a Cortes, alcalde de Barcelona, ministro de Defensa, vicepresidente del Gobierno y primer secretario del PSC entre 1996 y 2000. Compareció en el Congreso de los Diputados en julio de 2012 y tuvo la valentía de admitir errores importantes en la gestión. “Es absurdo negarlos, si no, no estarían las cajas como están”, reconoció.

En la derecha hay casos menos conocidos pero también interesantes. Por ejemplo Miguel Sanz, expresidente de Navarra y de la Caja de Ahorros de Navarra (CAN). La entidad acabó sin futuro tras el error de fusionarse con la sevillana Cajasol, y fue absorbida por La Caixa, para disgusto de los navarros. Sanz, alcalde de Corella, desde las elecciones de 1983, ha sido parlamentario foral por Unión del Pueblo Navarro desde 1987 y accedió a la presidencia del Gobierno foral en 1996. Fue reelegido en 1999, 2003 y 2007.

En algunos de los casos los presidentes eran ejecutivos y en otros no. Lo relevante es que estuvieron en los máximos cargos de las entidades financieras entre cuyos objetivos figuraban el reparto de la obra social, aunque su razón de ser y su esquema de funcionamiento fueran el de un banco. Por eso es una anomalía que la presidencia la ejerzan personas no cualificadas profesionalmente en campos económicos o financieros.

La politización que aupó a todos estos personajes hasta la presidencia y la falta de profesionales contrastados como directores generales ha sido una de las razones de fondo de esta crisis. Estas anomalías descansan en los problemas de indefinición acerca de la propiedad de las cajas y de su formulación jurídica, como ha destacado en numerosos estudios Jaime Terceiro Lomba, quien, además de ser catedrático de Análisis Económico en la Universidad Complutense, fue presidente de Caja Madrid desde 1988 hasta 1996. Esta mezcla de la visión técnica y profesional otorga a Terceiro una posición única para juzgar la situación de las cajas. Sus escritos insisten en que cuando la propiedad no está clara los políticos ocupan el terreno.

“La indefinición de las cajas españolas respecto a su titularidad y formulación jurídica contrasta, no solo con la realidad de los países de la Unión Europea, sino también con nuestra propia dinámica de adaptación a los estándares europeos”, comentó Terceiro. Esta denuncia del problema de configuración jurídica ya la hizo en 1995, cuando ocupaba el cargo de presidente de Caja Madrid: “Las cajas no son entidades públicas porque no se integran en la organización de la Administración Pública y ni siquiera pertenecen al sector público”. A la vez, tampoco se rigen por los mismos parámetros que un banco. Esta situación institucional confusa y jurídicamente pantanosa las ha perjudicado al llegar la crisis.

Muchos años antes de la quiebra del sistema, desde finales de los años noventa, el expresidente de Caja Madrid afirmó en diferentes conferencias: “Como resultado de su compleja naturaleza jurídica, las cajas de ahorros españolas presentan diversos problemas que probablemente las sitúan, y seguramente las situarán, en posición desfavorable respecto a otras entidades con las que compiten. Estos problemas surgen básicamente por: asignación de los recursos, control de los gestores, configuración de los órganos de gobierno, administración de grupos empresariales, desarrollo de estrategias cooperativas, instrumentación de fusiones y acumulación de recursos propios”. Si se lee con detenimiento, se puede concluir que en esta crisis se han dado casi todos los problemas que anunciaba Terceiro hace ya quince años.

Terceiro explicó que España era el único país en el que las cajas

tenían plena libertad operativa y territorial y, sin embargo, “estaban indefinidos tanto sus derechos de propiedad como su formulación jurídica. Esta situación es más preocupante porque las cajas españolas son las que tienen mayor peso relativo dentro de su sistema financiero”.

Control de los gestores

Uno de los puntos en los que más insistió este catedrático es el del control de los gestores, aspecto clave para explicar el hundimiento de las cajas, como se deduce de casos tan estrambóticos como los ya mencionados. “Es difícil compatibilizar los intereses, a menudo notoriamente contrapuestos, de empleados, clientes, representantes políticos y sindicales y entidades fundadoras, a la vez que se intenta maximizar la rentabilidad y solvencia de la institución. Hacer responsables a los gestores de velar simultáneamente por todos estos intereses, puede ser equivalente a no hacerlos responsables de velar por ninguno, y con frecuencia conduce a que se inclinen por aquellos que maximicen sus posibilidades de continuar como gestores”. No puede estar más claro. Algunas cajas han vivido lo que se conocía en el sector como “la dictadura de los directivos”. Ante la maraña de propietarios, los directores generales y los presidentes daban a cada uno lo que quería y ellos se perpetuaban en sus puestos, con unos sueldos que, si bien eran inferiores a los de los bancos, estaban por encima de la mayoría de sectores económicos. La obra social fue el comodín perfecto para contentar a comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades sociales, etc., y evitar que se les pidieran cuentas de su gestión. De alguna forma, parece que las cajas siguieron el dicho popular de “lo que es de todos no es de nadie” e hicieron de su capa un sayo.

Los ejecutivos de las cajas han resaltado en multitud de ocasiones que nadie estaba más controlado que ellos por la composición del consejo de administración. Allí se sentaban sindicatos, partidos, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. “¿Qué mejor órgano de gobierno que aquel en el que están todos

representados y unos y otros se están vigilando?", se preguntaban. En teoría puede ser un buen sistema de control interno. En la práctica no funcionó. Los consejeros de buena parte de las entidades vivían cómodamente con dinero y prebendas (viajes con pareja, invitaciones a eventos, regalos, etc.), a cambio de no protestar ni hacer preguntas incómodas en las reuniones. En muchas cajas que iban bien nadie controlaba a los ejecutivos. Si tenían experiencia financiera y daban resultados, contentaban al poder político con una obra social abundante y teledirigida. La comunidad ganaba votos y los ejecutivos, poder e independencia. Todo iba bien hasta que la cuenta se hundió. Entre las cajas también se dice que en algunos consejos de administración de bancos hay políticos sentados. Es cierto. En el Santander hay unos cuantos, pero no pertenecen a una Administración concreta que tiene intereses determinados y capacidad de influencia en la entidad.

Sin transparencia informativa

Para evitar el control de la prensa, las cajas optaron por la opacidad informativa. Era llamativo acudir a la presentación de resultados de La Caixa o Caja Madrid. Por volumen de negocio y tamaño, estas entidades superaban dos o tres veces al Banco Popular, que facilitaba una completa memoria anual, con todo lujo de detalles. El informe público de estas dos grandes cajas, en cambio, no pasaba de ser un folleto de 15 folios con datos poco estructurados donde no era fácil encontrar cifras homogéneas con las de los bancos cotizados.

Con La Caixa viví un caso llamativo. La entidad ofrecía cuentas de resultados a la prensa diferentes de las oficiales que entregaba a la CNMV. La razón era, según la entidad catalana, que los balances facilitados a la prensa daban "una visión más completa y adecuada del negocio conjunto entre el grupo industrial y el financiero, [ya que] el formato contable oficial ofrece una visión distorsionada de nuestra actividad", aseguraron. Tras la publicación de un artículo en El País mostrando esta irregularidad, la entidad modificó su

criterio y ofreció la misma información en todos los ámbitos. En honor a la verdad hay que señalar que en los últimos años la información pública de la entidad ha mejorado sensiblemente.

En una ocasión participé en una convención de responsables de Comunicación de Cajas de Ahorros celebrada en Ávila. Les expuse las quejas que teníamos los periodistas ante la escasa información que facilitaban. Presenté cuentas de resultados ridículamente resumidas que ellos habían hecho llegar a los medios de comunicación, con las que era imposible seguir la marcha del negocio. Algunos de los presentes admitieron la insuficiencia de cifras, pero uno de ellos me preguntó: "¿Qué ganamos nosotros publicando más datos? ¿Titulares malos si algo no va bien? ¿Por qué ofrecer algo que no publican mis otros colegas de las cajas? Todo esto solo me llevaría a tener problemas con el director general". Con estas palabras se acabó el debate, porque aquel responsable de "comunicación" cumplía órdenes de arriba y solo veía problemas en ser más claro. Su vida era más plácida si no informaba. Por otro lado, lo más grave del asunto es que aquella entidad estaba cumpliendo aparentemente con la legalidad vigente, según el Banco de España y la CNMV. La guinda del pastel es esta: las cajas de ahorros, salvo BBK, nunca dejaron que la prensa entrara a sus asambleas generales, el acto más parecido a una junta de accionistas, donde acudían más de 500 personas y se repasaba el ejercicio económico. Nunca.

Falta de capital

Otro punto débil de las cajas ha sido su incapacidad para captar capital de primera categoría en los mercados financieros. Excepto por la vía de las reservas, que se incrementan con los beneficios retenidos, no pueden emitir acciones y, por lo tanto, tenían un flanco abierto en una época donde las directrices internacionales exigen más y más capital. El único instrumento disponible, las cuotas participativas, al no contar con derechos de voto, generó dudas sobre su atractivo entre los inversores, lo que impidió su

desarrollo. Esa falta de capital era otra de las grandes diferencias con los bancos. Uno de los activos que proporcionaba capital, aunque de segunda categoría, fueron las tristemente famosas participaciones preferentes. Las cajas y los bancos entraron de lleno en ese peligrosísimo producto, que ha terminado por arruinar a buena parte de sus clientes. Así, problemas estructurales del pasado han llegado al presente transformados en problemas comerciales, que han pagado los que menos culpa tenían.

El último aspecto problemático de la peculiar configuración estructural de las cajas es que "la inexistencia de capital social implica también que una caja no puede ser objeto de compra por parte de un banco y da lugar, asimismo, a serias dificultades para llevar a cabo operaciones de fusión o absorción entre cajas, dada su adscripción a distintas comunidades autónomas", como explica Terceiro. Esta es la eterna queja de sus competidores: las cajas pueden adquirir bancos, pero no a la inversa. Las cajas siempre respondían a este argumento diciendo que cuando una entidad fuera mal económicamente, tendría que vender todo el negocio bancario, oficinas, créditos, depósitos, menos la sede social y la denominación "caja". Era una respuesta cínica y solo teórica, porque era casi imposible que se diera la circunstancia. De hecho, en esta crisis, se ha tenido que modificar la estructura jurídica de las cajas para facilitar su adquisición.

Los directivos de las cajas sabían que vivían en un fortín, fuera del control del mercado y de la amenaza de las opas. Esta situación propició que bajaran la guardia en el necesario afán por la buena gestión que cualquier compañía debe tener. Un buen número de ellas tenían malos ratios de rentabilidad y eficiencia —que mide lo que se gasta por cada 100 euros de ingresos—, pero nadie les pedía cuentas. El Banco de España, a cambio de estas deficiencias, les exigía más capital, aunque, como se ha visto, eso fue insuficiente cuando llegaron las tormentas. La respuesta oficial de las cajas era que tenían peores cifras que los bancos porque estos no se preocupaban por la bancarización de las zonas rurales, donde muchas oficinas eran deficitarias, y tampoco trabajaban con las clases sociales más desfavorecidas, "un negocio menos rentable que las empresas. Estas son nuestras señas de identidad. No vamos a renunciar a ellas", afirmaban los directivos de la CECA. Lo cierto es

que la eficiencia de las cajas está en el 57,6 por ciento, un ratio que los bancos mejoran hasta el 43,6 por ciento.

Arraigo social

Está claro que parte del extraordinario arraigo que tenían las cajas —y que algunas mantienen todavía— entre la población se debía a que las veían como entidades más cercanas a los intereses populares (ancianos, niños con deficiencias, etc.), así como al mundo de la familia y de las pymes. Como dice un experto en marcas, "después del equipo de fútbol, a lo que se tenía más apego era a la caja de tu pueblo o de tu ciudad. Y como en el fútbol, la fidelidad pasaba de padres a hijos a través de las cuentas que se abrían en la infancia". Sin embargo, como dicen los buenos gestores de cajas, para poder hacer la obra social, antes es necesario lograr beneficios, cubrir las provisiones y elevar los recursos propios. Es decir, se debe gestionar con profesionalidad, con prudencia y con la mayor distancia posible de los intereses políticos cuando estos son contrarios a la buena marcha de la entidad. Se hace imprescindible esquivar préstamos a empresas ruinosas de amigos o meterse en proyectos faraónicos de dudosa rentabilidad en los próximos treinta años… Algo que muchos gestores no hicieron. El resultado del desaguisado es de una magnitud difícilmente imaginable. Según los cálculos de José Ignacio Crespo, analista de reconocido prestigio y autor del libro Las dos próximas recesiones (Deusto), la pérdida de valor económico y social de las cajas quebradas se acercará a los 60.000 millones de euros, un 6 por ciento del PIB español.

Jaime Terceiro, en una intervención de junio de 2012, explicó su diagnóstico del sector y terminó su discurso así: "Haber adelantado el descalabro del sistema tampoco tiene mérito alguno, ya que es bien sabido que en una economía de mercado la asignación eficiente de recursos depende del cumplimiento de condiciones técnicas. Pese a las advertencias, nada se empezó a hacer hasta que el sistema de cajas se deterioró en su práctica totalidad". Así es. El inmovilismo de los dos grandes partidos llevó a que no se

modificara radicalmente la legislación cuando las cajas ganaban mucho dinero, aunque entonces era más fácil que ahora, cuando están arruinadas. En la época de bonanza, en 2003, solo se modificaron algunos aspectos legales. ¿Cómo reaccionaron las cajas? Oponiéndose frontalmente, sospechando que los ímpetus reformistas venían de los bancos, sus eternos enemigos, que querían cercenar su poder tras alcanzar la peligrosa barrera del 50 por ciento de cuota de mercado.

¿Quién teme a las cajas?

Antón Costas publicó en El País un elocuente artículo en julio de 2003 titulado "¿Quién teme a las cajas?". El catedrático de Política Económica de la Universitat de Barcelona notaba el malestar en el sector ocasionado por la reforma que planteaba el PP para regular toda una serie de aspectos de la vida interna de las cajas: la edad de los consejeros, las normas de transparencia sobre los sueldos de los directivos, las retribuciones por asistencia a los consejos de las empresas participadas, los créditos a los partidos políticos, la creación de una comisión para inversiones y desinversiones o las normas para la emisión de cuotas participativas.

Las cajas protestaban porque los bancos no estaban controlados en esos aspectos. Otra vez, estas no tenían en cuenta su carácter mutualista y su mezcla de instituciones públicas y privadas. Además, olvidaban que sus colegas cotizan en bolsa y están bajo la disciplina del mercado.

A toro pasado, como se analiza la crisis en este libro, está claro que las cajas acataron la reforma bajo el principio jesuítico del "cumplimiento"; es decir, "cumplo" y "miento". Las mejores pruebas de ello son los escándalos vividos en la CAM, que echan por tierra los preceptos que esta ley pretendía cubrir: altos directivos que se colocaron sueldos sin control de nadie, comisiones que no controlaban al consejo, emisión de cuotas participativas que fueron un fiasco completo… Por cierto, el banco que las comercializó fue Lehman Brothers, con Luis de Guindos a la cabeza.

“Curiosamente —proseguía Costas—, este aparente acoso llega a las cajas en un momento en que gozan de una excelente salud financiera e imagen de mercado. Su modelo de expansión ha sido un éxito. Su red de oficinas ha crecido por todo el territorio nacional, a la par que disminuían las de la banca. ¿Quién teme a las cajas? Y, en todo caso, ¿por qué surge ahora?”, se preguntaba el autor. Las cuestiones eran pertinentes porque estaba en juego la fallida opa de Gas Natural sobre Iberdrola, donde La Caixa desempeñó un papel fundamental. ¿Las cajas se hicieron demasiado incómodas e incontroladas para el Gobierno, del PP, en este caso, y para los bancos?

El nuevo poder empresarial de las cajas fue colosal. La Caixa controló un grupo energético casi más valioso que su red de oficinas con el que ha dominado Repsol, Gas Natural, Aguas de Barcelona, las autopistas con Abertis y ha tenido un papel clave en Telefónica. Caja Madrid no llegó a este nivel, pero fue la pieza básica para determinar el futuro de Endesa, que se privatizó a la manera española, pasando del control del Estado español al Estado italiano, a través de Enel. La operación empezó siendo dirigida por La Caixa, ya que fue Gas Natural la que lanzó la primera opa por Endesa (en cuyo consejo se sienta Elena Salgado, exministra de Economía de Zapatero) en septiembre de 2005. La guerra concluyó en abril de 2009 con el apoyo de Caja Madrid a los italianos de Enel, compañía en cuyo consejo se sienta Pedro Solbes, también exministro de Economía de Zapatero.

De cómo jubilaron a Vilarasau

El poder crea enemigos. Y si el poder crece, los enemigos también. Quizá la mejor prueba sea el cese de Josep Vilarasau de la presidencia de La Caixa. Según cuenta en sus Memorias (RBA), el intento de convertir a la entidad en banco, a principios de 2000, fue tomado por la Generalitat, y en concreto por Artur Mas, entonces consejero de Economía y futuro presidente, como un pulso al poder político. A la vez, su paso de director general a presidente de La

Caixa, puesto para el que no había edad de jubilación, facilitaba la posibilidad de que Vilarasau se perpetuara en el cargo. El poder político y los propios ejecutivos de la entidad, según deja entrever en sus memorias, temieron que ejerciera un férreo control sobre La Caixa, sobre Cataluña y sobre muchos ámbitos de la economía española sin límite en el tiempo. Mas y el PP tenían claro que podía ser un peligroso contrapoder si no se le cortaban pronto las alas, porque el grupo industrial que controla la entidad es uno de los más grandes de Europa. Vilarasau se liberaría de parte del control político si transformaba La Caixa en un banco. Eso es lo que vio Mas. Algunos financieros comentan que Vilarasau seguía el modelo de Emilio Botín: con una pequeña participación en la entidad podría ser su presidente. La diferencia, comentan estas fuentes, es que las acciones no serían propiedad de Vilarasau, sino de la Fundación La Caixa, de la que Vilarasau sería representante. El hombre mantuvo negociaciones con Mas pero, como él admite, "las relaciones con Mas nunca fueron buenas", seguramente porque le había puenteado durante años, tratando únicamente con el president Pujol.

Vilarasau admite que le sorprendió que cambiaran la ley para echarle. Nunca pensó que pudieran llegar tan lejos. La Generalitat aprovechó los cambios legales de 2002-2003 en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) para modificar la ley catalana de cajas y establecer que "nadie puede estar más de veinte años en diferentes cargos". Vilarasau llevaba 27 años, todo un récord. Así acabó su presidencia, en la que estuvo de 1979 a 2003. Tras este movimiento, la Generalitat apoyó la llegada a la cúpula de Isidro Fainé, director general de la entidad. "Es muy difícil sustraerse a la conclusión de que esta norma había sido redactada especialmente para echarme", dice Vilarasau en sus memorias. Cuenta con detalle cómo pidió ayuda al PP, a Rodrigo Rato, que le dijo que era un asunto de la Generalitat. Incluso comenta con amargura que Pujol le sugirió directamente que pensara en jubilarse, "lo que me pareció una intromisión". La prensa, sobre todo La Vanguardia, se lamenta Vilarasau, "apenas se hizo eco de que una ley de la Generalitat destituía al presidente de la institución financiera más importante de Cataluña y la tercera más importante de España". "Tampoco fue violenta ni indignada la reacción del equipo directivo, Fornesa, Fainé y Brufau. Me dolió mucho su reacción."

Esta relación entre el poder político y el financiero catalán tiene ahora todo un desafío por delante con la propuesta independentista de CiU, el partido que gobierna en Catalunya. La ruptura del statu quo actual no gusta a La Caixa, y puede perjudicar enormemente su negocio en el resto de España, igual que al Banco Sabadell. Ambos saben, sin embargo, que no pueden manifestarse públicamente contra los deseos de una parte de la población catalana y, sobre todo, de la Generalitat. La primera caja, ya convertida en Caixabank, tendrá que buscar equilibrios diplomáticos entre el corazón y el negocio, que quizá pasen por una fusión. Por el contrario, el Banco Sabadell, que coincide con el diagnóstico de La Caixa, tiene más margen de actuación porque se debe a su consejo, que son empresarios accionistas de la entidad, aunque no será fácil que se enfrente a la Generalitat.

En el artículo mencionado, Antón Costas cita un documento no publicado (Las cajas de ahorro: entre el mito y la realidad), elaborado por el Servicio de Estudios del BBV en junio de 1995, en el que se exponían los temores de la banca ante la nueva orientación que seguían las cajas. “El problema para los bancos es que las cajas no pueden ser adquiridas por ellos. Esa falta de reciprocidad resulta aún más amenazante si se tiene presente que las cajas confederadas atesoran en este momento más de 700.000 millones de fondos propios excedentes; y una liquidez en el mercado interbancario, que, a finales de 1994, rondaba los 3,2 billones de pesetas”.

Las cajas, apunta el autor, en lugar de seguir prestando estos excedentes a los bancos para que los invirtiesen en las empresas, decidieron hacerlo directamente, “quedándose con el margen y la plusvalía”. Mientras la banca hacía las Américas, las cajas hacían las Españas.

Y concluía: “Esta nueva realidad y el hecho de que las cajas sean un objeto de deseo para políticos, empresarios, directivos y empleados hace que una de las tareas más importantes de los próximos años sea la de elaborar una nueva doctrina sobre las cajas”. Así hasta hoy.

Otras soluciones en el extranjero

En otros países ya habían resuelto el nudo gordiano de las cajas. La solución con más adeptos entre los intelectuales fue la ley Amato. A finales de los noventa, Terceiro y otros catedráticos recordaron que en Italia se transformaron las cajas en bancos con un modelo que consistía en admitir que una fundación fuera propietaria de la caja y que la caja se convirtiera en sociedad anónima con el cien por cien del capital en manos de la fundación. De esta forma, la fundación, financiada por los dividendos de la sociedad anónima, desarrollaría la actividad social, y la sociedad anónima desarrollaría el negocio bancario. A partir de ahí, nada impediría que la fundación hiciera sucesivas ofertas públicas de venta si quisiera ir cediendo acciones al mercado. Ahora las fundaciones de las cajas italianas son minoritarias en los bancos comerciales y su labor social es reducida. Es más que dudoso que sea una fórmula ideal, sobre todo porque las cajas han acabado casi borradas de la sociedad por su escasa labor social. De cualquier forma, en España se inició este camino en 2011, 21 años después que en Italia, y aún no se ha completado.

Uno de los documentos más interesantes sobre las transformaciones que debían acometer las cajas fue el libro Pasado, presente y futuro de las cajas, publicado por Aranzadi Thomson Reuters en julio de 2009, en el que participó el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, y el nuevo gobernador, Luis Linde, así como el diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte y el exministro socialista Jordi Sevilla, entre otros economistas.

Este peculiar elenco de personajes defendió la naturaleza de las cajas, pero pedían cambios. Entre otros, que los políticos salieran de los consejos (solo tendrían presencia en la obra social), que el Banco de España fuera el único supervisor, que las autonomías no puedan vetar fusiones, que todas las cajas tengan una pequeña parte en cuotas cotizadas con derechos políticos y que el FROB “no sea una manta para tapar a los malos gestores”.

Guindos también destacó, en julio de 2009, que “por el momento”

se puede afirmar que “hemos superado la crisis económica”, aunque advirtió que 2010 iba a ser “un año muy difícil para las entidades de crédito, más que 2009 y 2011, tanto por la evolución de la morosidad como por la caída de los ingresos de las entidades y el descenso de actividad”. Agregó: “el sector está en una situación de depresión” en la que se hacen “necesarios” los procesos de integración entre cajas de ahorros, añadió. A juicio de Guindos, el SIP es “la mejor opción” para la integración de las cajas, porque “combina el aspecto local y el transversal” y así “permite mantener la identidad local y autonómica de las cajas de ahorro”.

Para estos expertos, como regla general, las integraciones transversales entre cajas de ahorro “van mejor que los corralitos autonómicos”, ya que “el solapamiento entre entidades es inferior, además de que también son menores los ajustes de empleo y las redundancias, y que se consigue una mejor dispersión del riesgo”, dijo Guindos en la presentación de la obra. Pujalte le secundó.

Nadie hace caso a Guindos

Dicho y hecho. En 2009 empezaron las fusiones y el objetivo mayoritario fueron los “corralitos autonómicos”, también llamados “bancos públicos regionales” o emparejar entidades por afinidad política. En lo último en que se pensó fue en la eficiencia, en evitar la concentración del ladrillo y en crear entidades con un futuro despejado. La mayoría de los barones autonómicos no escuchó ni una de las peticiones de estos dirigentes del PP y del PSOE. El principal objetivo de Montilla en Cataluña fue “una gran caja catalana”, aunque al final creó dos: CatalunyaCaixa y Unnim y las dos quebraron. Luego La Caixa se fusionó con Caixa Girona. Lo mismo buscó Núñez Feijoo, que hizo un gran banco regional, Novagalicia, que está manos del Estado. Y en Castilla se unieron las ruinosas Caja Duero y Caja España, también quebradas. Y, la más importante, Caja Madrid, que, como no podía fusionarse con ninguna madrileña porque no había, lo hizo con Bancaja, una prima hermana, en el ladrillo y en la política, del PP.

Gaspar Ariño, catedrático de Derecho Administrativo, lo refleja con toda crudeza en su libro La necesaria reforma de la Ley de Cajas de Ahorros, editado por Thomson Reuters en diciembre de 2009. El autor recuerda que ni el PP, con mayoría absoluta en el Congreso, ni el PSOE de Zapatero "se enfrentaron al verdadero poder en las cajas, los señores autonómicos" pese a los problemas que acuciaban al sector. "No ha habido reformas en profundidad de las cajas porque los primeros beneficiarios de esta ocupación eran y siguen siendo los propios políticos pertenecientes a los diversos partidos", añade.

Antoni Serra Ramoneda, presidente de Caixa Catalunya durante 21 años (de 1984 a 2005), abunda en el problema de la injerencia de los Gobiernos autonómicos en Los errores de las cajas. Adiós al modelo de cajas de ahorros, de Ediciones Invisibles. "La entrada de los Gobiernos autonómicos en la gestión de las cajas es el origen de muchos de los males que han llevado a estas entidades a su delicada situación actual. Es, además, un contrasentido jurídico. Si las comunidades tienen competencias supervisoras, ¿no es a la vez un contrasentido que el custodio sea a la vez el custodiado?", y cita el caso del intento de imposición del candidato de Esperanza Aguirre en Caja Madrid, en 2009, como un ejemplo de utilización torticera de las competencias de la Comunidad de Madrid.

El portazo de Quintás

Antoni Serra, que no aborda su ineludible responsabilidad en la quiebra de Caixa Catalunya, recuerda cómo Juan Ramón Quintás "pronunció claras quejas por las crecientes interferencias políticas en la gestión de las cajas y la falta de respuesta a las propuestas de cambios legislativos presentadas" en las asambleas anuales de 2008 y 2009. Y lo siguió haciendo hasta marzo de 2010, cuando dimitió de su cargo ante la falta de apoyo del consejo. Después, sigue Serra, llegó Isidro Fainé a la presidencia, que se mostró conciliador con el Ministerio de Economía y el Banco de España para llevar "de forma dialogada la redefinición del marco regulatorio" de las cajas. Esta

redefinición fue el primer envite del sector, que pasó de 45 cajas a 17 en 2010. Es cierto que Quintás negoció con los grupos parlamentarios reformas legales para disminuir la presencia de los políticos en las cajas. Sin embargo, en muchas ocasiones, sus ideas no parecían ser defendidas con el mismo ímpetu por cada presidente o director general de las grandes cajas en sus comunidades de origen. Así, la CECA como institución defendía una postura cada vez con mayor radicalidad, pero las entidades, en público, parecían no secundarla.

El momento más caliente del enfrentamiento entre Juan Ramón Quintás y Miguel Fernández Ordóñez ocurrió cuando el presidente de la CECA llamó "trilero" al gobernador en una entrevista en El País, en diciembre de 2009. Supuso su suicidio como máxima representación de la Confederación de Cajas. Probablemente se trató de un encontronazo buscado. Le dijo todo lo que había callado durante tres años. "Usar la astucia del trilero para cambiar las cajas no es digno de una democracia", le espetó a la cara al gobernador. "El Banco de España debe ser neutral salvo que quiera sustituir al poder público", añadió con ironía. "La fiesta, con la que algunos sueñan, del reparto de despojos no se va a producir", afirmó con vana esperanza, porque ya estaba teniendo lugar. Tres meses después de pronunciar esta mezcla de acusaciones y deseos, en marzo de 2010, Quintás dimitió, consciente de que había roto las reglas no escritas de la relación institucional entre la Confederación de Cajas y el Banco de España. El consejo estaba dividido entre los partidarios de un sistema tradicional de cajas, impulsado por Quintás y capitaneado por Amado Franco, presidente de Ibercaja y, en el otro lado, Isidro Fainé, presidente de La Caixa, que empujaba la transformación de las cajas en bancos. Ganó Fainé.

Tiempo después, el gobernador acudió al Congreso y devolvió las flores a Quintás. "En algunas cajas se perciben serios problemas de falta de eficiencia. Yo pedí un cálculo [...] sobre qué hubiera pasado si en estos últimos diez años las cajas hubieran sido tan eficientes como los bancos", explicó el gobernador. Y remató: "La obra social hubiera sido 17.000 millones de euros mayor de lo que ha sido".

El fracaso se llama SIP

En 2010, las aguas venían muy revueltas en las cajas. Todos intuían la catástrofe que se cernía pero no sabían cómo defenderse de ella. En junio, el Gobierno elaboró un decreto ley enmarcado en una profunda reforma de la Ley de Cajas para facilitar las fusiones o la creación de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP). Bajo este incomprensible nombre se escondía el último invento para hacer una tortilla sin romper los huevos. Algunos ejecutivos del sector afirman que el propio Ordóñez y Javier Aríztegui estuvieron detrás de esta creación jurídica, con la ayuda de algún destacado ex director general del Banco de España. El SIP consiste en que las cajas se unan en una sociedad cabecera, pero manteniendo los consejos de administración originales, las sedes sociales y las marcas. Se crearon así holdings que agrupaban a varias entidades en cuya cabecera agrupaban el negocio financiero, es decir, cierto poder económico y político, pero se les permitía operar con cierto grado de independencia. Era una manera de mutualizar las pérdidas y los beneficios. Un fiasco. Se llamaron “fusiones frías” y desembocaron en “fracasos calientes”. El exgobernador del Banco de España, en su última comparecencia en el Congreso, el 24 de julio de 2012, defendió la utilidad de los SIP: “Creo que el SIP es un elemento que sirvió para evitar el freno que ponían las comunidades autónomas a las fusiones interregionales y el SIP las permitió. El SIP no fue un toro; no hay que mirarlo como un objetivo sino como un instrumento. No hay que juzgar al toro; es un cabestro que lleva a los toros al corral, y para eso sirvió porque al final todos acabamos en fusiones. No soy crítico del SIP. En Europa hay muchos: Crédit Agricole es un SIP y Rabobank también”.

El hecho cierto es que se constituyeron seis SIP y a fecha de hoy, octubre de 2012, solo siguen vivos tres, que probablemente serán dos en pocos meses. El más importante fue el del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. Se compuso de Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja. Otro, Banca Cívica, agrupaba a Caja Navarra, Cajasol, Caja Burgos y CajaCanarias. Las tres cajas vascas también utilizaron el SIP: BBK-Cajasur, Caja Vital y Kutxa de San Sebastián-

Gipuzkoa. Liberbank, pilotada por Caja de Asturias, con Caja Extremadura y Caja Cantabria. Banco Mare Nostrum, dirigida por Caja Murcia, con Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedés. Caja 3, con Caja de la Inmaculada de Aragón, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz.

Bankia está nacionalizada. Banca Cívica, un fracaso, ha sido absorbida por La Caixa. Caja 3 fue asumida por Ibercaja. Banco Mare Nostrum busca el futuro con dinero del Estado o en una fusión. Los SIP de las vascas y el de Asturias, Liberbank, parece que seguirán adelante en solitario. Un triste balance que demuestra que se utilizó una fórmula pensada más en contentar a los "señores autonómicos" que en crear una estructura válida para sobrevivir en la tormenta. Además, optaron por la fusión Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa (nacionalizada); Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu (vendida en subasta al BBVA tras su nacionalización); Caja España-Duero (vendida con 1.000 millones de dinero público a Unicaja); Caixanova y Caixa Galicia (nacionalizada); Cajasol y Caja Guadalajara (integrada después en Banca Cívica por falta de viabilidad) y La Caixa con Caixa Girona, que sigue sin problemas.

La crisis pilló a las cajas con todas las deficiencias estructurales comentadas al aire. Los policías del sector (la supervisión) dejaron que la mitad del sistema financiero incumpliera normas que se exigían a los bancos en cuanto a la profesionalidad e independencia en la gestión. La ligazón política entre los dos grandes partidos y la cúpula del Banco de España crearon el caldo gordo para que se bajara la guardia con las cajas, como si fueran barcos que, por no estar sometidos a la disciplina del mercado (no cotizaban en bolsa), no tenían riesgo de hundimiento. Se creyó que estaban a salvo porque no podían ser atacados por una opa hostil o no podían depreciarse en el parqué en una semana… Error.

Lo que se hizo fue dejar que navegaran tranquilamente buques defectuosos que iban hasta arriba de pasaje, con toneladas de oro en sus bodegas, y que entraron en aguas peligrosas. En algunos casos, las naves tenían vías de agua y estaban al mando de capitanes sin título. A merced de las olas, que no amainaron, su desaparición en el fondo del mar solo fue cuestión de tiempo. Lejos de agradecérselo, muchos capitanes inexpertos maldijeron la

permisividad de quienes les habían permitido embarcarse. Ya era tarde.

Las cajas no solo crecieron rápidamente al calor de la burbuja, sino que ellas mismas la inflaron. Cuando agotaron los depósitos y ya no tenían dinero propio para convertirlo en crédito, acudieron al supervisor para mostrarle productos financieros con los que endeudarse con inversores extranjeros bajo el paraguas del euro. El Banco de España les dio el visto bueno, pese a todas sus deficiencias estructurales. A cambio, recibieron unos tímidos tirones de orejas en público, que les propiciaba el gobernador o el ministro de turno en sus discursos. Así entraron en una economía exuberante con la cartera llena. En cuanto llegaron las dificultades, se vio que tenían una deficiente estructura directiva, un gobierno corporativo débil y que carecían de una transparencia homologable a su tamaño.

‘Los problemas están resueltos’

Tras pilotar estas fusiones y los SIP, el 29 de junio de 2010, el Banco de España realizó la primera nota de la crisis encabezada por un párrafo que, visto desde la perspectiva actual, resulta estremecedor: “Con la aprobación por el Banco de España de cuatro planes de integración en el día de hoy, el mapa del proceso de reestructuración de las cajas de ahorros en España se encuentra prácticamente concluido, con una serie de operaciones de integración autorizadas o en fase de autorización que en conjunto implican la mayor reordenación del sector bancario español en la historia reciente”. La reestructuración en marcha, decía el comunicado oficial, afecta a 39 de las 45 cajas de ahorros (sin incluir CECA), “cuyos activos suman el 92 por ciento del total del sector”.

A continuación, el Banco de España describió el FROB, el fondo de rescate creado en junio de 2009 de una manera imaginativa, cuando menos: “Una de las funciones del FROB consiste en apoyar los procesos de integración entre entidades viables que voluntariamente acuerden participar en fusiones u otros procesos

análogos que comporten una mejora de la eficiencia, una racionalización de su administración y un redimensionamiento de su capacidad productiva para mejorar sus perspectivas futuras". Lo cierto es que de los más de 15.000 millones que ha colocado el FROB en diferentes proyectos, difícilmente recuperará más del 10 por ciento de este dinero a medio plazo.

Aún fue más lejos el supervisor: "Cabe destacar la equivalencia esencial entre las fusiones y los SIP en cuanto a sus efectos relevantes". No ha sido así. Los SIP han evolucionado en fusiones tradicionales, excepto en el caso de las cajas vascas, ante la inoperancia de la fórmula elegida.

Visión del sector según el Banco de España

En el primer documento oficial de la crisis, el supervisor describió los males del sector: incremento de la morosidad, como consecuencia del impacto de la crisis económica; endurecimiento de las condiciones de financiación en los mercados mayoristas por el aumento de la percepción del riesgo, con el efecto consiguiente en los costes de financiación; el ajuste del volumen de negocio. "A su vez, el elevado crecimiento de los años anteriores, alimentado por la concentración de operaciones en el sector inmobiliario" (los créditos promotores y constructores llegaron a sumar hasta el 60 por ciento del total) "había contribuido a una cierta alteración en el equilibrio tradicional de las masas activas y pasivas del balance".

Y seguía: "Una vez concluido el nuevo mapa de cajas de ahorro en España, puede afirmarse que el sistema bancario español sigue manteniendo una posición sólida y solvente. El Banco de España cuenta con una información amplia y detallada sobre la situación de las entidades españolas, obtenida en el ejercicio de su función supervisora que se desarrolla con intensidad y cercanía, y que incluye la realización periódica de algunas pruebas de resistencia". Por desgracia, la posición del sector ya en 2011 distó mucho de ser "sólida y solvente". Respecto al grado de información del Banco de España, está claro que, si realmente fue "amplia y detallada", no

obró en consecuencia, porque los proyectos de uniones de cajas fueron cayendo como fichas de dominó, con pocas excepciones. Y si no se tomaron medidas, ¿a qué razones se debió?

El escándalo de Córdoba: quiebra Cajasur

Es curioso que el Banco de España escribiera los párrafos arriba citados el 29 de junio, cuando solo había transcurrido un mes desde la escandalosa quiebra de Cajasur. Fue la prueba más clara de que el Banco de España no impresionaba a nadie. La historia cordobesa empezó dos meses después de la quiebra de la CCM, en julio de 2009, cuando el Banco de España aprobó un protocolo de fusión con Unicaja. Casi un año después, el 21 de mayo de 2010, la caja cordobesa, que pertenecía al Cabildo Catedralicio de Córdoba y estaba dirigida por el sacerdote Santiago Gómez Sierra, rechazó esta operación con la malagueña Unicaja y quebró. El supervisor no fue capaz de convencer a los cuatro sacerdotes que tenían la mayoría del consejo para que se unieran a Unicaja. Otra vez el papel del Banco de España quedó en entredicho, pues Cajasur, volcada en el ladrillo, había recibido innumerables requerimientos para cambiar su gestión. No hizo caso. Entre 2005 y 2008, con Caruana y Ordóñez en el Banco de España, el supervisor realizó cuatro inspecciones y señaló que no se habían corregido los problemas de la etapa del expresidente Miguel Castillejo. Otra vez, como con la CCM, los requerimientos del Banco de España parecían simples consultas voluntarias. Resulta muy difícil entender esta pasividad del supervisor. Luego llegó el plan de salvación con Unicaja, pero no era del agrado de los sacerdotes. Los canónigos viajaron incluso al Vaticano para intentar buscar el respaldo papal.

Algunos cuentan que tras esta arrogancia se esconde el hecho de que en mayo de 2003, el Ministerio de Economía, dirigido por Rodrigo Rato, permitió a la entidad cordobesa tener un trato diferenciado por ser una caja fundada por la Iglesia y regirse por el Concordato de 1979 entre España y la Santa Sede. Dejó de estar bajo la tutela de la Junta de Andalucía, que peleó en los tribunales

para cambiar la situación, pero no pudo superar el acuerdo con el Ministerio de Economía.

Cajasur fue intervenida. Con un sistema de subasta a la baja, fue entregada a BBK en julio. La caja vasca reclamó 392 millones al FROB para hacer frente a la desastrosa situación de la caja controlada por el Cabildo Catedralicio de Córdoba. Esos casi 400 millones son ya una pérdida neta para los ciudadanos porque se entregaron a la BBK a fondo perdido. Fuentes financieras comentan con extrañeza que la Fiscalía no haya abierto diligencias contra los responsables de esta entidad, pese a todas las irregularidades cometidas, y que todo haya quedado en una multa del Banco de España. De todas formas, el comprador tuvo que poner entre tres y cuatro veces más para recapitalizar la entidad. Cajasur cerró 2010 con 1.100 millones de pérdidas. El FROB adelantó 1.500 millones. La caja perdía dinero a chorros. En un solo día, antes de la quiebra, los clientes se llevaron 24 millones de las oficinas. En el verano de 2009, cuando la crisis del sector ya estaba declarada, la entidad y sus participadas tenían atrapados 1.700 millones: 4.000 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo. Tras hacerse cargo de la caja, BBK cerraba en 2011 un ERE que ha supuesto la salida de 652 trabajadores de Cajasur. Además, se ha despedido a otros cien trabajadores del grupo de empresas y fundaciones. Estos son los que han pagado de verdad la incompetencia de religiosos metidos a banqueros, la permisividad de unos políticos que no lo impidieron antes y la pasividad de unos gobernadores que se dedicaron a mandar requerimientos que nadie obedecía.

El profesor Jesús Fernández Villaverde describe esta situación con rotunda claridad: “Lo que ocurrió en Japón en los años noventa del siglo pasado es una prueba lapidaria: hasta que sus bancos no limpiaron sus balances de verdad, su economía estuvo estancada. El problema en España es que las cajas han decidido no aceptar la realidad. En vez de sanear su situación, se dedican a la acrobacia contable y a unas fusiones que muchas veces no se entienden desde el punto de vista empresarial”. Así fue. Y se perdió 2009, 2010 y parte de 2011 sin entrar en el fondo del problema. El Estado debía hacerse cargo de toda la basura acumulada en los balances bancarios. De lo contrario, no volvería el crédito y no crecería la economía. Solo subiría el paro. Pero para 2011 España ya era un

Estado sin dinero, por lo que tuvo que ir a Europa a pedir el rescate con el que tapar los agujeros y empezaron otro tipo de problemas: los recortes de gastos.

Capítulo 7

Bankia: el crimen perfecto

Actuamos correctamente, bajo el control de los organismos públicos y apoyados por la supervisión y la auditora. Y sin coste alguno para el contribuyente.

Rodrigo Rato. Congreso de los Diputados,

26 de julio de 2012

El interrogatorio a Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, en el Congreso de los Diputados transcurría sin sobresaltos. Nadie había elevado demasiado el tono. A las doce de la mañana del 26 de julio de 2012 llegó el turno de Irene Lozano Domingo, diputada de UPyD, escritora y periodista. Lozano dejó helados a los asistentes a la comisión de investigación del Congreso sobre la crisis económica.

—¿Se considera responsable en alguna medida, señor Rato, del drama que vive España? En el último barómetro del Instituto Elcano se le coloca a usted como el personaje más detestado por todos los españoles, que le consideran responsable de la crisis de Bankia y de la crisis que vivimos como país. ¿No cree que a toda esa gente le resarciría que dijera algo parecido a lo que dijo Bernard Madoff cuando fue detenido por el FBI? "Todo era una gran mentira." Le pido, señor Rato, que admita alguna responsabilidad y que pida perdón a la sociedad española por haber contribuido a su ruina.

Rodrigo Rato la miraba fijamente. La taladraba con los ojos. Ni siquiera tomó una nota. Recibió el disparo y aguantó sin moverse.

La presidenta de la Comisión, Elvira Rodríguez, entonces diputada del PP y hoy presidenta de la CNMV, intentó suavizar la tensión e interrumpió a la diputada: “Vaya acabando, señoría”. Pero su señoría continuó. La presidenta cortó de nuevo sus incómodas cuestiones. En la transcripción del Diario de Sesiones figura una anotación a continuación de las preguntas: “Rumores”. Y así fue. Muchos rumores y más tensión.

Irene Lozano insistió:

—Usted ha creado problemas a mucha gente, ha causado insomnio, ha creado la ruina de forma directa a cientos de miles de personas y ha contribuido en parte a crear la ruina de los 45 millones de españoles de forma indirecta. Usted no me ha contestado: ¿va a pedir perdón?

‘Yo asumo mis culpas dimitiendo’

Rato volvió a ignorar sus cuestiones, pero como otro diputado, Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya-Verds, también le interrogó sobre su culpabilidad, respondió:

—¿Culpabilidades? Seguramente hay muchas y variadas, habrá errores y decisiones equivocadas, pero estamos ante un hecho que no se ha producido en nuestra historia macroeconómica desde los años treinta. ¿Con esto me quito responsabilidades? No, yo he asumido las mías. Yo tenía un plan, no se consideró válido y he asumido mi responsabilidad al dejarle el puesto a otro e irme sin reclamar nada. La señora Lozano me ha planteado esta cuestión y ya la he contestado.

Rato tuvo que escuchar otras preguntas agresivas, como las del diputado del PNV, Pedro Azpiazu, sobre todo porque tuvo la osadía de arrancar su discurso con estas palabras: “Espero convencerle de que actuamos correctamente, bajo el control de los organismos públicos y apoyados por la supervisión y el consejo de la auditora. Y sin coste alguno para el contribuyente”.

En realidad, Rato sabía muy bien que el Estado estaba arriesgando en Bankia 103.000 millones de euros: 23.400 millones directamente en el capital; otros 50.000 millones a través del FGD para cubrir los ahorros allí depositados y otros 30.000 en avales sobre la deuda de la entidad. Rato concluyó así: “Llego aquí, señorías, con la conciencia de haber hecho bien las cosas, de haber luchado contra una situación realmente muy difícil y con un esfuerzo considerable”.

Considerable, tal vez. Bien recompensado, seguro. Rato ganó, al menos, 2,3 millones en 2011 y una cantidad desconocida —que puede ser similar— en 2010 más el salario correspondiente hasta mayo de 2012. Es cierto que renunció a la indemnización de 1,2 millones a la que tenía derecho, con lo que quedó liberado para trabajar con cualquier otra entidad. También es verdad que Rato solo comunicó esta renuncia un mes después de su dimisión y cinco días más tarde de que se supiera que la Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias contra él y otros exdirigentes de Bankia por estafa y delitos contables. El ambiente venía muy turbio y no parecía lo más propicio reclamar indemnizaciones: Bankia ha sido una ruina para la sociedad española.

El interrogatorio en el Congreso acabó a las 15,40 de la tarde, tras casi cuatro horas de debate. Rato salió escoltado por el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y otros altos cargos del partido. Se les veía sonrientes y optimistas. El exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar había pasado su examen sin disparar contra el ministro de Economía, Luis de Guindos, principal impulsor de su salida de Bankia. Su presencia planeó durante toda la sesión.

Rato, sin embargo, dejó tres “recados”. Primero, criticó el cambio legal que obligaba a elevar las exigencias de capital mediante los dos decretos que elaboró Guindos por los que se exigía más provisiones a las entidades ante la desconfianza de los inversores

por sus posiciones en el ladrillo. Esta norma ahogó a Bankia y Rato la calificó de “decisión discutida y discutible”. Segundo, sin mencionarlo, responsabilizó a Miguel Blesa, su predecesor en Caja Madrid, de los agujeros de la entidad, que estaban creados antes de su llegada. Tercero, señaló al gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, que “le conminó” a que se fusionara con Bancaja, el gran error de Rato. Según el diccionario, conminar significa: “apremiar con potestad a alguien para que obedezca”. En Derecho es un dicho de la autoridad: “Requerir a alguien el cumplimiento de un mandato, bajo pena o sanción determinadas”. Bastante claro.

Rato no hizo referencias sobre su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri. Demostró tener muchas tablas políticas y actuó con sentido de la disciplina de partido, pese a lo complicado de la papeleta.

Era lógico que Rato siguiera el guión posiblemente pactado en La Moncloa cuando presentó su dimisión de Caja Madrid el 7 de mayo de 2012. Él y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acordaron una entente cordiale. El PP no convertiría a Rato en chivo expiatorio, pese a que sería fácil y políticamente rentable debido a la gravedad de la crisis, y le podía echar una mano en el proceso posterior, en la medida de lo posible. A cambio, el expresidente de Bankia mantendría una actitud de “no agresión” hacia el ministro de Economía, algo que se hubiera interpretado como un ataque al Gobierno del PP. Cualquier atisbo de enfrentamiento de Rato con La Moncloa hubiera levantado suspicacias por la eterna rivalidad entre Rajoy y Rato. Los excolaboradores de Rato que apoyan esta teoría creen que la mejor prueba de la existencia de ese pacto es la resistencia del PP a que el exdirigente de Bankia acudiera al Congreso. “Hay que evitar la alarma financiera. No es el momento de evaluar el papel de Rato”, dijo el presidente de Gobierno el 4 de junio, un mes después de la dimisión del banquero y pocos días más tarde de que Goirigolzarri dijera (el 25 de mayo) que el “agujero” de Bankia ascendía a 23.400 millones.

El clamor popular exigía pedir cuentas a los exresponsables de la entidad. Dentro del PP, el propio Alfonso Alonso se veía apurado para frenar a los diputados que reclamaban algún gesto oficial. Pero

el PP solo aceptó una comisión de investigación parlamentaria después del 4 de julio, día en que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, imputaba a toda la cúpula de Bankia por "indicios de fraude con posibles perjuicios para una generalidad de personas" tras una denuncia de UPyD. Andreu apoyaba el caso en una gran cantidad de información sobre la operativa de la entidad y los documentos de trabajo de la Inspección del Banco de España. Aun así, la comisión sería un sucedáneo, pues el formato pactado permite al ponente contestar en bloque a todas las preguntas en lugar de atenderlas una a una. Ese método facilita ignorar las cuestiones más espinosas, como las de Irene Lozano. La presión sobre Rato y su cúpula se trasladará al juicio, donde las preguntas serán mucho más comprometidas y exigirán respuestas más precisas. Ahí será más difícil no disparar a otros lados. De hecho, Rato les contó a sus colaboradores que tenía preparada una versión más dura del caso para leer en el Congreso, pero optó por la más diplomática. Quizá quepa deducir de esa confidencia que, si percibe riesgos en el juicio, actuará con menos reservas.

La conclusión de Rato en aquella comisión parlamentaria del 26 de julio de 2012 fue meridiana: la doble recesión que vivió España y los cuatro cambios legislativos que sufrió el sector financiero entre 2011 y 2012 exigieron cada vez más capital y provisiones, lo que fue matando a Bankia. Ante esta situación, Rato pidió una prórroga para aplicar un plan que suponía una lenta recuperación de la entidad. El Gobierno, sin embargo, entendió que ya no cabía más plazo y que urgía una fuerte recapitalización del banco. No se concedió más tiempo y estalló el escándalo: Bankia necesitaba 23.400 millones. No hay que darle más vueltas al tema, concluyó.

"Un crimen perfecto", dijo Irene Lozano. Hay un muerto pero nadie es culpable.

Alto perfil de riesgo

La visión que ofreció en el Congreso el exministro de Economía en

julio de 2012 es la cara opuesta del documento interno de trabajo que elaboró la Inspección del Banco de España en marzo de 2012.

En esa fecha, los inspectores emitieron un demoledor informe sobre el grupo Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. “El perfil de riesgo lo calificamos de alto por sus problemas de rentabilidad, liquidez, solvencia y porque el gobierno corporativo es mejorable. El riesgo supervisor es alto y además ha recibido 4.465 millones de ayudas públicas”, arranca el documento. “La conclusión principal es que la matriz BFA no es una entidad viable, diagnóstico que es compartido por el presidente de la entidad, quien afirma que están estudiando una nueva estructura del grupo. El problema principal de Bankia es que no genera suficientes resultados recurrentes para sus necesidades de saneamientos. Esto ya ocurría con el decreto de febrero de 2012 y se ha agravado después”, concluyen.

Cuando se dice que una entidad “no genera resultados recurrentes” es que la bicicleta se cae, es decir, que esa entidad no cubre sus necesidades más básicas porque tiene problemas estructurales. Es una de las razones que esgrime Bruselas para liquidar un banco y venderlo a sus competidores. Las afirmaciones de los inspectores son una sentencia de muerte formulada con el lenguaje técnico del Banco de España. No son opiniones, sino hechos. Fueron también el epitafio de Rato y el arma que utilizó Guindos para desalojarle de la presidencia de Bankia.

Pero la caída de este coloso había empezado mucho antes. Incluso antes de que Rato llegara a Caja Madrid el 30 de enero de 2010. En esa fecha poco quedaba ya del Monte de Piedad fundado el 3 de diciembre de 1702 por el sacerdote aragonés Francisco Piquer. La caja más antigua de España. Cuando Rato entró, Caja Madrid acumulaba años de vinculación con el poder político en torno a la comunidad y el ayuntamiento de la capital de España y graves errores de gestión.

Cuando Caja Madrid ganaba más que La Caixa

El primer presidente con peso profesional que modernizó la entidad fue Jaime Terceiro, director general del Banco Hipotecario de España, catedrático de Análisis Económico en la Universidad Complutense y premio de Economía Rey Juan Carlos 2012. Pilotó la caja entre 1988 y 1996, la estructuró con criterios financieros e impuso un estricto control del gasto. Algunos incluso recuerdan su austeridad monacal a la hora de plantear, por ejemplo, los gastos generales o los del consejo, muy lejos de los fastos y la alegría derrochadora que se vivirían después. Esta actitud le valió la enemistad sindical por considerarle cicatero con los salarios. Pese a todas las precauciones, la caja sufrió la crisis económica de 1993 y 1994 y su morosidad se encaramó hasta el 7 por ciento. Pero Terceiro guió su gestión por la búsqueda de la rentabilidad. Y lo consiguió. En aquellos años, la entidad madrileña llegó a ganar más dinero que La Caixa, el eterno rival.

Terceiro, además, candidato propuesto por los socialistas, siempre fue reelegido por consenso de todo el consejo. Cuando el PP llegó al poder dio a su gestión un final tranquilo. El propio Rodrigo Rato, desde el Ministerio de Economía, le ofreció una salida por la puerta grande: la presidencia de Iberia. Rechazó esa oferta.

Al fin, José María Aznar impuso a su candidato: Miguel Blesa, un abogado y amigo personal del entonces presidente del Gobierno sin ningún conocimiento financiero previo. El PP pactó el apoyo de Comisiones Obreras. A cambio de buenos réditos para los empleados, los conservadores ganaron todo el poder en la institución. Blesa entró el 11 de septiembre de 1996 y permaneció hasta enero de 2010.

El nuevo presidente aprovechó el viento a favor de la recuperación económica para emprender un crecimiento controlado de la caja. La situación empezó a torcerse en 2005, pero la entidad mantuvo el mismo ritmo de apertura de oficinas casi hasta el final de su mandato. Los ejecutivos que trabajaron con él en esa época cuentan que cambió la estrategia original en pos de la búsqueda del tamaño por el tamaño, dejando a un lado la prudencia que debe acompañar a un banquero. Faltaba poco para que los precios de los inmuebles tocaran techo —lo hicieron en septiembre de 2006— y comenzara a

desinflarse la burbuja. Blesa no percibió que llegaba la tormenta. Le sorprendió con todas las velas desplegadas.

En 2005 los préstamos hipotecarios de la caja crecieron un 32 por ciento. Al año siguiente otro 30 por ciento más. Esas cifras se quedan pequeñas comparadas con el incremento de los créditos a promotores inmobiliarios: un 55 por ciento solo en 2006, según los informes de Inspección del Banco de España. La información pública que facilitaba Caja Madrid —al igual que el 90 por ciento de las cajas— no desglosaba el tipo de créditos. Esa falta de transparencia facilitó la impunidad de los gestores, que se resistieron a corregir ese problema.

La caída de los tipos de interés pinchó la rentabilidad de esos préstamos. Blesa optó por generar grandes volúmenes de negocio, como tantas entidades en esa situación, y optó por preservar todo tipo de clientes: buenos, regulares y, sobre todo, malos. Incurrió en la espiral negativa descrita por Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander, un experto en reflotar bancos: “Las entidades mueren por crecer demasiado en los malos tiempos y quedarse con lo peor del mercado”.

Los bajos tipos de interés derivados de la llegada del euro acentuaron los problemas crónicos de la entidad: falta de ingresos y baja rentabilidad. Esta situación, combinada con la necesidad de sanear las cuentas debido a la creciente morosidad, contribuiría años después a hundir Bankia. Caja Madrid siempre ha sido una entidad barata para sus clientes, un lujo que podía permitirse porque tenía la banca mayorista y una tesorería con grandes réditos, además de dos grandes “pelotazos” en bolsa que le arreglaron la cuenta de resultados durante cinco años: la participación en Telefónica y la compra del 10 por ciento de Endesa. Solo con esta última participación ganó 2.800 millones en plusvalías, el beneficio medio de tres años.

Esa división de tesorería y banca mayorista fue muy activa y rentable. Bajo el mando de Carlos Vela, director general de esta área, tesorería llegó a acumular una cartera de casi 50.000 millones en los años de bonanza. Sus subordinados recuerdan a Vela como un tipo arriesgado que destinó buena parte de ese dinero a productos sofisticados, algunos subprime y carteras de créditos

dudosos de multitud de países que ofrecían alta rentabilidad. El problema es que la cartera estaba financiada con el Euribor a un año y los vencimientos de los activos eran a diez años. Cuando se cerraron los mercados de crédito, empezaron los atascos: la rentabilidad del negocio voló. Otro quebradero de cabeza para Caja Madrid.

“En aquellos años, las operaciones financieras y de tesorería daban más beneficios que la red de oficinas. En la época de Blesa, a las sucursales se les pedía volumen de negocio. Durante diez años fue bien, pero cuando llegó la crisis esta estrategia significó morosidad”, dice un veterano ejecutivo de la casa. El dinero llegaba a Caja Madrid pero por vías extraordinarias: la tesorería y las participaciones bursátiles. Eso tuvo un efecto estupefaciente en el negocio ordinario, donde se relajaron los controles del riesgo comercial y sobre los gastos de personal y generales. Cuando las dos vacas lecheras extraordinarias se secaron, la caja del osito verde se convirtió en una máquina de gastar mucho e ingresar poco.

Primer informe premonitorio

Los inspectores del Banco de España detectaron las averías de Caja Madrid en 2006. El informe que redactaron entonces fue el primer aperitivo serio que encontraron el gobernador Miguel Fernández Ordoñez y su director de Supervisión, Javier Aríztegui, nada más aterrizar en el Banco de España. La supervisión escribió frases preocupantes, sobre todo para alguien como Ordóñez, que había anticipado el pinchazo de la burbuja y era consciente de que la fiesta se había acabado. En 2003, tres años antes, en un artículo en El País, aseguró que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, negaba la burbuja “por el miedo con que cualquier responsable de Economía ve acercarse el final de un modelo de crecimiento basado en el boom inmobiliario”. Si en 2003 se estaba agotando el modelo, en 2006 tenía que estar muerto.

Lo primero que leyó Ordóñez en los documentos oficiales confirmó

sus malos presagios. “El mercado hipotecario (crédito vivienda y promotor) ha sido claramente el motor de la fuerte expansión crediticia de Caja Madrid, representando el 84 por ciento del crecimiento neto del riesgo total entre enero 2005 y marzo 2006”, explicaban los inspectores. Los informes del Banco de España alertaron de que el riesgo era excesivo desde 2003 porque la caja concedía préstamos de más del 80 por ciento del valor de tasación. Además, la inspección señaló el peligro de que buena parte de esas hipotecas fueran captadas por Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), es decir, mediadores, que facturaban unos 1.000 millones mensuales, sobre todo entre inmigrantes. Caja Madrid llegó a ser la entidad líder en este segmento “que tiene un futuro prometedor”, como dijo Blesa en una ocasión. La segunda caja de España más relevante en estos dos negocios (ladrillos e inmigrantes) era… Bancaja. La fusión de ambas en 2010 creó un monstruo inmanejable. Para más inri, Caja Madrid había suprimido desde 2006 el objetivo de morosidad de entre las obligaciones de la red comercial. Ancha es Castilla, pensaron. Así se fueron enterrando las minas que después pisaría Rodrigo Rato.

El Banco de España también alertó de la “creciente dependencia de los mercados mayoristas para financiar su actividad crediticia”, aunque no se sabe si el supervisor tomó medidas para atajar esta subordinación tan grave. El supervisor añadió en su informe que esta situación le “preocupaba en términos de impactos futuros” en el sistema financiero. Inquietante y premonitorio.

La gravedad de esas afirmaciones motivó que el director general de Supervisión, Javier Aríztegui, le enviara una carta a Miguel Blesa; fechada el 29 de diciembre de 2006, en ella exigía a la entidad que reclasificara como “bajo vigilancia” un volumen de 9.171 millones de euros en créditos que Caja Madrid consideraba fuera de sospecha. También le advirtió que prestara especial atención a la financiación concedida a promotores y a las características de la cartera hipotecaria. Caja Madrid no varió su rumbo. Siguió arriesgando sin importarle nada más que la rentabilidad a corto plazo que obtenía.

Año 2008: llega la crisis y la caja no está preparada

En 2007 la vida siguió plácidamente en la Torre Kio de la madrileña Plaza de Castilla gracias al maná que supuso la venta del 10 por ciento de Endesa. El año siguiente, sin embargo, traería a dos visitantes desagradables que nadie había llamado: la crisis financiera y a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, que inició sus primeros ataques para colocar a su principal colaborador, Ignacio González, en el lugar de Miguel Blesa.

En ese año 2008 la caja empezó a reconocer sus problemas. La Memoria Anual los recoge: “El intenso ajuste económico y la menor expansión del crédito han propiciado un incremento de los niveles de morosidad que han repuntado hasta el 4,87 por ciento. Conforme a su tradicional política de prudencia la cobertura ha superado en más de 525 millones a la pérdida esperada según los modelos internos de evaluación del riesgo de crédito aprobados por el Banco de España”. Los “modelos internos” no se adecuaron a la realidad y, al siguiente año, la tasa de mora se duplicó y subió al 8,4 por ciento. En 2005 ese ratio era del… 0,31 por ciento.

Sin embargo, el consejo de administración de Caja Madrid estaba más preocupado por las luchas por el poder que por corregir los defectos advertidos por el Banco de España. Según las actas de los consejos, en 2008 y 2009 los principales debates se circunscribían al proceso electoral que acabaría con la presidencia de Miguel Blesa unos años después. Críticas a la injerencia del Gobierno de Esperanza Aguirre o peticiones de prudencia frente a su actitud; solicitudes de fidelidad en torno al presidente; preocupación por las continuas filtraciones del contenido de las reuniones a la prensa… José Manuel Fernández Norniella, entonces uno de los consejeros y luego mano derecha de Rato, llegó a implorar “que no salga de estas paredes” lo hablado en un consejo en 2008.

Además del desgaste de la guerra por la presidencia, la entidad madrileña continuaba con su maquinaria comercial centrada en el negocio inmobiliario, incrementando el subprime español sin freno.

Blesa explicaba que sus guerras solo afectaban a la planta 27 del rascacielos y que el resto trabajaba con normalidad. No era cierto. La dirección comercial y de negocio de Caja Madrid soltaron los mandos y fueron al negocio fácil: promotores e hipotecas.

Así se fueron obviando los deberes marcados por el supervisor, actitud que no ocasionó ninguna penalización conocida.

El 20 de julio de 2009 llegó otro informe de inspección. Venía plagado de luces rojas de alarma. Habían pasado tres años desde el informe anterior y la entidad financiera estaba mucho más contaminada de activos tóxicos. Quizá ya irremediablemente inundada de basura inmobiliaria. En ese informe el Banco de España era mucho más duro. Ya había caído la CCM y empezaba a cundir la sospecha de que otras muchas entidades estaban en una situación similar por el derrumbe del ladrillo. El informe fue una crítica al corazón del negocio de Caja Madrid: la entidad no analizaba bien la capacidad de pago de sus clientes, por lo que concedía créditos a "personas sin ingresos regulares o con sueldos bajos y, por tanto, con poco excedente para vivir". El Banco de España pronosticó que la crisis económica, el aumento del paro y la caída de los precios inmobiliarios y de la economía hacían prever que era "imposible" que ese tipo de cliente afrontara la devolución del pago.

El informe contenía dos detalles más que, en cualquier entidad, hubieran provocado la dimisión de algún responsable, cosa que no ocurrió en Caja Madrid. Uno: en un 17 por ciento de los créditos analizados el valor del préstamo era el cien por cien de los ingresos del cliente. Así es difícil pagar. Dos: la deuda pendiente en muchos casos será "muy superior" al valor real de la vivienda que la garantiza, lo que generará "mayores incentivos a dejar de pagar la hipoteca". También constataba la intención de un gran número de clientes de entregar la vivienda como dación en pago. Por último, insistía, las adquisiciones de activos a promotores desbordaban "completamente las previsiones, constituyendo una política de huida hacia delante para dotar de viabilidad provisional a los afectados". Una vez más, en los informes no consta que el supervisor, además de advertir los problemas, tomara medidas efectivas para cambiar las malas prácticas que los ocasionaban.

La cúpula de Caja Madrid estaba llevando la entidad a ninguna parte; buscaba una rentabilidad que ya no existía en el mercado. Entretanto, Esperanza Aguirre llevaba un año lanzando ataques contra Blesa. Nunca ha habido un episodio tan escandaloso de acoso y derribo de un presidente de una caja como el protagonizado por la "lideresa" madrileña. El episodio del desalojo de Vilarasau de la presidencia de La Caixa es un juego entre caballeros comparado con la crudeza de este asedio. En el fragor del combate por conquistar uno a uno los puestos del consejo, como una batalla casa por casa, Aguirre llegó a decir aquella célebre frase que captó un micrófono que alguien no había desconectado: "Le hemos dado un puesto a Izquierda Unida y se lo hemos quitado al hijo puta". Con este delicado calificativo se refería a su compañero de partido y alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que apoyaba a Rato.

El PP de Madrid también modificó la ley de cajas a voluntad de Aguirre, estrategia con la que demostró cuál era su concepto de la independencia de los órganos de gobierno de una entidad. Aguirre estaba empeñada en colocar a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en lugar de Blesa. González es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico superior del Ayuntamiento de Madrid desde 1984. Su trayectoria profesional ha estado completamente vinculada a la Administración pública. Jamás ha dirigido una empresa, por pequeña que fuera. Por desgracia, el suyo no es un caso extraño en el mundo de los directivos de cajas, pero tampoco encajaría como el gestor adecuado para pilotar una de las cajas más grandes del país —192.000 millones de euros en activos y 15.260 empleados—, aquejada de enormes dificultades y en un entorno económico deprimido.

La tensión había llegado a tal extremo a fines de 2009 que Juan Ramón Quintás abandonó el diplomático lenguaje propio de su cargo y denunció la situación públicamente. "Es el acto de intervencionismo político más descarado que recuerdo. No es que sea lamentable, es que es esperpéntico", afirmó, al tiempo que instaba a Aguirre a "acatar y cumplir las leyes". Morteros de gran calibre. El Banco de España seguía callado. En la institución dicen que mediaron en los pasillos para evitar la llegada de González, pero se lo tomaron con calma. Por parte del gobernador no hubo ni

un solo pronunciamiento público decisivo. Como demuestran los informes de la Inspección, el deterioro de la entidad afectaba a su solvencia y una de las misiones del supervisor es preservarla, por lo que no parece muy complicado que se hubieran encontrado motivos para tomar cartas en el asunto.

En la única entrevista que Blesa concedió tras su marcha, afirmó a El País la razón de sus enfrentamientos con la presidenta de Madrid: "Aguirre no entendió que fuera independiente". Así de claro. A la pregunta de si Ignacio González era buen candidato para sustituirle, respondió: "Creo que Rato es la mejor elección". Y le dio un consejo a Rato que fue premonitorio y fatídico: "Que haga lo que yo hubiera deseado. Una gran fusión".

En el Banco de España también había muchos altos ejecutivos que creían que era urgente retirar a Blesa. No porque la institución estuviera a favor de Ignacio González, que no lo estaba, sino porque desde principios de 2009 coincidía en que el abogado amigo de Aznar había llevado a la caja a un callejón peligroso y sin salida. Ante este panorama, es lógico que la aparición del candidato Rodrigo Rato les pareciera a las autoridades una bendición para acabar con los problemas. Rajoy no tuvo más remedio que tomar partido y frenar a Esperanza Aguirre. Aparentemente, el peso político y económico de Rato era un valor adecuado para llevar la presidencia no ejecutiva de Caja Madrid con la ayuda de un consejero delegado experto que se encargara de ir tapando agujeros. En el PP pensaban que Rato era el único candidato que podía oponerse a Ignacio González sin ser derribado por Esperanza Aguirre. Rato todavía era una figura en el PP de Madrid y la contestación era imposible, ni siquiera para Aguirre. Por eso Rato, cuando llegó su final en mayo de 2012, dimitió ante Rajoy —y no ante el gobernador del Banco de España— y le dolió especialmente que el presidente del Gobierno se pusiera del lado de Luis de Guindos, un ministro que no es un jerarca del partido, sino un independiente.

Rato llegaba con un buen bagaje bancario en su cartera. Tras abandonar el FMI, fue consejero internacional de La Caixa y del Santander al mismo tiempo, un récord difícil de superar, y después trabajó para el banco de inversión Lazard desde Londres y Madrid.

En estas tres ocupaciones, su aporte más relevante fue su visión global de la economía, así como la agenda de altos cargos internacionales que conocía tras su paso por el FMI entre el 2004 y el 2007. Su participación en Lazard se circunscribió, sobre todo, según ejecutivos de esta firma, a apoyar las grandes operaciones de asesoramiento a diversos Gobiernos para refinanciar su deuda y a contactar con las autoridades reguladoras para resolver los problemas que surgían.

Nunca se ha sabido por qué Rato dejó su puesto en Washington a mitad de mandato. Alberto Recarte, hombre cercano a él, que fue consejero de Caja Madrid y fundador del grupo mediático conservador Libertad Digital, aseguró a la agencia Bloomberg que "Rato estaba completamente aburrido" en el FMI.

Llegado a este punto me gustaría hacer un paréntesis para comentar la actitud de los diferentes Gobiernos ante los nombramientos en los altos cargos internacionales. Con la marcha de Rato, España perdió, probablemente para muchos años, la posibilidad de ocupar un puesto tan relevante como ese. Rato tuvo el apoyo de Zapatero en 2004. El mismo impulso que recibió José Manuel González Páramo, cercano al PP, para ser consejero en la comisión ejecutiva del BCE. Sin embargo, a principios de 2012, Rajoy no quiso apoyar a José Manuel Campa, profesor del IESE y secretario de Estado de Economía con Elena Salgado, para sustituir a Páramo en el BCE. El Gobierno propuso a Antonio Sáenz de Vicuña, letrado jefe del BCE que había tenido encontronazos con alemanes y franceses. Vicuña no daba el perfil, pues en el comité ejecutivo no hay ningún abogado. Los europeos dejaron caer que apostaban por Campa. El Ejecutivo se mantuvo firme en su posición y España perdió el puesto. Ahora lo ocupa el exgobernador del Banco Central de Luxemburgo, pequeño país que algunas administraciones consideran paraíso fiscal.

Páramo tampoco fue finalmente el elegido como gobernador del Banco de España, pese a que estaba en todas las quinielas y era el candidato favorito del BCE por su conocimiento exhaustivo de la legislación bancaria europea y sus contactos en el sistema financiero español. Parecía el idóneo, pero el nombrado fue Luis Linde, un alto funcionario del Banco de España especializado en temas de política

internacional que desde hacía quince años estaba prácticamente fuera de la institución. Bajo el mandato de Luis Ángel Rojo, Linde se quedó sin función debido a la cesión de la política monetaria a Bruselas tras la llegada del euro. Se ocupaba de la Balanza de Pagos y mercados exteriores. En el año 2000, Jaime Caruana le quitó la categoría de director general —y las ventajas incorporadas al cargo: chófer y coche, despacho y equipo; se quedó con temas colaterales como "Riesgo País". Ordóñez le convirtió en asesor internacional del Banco de España y director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con sede en Washington. Cuando fue llamado por Luis de Guindos para el cargo de gobernador del Banco de España tenía 67 años y llevaba cuatro meses jubilado, fuera de la institución.

Fuentes financieras aseguran que Páramo no fue nombrado gobernador porque en el PP no se le consideraba un "hombre fiel" en el PP, ya que, en agosto de 2011, no pasó a Génova la carta que el BCE envió a Zapatero con las recomendaciones y exigencias de reformas económicas y recortes sociales que debía realizar. Uno de los firmantes de la carta, por ser responsable del Banco de España, fue el propio Ordóñez, que tampoco envió la misiva al PP, lo que agrió más las relaciones entre el Gobierno de Rajoy y el gobernador.

Duro aterrizaje

Rato aterrizó en Caja Madrid el 30 de enero de 2010 con todas las bombas perfectamente repartidas por el balance. En el mercado siempre se ha dado por supuesto que, con sus amistades financieras, era imposible que no conociera el verdadero estado de las cuentas de Caja Madrid cuando tomó el despacho del presidente. En la comisión del Congreso de los Diputados se le preguntó si sabía dónde llegaba.

—Me pregunta si conocía la situación de Caja Madrid. Cuando llegué tenía una necesidad de capital de unos

2.000 millones. ¿Por qué unas cajas están bien y otras mal? No son por decisiones tomadas en 2010, 2011 y 2012. Caja Madrid, y después el grupo BFA-Bankia, tuvo que provisionar 24.000 millones en total por las inversiones inmobiliarias y las mayores exigencias de capital.

Este fue su argumento. El desastre era herencia del pasado (Blesa) y de las nuevas leyes que había elaborado Guindos. Nada dijo sobre su actuación durante los dos años y cinco meses en los que estuvo al frente de la entidad.

Desde que llegó sabía que su misión no iba a ser un camino de rosas. Otra cosa es que no calculara bien el tamaño del agujero de la entidad o que pensara, como el Banco de España, que poco a poco, con la supuesta mejora de la economía, todo se arreglaría. Es más, Rato arrancó con medidas drásticas. En la primera cuenta de resultados trimestral presentada bajo su mandato hundió el beneficio un 80 por ciento para sanear la entidad.

Este saneamiento se tomó después de que Miguel Blesa hubiera cerrado el ejercicio 2009 con un beneficio de 265,8 millones, un 68,4 por ciento menos, debido también a provisiones. Pero todo fue insuficiente. “Me hubiera gustado presentar otro resultado”, dijo Blesa en su despedida ante los medios, “pero las circunstancias y las indicaciones del Banco de España mandan”; lo comentó con la resignación de alguien que no sabía la que se venía encima o no lo quería reconocer en público.

El aterrizaje de Rato fue duro y difícil. Entró en una entidad con grandes problemas de gestión y de viabilidad por su afán de crecimiento en el sector inmobiliario, escaso ímpetu comercial para los productos de clientes, dependiente de los ingresos de una banca de inversión menguante, que apenas generaba ingresos y donde algunos ejecutivos negociaban su salida porque veían llegar el final. Todo el mercado esperaba un fichaje estrella. No llegó. Llamó a José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado del BBVA, que vivía un retiro dorado dedicándose a su fundación. Disponía de una pensión de más de 60 millones de euros después de treinta años de

trabajo en la cúpula del BBVA, de la que salió por voluntad del presidente, Francisco González. Goirigolzarri conocía bien los problemas de Caja Madrid. Le dijo que no.

Poco después de recibir esa oferta, el exejecutivo del BBVA escribió en su blog: “Las fusiones actuales de cajas presentan, en algunos casos, inmensas incógnitas sobre su viabilidad futura. Es necesario contar con una estructura de banco entendible y una gobernanza profesionalizada. Y ello conlleva Consejos que no se definan por cuotas políticas de poder (como estamos viendo en muchos casos) y una dirección en la que los organigramas de acogida no deben tener cabida, dada la urgencia de la situación”. Con este comentario, Goirigolzarri apuntaba indirectamente los problemas que veía en Caja Madrid y en el proceso de fusión que tenía por delante.

Rato también llamó a Federico Outón, ex consejero delegado de Banesto y ejecutivo de raza del BBVA, que estaba prejubilado. El salario fue el problema. Luego lo intentó con Jacobo González-Robatto, director general financiero del Popular y antes responsable de Barclays España; tampoco le convenció.

Un ejecutivo que sí aceptó la llamada de Rato fue Luis Maldonado, procedente de PriceWaterhouseCoopers (PwC) y excolaborador de Rato en el FMI. Pero Maldonado carecía de experiencia financiera. Entró como director de gabinete, con categoría de director general adjunto, encargado de controlar el comité de dirección. También fichó a Miguel Crespo, con prestigio en el sector, como secretario general, cargo que había ejercido en ING Direct. Crespo había trabajado con Rato en el Ministerio de Economía y es el único que aún continúa en su puesto en Bankia. El cuarto escogido por Rato para este “sanedrín de poder”, como era conocido en la entidad, fue José Manuel Fernández Norniella, expresidente de las Cámaras de Comercio y consejero de la caja cuando llegó Rato. Norniella declaró en una ocasión que se consideraba “el más fiel escudero de Rato”. El escudero fue elevado a vicepresidente primero con un salario fijo de 510.000 euros, que con los pluses superó los 700.000 euros. “No se movía un papel en Bankia sin que Norniella lo supiera. Fue la sombra de Rato y controlaba todos sus movimientos”, dicen algunos consejeros.

Con este equipo llevó Rato los temas más importantes de la entidad.

Ninguno era experto en gestión de banca comercial y Caja Madrid —y luego Bankia, donde se mantuvo el sanedrín— era una caja de ahorros, con créditos, depósitos y libretas. Pero ellos eran los únicos que sabían de verdad lo que estaba pasando. Ildefonso Sánchez Barcoj, responsable del negocio durante años; Francisco Verdú, el consejero delegado que Rato nombró en mayo de 2011, y los miembros de la comisión ejecutiva, así como el consejo de administración, no eran consultados para la toma de decisiones relevantes.

Este particular estilo de gestión, con un puente de mando en el que no había nadie de Caja Madrid ni de Bancaja ni, sobre todo, un peso pesado financiero, fue uno de los errores más graves de Rato. Le impidió corregir el rumbo comercial de la entidad y creó una gran desafección de los ejecutivos y consejeros de la entidad respecto al presidente.

Mucha política y poca gestión

El exvicepresidente de Aznar dedicó su tiempo a pacificar el Consejo de Administración, donde los partidos y sindicatos estaban revueltos tras las batallas vividas. Rato, hábil en este terreno, estableció una red de pactos para evitar las broncas del pasado, con cesiones a unos y otros, así como incrementos de remuneraciones. Desde la caja nunca dejó de hacer política. Era habitual verlo en el balcón de la madrileña calle Génova, la sede nacional del PP, después de los actos electorales. También acudía a los mítines de partido en fin de semana, donde se colocaba en la primera fila. El Consejo de Administración le pidió que no se significara tanto políticamente, ya que representaba a una entidad que no debía adscribirse a ningún partido. Su respuesta fue que él, en su fin de semana, tenía la misma libertad que cualquier ciudadano para estar en un sitio u otro.

Esta actitud alimentó las sospechas de que Caja Madrid era solo un trampolín para regresar a la política si Mariano Rajoy no aguantaba

la travesía del desierto de la crisis. Sin embargo, fueron Caja Madrid y Bankia las que no soportaron la recesión. Su caída se llevó por delante el prestigio de Rato. Otra vez fue Alberto Recarte el que definió la situación cuando se le preguntó en 2011 por el tipo de autoridad que ejercía el presidente del grupo financiero: "Rato, sobre todo, es un político. Y gracias a esta cualidad podrá llevar adelante las fusiones que forman Bankia".

"No se le veía con la cabeza en el negocio del día a día. Estaba más en las grandes estrategias del grupo y en la política. Pronto se preocupó de buscar entidades con las que fusionarse, pero la caja estaba en manos de los mismos gestores que la habían llevado a esa difícil situación", comenta un ejecutivo competidor que le conoce bien. "En 2010, cuando nos comentaba los planes que tenía para la entidad, le dijimos que acelerara porque la situación era muy mala y debía tomar medidas con más urgencia", añade otro directivo de la competencia.

Rato negoció con las comunidades autónomas y consiguió cerrar el 10 de junio de 2010 el principio de acuerdo entre Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja para formar un SIP, también conocido como "fusión fría". A finales de 2010, se realizaron las primeras pruebas de estrés de la Autoridad Bancaria Europea. Concluyeron que el grupo necesitaba capital, y el FROB le inyectó 4.465 millones. El 3 de diciembre se constituyó el banco donde volcaron todo el negocio financiero de cada caja, aunque cerraron las cuentas por separado. Este acuerdo fue la sentencia de muerte del grupo: no eran mimbres para una buena cesta. La pésima gestión interna, el peso del ladrillo y la segunda recesión económica de 2011 acabarían rompiéndolo todo.

Las previsiones de Caja Madrid para 2010 eran ganar 300 millones (ese año, La Caixa ganó seis veces más, unos 1.800 millones). Era un planteamiento teórico. Cuando Rato cerró su primer ejercicio tuvo que cargar 4.000 millones de saneamientos contra capital, que hubieran sido pérdidas en la cuenta de resultados. Lo hizo en silencio y con el permiso del Banco de España, que quería evitar escándalos. Otra vez el supervisor optó por tapar la situación, como si ocultar los problemas de las entidades fuera la medicina que

pudiera resolverlos. Tras las reducciones de capital, Caja Madrid empezó a volar con plomo en las alas. La falta de capital terminó matando a Bankia. Rato empezó el 2010 sin piloto y acabó el año con un golpe mortal en las alas.

A raíz del conocimiento detallado de la debilidad de Caja Madrid, Rato tomó la decisión de "no reconocer" los derechos de cobro del plan de incentivos a largo plazo que reclamaba un grupo de diez exejecutivos de la época de Blesa. El montante ascendía a 25 millones de euros. El argumento oficial fue que, antes de entregar ese dinero, Bankia debía devolver los 4.465 millones que había recibido del Estado. El Estado —los ciudadanos— ha asumido esta cantidad como una pérdida. Hasta el momento, las reclamaciones de estos ejecutivos no han dado ningún resultado. Salvo para Matías Amat, un ejecutivo al que Rato mantuvo en su cargo como responsable de las participaciones industriales que tuvo la habilidad de acogerse a un ERE y cobrar 6,16 millones de euros brutos en concepto de indemnización y pensión. Ese sí se lo ha llevado.

'Es necesario un saneamiento adicional'

Las deficiencias de Caja Madrid se explican en el informe de la Inspección del Banco de España que incluye la gestión de Rato. Fue un estudio de la entidad entre marzo de 2009 y el 30 de septiembre de 2010. Es muy importante la fecha de cierre, 30 de septiembre, porque significa que ya se había firmado el acuerdo de fusión de las siete cajas. En este documento acusan a Caja Madrid de clasificar mal los créditos, es decir, de tapar la morosidad, "por lo que es necesario un saneamiento adicional". Tras la revisión de las carteras de créditos a promotores, el supervisor afirma con crudeza que se están refinanciando créditos para evitar que aparezcan como impagados. Las tasaciones eran "irreales e irregulares", según los inspectores, que imputaron a la entidad la carencia de métodos adecuados para analizar el riesgo de los clientes, por lo que concedía créditos a personas que no podían devolverlos. Caja Madrid tenía una docena de inspectores empotrados en la entidad,

es decir, estaban permanentemente en la caja y conocían perfectamente los métodos de trabajo. Otra cuestión es si el supervisor tomó medidas para rectificar la situación y evitar el deterioro del balance de la entidad madrileña.

La pregunta, aquí, es: ¿por qué dejó el Banco de España que siguiera adelante la fusión de las siete cajas con estos antecedentes? La justificación que escribe el propio supervisor, de vital importancia para entender su concepción de cómo se debe hacer la reestructuración bancaria, figuraba en el informe de Inspección: "Dada la escasa generación de recursos prevista en 2010 y 2011 para cubrir las necesidades de saneamientos de insolvencias, se consideró necesaria la participación de Caja Madrid en un proceso de integración con objeto de evitar el riesgo de entrar en pérdidas en algunos ejercicios". También se dice que, con la unión, las cajas podrán sanear contra sus recursos propios en lugar de hacerlo contra la cuenta de resultados.

Este es el planteamiento seguido por el gobernador y su segundo, Javier Aríztegui, durante toda la crisis y es uno de los principales factores por los que esta se ha alargado sin remedio y ya va camino de cumplir cuatro años sin que se vea su final. Lo que dice Ordóñez en ese papel es que, como Caja Madrid no gana lo suficiente, debe unirse a otras para obtener resultados. ¿La unieron con alguna muy rentable? No, todo lo contrario. La fusionaron con Bancaja, que estaba en una situación peor. El resultado fue la creación de una entidad sistémica inviable donde antes no la había. "Nunca debía haberse fusionado. De dos bancos malos nunca sale uno bueno", señala Luis Garicano, de la London School of Economics y consejero de Liberbank. Otros políticos de comunidades autónomas imitaron el modelo y crearon Novagalicia Banco y CatalunyaBanc, con el mismo resultado.

Este es un punto de importancia capital para entender no solo la crisis de Bankia, sino también la de todo el sistema financiero, por las terribles consecuencias que tuvo esta fusión en todo el sector y en la economía en su conjunto. ¿Impulsó Rato una fusión política para crear una gran caja del PP? El expresidente de Bankia se defendió de esta acusación en el Congreso de los Diputados con tres argumentos. El primero, que lo hizo por indicación de Ordóñez —

algo que es cierto—. El segundo, que él no sabía que Bancaja tuviera tantos problemas. Esto es un asunto de su responsabilidad, aunque parece que no vio todos los informes de la Inspección donde se describían los mayores pecados. El tercer argumento fue que, si se hubiera recuperado la economía, las posibilidades del grupo hubieran sido mayores.

Antes de la fusión, Rato había pedido un informe previo a Analistas Financieros Internacionales (AFI) y otro a Deloitte. Que un auditor realice un análisis en profundidad sobre unas entidades que audita antes de una fusión es, cuando menos, chocante. ¿Qué puede decir? ¿Que están peor de lo que refleja su informe de auditoría firmado sin salvedades? Obviamente no. Deloitte dio el visto bueno, aunque luego pasó lo que pasó. El resultado de ambos estudios, aseguró Rato en el Congreso en julio de 2012, fue que la unión de Caja Madrid y Bancaja "creaba sinergias y hacía más rentable el negocio de las entidades. Nunca tuve razones políticas ni nadie me dio motivos políticos para unirme a Bancaja. El Banco de España nos conminó a ir a una fusión y teníamos garantías suficientes ya que el FROB [con los 4.465 millones del Estado] nos cubría la pérdida esperada".

Los parlamentarios le siguieron preguntando a Rato por las presiones que pudo recibir para llevar adelante esta operación. Él describió con detalles cómo se gestó:

—El 2 de junio de 2010, el gobernador del Banco de España, que conocía con detalle la situación real de todas las cajas y de Caja Madrid, me citó con urgencia a su despacho, donde también estaban José Luis Olivas, presidente de Bancaja, y el subgobernador Aríztegui. Nos conminó a negociar los detalles de la fusión de inmediato.

Aquí Rato hizo un interesante reparto de responsabilidades, insistiendo en que el instigador de la operación fue el supervisor. Fue la única crítica a Ordóñez, quien dos días antes, el 24 de julio de 2012, había estado en el Congreso y no culpó a Rato de la crisis de Bankia. Sin embargo, cuando los diputados le preguntaron a

Ordóñez si fue una fusión “a punta de pistola”, como había dicho Esperanza Aguirre, el exgobernador aseguró:

—En el Banco de España no hay pistolas. Aquí no se fuerza a nadie. Hay un punto esencial en las fusiones, y es que antes de hacerlo se exige que las entidades realicen un examen previo, la due diligence, de aquellos con los que se unirán. Son ellos los que van a comprar y ellos los que deben mirar. La responsabilidad es de los gestores. Si creen que eso no va a seguir adelante, dice que no, como ya ha ocurrido en dos ocasiones.

Ordóñez devolvió la pelota al tejado de Rato: el que firma es el responsable.

Sin embargo, fuentes del Banco de España y exejecutivos de Bankia consideran que Ordóñez y Aríztegui “impusieron la unión. La amenaza para ambos era que si no se fusionaban no recibirían ayudas públicas y sin ellas no podían vivir”. Que Bancaja quedara suelta era un problema para el supervisor y no se le ocurrió otra manera de solucionarlo que fusionarla con Caja Madrid, que ya arrastraba dificultades desde 2006. ¿Conocía al detalle el Banco de España la situación de Caja Madrid, Bancaja y su filial, el Banco de Valencia? En opinión de las fuentes consultadas, de la entidad madrileña sí sabía bien su estado, mientras que la Inspección no había llegado a tanta profundidad en Bancaja. Del Banco de Valencia, un auténtico agujero negro, se sabía poco, por increíble que parezca. Según fuentes consultadas, la Inspección no detectó con precisión los gravísimos problemas del Banco de Valencia. Los funcionarios creen que no hubo voluntad política de llegar al final. Además, eran conscientes de que Bancaja aislada no tenía futuro. Para el supervisor era un problema relevante y se pensó que la fusión salvaría a las dos cajas heridas. Grave error.

Sobre el Banco de Valencia todo lo que se fue descubriendo con el tiempo era terrible. El problema iba más allá de la mala gestión. Cuando el FROB entró en la entidad percibió que se había saqueado. El fondo de rescate, según un informe pericial, acusa al

ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, de los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. También acusa a su socio Aurelio Izquierdo, ex director general del Banco de Valencia y ex director comercial de Bankia, de participar en los hechos supuestamente delictivos "a título lucrativo".

Según el FROB, ambos se aprovecharon del Banco de Valencia para realizar diversas operaciones financieras e inmobiliarias a través de sociedades instrumentales sin contar con la aprobación del Consejo de Administración. Tanto Parra como Izquierdo vendieron sus negocios inmobiliarios a un solo empresario, Eugenio Calabuig, presidente de Aguas de Valencia, accionista también de las dos sociedades en las que invirtieron a través de Izpa (Izquierdo-Parra): Capital Residencial y Casa Amiga Portugal. Los que han visto de cerca estas operaciones aseguran estar escandalizados ante la impunidad con la que se manejaban los directivos implicados, y confían en que los tribunales obren con firmeza para reponer el daño causado. El FROB les acusa de haber causado un daño a la entidad valorado en 137 millones de euros. Algunos ejecutivos creen incluso que José Luis Olivas no tenía un exhaustivo conocimiento de la situación del Banco de Valencia.

La consecuencia de esta falta de control sobre las dos entidades valencianas envenenó una fusión que nunca debió haberse producido. Si en junio de 2010, en lugar de impulsar esta operación, se hubiera intervenido Bancaja por su déficit de capital, probablemente se hubiera frenado la oleada de fusiones "políticas" que llegaron después: Novagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, las tres fracasadas. Se habrían buscado novios para las tres más débiles, Bancaja, Caixa Galicia ("probablemente la caja que peor estaba de toda España", afirman en la inspección) y Catalunya Caixa. No es casualidad que estas tres entidades suspendieran los test de estrés de 2010 y de 2011. Sin embargo, la reacción del supervisor y del Gobierno fue minimizar la realidad y destacar que "la mayoría del sector está sano". Esas entidades, que suspendían una y otra vez, acabaron desprestigiando a todas las demás y los inversores acabaron por no fiarse de los balances de ninguna.

¿A quién beneficiaba la fusión de Caja Madrid y Bancaja? Desde la

óptica de 2010, es decir, con optimismo en el futuro y sin poner el foco en la viabilidad financiera, si la unión hubiera sido un éxito habría favorecido al PP, a Rato y a Ordóñez. Si se prima el tamaño por encima de la rentabilidad, para el Partido Popular suponía la unión de dos pesos pesados de la política, Rato y Olivas, expresidente de la Generalitat, que se ponían al frente de una enorme entidad financiera. Bankia, con 320.000 millones en activos, se colocó en tercer lugar por detrás del BBVA y por delante de La Caixa. Para Rato, además de hacerle un "favor" al partido, suponía auparse a los primeros puestos de la elite financiera, con visibilidad internacional, y le permitía estar en primer plano político para lo que pudiera llegar, un plan que nunca abandonó. Rato se enorgulleció de pilotar "el tercer grupo financiero más grande de España", que había sobrepasado a La Caixa.

Para Ordóñez también tenía su lado positivo: encontrar una solución para Bancaja, la tercera entidad por tamaño. El experimento salió mal y, en consecuencia, el Partido Popular, Rato y Ordóñez perdieron su apuesta y deben afrontar las consecuencias del fiasco de Bankia.

Complicidad entre Rato y Ordóñez

Este cruce de intereses provocó el desastre final. Pero también tejió una curiosa relación entre Rato y Ordóñez. Esta es una de las claves del proceso. Según fuentes financieras con gran experiencia y conocimiento de ambos personajes, el exgobernador siempre mantuvo una buena relación con Rato, pese a la acidez de las críticas vertidas contra él en 2003. "En el fondo, los dos son políticos y se entienden perfectamente", resume un ejecutivo de un banco. "La relación era directa: Rato con Ordóñez, y viceversa. Cuando el gobernador tenía que resolver un asunto más complejo sobre Bankia —o sobre otra gran entidad— los trataba con Aríztegui y con el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello. A la comisión ejecutiva solo se presentaban los temas más institucionales que necesitan aprobación, como el visto

bueno a planes de recapitalización, y las decisiones de mucho calado. El día a día lo llevaban entre los tres".

La relación entre Rato y el supervisor empeoró a finales de 2010 y principios de 2011, a medida que iba conociendo mejor los números de Bancaja y el Banco de Valencia. Rato se sintió engañado por José Luis Olivas y por el gobernador. Creía que ambos habían camuflado los problemas de Bancaja y, sobre todo, de la filial, el Banco de Valencia. Desde ese momento, su objetivo fue doble: acabar con Olivas y que el Banco de España se quedara con el Banco de Valencia para aligerar la pesada carga que suponía para el grupo.

Consiguió ambas metas. En abril de 2011 el grupo se dividió en dos, al colocarse en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz, el negocio inmobiliario, es decir, todo el suelo y pisos invendibles, así como las participaciones industriales. El negocio bancario, más atractivo para los inversores, se dejó en Bankia para poder salir a bolsa. Esta operación marcó el devenir del grupo. Según Rato, la diseñó Deloitte para hacer atractiva la salida a bolsa y quizá lo consiguió. Fue buena a corto plazo y muy negativa a medio y largo. Como dice un ejecutivo experto en crisis bancarias, colocar la parte mala del negocio en la cabecera de un holding no supone aislarlo y, por lo tanto, tarde o temprano acaba contaminando al resto. La CNMV ha sido muy criticada por permitir que Bankia saliera a Bolsa. Julio Segura, presidente de la CNMV en aquel momento, se defiende: "Algunos nos critican diciendo que deberíamos haber sabido que las cuentas de la entidad no reflejaban su situación real. Era imposible saberlo porque el auditor nos dio todos los informes anuales sin ninguna salvedad. La responsabilidad de un posible engaño o error en la valoración de activos y pasivos es del auditor, y sobre los recursos propios las competencias son del Banco de España". Bastante claro.

Como veremos más adelante, la segregación entre BFA y Bankia para salir a bolsa hizo florecer el problema del Banco de Valencia, una entidad con 22.000 millones de activos, el 8 por ciento del grupo, pero con una gran cantidad de ladrillo y suelo a sus espaldas.

Tras la separación de Bankia y BFA, en abril de 2011, se filtró a los medios que la inspección del Banco de España había detectado un agujero de capital de varios cientos de millones. Algunos lo cifraron

en 400 millones. Bankia controlaba el 27 por ciento de las acciones de la entidad valenciana y el 38 por ciento de los derechos de voto. Por eso ejercía un control absoluto sobre sus gestores. Ante la falta de capital, Rato comunicó al consejo, donde se sientan un grupo de notables empresarios valencianos, que Bankia solo recapitalizaría al Banco de Valencia si ellos lo hacían en proporción a su participación. Para muchos fue un órdago, porque Rato era consciente de que los accionistas no iban a poner una cantidad tan grande de dinero en una entidad que se desplomaba en bolsa y cuyo futuro era, evidentemente, ninguno.

Con esta negativa, Rato se dirigió al Banco de España para explicar que Bankia no recapitalizaría el Banco de Valencia en solitario. Añadió otro argumento más convincente: si el Estado no se hacía cargo del Banco de Valencia, la salida a bolsa de Bankia, que ya estaba en marcha, se iría a la ruina. El Gobierno y todas las instituciones apoyaban la salida al parqué de Bankia —que se produjo en julio—. Se suponía que sería la solución para que España recuperara credibilidad en los mercados y se alejaran los fantasmas de que la banca necesitaba capital porque tenía problemas ocultos en sus balances.

El Banco de España aceptó la petición de asumir el futuro del Banco de Valencia. Contra todo pronóstico. Ha sido la primera vez en la historia financiera de España que una matriz bancaria no asume las consecuencias de la quiebra de su filial. Nunca antes había ocurrido algo igual, ni en la crisis del Hispano Americano con Bankunión (que acabó provocándole su quiebra), y denota el poder de influencia de Rato y el error cometido por el supervisor. Fuentes financieras aseguran que el Banco de España era ya reo de la oscura fusión donde se coló un podrido Banco de Valencia por la puerta de atrás. La entidad valenciana estaba en “inspección continuada”, que es un proceso no formal por el que los funcionarios del Banco de España van analizando aspectos de la entidad. Este procedimiento, que ya llevaba casi un año, “se congeló”, según fuentes del Banco de España. No se cerró la investigación, porque estaba abierta, sino que se paralizó temporalmente para que Bankia pasara el trámite de la salida a Bolsa.

A la vuelta del verano, cuando Bankia cotizaba con 350.000

accionistas, Olivas dimitió como presidente del Banco de Valencia antes de que el resultado de la inspección se hiciera público. Era el 21 de octubre. Rato aseguró que fue una decisión inadmisible que no se le había consultado. Le exigió a Olivas que abandonara también la vicepresidencia de Bankia, donde tenía un salario fijo de 700.000 euros. Un mes después, con presiones de todos lados, Olivas dejaba Bankia para refugiarse en Bancaja, una institución que solo administra la obra social. Rato se había quitado dos problemas a la vez.

Como temía Olivas, el resultado de la inspección fue tan grave que, el 21 de noviembre de 2011, el Banco de España intervino el Banco de Valencia, sometido a un saqueo, según la acusación del FROB. El fondo de rescate se quedó como administrador de la entidad financiera y tuvo que inyectar 1.000 millones de capital y una línea de liquidez de 2.000 millones para atender las fuertes retiradas de depósitos por ventanilla. Fue la cuarta entidad intervenida tras Caja Castilla La Mancha, Cajasur y Caja del Mediterráneo. Al igual que en otras cajas, el Banco de España le permitió publicar un beneficio de 16,7 millones en junio para decir luego, en noviembre, que el banco estaba quebrado.

Las graves complicaciones de la salida a bolsa

En marzo de 2011 Bankia pidió 4.465 millones al fondo de rescate (FROB) e inició el recorte de gastos, oficinas y plantilla que exigía la ayuda estatal. Con este refuerzo, preparó la salida bolsa, considerada, a toro pasado, un gran error de Rato por dos motivos. En primer lugar porque rompió el principio de consolidación fiscal, un aspecto contable que suponía que la matriz BFA no tendría créditos fiscales de casi 3.000 millones. En segundo lugar porque magnificó sus problemas al colocar las acciones entre 350.000 personas. De hecho, el daño a los accionistas es una de las causas principales por las que se ha abierto el juicio. Sin embargo, en el

verano de 2011, todos animaban a Bankia a cotizar: Gobierno, supervisor, Bruselas, medios de comunicación… Se vendió como la gran prueba de fuego para enderezar la economía española.

La espoleta que obligó a Bankia a ir a bolsa fue la reforma financiera socialista, que exigía menos capital a las cajas si están cotizadas. Sin embargo, en Rodrigo Rato, el gran artífice, libro escrito por la periodista Carmen Gurruchaga y, según cuenta la autora, basado en "sinceras conversaciones" entre ambos, se explica otra teoría. Rato estaba convencido de que Zapatero quería perjudicarle por ser del PP. "Reúne a su comité de dirección —dice el libro— y le informa de que no va a esperar a las exigencias del Gobierno, que ha optado por ser independiente saliendo a bolsa, aunque admite que lo tenía previsto para más tarde. Rato se la jugaba porque la entidad estaba todavía en proceso de fusión".

Se la jugó y perdió. El estreno bursátil de Bankia fue forzado y ruinoso económicamente. Antoni Serra Ramoneda, expresidente de Caixa Catalunya y autor del libro Los errores de las cajas, dice: "El Gobierno presionó a los pesos pesados de la economía para que compraran títulos de Bankia para evitar un fracaso para la imagen exterior de España. Y lo hicieron". Es cierto. Incluso el Banco de España llamó a las entidades para que compraran acciones que luego vendieron tan rápido como pudieron para minimizar las pérdidas. Solo hubo un 4,5 por ciento de participación extranjera, pese a la red de contactos internacionales del ex director gerente del FMI.

Un mes antes de la salida a bolsa, cuando todo el proyecto (y todos los problemas) ya estaba cocinado, Rato fichó a Francisco Verdú, vicepresidente no ejecutivo de la Banca March, una entidad veinte veces más pequeña que Bankia. Antes, Verdú había trabajado en Argentaria.

La cotización de Bankia se mantenía a duras penas entre las compras de JPMorgan y la autocartera de la entidad, a pesar de que las acciones se vendieron con un descuento del 70 por ciento sobre el valor en libros de la entidad. Los problemas de Bankia cada vez eran mayores. En agosto entró en escena la gran crisis de la deuda soberana y saltaron por los aires todos los pronósticos de crecimiento económico. La ligera recuperación vivida se transformó

en la segunda recesión.

Llegaron las elecciones del 20 de noviembre de 2011. El PP las ganó por mayoría absoluta. Luis de Guindos, que había sido secretario de Estado de Economía con Rato, fue nombrado ministro de Economía. La relación personal entre ambos dista mucho de ser amistosa. No es el único a quien el fuerte carácter de Rato ha dejado un regusto amargo. En diciembre, Guindos estaba convencido de que el sistema financiero no era uno de los grandes problemas de España. En privado se refería a este tema como "los banquitos, que los vamos a ir fusionando y saldrán adelante". Bankia, afirmó al final de 2011, "se fusionará con La Caixa", pero no fue así.

Antes de ser ministro, Guindos había comentado que Bankia no tenía futuro por sí sola, por lo que necesitaba una operación que, por su tamaño, únicamente podía ser con La Caixa, el BBVA o el Santander. Los dos bancos pusieron pegas, así que la elegida fue la entidad dirigida por Isidro Fainé.

Rato se negó. A finales de enero de 2012 rompió definitivamente un posible acuerdo de fusión con la caja catalana. Para La Caixa era una operación añorada desde hacía más de dos décadas; suponía un salto cualitativo que la situaba como claro líder en España —siempre y cuando Bankia no se llevara por delante a La Caixa, algo que, visto lo visto, no era tan descabellado—. Pese al apoyo del presidente del Gobierno, Rato no vio clara su posición de mando en la fusión y la rechazó. Fue todo un órdago que, a la postre, le costó la cabeza. La Caixa le prometió alternancias en el poder: Fainé, nacido en 1942, es siete años mayor que Rato, por lo que empezaría él como presidente de la fusión para luego cederle el mando al madrileño. Rato no vio claro que pudiera llegar a ganar el plácet del Gobierno de la Generalitat, controlado por CiU, cuya actual onda independentista hubiera sido una bomba si la unión se hubiera firmado. Tampoco le pareció fácil tomar el control de la compleja asamblea de la entidad catalana, financieramente más fuerte que Bankia, así que se negó a la operación. Fue el primer enfrentamiento de Rato con "su" Gobierno y el comienzo de su caída. A sus colaboradores les comentó que suponía el cierre de miles y miles de oficinas y una reducción de plantilla de 10.000 personas, "lo que hacía inviable el proceso".

Poco tiempo después, el presidente de Bankia presentó al Ministerio de Economía un proyecto de fusión con la asturiana Liberbank que fue rechazado, lo mismo que otro con la andaluza Unicaja. El Gobierno entendía que la operación con La Caixa tenía más beneficios (compartir la pesada digestión del ladrillo, crear un gran grupo bancario y salvar la falta de capital de Bankia) que costes (cierre de oficinas y despidos).

A partir de este momento se precipitan los acontecimientos. En enero, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) realizó un examen a las entidades sistémicas y determinó que Bankia necesitaba 1.330 millones. “Iniciamos un plan para recapitalizar la entidad, que fue validado por el Banco de España”, declaró Rato en el Congreso. Guindos redactó en febrero un decreto que exigía 50.000 millones más de capital a los bancos para alejar el fantasma de que no podían digerir el ladrillo acumulado en sus balances. Bankia, que estaba con el capital al cuello pese a la salida a bolsa, empezó a negociar con el Banco de España un plan de recapitalización mediante la venta de activos y la recompra de participaciones preferentes de Bancaja muy por debajo de su valor nominal. Necesitaba 5.000 millones. A finales de marzo presentó su proyecto al supervisor, al que le pareció “realista y posible”, según Rato.

Sin embargo, el auditor Deloitte todavía no había firmado las cuentas de 2011. Había dos problemas muy relevantes: BFA, la matriz de Bankia, no podía asumir los créditos fiscales de 2.700 millones como quería la entidad. Esto solo se puede hacer cuando está previsto obtener beneficios en 18 años, algo que no creía el auditor. Por otro lado, BFA tenía que asumir una minusvaloración de su filial Bankia. En los libros contables de BFA estaba valorada en 12.000 millones y esta era la cantidad con la que contaban para sus recursos propios. Sin embargo, el valor en bolsa de Bankia no llegaba a 3.000 millones. El auditor exigía rebajar los recursos propios para adecuarlos al valor en bolsa, lo que suponía dejarlos por debajo del mínimo exigido.

Deloitte, salvadora y acusadora

Rato declaró en el Congreso que encargó a la propia Deloitte un plan para salvar estos escollos. La solución propuesta pasaba por desmontar BFA traspasando parte del suelo y las participaciones industriales a Bankia para recapitalizarse y liberar provisiones. Además, se reduciría la participación de BFA en Bankia.

Según expertos del mercado, el proyecto era disparatado: Bankia ya estaba cotizando y sería un agravio para los accionistas aceptar los activos tóxicos de BFA. Además, Bankia seguía siendo una entidad que no generaba margen, lo que reducía sus posibilidades de maniobra. Aun así, entre marzo y abril empezó a diseñarse el plan. Al poco tiempo, Deloitte se plantó. La situación quedó bloqueada. El calendario corría en contra de Rato y de Bankia, que debía entregar las cuentas a la CNMV en abril.

El entorno de Rato ha comentado su extrañeza ante la radical negativa de Deloitte a firmar las cuentas, pues en meses anteriores no había manifestado reparos. Deloitte —según estas fuentes— se puso del lado del Gobierno para impedir que Rato continuara en la entidad. Si no firmaba la auditoría, la salida de Rato era segura porque la situación era insostenible. Francisco Celma, socio de Deloitte y responsable de Bankia, fue acusado por los consejeros de no advertir los problemas en el Consejo de Administración de octubre de 2011 y en otro de marzo de 2012 al Comité de Auditoría. Celma también dijo que “antes de la salida a bolsa” les había explicado las dificultades del grupo a los bancos de inversión. No obstante, en el folleto de salida a bolsa figura un documento de Deloitte en el que no se indica ningún problema y se alaba la situación de la entidad.

En marzo, un informe interno de trabajo de la inspección del Banco de España que figura en el sumario en la Audiencia señaló que Bankia “era inviable”. Acusaba al banco de “no reflejar contablemente la morosidad real de su cartera crediticia” y añadía: “El perfil de riesgo del grupo BFA (matriz de Bankia) lo calificamos de alto por sus problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia y porque su gobierno corporativo es mejorable”. Que “el gobierno corporativo era mejorable” significaba que el supervisor tenía una palanca fácil para mejorar la situación: cambiar a los gestores, algo

que no hicieron. Por si fuera poco, el diagnóstico de los inspectores seguía: “El principal problema de Bankia es que su generación recurrente de resultados es claramente inferior a sus necesidades de saneamientos de activos. Esto ocurría antes del Real Decreto Ley 2/2012 [para el saneamiento bancario] y se ha agravado después”.

“La mayor amenaza”, proseguía el informe, “hasta diciembre de 2011 era la liquidez, debido a su inadecuada estructura financiera. Este problema se ha diferido —no solucionado— gracias a las dos recientes subastas a tres años del BCE y a la renovación del programa de emisiones avaladas por el Estado, dos decisiones exógenas a la entidad. Las emisiones avaladas por el Estado y la financiación dispuesta en el BCE suman en el grupo BFA más de 60.000 millones, casi el 20 por ciento del balance”. Este es el detalle de la “respiración asistida” que tenía el grupo. Además, había “fortísimas desviaciones respecto a las Previsiones del Plan de Integración”, lo cual equivale a una crítica a los gestores y a su capacidad de llevar adelante otros planes, como los que diseñaba Rato. Por último, el golpe al corazón: si se quitan los ingresos de los créditos promotores que no están reconocidos (unos 30.000 millones), los beneficios extraordinarios y la rentabilidad de las subastas del BCE (que son finitas), el grupo BFA-Bankia en 2011 no solo no generaba nada, sino que estaba en márgenes negativos, dice la Inspección.

Nada de todo esto fue mencionado por Rato en el Congreso.

La tensión subía semana a semana. Pero la radiografía del desastre no frenó a la Comisión Ejecutiva del Banco de España, que aprobó el plan de saneamiento del grupo BFA-Bankia el 17 de abril, si bien lo condicionaban al cumplimiento de algunas exigencias. Entre ellas, Rato debía dejar de ser presidente ejecutivo y Verdú no podía seguir como consejero delegado.

Ante este ultimátum, Rato llamó por segunda vez a Goirigolzarri. Le aseguró que le dejaría las riendas de la entidad y que él se iría en un año. Era un pacto para salir ordenadamente, sin ruido. Elegante para Rato y silencioso en el mercado.

Ordóñez también habló con Goirigolzarri y le instó a que aceptara la oferta, tratando de garantizarle que Rato iba a salir en un año

con la vigilancia del supervisor. Vigilancia que Ordóñez no podía garantizar porque a él le quedaba poco tiempo para abandonar el Banco de España. No fue la primera vez que Ordóñez trataba de convencer a Goirigolzarri de que tomara el control de Bankia. Lo hizo al poco de llegar Rato, a principios de 2010, con nulo éxito. Esta vez, el ejecutivo vasco también se negó ante lo arriesgado de la oferta. La capacidad de influencia de Rato en la gestión del banco y la posibilidad de que retrasara su marcha eran las dos dudas que planeaban en su cabeza. Goirigolzarri conocía los grandísimos problemas de la entidad y quería manos libres, completamente libres, para tanta tarea. Recordaba muy bien los problemas que tuvo en el BBVA, cuando sufrió por la falta de entendimiento con el presidente Francisco González. También Guindos sondeó a Goirigolzarri en varias ocasiones para que levantara Bankia. Quizá era lo único en lo que coincidían Guindos y Ordóñez: Goirigolzarri era la persona adecuada para resucitar al muerto. Así que cuando se despejó la incógnita de Rato, Goirigolzarri, reo de sus palabras, no tuvo más remedio que aceptar el cargo de presidente de Bankia.

EL PRIMER GOLPE, DEL FMI

El 25 de abril, el Fondo Monetario Internacional — “su” FMI— asestó un golpe bajo a Rato: adelantó su informe anual y advirtió, en un gesto sin precedentes en documentos así, que no descienden a detalles, que los bancos que han sido ayudados, “y en particular el de mayor tamaño”, deben tomar “medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances y mejorar su gestión y su gobierno corporativo”. El ex director gerente del FMI, que conoce los entresijos de la institución, percibió la capacidad de influencia de Guindos con Christine Lagarde, actual responsable del organismo. El FMI le estaba enseñando la puerta de salida. Fue una jugada para contrarrestar la aprobación del plan de saneamiento por parte del Banco de España.

El Gobierno todavía dio una vuelta más de tuerca sobre Rato. Preparó un segundo decreto, que lanzaría en mayo, y que exigiría

más provisiones. Esta norma, que algunos llamaron “el decreto Rato” por entender que iba dirigido a él, ha supuesto la fusión o desaparición de muchas entidades que no han podido cumplir sus fuertes exigencias. En el Congreso, Rato explicó que, mientras preparaban su plan “de la mano del Banco de España”, “veíamos el deterioro económico y conocíamos que el Gobierno preparaba un segundo real decreto”, por lo que elevaron el nivel de provisiones.

Pero Bankia no superaba el listón de Guindos. El 4 de mayo, Rato presentó el “Plan de desinversión, saneamiento y mejora del margen”, 40 folios en los que le pedía al Estado una ayuda de 7.000 millones. Lo negoció con las máximas autoridades del Banco de España aquel día y logró su aprobación. Ordóñez, Aríztegui y Jerónimo Martínez, director general de Supervisión, quedaron convencidos de la viabilidad del plan. Los altos cargos de supervisión se fueron de fin de semana con la creencia de que el programa de Bankia iba a ser una realidad. Rato, sin embargo, sabía que su futuro estaba en manos de Guindos porque era Economía la que controlaba el FROB. Pese a todo, comunicó la aprobación a sus más estrechos colaboradores, quienes lo transmitieron a algunos consejeros. Todos respiraron tranquilos. La pesadilla había acabado o, al menos, se había ganado tiempo.

Ese mismo viernes 4 de mayo, Bankia envió las cuentas de 2011 a la CNMV sin la firma de Deloitte, incumpliendo la normativa, y con un supuesto beneficio de 309 millones, que se transformó en 3.318 millones de pérdidas cuando, un mes después, se reformularon las cuentas con realismo y ajustadas a criterios contables. Las cuentas individuales BFA arrojaron unas pérdidas de unos 7.000 millones en el 2011, frente a los 439 millones de números rojos que tuvo en 2010; acababa de batir el récord de pérdidas de la historia financiera de España, por delante de Banesto, que en 1993 declaró unas pérdidas de 3.510 millones de euros.

Entregar las cuentas en la CNMV sin auditar fue un hecho inusual y grave. Las alarmas saltaron entre algunos ejecutivos, que sospechaban que ese fin de semana podía estar pasando algo con Bankia, aunque no había trascendido su reunión con el Banco de España. En este punto, la cuestión es por qué Julio Segura, presidente de la CNMV, autorizó que se difundieran unas cuentas no

auditadas. Fuentes de la CNMV comentaron que era una manera “de difundir la información disponible a todo el mercado”. Pero luego se descubrió que las cuentas no estaban bien formuladas, por lo que lo difundido no era verdadero, según el auditor. En Bankia explican que cuando aquel viernes 4 de mayo se supo que el Banco de España había autorizado el plan de saneamiento, consideraron que las cuentas ya no variarían demasiado.

Pero aquel viernes aún no había terminado.

Una cena muy amarga

A Rato aún le quedaba una cita ese día. El lugar era la sede del Ministerio de Economía, en la madrileña Plaza de Cuzco. Cuando llegó al salón comedor se encontró con Emilio Botín, Francisco González, Isidro Fainé y Luis de Guindos. El ministro se había rodeado de la plana mayor de la banca, los presidentes del Santander, BBVA y La Caixa, para dar el último pase al que había sido su jefe en el Gobierno del PP hasta 2004. Por primera vez no era el gobernador el que le decía a un banquero que su tiempo había acabado, sino un político, el ministro de Economía. El hecho es grave, porque demuestra la falta de colaboración, entendimiento y confianza entre el supervisor y el Ejecutivo, una circunstancia que no facilitó la resolución de la crisis bancaria.

Pasada la primera parte de la cena, González tomó la palabra y explicó con cierta diplomacia lo que llevaba diciendo desde hacía meses de forma descarnada fuera de España: la única forma de que regrese la confianza a España y baje la prima de riesgo es que se produzca el saneamiento y el relevo de la cúpula de Bankia. Rato, cuyas relaciones con González son algo peor que frías, conocía las críticas que este había vertido sobre Bankia en los ambientes inversores internacionales, así que no le extrañó su papel. Rato argumentó que el Banco de España le acababa de aprobar el plan de saneamiento y que estaba en negociaciones con Goirigolzarri para que se incorporara como primer ejecutivo. Habló de su marcha a

medio plazo, argumento que González rebatió diciendo que Goirigolzarri solo iría como presidente de Bankia.

Fainé y Botín, sobre todo el primero, se manifestaron a favor de una fórmula intermedia: dejar que Rato se fuera sin armar un escándalo al exigir cifras de provisiones exorbitadas. Ahí la conversación empezó a centrarse en los números: ¿eran suficientes los 7.000 millones aprobados por Ordóñez? Rato admitió que podían ser 8.000 o 9.000 millones, pero no más. El ministro tomó la palabra para insistir en que Bankia necesitaba más de 15.000 millones para sanear sus cuentas. Ante esta descalificación, Rato entendió que había una desconfianza en sus datos y, por lo tanto, en su gestión. El asunto estaba acabado.

Se levantó la cena y Rato trasladó al ministro que pronto explicaría sus planes a Rajoy. O sea, que el presidente de Bankia no iba a dimitir esa misma noche. Esa renuncia quizá estaba en los planes del Ministerio, pues lo lógico hubiera sido un relevo en fin de semana, con los mercados cerrados, y la presentación de Goirigolzarri el lunes a primera hora. Pero Rato, aunque sus posibilidades eran mínimas, mantuvo el suspense.

El sábado consultó con sus allegados y contactos políticos para medir fuerzas. Tenía que comprobar si aún le quedaba una bala: pedir ayuda al presidente de Gobierno. Preparado para lo peor, el domingo acudió al palacio de La Moncloa para oficializar el último trámite, la conversación con Mariano Rajoy. El presidente le insistió en que todas las personas a las que había consultado le decían que la situación económica y la confianza en España no se recuperarían sin un saneamiento de Bankia y el cambio de gestores. Rato insistió en la validez de su plan, pero el presidente se apoyó en un clásico: “En este tema, tengo que fiarme de lo que dice el ministro de Economía”, que estimaba las necesidades de saneamiento de Bankia en el doble que las que decía Rato. Pese a lo poco dado que es Rajoy a tomar posiciones firmes, aquella vez lo hizo. Ya no había más balas. Todo estaba perdido para Rato.

El lunes, El País publicó que el Gobierno tenía previsto un plan para inyectar “miles de millones en Bankia” y que exigía cambios en su cúpula. Con esa noticia en primera página, Rato acudió a la sede de Bankia para preparar su comunicado de renuncia. Poco antes de las

dos de la tarde, envió un mensaje al móvil de los consejeros de Bankia para decirles que, ante la falta de confianza del Gobierno en su plan de recapitalización, no le quedaba más remedio que presentar su dimisión. No cogió ninguna de las llamadas de los consejeros que intentaron hablar con él después del mensaje. Quince minutos después, envió el comunicado a las agencias de noticias y todos los informativos de radio y televisión abrieron sus boletines con la dimisión de Rato y el futuro nombramiento de Goirigolzarri como presidente.

‘Bankia es sólida y con recursos’

El comunicado de Rato recogía todos los hitos de su gestión. No evitó frases fuera de lugar, como esta: “Bankia no tiene nada que temer porque es una entidad sólida y con recursos”. Se negó a celebrar un consejo extraordinario, como le pidieron muchos consejeros, que se sintieron maltratados y ninguneados por las formas del presidente. Luego, ante los posibles problemas con los 10 millones de clientes, aceleraron el recambio. Con su salida, se cumplió otro axioma del mercado financiero: “Ningún banquero puede dirigir una entidad en contra del Gobierno”. Ni siquiera él.

Así llegó la dimisión más espectacular: con todos los mercados abiertos, sin hacerlo ante el Banco de España y dejando vacante la presidencia de la cuarta entidad financiera del país.

Goirigolzarri tomó posesión del cargo el miércoles 9 de mayo por la tarde. Su primera medida fue analizar las cuentas de la entidad y determinar que el saneamiento necesario exigiría una aportación de 23.400 millones por parte del Estado. España no tenía ese dinero y tuvo que pedir el rescate bancario. Era el principio del fin de la soberanía financiera.

En su comparecencia en el Congreso, Rato insistió: “Hice lo correcto”. Afirmó que se marchó “para no plantear ningún enfrentamiento, ni poner en riesgo alguno a la entidad” y reiteró,

sobre todo, que “no hubo pérdidas. Tanto en mis cuentas como en las reformuladas por el siguiente equipo se admite el mismo beneficio de explotación. Lo que cambia son las estimaciones de futuros deterioros. Son adelantos de deterioros. Nunca hubo ingeniería contable”, dijo una y otra vez ante la incredulidad de los presentes.

Días antes de la comparecencia, el 1 de junio, Rato criticaba la decisión del Gobierno en un escrito anónimo, fácilmente atribuible, que entregó al Consejo de Administración. Allí calificó la petición de Goirigolzarri de “inyección brutal de fondos para provisionar pérdidas futuras”, en una velada acusación de que se pedía más dinero del que realmente se necesitaba. En el Congreso bajó el tono de los comentarios. En septiembre llegaron los exámenes de Oliver Wyman, que rebatieron este último argumento: Bankia necesitaba realmente 24.500 millones para hacer frente a un escenario económico adverso. Incluso se puede añadir que si Rato tenía que pedir 7.000 millones más, además de los 4.475 millones, es porque no los tenía y, por lo tanto, no podía seguir funcionando. Son las normas del mercado financiero. Las mismas que han provocado fusiones y han acabado con otras entidades. Eso de que “no había pérdidas” son meros juegos de lenguaje.

El desalojo de Rato enojó profundamente a Ordóñez, que no fue consultado acerca de los planes de Guindos en ningún momento, aunque pudo imaginárselos. Tomó la decisión de adelantar su salida un mes y acudió a La Moncloa a comunicárselo directamente al presidente sin que lo supiera Guindos. Fue una manera de devolverle el favor al ministro de Economía.

El siguiente dardo se lo tiró Ordóñez a Guindos en su paso por el Congreso, donde calificó de “error” la salida de Rodrigo Rato de Bankia, al valorar que se trataba de una “personalidad importante” en el contexto internacional que hubiera ayudado a levantar la entidad. “No era necesario”, sentenció, para después justificar la aprobación con condiciones del plan de saneamiento de Bankia para evitar el “desastre” en el país.

Ordóñez dijo además no tener un “juicio negativo” sobre el expresidente de Bankia, a quien garantizó su “mayor respeto”, y aprovechó para deslizar críticas sobre la actuación del Gobierno del

PP:

—Hemos cesado a treinta presidentes de entidades muy importantes, pero hasta ahora no se ha armado ruido. ¿Por qué? Porque el Banco de España actúa con discreción, no con falta de transparencia, porque luego lo cuenta. Hay un proverbio catalán que dice: "Al dinero no le gusta el ruido". El ruido crea desconfianza y la desconfianza es fatal para el sistema financiero. ¿Qué hubiera pasado? En mi opinión —no lo sabemos—, que el Banco de España habría convencido al presidente de que se quedara, que hubiera venido un buen gestor, se habría metido lo que era necesario meter, porque era necesario, sin que el ruido hubiera obligado a crear otras necesidades.

Una enmienda a la totalidad sobre la forma en la que Guindos había resuelto la crisis de Bankia. Quién lo iba a decir. Un exvicepresidente de Aznar aliado con un exdirigente socialista en contra de un Gobierno del PP. Los intereses creados forman extrañas parejas.

¿Había otra solución para Bankia?

El gobernador del Banco de España puso el dedo en la llaga. ¿Había dinero para esta operación? ¿Existían otras salidas menos traumáticas? ¿Forzó Guindos la situación por su enemistad personal con Rato? Esas son las preguntas que planean sobre el final de Bankia. Y es un asunto de la máxima trascendencia, porque Bankia ha provocado el rescate bancario de España y la subida de la prima de riesgo, ha encarecido la financiación a las empresas, otro cierre adicional de los mercados y puede inducir a la intervención total

del país. Para algunos ejecutivos financieros, el mayor error fue dejar un cheque en blanco a Goirigolzarri. Lógicamente, este ejecutivo multimillonario retirado no iba a arriesgar su reputación de treinta años de banquero. Aprovechó esta posición de fuerza y exigió 23.400 millones para hacer todos los saneamientos de golpe. El plan de Rato era ir paulatinamente. Goirigolzarri no lo creyó conveniente en una economía en recesión. Pidió una fortuna y Guindos se la dio. Luego resultó que España no tenía dinero. Hubo que pedirlo a Europa y el país entró en una espiral maldita de un rescate de 100.000 millones. No pocos piensan que los tres grandes que acudieron a esa cena esperan repartirse Bankia en trozos, en proporción a su cuota de mercado. El tiempo lo dirá.

Guindos dejó fuera de juego a Rato y a Ordóñez, pero ha comprometido parte de su futuro político con el resultado de esta operación, a la que le costará tiempo normalizarse. Por el momento, la factura que ha pagado la sociedad española es inmensa, en cuantía económica y en la recaída económica que ha supuesto la crisis de Bankia por su contagio a la deuda pública. Financial Times criticó con severidad la operación: “Hace ya casi cuatro años que comenzó la crisis bancaria global y las autoridades europeas siguen sin saber cómo recapitalizar un banco con problemas. La operación de rescate de Bankia ha resultado un fiasco. Se ha convertido en un tira y afloja entre Madrid, Bruselas y Frankfurt. La situación ha disparado el coste de la deuda que paga España y el país se ha convertido ahora en el ejemplo de cómo resuelve la eurozona sus crisis bancarias”.

Quien pronunció la diatriba más dura fue Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), el 31 de mayo de 2010: “Lo que muestran los casos de Dexia y Bankia es que, cuando nos enfrentamos con dramáticas necesidades de recapitalización, la reacción de los Gobiernos o de los supervisores nacionales es subestimar la importancia del problema, presentar una primera evaluación, después una segunda, una tercera, una cuarta”. Cuando le preguntaron por Bankia, respondió: “Esa es la peor manera posible de hacer las cosas porque al final todo el mundo acaba haciendo lo correcto, pero al coste más alto posible. Pido a todos los Gobiernos que tengan esto en mente. Es mejor equivocarse por poner demasiado al principio que equivocarse por poner demasiado

poco”.

Se atribuye a Rato una rotunda frase tras cesar a José Luis Olivas como vicepresidente de Bankia: “Los que han llevado a las cajas a esta situación tienen que asumir sus responsabilidades”. El mismo principio le aplicaron a él.

Capítulo 8

Sueldos de escándalo y el timo de las preferentes

No estoy muy puesta en finanzas. Tal vez me pusieron para no molestar mucho. Deberían cambiar las normas. Yo solo daba mi punto de vista.

Isabel Cambronero, profesora de ballet y miembro de la Comisión de Control de la CAM

Si alguien quisiera analizar todos los problemas de la crisis financiera y las deficiencias que mostraron las entidades españolas lo tendría fácil: estudiar la Caja del Mediterráneo (CAM), una entidad controlada desde el presidente hasta el último bedel por el PP de la Comunidad Valenciana, con una grave injerencia política en la gestión. Para algunos observadores, el hecho de que la CAM haya sobrevivido hasta julio de 2011 —fecha de su intervención— es suficiente para enjuiciar en primer lugar a sus directivos, por motivos penales (como ya está ocurriendo), y luego a los supervisores, por negligencia en su labor. Esto último todavía no se ha hecho.

La CAM agrupó todos los males que han aquejado al sector: gravísimos errores de gestión, búsqueda del beneficio fácil en el ladrillo, directivos poco preparados, rebeldía consentida ante el supervisor, protección excesiva de la Comunidad Autónoma por motivos confesables o inconfesables, sueldos vergonzosos, miles de perjudicados con las cuotas participativas y las participaciones preferentes. Su gestión en los doce últimos años es un manual de destrucción de una caja con 137 años de historia, fruto de una veintena de fusiones. Lo que no pudo la Guerra Civil ni la dictadura franquista, lo lograron unos ineptos (o algo peor) directivos que obraron sin control.

La CAM pasó de 244 millones de beneficios en 2010 a admitir pérdidas de 2.713 millones en el ejercicio siguiente. Este sencillo cambio lo explicó María Dolores Amorós, directora general de CAM: "Es producto de una interpretación mucho más restrictiva de las normas contables". Pero quizá sea más gráfica la definición que hizo José Antonio Iturriaga, el administrador público, responsable del FROB: "Cuando entramos en la CAM, era un enfermo politraumatizado". Y ¿quiénes eran sus dirigentes? El presidente era Modesto Crespo, amigo íntimo de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, y dueño de dos concesionarios de coches. A los mandos de la entidad, Roberto López Abad, como director general y meritorio ejecutivo que hizo toda su carrera, 39 años, en la caja.

Sentados sobre una bomba de ladrillos

Pese a estar sentados sobre una bomba de ladrillos a punto de estallar, los gestores de la CAM rechazaron hasta cinco posibles fusiones: Caja Madrid, ¡Bancaja! (por increíble que parezca), Caja Murcia, Caja Asturias y BBK. Esta actitud enervó a Miguel Fernández Ordóñez, entonces gobernador del Banco de España. Y quiso devolverles esa arrogancia con una bofetada en la cara. En la rueda de prensa del 30 de septiembre de 2011, mientras explicaba la reestructuración del sistema financiero, soltó una frase impropia no solo de su cargo, sino de cualquier ejecutivo financiero que hable en público: "Cuanto peor es una caja vale menos, y la CAM es lo peor de lo peor". Es una afirmación que le perseguirá siempre como la mayor metedura de pata de su mandato.

La primera consecuencia de esa afirmación fue una fuga de depósitos de varios miles de millones de euros que volaron de la CAM en las semanas posteriores a entidades de la competencia, que aprovecharon el desconcierto provocado por el supervisor. Es normal que la gente no quiera tener su dinero en "lo peor de lo peor", sobre todo si hay otros bancos que aprovechan el miedo para atraer clientes. Como la CAM estaba intervenida, la fuga de depósitos la tuvo que reponer el Banco de España, lo que supuso

que fuesen los ciudadanos los que arriesgaran otra vez con la operación por la indiscreción del gobernador. Imperdonable.

Además de imperdonables, fueron inoportunas porque la CAM estaba a punto de entrar en un proceso de subasta. Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, debió de tomar buena nota de la afirmación de Ordóñez y de la espantada que provocó entre los demás posibles compradores. El 8 de diciembre de 2011 reclamó al Estado 5.249 millones para hacerse cargo de la joya alicantina. Fue la única entidad solvente que acudió. El resto de las entidades ni se molestaron en presentar ofertas, convencidas de que quedaría desierta y conseguirían los despojos de la caja a precios regalados. No hay que olvidar que la CAM era un monstruo muy grande: 70.000 millones en activos y más de 1.000 oficinas. Pero se equivocaron y Oliu se llevó el gato al agua. El supervisor estaba entre la espada y la pared. Si no daba lo que le pedía Oliu, tendría que nacionalizarla; es decir, otro problema más después de varios intentos fallidos, así que aceptó y accedió al pago reclamado, que pasó al debe de todos los ciudadanos. Por cierto, 5.249 millones que nunca volveremos a ver. La factura puede aumentar cuando se sepa cuántos créditos incobrables tiene la caja en cartera, porque el 80 por ciento se paga con dinero público…

La adquisición de la CAM marcará el futuro del Sabadell, grupo al que ha proyectado al liderazgo de la banca. El Sabadell aprobó los exámenes de capital de Oliver Wyman gracias a las plusvalías o incrementos de capital de 905 millones que obtuvo al quedarse con la CAM, es decir, con el dinero público.

Pero el error del supervisor viene de muy lejos y fue dejar una enorme caja —llegó a ser la cuarta más grande de España— en manos de gestores incompetentes (en el mejor de los casos). Roberto López Abad, director general durante toda la burbuja, no ocultaba sus delirios por el crecimiento, ni sus gravísimos errores estratégicos. En marzo de 2006, declaraba en una entrevista: “Vemos un horizonte positivo en el mercado inmobiliario. Es el momento de hacer apuestas para crecer. Nos queda una capacidad de recorrido inmensa. El potencial es enorme cuando dispones de una organización entrenada y una cultura de éxito. Podemos llegar a ser la tercera caja” (es decir, superar a Bancaja, una de las

grandes obsesiones de los alicantinos que tantos disgustos les ha provocado).

Cinco años después de estas declaraciones la CAM quebró. Tuvo que pedir al Estado que le inyectara 2.800 millones porque se había quedado sin capital por la cantidad de créditos impagados que acumulaba con el ladrillo. Lo peor no es que López Abad dijera aquello, sino que lo hiciera. Y eso que partía de una base explosiva porque, en poco más de tres años, entre 2003 y 2005, cuando la burbuja estaba más caliente, duplicó su balance gracias a las inversiones en el negocio constructor. Llegó a tener 50.000 millones en créditos, el 80 por ciento de ellos del sector inmobiliario. ¿Hubo informes del Banco de España, pilotado entonces por el valenciano Jaime Caruana y Gonzalo Gil, como gobernador y subgobernador? No se sabe. Quizá estén guardados bajo siete llaves. Según los exdirectivos de la CAM, el supervisor nunca les exigió medidas drásticas para reducir su exposición al ladrillo. Es llamativo que, siendo valenciano Jaime Caruana, no le llegaran informaciones de la arriesgada expansión de la CAM, metida en todos los proyectos ruinosos: la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el ruinoso parque Terra Mítica o la Ciudad de la Luz. Pero no solo fue de la mano de la Generalitat en las inversiones faraónicas. Tres días antes de la intervención, prestó al Ejecutivo valenciano 200 millones. Se vinculó a Polaris, Martinsa, Nozar o al proyecto de El Pocero en Seseña. También saltó el charco. En abril de 2009 compró el cien por cien de la mexicana Crédito Inmobiliario, donde invirtió casi 300 millones. El proyecto no levantó el vuelo y fue liquidado en junio.

Nadie sabía nada

¿Existían pistas de que la caja había tomado un rumbo de colisión? Para el común de los mortales (y para la prensa), los balances eran inmaculados, sobre todo porque nunca se desglosaban y no se conocía la dependencia que tenía del negocio promotor. Otra cosa es lo que pudieron saber sus auditores, KPMG, o la inspección del

Banco de España. Pero lo cierto es que en 2009 empezaron los problemas. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, el patrimonio neto de una de las empresas tenedora de las participaciones inmobiliarias de la CAM registró en ese año pérdidas de 154 millones de euros, cuando tan solo un año antes había tenido 55 millones de beneficios. Los fondos propios de esta compañía dedicada a la adquisición, enajenación, tenencia, promoción inmobiliaria, urbanización, parcelación, construcción y otras actividades inmobiliarias pasaron de rozar los 55 millones de euros en 2008 a superar una cifra negativa de 152 millones. Mientras, el capital se mantenía fijo en la cifra del capital escriturado: 60,5 millones.

Algunos exconsejeros han declarado en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas que los ejecutivos nunca les contaron que hubiera problemas en la entidad. Admiten que hubo comentarios sobre un duro informe de la Inspección de diciembre de 2010. Para esa fecha, los activos de la CAM debían de oler a muerto. Pero incluso exmiembros del consejo afirmaron que se hizo una lectura "resumida del informe de Inspección de 2010", restándole importancia. Sin embargo, aquel escrito era la sentencia de muerte de la CAM. Estas fuentes dicen que María Dolores Amorós, directora general en aquel momento, no resaltó el documento. De lo que sí se enteraron todos fue del Informe de la Inspección de julio de 2011, que prácticamente decía que el personal del Banco de España estaba en la puerta. La fiesta había terminado. La CAM se hundió, los ciudadanos empezaron a perder dinero y los exejecutivos se llevaron sueldos y pensiones de escándalo. Entonces sí hubo lamentos y preguntas en el consejo, pero ya era tarde. Demasiados años en silencio.

Las declaraciones de algunos consejeros en las Cortes Valencianas han rozado lo cómico, si no fuera porque hay miles de afectados que han perdido sus ahorros con las cuotas participativas y las participaciones preferentes.

Isabel Cambronero, profesora de ballet, fue elegida para ser consejera por sorteo entre los clientes de la caja. Y los altos ejecutivos creyeron que su perfil era el idóneo para integrar la comisión de control de la CAM. "No estoy muy puesta al día en

finanzas", admitió ella ante los que la escogieron, pero estos le respondieron: "No es necesario que tenga conocimientos". Por supuesto que no era necesario. Ni, incluso, recomendable. Cuanto menos entendiera un balance, mejor para los altos ejecutivos, que solo buscaban vivir fuera de los controles.

Cambronero, que compareció en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, apuntó que si su labor era "auditar a unos auditores, deberían cambiar la norma porque no tengo los conocimientos para ello. Tal vez me pusieron para no molestar mucho", admitió. Así, señaló que su función era dar "su punto de vista" si se lo pedían.

Hasta que llegó el escándalo, la profesora de ballet dijo que ella "lo veía todo transparente. No se decían cosas como para poder dudar", manifestó. No hay que olvidar que estamos hablando de la comisión de control que teóricamente controlaba al Consejo de Administración. "No se decidía nada. Solo se daba el visto bueno." Por eso, "nunca les dijeron que hubiera problemas", ni que estaban en "una posición de endeudamiento, ni de nada en ese sentido".

Según reconoció en las Cortes Valencianas Francisco Grau, economista y consejero de la entidad y miembro de la comisión de control, "si ha habido operaciones de contabilidad irregulares, no se han llegado a conocer hasta que hemos tenido informes de los inspectores del Banco de España". Y reiteró que nunca vio nada sospechoso.

La panda de inútiles

Después de estas sesiones, la diputada de Compromís, Mireia Mollà, resumía la situación: "Después de ver pasar a gente que se declara una panda de inútiles, resulta que llega un economista y es incapaz de resolver lo que le pasa a la entidad". Llegados aquí hay que recordar que ser consejero de la CAM —y guardar silencio sepulcral — tenía premio. La entidad concedió, entre 2004 y 2010, a sus consejeros 161 millones en préstamos blandos, en algunos casos al

cero por ciento. Los principales agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de Gobierno Corporativo de la entidad. En total dispusieron de hasta 4,6 millones sin intereses. En 2008, los tipos de interés oficiales estaban en torno al 4 por ciento. Aniceto Benito, expresidente honorario del PP de Alicante y del Hércules, destaca por haber recibido alrededor de 50 millones en cinco ejercicios. Antonio Magraner, Juan Ramón Avilés y Ginés Pérez Ripoll también percibieron fuertes cantidades que obtuvieron como créditos o descuentos comerciales.

La CAM fue una de las patatas calientes que Caruana le pasó a Ordóñez en julio de 2006. No parece que este estuviera muy preocupado por que le estallara la bomba, ya que el 23 de julio de 2008 autorizó a la CAM a sacar al mercado sus cuotas participativas. En total, colocó 50 millones de títulos a un precio de 5,84 euros. Fue una de las últimas operaciones de Lehman Brothers, que quebró solo dos meses después en Estados Unidos. En España la firma estaba bajo la presidencia de Luis de Guindos, y fue el banco colocador de la emisión de los 292 millones de euros. Un 65,5 por ciento de las cuotas se colocaron entre minoritarios, que tenían que realizar una inversión mínima de 3.000 euros. Hoy todavía quedan 54.000 titulares de cuotas que buscan una solución con el Banco Sabadell, a través de un canje por acciones, ya que la entidad catalana no tiene obligación de devolverles el dinero.

El 31 de marzo de 2011, los directivos de la CAM decidieron romper su acuerdo con Cajastur, que lideraba el Banco Base y su última oportunidad de haberse salvado mediante una fusión. Un mes después pidieron la primera ayuda de 2.800 millones al FROB y tres meses más tarde ese mismo organismo echó a sus directivos.

Qué irregularidades debieron ver los interventores del Banco de España en la CAM para vetar inmediatamente la entrada a la sede del hasta entonces presidente, Crespo. Le dieron un plazo de tres horas al exmandatario para que “recogiera” su despacho, en la planta noble de la sede principal de la CAM. Y mientras Modesto despejaba su despacho, un empleado de la entidad, también por orden de los interventores, retiraba su coche del aparcamiento de la

sede de la entidad.

Poco más de un año después de la intervención son visibles los daños en Alicante y otras provincias causados por la negligente dirección de la CAM. Lo más llamativo es la Obra Social, activa colaboradora y financiadora de numerosas actividades culturales arraigadas en la región. Pero hay algo peor, en lo que también ha colaborado el colapso de Bancaja —subsumida en Bankia— y la intervención del Banco de Valencia. La Comunidad Valenciana se ha quedado sin sus tres entidades financieras y eso empobrecerá a la región y quitará empleo y futuro a pymes y jóvenes, forzados a emigrar. Las tres entidades financieras eran polos de inversión en un lugar donde las abundantes pymes se verán huérfanas de bancos que las apoyen. En 1986, la renta per cápita de la Comunidad Valenciana era el 103 por ciento de la renta per cápita española. Es decir, era más rica que la media. En 2010, este dato ha descendido hasta el 88 por ciento, lo que supone una pérdida de 15 puntos.

Sin controles internos

“Lo que nos ha hundido a la CAM, además del ladrillo, ha sido el endiosamiento del equipo directivo, la avaricia en la construcción, la manga ancha en la gestión y la falta de controles internos”, dijo un consejero de la entidad. “Esto, más la instrumentalización política”, agregó.

Al repasar la historia, es fácil percibir que la CAM costó a los ciudadanos mucho más de los 5.245 millones inyectados en su capital. Fue una de las grandes quiebras, similar a Bankia (salvando las distancias), que más desprestigió la labor del Gobierno, que más castigó la deuda y elevó la prima de riesgo, hasta secar los mercados de liquidez. En la apertura de juicio, el juez Bermúdez pidió al expresidente de la Caja, Modesto Crespo; los ex directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós; y los exdirectores de planificación y recursos, Teófilo Sogorb y Vicente Soriano, una fianza de 25,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por daños causados.

Pero la CAM también fue un escándalo por las remuneraciones de sus ejecutivos. “Como ciudadano me estremezco cuando escucho esas indemnizaciones ilógicas y fuera de lugar en estos momentos de crisis”, llegó a decir Alberto Fabra, presidente valenciano. Y es que, pocos meses antes de la intervención, López Abad y otros cinco altos directivos se acogieron al ERE de la entidad con prejubilaciones que sumaban 15,5 millones, según el expediente disciplinario abierto por el Banco de España en enero a 48 exdirigentes. Su sucesora, María Dolores Amorós, se puso un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de control. Amorós fue despedida por el supervisor en septiembre de 2011 por falsear la contabilidad con artificios financieros. Recurrió a los tribunales y en la vista exigió 10 millones en concepto de lucro cesante. Pero la juez la dejó sin indemnización ni pensión vitalicia. El otro gran protagonista fue el último presidente de la CAM, Modesto Crespo, quien, aunque no tenía sueldo oficial, se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la CAM, TI Participaciones.

Pero el caso de sueldos insultantes para la ciudadanía no fue exclusivo de la CAM. Como si hubiera un patrón inverso al sentido común, a medida que peor gestionada estaba la caja o que más contaminada estaba por el ladrillo y requería más ayudas públicas, más altos eran los emolumentos de sus directores y consejeros. Esto es lo que se observó en Caixa Galicia, Caja España, Caja Duero, Caja Madrid, Caja Segovia, Caja Ávila, CajaSur, Caixa Penedés, la CAM y Bancaja, entidades todas ellas que están bajo la investigación de la Fiscalía Anticorrupción para determinar posibles responsabilidades en los sueldos e indemnizaciones cobrados y las malas prácticas llevadas a cabo por sus directivos.

En febrero de 2012, Luis de Guindos anunció que limitaba a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que hubieran recibido ayudas públicas y a 100.000 euros el de los consejeros. Posteriormente, en agosto de 2012, rebajó a 500.000 euros los salarios de los máximos ejecutivos.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dijo al poco de llegar al cargo que buscarían “responsabilidades penales y delitos en determinadas cantidades de indemnizaciones” de las cajas de

ahorros. El escándalo ha llegado hasta la Iglesia. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, afirmó: “Los sueldos con los que fueron blindados los consejos de administración de algunas entidades han sido inmorales y siguen siéndolo”.

Una de las entidades más afectadas por la rebaja de remuneraciones fue el grupo BFA- Bankia, donde se había perdido la mesura que debía acompañar a un holding que tenía 4.465 millones del Estado. El más afectado fue Rodrigo Rato, al que se le bajó el sueldo un 74,5 por ciento.

Pero los altos sueldos venían de lejos en esa entidad. Antes de su marcha, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, se multiplicó por 18 el sueldo de Jaime Terceiro, su antecesor. Rodrigo Rato se subió más de un millón y medio el salario de Blesa. No se conoce lo que ganó Rato en 2010 porque no era obligatorio declararlo y no lo declaró. En 2011 no hubo más remedio que decirlo y llegó el lío: Rato había cobrado 2,4 millones de salario fijo por presidir BFA, Bankia y Caja Madrid. Además tenía una variable, pero la entidad aseguró que renunció a ella. José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia y BFA, ganó 1,6 millones y Francisco Verdú, consejero delegado, 1,57 millones.

Lo que más llamó la atención del consejo era la media tan escandalosa. Estos eran los salarios de los vicepresidentes: José Manuel Fernández Norniella, (PP), 725.000 euros; José Antonio Moral Santín (IU), 521.000 euros y Virgilio Zapatero (PSOE), 421.000 euros. Consejeros: Antonio Tirado (PSOE), 409.000 euros; Mercedes de la Merced (PP), 376.000 euros; Estanislao Rodríguez-Ponga (PP), 355.000 euros; Mercedes Rojo (PP), 345.000; Jorge Gómez (PSOE), 399.000; Francisco Baquero (CC OO), 317.000; Pedro Bedia (CC OO), 308.000; Ángel Villanueva Pareja, exsecretario del consejo de Bancaja, 307.000; Arturo Fernández (PP), 278.000; Ricardo Romero de Tejada (PP), 270.000; José Manuel Suárez Toro, presidente de Caja Canarias, 235.000; Agustín González, presidente de Caja Ávila —una de las entidades con más morosidad del grupo—, 214.000; Jesús Pedroche (PP), 204.000; José María de la Riva (PSOE), 202.000; Carmen Cavero (PP), 173.000; Atilano Soto, presidente de Caja Segovia, 128.000.

Entre los consejeros que solo estaban en Bankia, destacan Javier

López Madrid, a propuesta de la CEIM: 310.000; Juan Llopart, independiente: 367.000; José Serra Peris (PP), ex secretario de Estado de Industria: 387.000; Ángel Acebes (PP): 163.000 y Remigio Pellicer, empresario valenciano: 302.000 euros.

Con la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de Bankia han salido algunos directivos de la etapa anterior. Y, al marcharse, han cobrado sus indemnizaciones. Entre ellas destaca la que ha obtenido Pedro Vázquez, responsable de tecnología de Bankia, que recibió 1,48 millones. Pilar Trucios, ex directora general adjunta de Comunicación y Marca, fue indemnizada con 749.000 euros. El consejo nombrado por Goirigolzarri tiene un coste anual de 1,8 millones, frente a los 5 millones que cobraba el de Rato.

El escándalo más sonoro del grupo Bankia se produjo al conocer las condiciones de los directivos de su antigua filial, el Banco de Valencia, ya quebrada y en manos del Estado. El director financiero de la entidad, Aurelio Izquierdo, la abandonó con derecho a una indemnización de cerca de 14 millones en pensiones y compromisos de prejubilación. Tras el revuelo organizado, Izquierdo renunció a 6,3 millones. También el ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, reclamó 7,5 millones de euros por su marcha. Él asegura que no la ha cobrado. Mientras, el FROB ha presentado una denuncia contra estos dos directivos, entre otros, por haber causado un daño cifrado en cerca de 137 millones de euros al Banco de Valencia con operaciones en las que ellos se lucraron.

Al margen de esta situación, poco después de que Rato ocupara la presidencia de Caja Madrid, se supo que Miguel Blesa y nueve directivos de su equipo reclamaron el cobro de un bonus de 25 millones por los resultados de un plan trianual entre 2007 y 2009. Rato se negó a pagárselo.

Novagalicia: 52 millones entre cinco

El segundo mayor escándalo han sido las indemnizaciones y pensiones cobradas por directivos de Novagalicia, que necesitó 3.665 millones del Estado. Cajas de fuera de Galicia negociaron con Alberto Núñez Feijoo la posibilidad de adquirir alguna de las dos entidades gallegas, antes de que Caixanova y CaixaGalicia anunciaran la fusión creando Novagalicia Banco. Su negativa fue tajante porque, ante todo, quería crear una gran entidad gallega, pese a que esa operación hubiera ahorrado —al menos en parte— 3.665 millones de dinero público que ya ha necesitado. La entidad gallega, en manos del Estado, se debate ahora entre la vida (encontrar inversores privados) o ser vendida a sus competidores.

Los exdirectivos de Novagalicia denunciados por Anticorrupción son Julio Fernández Gayoso, expresidente y director general de Caixanova durante 40 años; José Luis Pego, ex director general; Javier García de Paredes, ex director adjunto, y los exdirectivos Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán Laza. Estos cinco directivos cobraron indemnizaciones que, junto a sus planes de pensiones, ascienden a 52 millones de euros. Solo Pego recibió 18,7 millones por el plan de pensiones e indemnización. El escándalo social llegó a tal nivel que, en contra de lo que había dicho en un principio, la nueva cúpula de Novagalicia Banco, José María Castellano y su consejero delegado, César González-Bueno, presentaron una demanda para intentar recuperar unos 40 millones.

Pero el caso más sangrante en Galicia es el de José Luis Méndez, ex director general de Caixa Galicia durante varias décadas. Esta entidad llegó a la fusión con su rival gallego en una situación insostenible por la enorme cartera de ladrillo que había acumulado durante la agresiva y enloquecida expansión que protagonizó para estar entre las cajas más grandes, que no entre las más rentables. Considerado un “virrey” en Galicia, Méndez hacía y deshacía a su antojo, apoyado en un fuerte control de algunos relevantes medios de comunicación gallegos. Colocó a dos de sus hijos en cargos de relevancia, en el área comercial y el holding industrial, como si la caja fuera de su propiedad. Los réditos conseguidos con sus inversiones bursátiles en la bonanza le permitieron presentar unas cuentas de resultados tan sólidas como el cartón piedra. En 2009 Caixa Galicia ganó un 80 por ciento menos que en 2007, prueba de que todo lo bueno se esfumó con la burbuja. Entre los exotismos

más conocidos fue la apertura de una oficina en Shanghai en 2007, así como el plan que defendió, casi hasta el final, de lograr una red de 1.000 oficinas. Sin duda, la hegemonía en una posible fusión gallega estuvo detrás, como sucedió en Valencia, del plan de crecimiento.

De hecho, ha sido la mala situación de Caixa Galicia la que ha lastrado la fusión. Caixanova había entrado mucho menos en el ladrillo y más en las pymes, es decir, el tejido empresarial gallego. Llegada la fusión, Méndez intentó situarse en un puesto de máxima relevancia, pero fue vetado por el Banco de España, en donde se decía que era una de las tres peores cajas de todo el sector.

Sin embargo, esta circunstancia negativa ha librado a Méndez de las demandas que sí tienen los que siguieron al frente de la unión de las cajas. Este directivo recibió, al menos (y reconocido por su entorno), 16,5 millones como pensión.

CatalunyaCaixa: blindajes de lujo

Otra fusión polémica ha sido la CatalunyaCaixa, realizada en 2010, al unir Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa. Según las últimas pruebas de capital de Oliver Wyman, la entidad precisa de 10.800 millones de euros adicionales para superar una hipotética depresión económica. Esta entidad ya tiene 2.968 millones del FROB, gracias a los cuales se hizo con el 89,7 por ciento del capital. Si ahora el Estado inyectara lo necesario, acumularía 13.768 millones de dinero público. Sin embargo, Bruselas es partidaria de vender las entidades que precisan tanto desembolso.

CatalunyaCaixa está liderada por Adolf Todó, que se incorporó a Caixa Catalunya en 2008 como relevo de Josep Maria Loza, quien dimitió como director general tras una década en el cargo y más de 36 años de carrera profesional en la caja. Loza se embolsó al abandonar el cargo unos 5 millones de indemnización, más otros 5 millones por el fondo de pensiones.

Según datos publicados por CatalunyaCaixa a finales de 2011, Todó percibió a lo largo del pasado año un total de 1,5 millones de euros. Además, tenía una cláusula de blindaje que le permitiría cobrar 2,4 millones en caso de despido o hasta 4 millones si aceptaba no irse a la competencia. Asimismo, Jaume Masana, director adjunto, cobró 866.000 euros en 2011 y su blindaje es algo inferior a 1,8 millones.

Otra entidad con ayudas públicas que no se ha salvado de los escándalos ha sido Caixa Penedès, integrada en el Grupo Banco Mare Nostrum (BMN). Ricard Pagès, expresidente de la caja, se asignó personalmente alrededor de 11 millones. De esta cantidad, 10,2 millones estarían en un fondo externo y 800.000 euros, en otro de aportación definida. Pagès utilizó otra entidad financiera para esta maniobra, sin el acuerdo del consejo. El segundo que mejor había salido parado fue el ex director general, Manuel Troyano, que podría haberse asignado 6 millones, según fuentes del consejo. El tercer investigado es Joan Caellas, destituido a principios de agosto, que pudo hacerse con 1,5 millones. Tras un enfrentamiento con los directivos del BMN en agosto pasado, Caellas exigió además 3 millones para dejar su puesto por un contrato de blindaje que tenía firmado a su favor.

Carlos Egea, presidente del BMN, solo permitió que se llevara una indemnización de 45 días por año trabajado, lo que supuso alrededor de un millón de euros. El cuarto implicado, Jaume Jorba, exdirector de recursos humanos, también se habría hecho con 1,5 millones, según las mismas fuentes. BMN cuenta con una ayuda del Estado de más de 900 millones. El Fiscal General del Estado, a través de la oficina de delitos económicos, ha investigado la pensión de Pagès y los otros exdirectivos.

Otra entidad catalana que saltó a las páginas de los periódicos por sus retribuciones fue Unnim, la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu. El director general de esta pequeña entidad, Jordi Mestre, recibió una retribución total de 963.540 euros, entre el sueldo en metálico, la aportación al plan de pensiones y otras retribuciones en especie, en 2011. En total, sus 11 consejeros suman una retribución anual de 3,04 millones. Unnim perdió 469 millones de euros en 2011 tras aplicar saneamientos de la cartera crediticia e inmobiliaria. Desde el 30 de septiembre de 2011, era una entidad

propiedad del Estado al cien por cien. Se la quedó el BBVA tras recibir 1.000 millones del Estado, 1.000 millones que ya se han perdido para siempre.

Otro grupo de cajas fusionadas, Caja3, protagonizó la noticia cuando se conoció que Tomás García Montes, ex director general de Caja Inmaculada de Aragón (CAI), la entidad que lidera el proceso, reclamó 4,2 millones de indemnización. Montes aplicó su cláusula, según afirmó, cuando supo que la empresa fusionada no iba a contar con él.

Ocultación de sueldos

La Iglesia tampoco quedó al margen de esta polémica: Miguel Castillejo, presidente durante tres décadas de la quebrada Cajasur, infló la póliza del plan de pensiones en un millón, hasta los 4,3 millones, cuatro meses antes de jubilarse en 2005. Además, hizo a cada una de sus tres hermanas herederas directas de su fondo.

Muchos de estos sueldos se conocieron en diciembre de 2011, cuando el Gobierno obligó a publicar las retribuciones de todas las cajas ante el goteo de noticias de sobresueldos que alarmó a la opinión pública. El sector reaccionó con gran malestar cuando supo que debía hacer públicos estos datos. La actitud de la mayoría de las cajas implicadas fue enviar las cifras a última hora de la tarde del viernes 30 de diciembre —el último día de plazo— para que llegaran cuando los medios ya habían cerrado sus ediciones en papel y así no pudieran hacerse eco de ellas. Además, aprovecharon la festividad de esos días para que la noticia pasara inadvertida. Caja España incluso se negó a publicar los datos, argumentando que iban contra la Ley de Protección de Datos.

Quedó demostrado que, aprovechando la falta de transparencia, aunque cumpliendo la legalidad, los directivos cometieron grandes tropelías. Como dice Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña (y que declara ganar 900.000 euros), solo el hecho de que se hagan públicos ya es un freno para los abusos. Esta norma de

transparencia también permitió conocer que Enrique Goñi y Antonio Pulido, copresidente de Banca Cívica, entidad que ha acabado en manos de La Caixa por su inviabilidad, cobraban 900.000 euros cada uno.

En privado, algunos ejecutivos de antiguas cajas se quejan de que sus salarios son inferiores a los de otros bancos, como el Santander o el BBVA. Y es cierto. Alfredo Sáenz recibió en 2011 por todos los conceptos (sueldo fijo y variable, dietas, seguros y aportación a pensiones) 12,7 millones. Esta cantidad representa 233 veces el gasto medio por empleado del banco. Además, cuenta con una pensión de 85,4 millones. Francisco González, presidente del BBVA, cobra la mitad: 4,9 millones, o, lo que es lo mismo, 101 veces el gasto medio que destinó el banco a su plantilla. Su fondo de pensiones asciende a 80 millones. Mientras, el presidente de La Caixa y CaixaBank, Isidre Fainé, ganó 2,69 millones en 2011, la misma cifra que en 2010, según los informes de gobierno corporativo.

Estas retribuciones pueden parecer injustificadas (aunque están lejos de los 20,3 millones pagados a Pablo Isla, gracias al premio singular y no recurrente que le dio Inditex tras acceder a la presidencia del grupo), pero ese es otro debate diferente al que aquí tratamos. Las empresas citadas dan cuenta cada año de su situación a los accionistas. Y con mucha más transparencia que las antiguas cajas. Sin embargo, a las entidades con ayudas públicas se les debe exigir un plus de transparencia y sueldos acordes con los tiempos de crisis que vivimos, porque siguen funcionando gracias al dinero de los ciudadanos.

Esta retahíla de datos demuestra que no funcionaron los controles internos en las antiguas cajas. En el sector siempre se decía que no había un consejo más vigilado que el de una caja porque confluían políticos de todos los partidos, sindicatos, representantes de los clientes, de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Pero se ha demostrado que, al final, buena parte de los ejecutivos se convirtieron en una casta que supo dar a cada uno lo que quería (con el dinero de la caja, por supuesto) para no estar bajo la tutela real de nadie. El propio Juan Ramón Quintás alertó en 2009 de esta dictadura de los ejecutivos, pero no se hizo nada. Estos gestores se

manejaron en un complejo mundo de intereses cruzados con desparpajo y falta de ética. Y cuando temieron que se acercaba el final, la ambición fue mayor. “Los mayores sueldos e indemnizaciones se los pusieron los directivos cuando percibieron que su futuro era incierto, a partir de 2006 o 2007. Entonces se asignaron salarios de 650.000 o 700.000 euros sin escrúpulos, cuando la media del sector está en 450.000 euros para entidades de su tamaño”, aseguró un cazatalentos.

El mecanismo de aprobación se basaba en el ocultismo. “El comité de dirección presenta una propuesta de remuneración, comparada con estudios encargados por ellos, y siempre se aprobaba. Después, pasaban las cantidades agregadas al consejo y se aceptaban. Se hacía lo que decía el Rey Sol”, ironizó José María Martínez, secretario general de CC OO de banca, sindicato mayoritario en el sector. Tanto este sindicato como UGT admitieron que no fueron todo lo diligentes que debían en este y en otros asuntos que han llevado a las cajas al cementerio.

Falta de exigencia legal

¿Por qué los directivos de las cajas no publicaron las retribuciones hasta diciembre de 2011? Sencillamente porque nunca ninguna ley les forzó a hacerlo. Estas entidades se regularon por la Lorca, la Ley Financiera de 2002, y los Códigos de Buen Gobierno. Tras el estallido de la crisis, el G-20, en 2009, instó a Bruselas a que modificara la legislación para controlar el sueldo de los banqueros. El Gobierno adaptó esta sugerencia con varias modificaciones de la Ley de Economía Sostenible, presentada al Congreso en 2009. Sin embargo, la ley no se aprobó hasta marzo de 2011, casi dos años después. En junio de ese año se autorizó al Banco de España a redactar la circular de vigilancia de las retribuciones, que se aplicó en 2012. Algunos recuerdan que la Constitución se modificó en 15 días, pero para controlar a los banqueros han hecho falta más de dos años. Curioso.

El escándalo llegó a tal nivel que, en junio de 2012, la Fiscalía abrió

diligencias contra los salarios abusivos en entidades con ayudas y por el creciente malestar de la opinión pública.

La otra duda que siempre flota en el ambiente cuando se habla de los salarios de responsables de entidades financieras es: ¿no podía haber hecho algo más el Banco de España? El argumento del supervisor no es de mucha consistencia: la ley le obliga a vigilar los salarios, pero solo puede denunciarlo o atajarlos si ponen en riesgo la solvencia de la entidad. Que el sueldo de un ejecutivo ponga en riesgo a la entidad no es imposible (por lo que se ha visto en esta crisis), pero debe de ser muy poco frecuente. Pero se abre otro frente cuando se trata de entidades con ayudas del Estado o nacionalizadas. En 2010 llegaron las primeras inyecciones del FROB, sin que ello supusiera ninguna reducción de las altas retribuciones que algunos percibían, como hemos visto anteriormente. El Banco de España admitió que hasta 2011 no realizó un análisis en profundidad de los salarios y se quejó de la inexistencia de una legislación clara que marque los límites de cobro en entidades con dinero del Estado, que llegó en febrero de 2012. Otra vez parece claro que fue una reacción a remolque de las circunstancias, cuando ya eran públicas las elevadas indemnizaciones y los sueldos de buena parte de los directivos de las cajas.

Frente a esta pasividad legal, algunos recuerdan que el supervisor impidió que Fernando Casado cobrara 600.000 euros por presidir CatalunyaCaixa y que rebajó en un 20 por ciento los bonus del equipo de Rodrigo Rato en Bankia. “El gobernador sabía que las cajas estaban mal desde hacía años y podía haber revisado los sueldos de los gestores”, dice un exdirectivo del Banco de España. “Lo más triste es la falta de responsabilidad civil y penal de gestores y políticos que han mangoneado en las cajas a su gusto. No todo se acaba con su cese. Hay que buscar responsabilidades”, reclamó Abel Veiga, profesor de Derecho Mercantil de Icade.

La sociedad percibe este asunto con escándalo porque es fácil constatar que la crisis está castigando de manera desigual a los ciudadanos. Hay estudios que demuestran que en 2007, el último de bonanza económica, la brecha salarial entre el suelo medio de los ejecutivos del Ibex 35 y el salario medio de los trabajadores de esas

empresas era de 23,53 veces. En 2011 aumentó hasta las 24,68: los ejecutivos recibieron una compensación media de 1,07 millones y el gasto medio por trabajador fue de 43.353 euros. La crisis ha agrandado la brecha salarial entre los directivos y los empleados. La remuneración media de las cúpulas bancarias en los últimos seis años ha subido un 48 por ciento, el doble de lo que lo han hecho los beneficios, según un estudio de Comisiones Obreras elaborado con datos de la CNMV y las memorias anuales. Pero si se desciende al detalle, la situación se complica: en el caso de las nueve grandes antiguas cajas, la remuneración media de los consejeros creció un 80 por ciento y un 33 por ciento la de la alta dirección, frente a un descenso del beneficio del 7 por ciento.

La ruina de las preferentes

Además de los sueldos, el otro gran escándalo financiero han sido las participaciones preferentes. Este producto “complejo y de riesgo elevado”, como lo define la propia CNMV, se vendió en España sin ningún tipo prevención. El cliente tipo era el que buscaba depósitos, pero las preferentes acabaron de forma mayoritaria en manos de personas mayores y con escasos conocimientos financieros. La CNMV ha registrado emisiones por valor de 22.497 millones, repartidos entre 686.290 clientes. Son cifras que explican el escándalo social causado.

Bancos y cajas demostraron que son capaces de colocar casi cualquier tipo de producto a sus clientes porque estos tienen una confianza casi ciega. Además, ha quedado claro que el bien de la clientela no siempre es su razón prioritaria. La reputación de la entidad, considerada uno de los valores intangibles más importantes del negocio, es lo que se ha visto dañada con las preferentes, que ha afectado a la confianza de los clientes en el sector financiero y a la imagen que este proyecta en la sociedad.

La CNMV ha abierto expediente a 17 de las 19 entidades que vendieron preferentes entre los inversores minoristas. En siete casos la sanción está decidida. La mayoría de los expedientes se basan en

malas prácticas en la comercialización de preferentes: por falta de conocimientos financieros del cliente o porque su perfil inversor no se adaptaba a las características de este producto. No hay que olvidar que ya se habían aprobado supuestas severas leyes de protección del inversor, conocidas como Mifid, que han sido esquivadas sin dificultad por las entidades financieras.

La multa es un porcentaje, no superior al 5 por ciento, sobre el valor de la emisión. Según Julio Segura, expresidente de la CNMV, "las entidades financieras estarían dispuestas a pagar una multa aún mayor con tal de que su nombre no saliera a la luz. Más que un perjuicio económico, el coste verdaderamente importante es reputacional", destacó. Admitió que las sanciones no tienen como objetivo resarcir de posibles pérdidas económicas a los inversores, "sino lanzar un mensaje de disciplina al mercado para que los emisores se ciñan a las buenas prácticas de comercialización". Debido al impacto en la reputación de la entidad expedientada, Segura dijo ser partidario de modificar la legislación vigente para que se conociera el nombre de la entidad investigada desde el momento en que se le abre el expediente.

Pero ¿qué son exactamente las preferentes? Bajo este críptico nombre, las preferentes son un producto con el que el cliente ponía su dinero en los recursos propios de la entidad. No tienen la consideración de acciones, pero contablemente son similares, y no tenían ningún vencimiento, eran perpetuas. Solo se podían vender en la entidad, que mantenía un pequeño mercado que, cuando llegaron los problemas, se cerró.

La colocación masiva de preferentes permitió resolver los problemas estructurales de solvencia de algunas cajas. Por eso, hasta finales de 2011, ese dinero computaba como recursos propios de la entidad. Sin embargo, en diciembre de 2011 la Autoridad Bancaria Europea determinó que ya no las tendría en cuenta como recursos propios. En ese momento, bancos y cajas iniciaron la reconversión de los ahorros que estaban en preferentes en otros productos, porque ya no les servían para lo que habían sido diseñadas. Así llegó el dilema. ¿Cómo se valoran las preferentes? El mercado era pequeño y estaba controlado por la entidad emisora, pero también participaban algunos inversores institucionales. En aquellos

momentos las entidades financieras cotizaban a la baja, así que el precio estaba de capa caída.

Hasta ese momento, muchas entidades habían realizado compras y ventas de preferentes a precios artificiales establecidos por ellas mismas. El objetivo era no aplicar fuertes pérdidas al cliente que se deshacía del producto y así seguía funcionando el sistema. Pero la CNMV se plantó y estableció que era obligatorio valorarlas según ese mercado. Entonces estalló el escándalo, porque muchas de ellas cotizaban al 50 por ciento de su valor nominal, es decir, habían perdido la mitad de valor sobre lo pagado por los clientes. Cada entidad privada estableció un sistema de canje; la mayoría cambió la inversión por bonos convertibles en acciones o títulos cotizados directamente, con un descuento variable. Otros lo hicieron por depósitos a plazo fijo.

Los clientes se quejaron porque dijeron que no querían convertirse en accionistas de la entidad, y menos en bonistas, ya que supone mantener un riesgo de conversión que depende de la evolución de la entidad en bolsa, algo realmente volátil. Muchos recuerdan que, verbalmente, al venderles el producto las entidades les dijeron que las preferentes eran similares a un depósito.

Pero las cajas nacionalizadas no han podido realizar el canje. La razón es que Bruselas considera que, al ser un producto que forma parte de los recursos propios de una entidad con problemas, los titulares de las preferentes deben soportar parte de la pérdida del emisor. El problema ahora se circunscribe a unos 60.000 clientes que tienen casi 6.000 millones invertidos. Se espera que las pérdidas sean importantes.

Una de las muestras más claras de la mala comercialización de estos productos fue la firma de un contrato de una preferente con una huella dactilar. Es decir, un producto “complejo y de riesgo elevado”, según la CNMV, se vendió a alguien que no sabía escribir. Un esperpento. Ocurrió en Novagalicia Banco, pero algunos banqueros, en privado, admiten que hay más huellas dactilares en los contratos. Galicia ha sido la región con más protestas porque se vendieron muchas preferentes entre pequeños clientes. La indignación fue tan grande que los ejecutivos de Novagalicia tuvieron que pedir disculpas “por las malas prácticas comerciales de

la entidad" y prometieron un sistema de arbitraje con los clientes afectados. Pero este producto, según el informe de la CNMV de junio de 2012, se ha vendido en casi todas las entidades. En el ranking publicado por la Comisión destacan La Caixa, Bankia, BBVA, Santander, Novagalicia, BMN, CAM, CatalunyaCaixa, Banca Cívica, Caja España, Banco Sabadell y Banco Popular, con las cantidades más importantes.

Para las asociaciones de afectados, la CNMV nunca debería haber dejado que se vendieran estos productos. En el mismo sentido se manifestó el ministro de Economía, Luis de Guindos, que calificó de "error" la venta de preferentes entre pequeños ahorradores. El expresidente de la CNMV no admite esta crítica: "Impedir la venta de las preferentes es como pedir al supervisor que prevarique. Es imposible, ilegal, prohibir su comercialización si se cumplen determinadas condiciones. Para eso habría que cambiar el mercado legal español y comunitario", matizó.

Esas "condiciones" que dijo Segura son las advertencias de los folletos. Sin embargo, cada vez son más las voces que piden cambios en el sistema de avisos, porque hay que admitir que son muy pocos los clientes que leen y entienden los folletos. Las reformas piden que los escritos bancarios sean más claros y sencillos, adecuados a la cultura de sus clientes. No obstante, tampoco sería justo afirmar que la CNMV no se preocupó por realizar advertencias, porque las hizo. Y aparecieron recogidas en una parte de los medios de comunicación. Ahí están las hemerotecas para comprobarlo.

En una entrevista realizada en El País el 14 de octubre de 2012, Julio Segura explicó el comportamiento de la CNMV en este asunto: "Con un producto financiero complejo como son las preferentes, la entidad que lo comercializa debe hacer un test de conveniencia al cliente, pero si este firma un documento reconociendo que no es conveniente y conoce todos sus riesgos pero aun así desea adquirirlo, el supervisor no puede hacer nada para impedirlo. Se nos ha criticado fallos en la vigilancia de su comercialización. Es materialmente imposible que la CNMV hubiera puesto un inspector en cada una de las más de 24.000 oficinas de las entidades que vendieron el producto en 2009. Lo que hicimos era aquello que

podíamos hacer, es decir, garantizar que el folleto de emisión fuese transparente y contuviera toda la información. Por último, hemos hecho una inspección a posteriori para comprobar si la venta de las preferentes cumplió todos los requisitos legales".

Algunos economistas creen que, además de la CNMV, el Banco de España también ha tenido un papel relevante en las preferentes. Y hablan de una posible colisión de dos de las funciones asignadas al supervisor: favorecer la estabilidad del sistema financiero y proteger al cliente bancario. Ante la apurada situación de las antiguas cajas, el Banco de España se inclinó más por reforzar la solvencia de las entidades.

Un ejecutivo de larga experiencia financiera aseguró que la venta de estas preferentes "se hicieron basadas en el engaño y la estafa. Si a una persona le ofreces un producto sin vencimiento, cuya remuneración depende de la marcha de la entidad y que no tiene un mercado libre para venderlo cuando quiera, sino que deberá aceptar el precio que pongas… nunca te lo compraría. Sin embargo, si cuentas al cliente que es igual que un depósito, pero que en lugar de rentar el 2 por ciento le vas a pagar el 6 o el 7 por ciento, entonces se apela a la avaricia de cada persona y se venden solas".

¿Las considera la Jusiticia una estafa? Sobre esta cuestión ha habido un aparente cambio de posiciones. En el verano de 2012, con el escándalo más vivo y con manifestaciones en muchas localidades, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, admitió que se estaba estudiando la comercialización de estos productos y que había indicios de que las denuncias podrían tramitarse por la vía penal. Sin embargo, en octubre de 2012 comentó que era "difícil" establecer que hubiera "un negocio de estafa" en la comercialización de las preferentes por parte de las entidades bancarias, al sustentarse la relación entre cliente y entidad en un contrato civil. No obstante, admitió que hay "excepciones" en situaciones "concretas", en alusión a los casos en los que la firma fue con una cruz o una huella dactilar, en los que los clientes eran personas discapacitadas o en los que se constate que hubo falta de información. "Esas situaciones hay que investigarlas desde el punto de vista penal", señaló.

Pero no se puede cerrar la reflexión sobre este problema sin admitir

que el pequeño inversor debe ser consciente de que siempre funciona el binomio rentabilidad-riesgo. Si alguien le paga un 3 por ciento por los depósitos y un 6 por ciento por las preferentes es, con toda seguridad, porque estas últimas son más arriesgadas. En la relación con la banca es importante mantener siempre un punto de desconfianza, sobre todo para compensar la codicia humana, que puede cegar la razón del cliente y las entidades lo saben.

Table of Content

Créditos

Prólogo

Capítulo 1 La borrachera inmobiliaria

Capítulo 2 Un supervisor incapaz de corregir el rumbo

Capítulo 3 Los inspectores del banco de España avisaron de los peligros

Capítulo 4 La falsa solidez del sistema financiero

Capítulo 5 Caja Castilla La Mancha: la primera bomba financiera

Capítulo 6 Los problemas de las cajas se agudizan por unas fusiones equivocadas

Capítulo 7 Bankia: el crimen perfecto

Capítulo 8 Sueldos de escándalo y el timo de las preferentes